

EDICIÓN ESPECIAL

Libertad académica y autonomía universitaria en las Américas  
Presentada por la Coalición por la Libertad Académica de las Américas  
*Coalition for Academic Freedom in the Americas*

*Editores*

SALVADOR HERENCIA CARRASCO

JESSE LEVINE

RAFAEL IBARRA GARZA

NUEVA ÉPOCA

# Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales

33  
OTOÑO  
2023



ESCUELA  
DE DERECHO  
Y CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD  
DE MONTERREY



**REVISTA INTERNACIONAL DE  
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
Nº 33**

**UDEM**  
**COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL**

**CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ LIESA**  
*UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID*

**CHRISTIAN LARROUMET**  
*UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS*

**FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ**  
*UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID*

**FRANCISCO JAVIER ASUÁTEGUI ROIG**  
*UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID*

**J. ALBERTO DEL REAL ALCALÁ**  
*UNIVERSIDAD DE JAÉN*

**MARÍA ISABEL WENCES SIMON**  
*CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES*

**PETER HÄBERLE**  
*UNIVERSITÄT BAYREUTH*

REVISTA INTERNACIONAL  
DE DERECHO Y CIENCIAS  
SOCIALES  
Nº 33

*Editores*

SALVADOR HERENCIA CARRASCO  
JESSE LEVINE  
RAFAEL IBARRA GARZA

**UDEM**

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

**tirant lo blanch**  
Ciudad de México, 2023

Copyright © 2023

Quedan rigurosamente prohibidos, sin la autorización escrita del titular del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella, mediante alquiler o préstamo público.

Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales. Año 2023 Núm. 33, segundo semestre del año 2023 es una publicación semestral editada por la Universidad de Monterrey a través de la División de Derecho y Ciencias Sociales. Av. Morones Prieto 4500 Pte., San Pedro Garza García, N.L., México, C.P. 66238 Conmutador: +52(81)8215-1000. Lada sin costo 01-800-801-UDEM. <http://www.udem.edu.mx> Editores responsables: Magda Yadira Robles Garza – Claire Elizabeth Grace Wright. ISSN 2007-4212. Licitud de Título No. 15018. Licitud de Contenido No. 15018, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa en los talleres de Diseño3 y/o León García Dávila, Av. Lomas Verdes 2560, Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México. Este número se terminó de imprimir en el mes de ----- de 20---, con un tiraje de 500 ejemplares.

El contenido de los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de los autores, por lo que no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNIVERSIDAD DE MONTERREY.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web [www.tirant.com/mex/](http://www.tirant.com/mex/)

Licencia Creative Commons



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Directorio

RECTOR

Dr. Mario Páez González

VICERRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Dr. Carlos Eduardo Basurto Meza

DIRECTOR DE DIVISIÓN DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Dr. Arturo Azuara Flores

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO

Dr. Rafael Ibarra Garza

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Dr. Osvaldo Salvador Tello Rodríguez

© Salvador Herencia Carrasco, Jesse Levine y Rafael Ibarra Garza

Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales

Edición 33. Otoño 2023

© Universidad de Monterrey

Av. Morones Prieto 4500 Pte., San Pedro Garza García, N.L., México, C.P. 66238

Conmutador: +52(81)8215- 1000. Lada sin costo 01-800-801-UDEM.

<http://www.udem.edu.mx>

ISSN: 2007-4212

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502

Hipódromo, Cuauhtémoc

06100, Ciudad de México

Tel: +52 1 55 65502317

[infomex@tirant.com](mailto:infomex@tirant.com)

[www.tirant.com/mex/](http://www.tirant.com/mex/)

[www.tirant.es](http://www.tirant.es)

ISSN: 2007-4212

MAQUETA: Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [atencioncliente@tirant.com](mailto:atencioncliente@tirant.com). En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

# ÍNDICE

## PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ESPECIAL POR LA COALICIÓN POR LA LIBERTAD ACADÉMICA DE LAS AMÉRICAS

|   |    |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPECIAL Y PRESENTACIÓN DE LA<br>COALICIÓN POR LA LIBERTAD ACADÉMICA EN LAS AMÉRICAS..... | 13 |
| COALICIÓN POR LA LIBERTAD ACADÉMICA EN LAS AMÉRICAS   |    |

|   |    |
|---|----|
| INTRODUCTION TO THE SPECIAL EDITION AND THE COALITION<br>FOR ACADEMIC FREEDOM IN THE AMERICAS ..... | 19 |
| COALITION FOR ACADEMIC FREEDOM IN THE AMERICAS  |    |

## *PRIMERA PARTE* LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

|   |    |
|---|----|
| EL DESARROLLO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA<br>PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL ÁMBITO INTER-<br>NACIONAL E INTERAMERICANO ..... | 27 |
| SALVADOR HERENCIA-CARRASCO Y JESSE LEVINE   |    |

|   |    |
|---|----|
| RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA DE LOS<br>PRINCIPIOS INTERAMERICANOS SOBRE LIBERTAD ACADÉMICA Y<br>AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ..... | 49 |
| DAVID GÓMEZ GAMBOA  |    |

SEGUNDA PARTE  
ESTUDIOS DE CASOS SOBRE ATAQUES A LA LIBERTAD  
ACADÉMICA EN PAÍSES DE LAS AMÉRICAS

|  |     |
|--|-----|
| LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES:<br>¿JAQUE MATE A LA LIBERTAD ACADÉMICA? .....                                       | 71  |
| LILIANA M. RONCONI   |     |
| MARCO NORMATIVO BRASILEIRO SOBRE A LIBERDADE ACADÊMICA<br>FRENTE ÀS DISPOSIÇÕES DO SISTEMA INTERAMERICANO DE<br>DIREITOS HUMANOS.....          | 89  |
| ÉRIKA TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ Y DANIELLE ANNE PAMPLONA  |     |
| THE IMPACT OF INSTITUTIONAL GAPS ON AT-RISK SCHOLARS IN<br>BRAZIL: TOWARD A COMPREHENSIVE, INTERSECTIONAL, AND<br>CONTEXT-BASED FRAMEWORK..... | 109 |
| ROSARIO FIGARI LAYUS AND CAMILA NOBREGA RABELLO ALVES  |     |
| UNITED STATES ACADEMIC FREEDOM IN REGIONAL AND GLOBAL<br>CONTEXTS .....  | 129 |
| EVE DARIAN-SMITH   |     |
| THE WAR AGAINST “WOKE INDOCTRINATION”: HOW ANTI-CRITICAL<br>RACE THEORY BILLS THREATEN ACADEMIC FREEDOM IN THE<br>UNITED STATES.....           | 149 |
| AMNA KHALID AND JEFFREY AARON SNYDER   |     |
| AUGE Y DECLIVE DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA. ¿CÓMO<br>DEBERÍA MODELARSE UN SISTEMA UNIVERSITARIO POST-CHAVISTA?<br>.....                  | 163 |
| MAYDA HOČEVAR Y NELSON RIVAS   |     |



TERCERA PARTE  
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y PERSECUCIÓN DE  
PROFESORAS, PROFESORES Y ACTIVISTAS

HANDLE WITH CARE: LINKS BETWEEN GENDER-BASED VIOLENCE  
AND HARASSMENT ON CAMPUS, ACADEMIC FREEDOM, AND THE  
ROLE OF THE UNIVERSITY OMBUDSPERSON ..... 183

LAVINIA FRANCESCONI

LA EXPERIENCIA DE LOS INVESTIGADORES CENTROAMERICANOS  
EN DERECHOS HUMANOS ANTE EL CIERRE DE LOS ESPACIOS DE-  
MOCRÁTICOS EN LA REGIÓN ..... 201

MARÍA ESTELA RIVERO FUENTES Y TOM HARE



PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ESPECIAL  
POR LA COALICIÓN POR LA LIBERTAD  
ACADÉMICA DE LAS AMÉRICAS



# INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPECIAL Y PRESENTACIÓN DE LA COALICIÓN POR LA LIBERTAD ACADÉMICA EN LAS AMÉRICAS

La Coalición por la Libertad Académica en las Américas (la Coalición) es una iniciativa que busca promover y fortalecer la libertad académica y la autonomía universitaria en el hemisferio. Liderada por la Universidad de Monterrey (México), Scholars at Risk (Estados Unidos) y el Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) de la Universidad de Ottawa, la Coalición reúne a personas de instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil de todas las Américas para identificar y responder a las amenazas a la libertad académica y generar estrategias para su protección y promoción.

## EL TRABAJO DE LA COALICIÓN EN LAS AMÉRICAS

Uno de los primeros objetivos de la Coalición fue trabajar por la creación de normas internacionales de derechos humanos que reconocieran y brindaran protección a la libertad académica en las Américas. En 2021, las personas que integran la Coalición apoyaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la elaboración de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (los Principios), los cuales fueron adoptados en diciembre de ese año. Desde entonces, estos Principios se han convertido en un importante punto de referencia para el tratamiento de la libertad académica y la autonomía universitaria en todo el hemisferio.

Con la adopción de los Principios por parte de la CIDH, el trabajo de la Coalición se ha centrado en dos áreas principales. La primera se centra en monitorear la crisis actual de ataques contra el personal académico, estudiantes, administradores, personal y la comunidad de la educación superior en general en las Américas. Estos ataques incluyen asesinatos y desapariciones; detenciones y procesamientos arbitrarios; pérdida de puestos, incluidos despidos, suspensiones y expulsiones de miembros de la comunidad académica; restricciones a viajes o intercambios académicos; y otras violaciones graves, como redadas y ocupaciones de campus por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad del Estado, así como el cierre arbitrario de universidades. Otras cuestiones preocupantes son

las injerencias legislativas, las cuales incluyen la adopción de normativas que limitan la libertad de expresión dentro o fuera de los campus; las presiones administrativas, como la reducción de la financiación dirigidas a determinadas áreas de estudio o clases de instituciones; y el acoso y las agresiones sexuales en los campus universitarios.

La segunda área de interés de la Coalición se centra en el desarrollo de la libertad académica y su interacción con otros derechos humanos que deben protegerse y promoverse para que la enseñanza superior funcione correctamente. Entre ellos se incluyen las libertades de opinión y expresión, la libertad de asociación, el derecho a la educación, el derecho a beneficiarse del progreso científico, así como valores universitarios fundamentales como el acceso equitativo, la responsabilidad social, la autonomía institucional y la rendición de cuentas.

## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COALICIÓN

Desde el lanzamiento de la Coalición, nos hemos esforzado por establecer alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Además de apoyar a la CIDH en la adopción de los Principios Interamericanos ya mencionados, las instituciones que integran la Coalición han intervenido como *amicus curiae* en casos ante tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han publicado artículos e informes sobre libertad académica y han organizado seminarios y otras actividades de difusión. En noviembre de 2022, la Coalición organizó su primera Conferencia Anual en la Universidad de Monterrey, México. La segunda conferencia se realizará en la Pontificia Universidade Católica do Paraná, en Curitiba, Brasil, en noviembre de 2023.

## LA CONFERENCIA DE LA COALICIÓN DE 2022

La Primera Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas, organizada por la Coalición, se celebró en Monterrey, México, los días 10 y 11 de noviembre de 2022. La conferencia contó con ponentes de las Américas, Asia y Europa y abordó las presiones a nivel nacional sobre la libertad académica en Brasil, México, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros países

del hemisferio. Durante la conferencia también se discutieron temas como el impacto de la censura, la interferencia legislativa y la violencia de género en su impacto en la libertad académica. La conferencia sirvió asimismo para la presentación mundial del informe Free to Think 2022 de Scholars at Risk, en el que se analizan 391 agresiones en 65 países y territorios de todo el mundo.

Además de revisar el estado de los ataques a la libertad académica en la región, los ponentes debatieron sobre las oportunidades de implementar los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria en todo el hemisferio. Asimismo, las personas participantes debatieron sobre las formas de responder a los ataques y mejorar las condiciones de la libertad académica en la región, incluyendo la realización de nuevas investigaciones, la publicación de artículos sobre la libertad académica y la importancia de fomentar el litigio público estratégico.

## **EDICIÓN ESPECIAL DE LA REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES SOBRE LIBERTAD ACADÉMICA**

Esta edición especial, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey y publicada por Tirant Lo Blanch, presenta artículos en inglés, portugués y español que fueron presentados y discutidos en la Conferencia de 2022.<sup>1</sup> Estos trabajos ofrecen importantes análisis y recomendaciones de las personas participantes en la conferencia, incluyendo el análisis de los estándares internacionales para la protección de la libertad académica y las diversas amenazas que afectan a las comunidades de educación superior en el hemisferio, así como métodos, protocolos, mecanismos y otras oportunidades para prevenir ataques y salvaguardar y promover la libertad académica.

La primera sección de esta edición se centra en las normas internacionales relativas a la protección de la libertad académica. Salvador Herencia-Carrasco (HRREC, Universidad de Ottawa) y Jesse Levine (SAR) analizan cómo el

---

<sup>1</sup> Los artículos incluidos en esta edición de la revista contienen las opiniones y posturas individuales de las personas participantes en la conferencia; no reflejan necesariamente las de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas ni las de sus miembros individuales o socios institucionales.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha abordado la necesidad de proteger la libertad académica y la relevancia de contar con instrumentos regionales como los Principios Interamericanos. David Gómez Gamboa (Aula Abierta) explora los principales elementos de los Principios Interamericanos y cómo este instrumento puede contribuir a los esfuerzos para hacer frente a los ataques contra la libertad académica, incluso en Nicaragua y Venezuela.

La segunda parte de este número especial presenta artículos que analizan las condiciones específicas de cada país en materia de libertad académica. Liliana Ronconi (Universidad de Buenos Aires) examina si las políticas basadas en el género afectan a la libertad académica, tomando como ejemplo el proceso de contratación para un puesto de profesorado en su universidad que se limitó a mujeres. Las dos ponencias siguientes se centran en Brasil. En primer lugar, Érika Teixeira dos Santos Braz y Danielle Anne Pamplona (Pontificia Universidade Católica do Paraná) utilizan los Principios Interamericanos para identificar lagunas en la regulación constitucional y legal de la libertad académica en el país. A continuación, Rosario Figari Layus (Justus-Liebig-Universität Gießen) y Camila Nobrega Rabello Alves (Freie Universität Berlin) discuten cómo las lagunas legales e institucionales relativas a la protección de los académicos en Brasil les ponen en peligro.

Las dos ponencias siguientes se centran en la libertad académica en Estados Unidos. Eve Darian-Smith (Universidad de California, Irvine) ofrece un valioso panorama de la relación entre el aumento de los ataques contra la libertad académica en Estados Unidos y los movimientos antidemocráticos en el país, y lo contextualiza a escala regional y mundial. A continuación, Amna Khalid y Jeffrey Aaron Snyder (Carleton College) presentan cómo la llamada “Ley Anti-Woke” de Florida, promulgada en 2022, se ha utilizado para silenciar el uso de escuelas de pensamiento críticos en las universidades, particularmente la teoría crítica de la raza. Para completar esta sección, Mayda Hočevár y Nelson Rivas (Universidad de Los Andes-Venezuela) evalúan cómo el régimen de Chávez ha desmantelado el sistema de educación superior en Venezuela y proponen formas de recuperar las universidades en un escenario post-chavismo.

La tercera y última parte de esta edición especial se centra en la necesidad de abordar la violencia de género en el espacio universitario y de proteger a educadores acosados por el Estado y por grupos de orientación conservadora por sus enseñanzas en torno a los derechos LGBTI+ y estudios de género. Lavinia Francesconi (Université Aix-Marseille) analiza la necesidad de la creación y el



buen funcionamiento de una defensoría universitaria para prevenir y abordar los casos de violencia y acoso sexual dentro de la universidad. Por último, María Estela Rivero Fuentes y Tom Hare (Pulte Institute for Global Development, University of Notre Dame) muestran los retos a los que se enfrentan los académicos de Guatemala, Honduras y El Salvador para seguir participando en las esferas públicas, las amenazas que reciben y las medidas de seguridad adoptadas para continuar con su labor académica.

La Coalición desea agradecer a los editores en jefe de esta edición especial, Salvador Herencia-Carrasco (HRREC, Universidad de Ottawa), Rafael Ibarra Garza (Universidad de Monterrey) y Jesse Levine (SAR). Además, queremos agradecer a colegas, profesoras y profesores que colaboraron en la revisión y retroalimentación de los trabajos incluidos en esta edición: Rosario Figari Layus (Justus-Liebig-Universität Gießen), Mayda Hočevár (Universidad de Los Andes-Venezuela), Daniel Munier (SAR), Isaac Nahón Serfaty (Universidad de Ottawa), Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian (Universidade Presbiteriana Mackenzie) y Anna Luisa Walter de Santana (Pontificia Universidade Católica do Paraná).

La Coalición espera que esta y otras publicaciones similares fortalecerán los debates y los esfuerzos para promover la libertad académica y la autonomía universitaria en las Américas.

COALICIÓN POR LA LIBERTAD ACADÉMICA EN LAS AMÉRICAS  
Julio 2023



# INTRODUCTION TO THE SPECIAL EDITION AND THE COALITION FOR ACADEMIC FREEDOM IN THE AMERICAS

The Coalition for Academic Freedom in the Americas (CAFA) is an initiative that seeks to promote and strengthen academic freedom and university autonomy in the hemisphere. Led by the University of Monterrey (Mexico), Scholars at Risk (United States), and the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) of the University of Ottawa (Canada), CAFA brings together individuals in higher education institutions and civil society organizations from across the Americas to identify and respond to threats to academic freedom and to generate strategies for its protection and promotion.

## CAFA'S WORK IN THE AMERICAS

One of the first goals of the CAFA was to work towards the creation of international human rights standards that would recognize and provide protections for academic freedom in the Americas. In 2021, the individuals who make up CAFA supported the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in developing the Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy, which the IACHR adopted in December of that year. Since then, these Principles have become an important reference point for the treatment of academic freedom and university autonomy throughout the hemisphere.

With the IACHR's adoption of the Inter-American Principles, CAFA's work has turned to two main areas of focus. The first area focuses on the current crisis of attacks on scholars, students, administrators, staff, and the higher education community at large in the Americas. These attacks include assassinations and disappearances; arbitrary detentions and prosecutions; loss of position, including dismissals, suspensions, and expulsions of members of the academic community; restrictions on academic travel or movement; and other serious violations, such as raids and occupations of campuses by police and other state security forces or the closing of universities. Other systemic issues of concern include legislative pressures, including the adoption of regulations that limit

expression on or off campus; administrative pressures, such as funding reduction measures that target specific areas of study or classes of institutions; and campus sexual harassment and assault.

CAFA's second focus area centers around the nature of academic freedom itself and its interaction with other human rights that must be protected and values that must be promoted if higher education is to function properly. These include freedoms of opinion and expression, freedom of association, the right to education, the right to benefit from scientific progress, as well as core university values such as equitable access, social responsibility, institutional autonomy, and accountability.

## SUMMARY OF CAFA'S MAIN ACTIVITIES

Since CAFA's launch, we have endeavored to build alliances with higher education institutions and national and international civil society organizations. In addition to supporting the IACHR in the adoption of the Inter-American Principles mentioned above, the institutions that make up the CAFA have intervened as *amicus curiae* in cases before national courts and the Inter-American Court of Human Rights, published articles and reports on academic freedom, and organized seminars and other outreach activities. In November 2022, CAFA organized its first Annual Conference at the University of Monterrey, Mexico. CAFA will hold its second conference at the headquarters of the Pontificia Universidade Católica do Paraná, in Curitiba, Brazil, in November 2023.

## CAFA'S 2022 CONFERENCE

The First Conference on Academic Freedom in the Americas, organized by CAFA, was held in Monterrey, Mexico, on November 10 and 11, 2022. The conference featured speakers from the Americas, Asia, and Europe and addressed national-level pressures on academic freedom in Brazil, Mexico, Venezuela, Nicaragua, and the United States, among other countries of the hemisphere. Thematic topics—including the impact of censorship, legislative interference, and gender-based violence on academic freedom in higher education settings—were also highlighted during the conference. The conference also served as the

global launch of Scholars at Risk's *Free to Think 2022* report, which analyzed 391 attacks in 65 countries and territories around the world.

In addition to reviewing the state of pressures on academic freedom in the region, speakers discussed opportunities to implement the Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy throughout the hemisphere. Likewise, the participants discussed ways to respond to attacks and improve academic freedom conditions in the region, including by conducting further research, publishing articles on and raising awareness of academic freedom, and making legal submissions.

## **SPECIAL EDITION OF THE REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ON ACADEMIC FREEDOM**

This special edition, edited by the Law School of the Universidad de Monterrey and published by Tirant Lo Blanch, features papers in English, Portuguese, and Spanish that were presented and discussed at the 2022 CAFA Conference.<sup>1</sup> These papers offer important analysis and recommendations of conference participants, including analysis of international standards for the protection of academic freedom and diverse threats affecting higher education communities in the hemisphere, as well as methods, protocols, mechanisms, and other opportunities for preventing attacks and safeguarding and promoting academic freedom.

The first section of this edition focuses on international standards regarding the protection of academic freedom. Salvador Herencia-Carrasco (HRREC, University of Ottawa) and Jesse Levine (SAR) analyze how International Human Rights Law has addressed the need to protect academic freedom and the relevance of regional instruments, like the Inter-American Principles. David Gómez Gamboa (Aula Abierta) explores the main elements of the Inter-American Principles and how this instrument may contribute to efforts to address attacks on academic freedom, including in Nicaragua and Venezuela.

---

<sup>1</sup> The papers included in this journal edition contain the individual views and positions of conference participants; they do not necessarily reflect those of CAFA and its individual members and institutional partners.

The second part of this special edition features articles analyzing country-specific conditions regarding academic freedom. Liliana Ronconi (Universidad de Buenos Aires) examines whether gender-based policies affect academic freedom, taking for example the hiring process for a faculty position in her university that was limited to women applicants. The two following papers focus on Brazil. First, Érika Teixeira dos Santos Braz and Danielle Anne Pamplona (Pontificia Universidade Católica do Paraná) use the Inter-American Principles to identify gaps in the Constitutional and legal regulation of academic freedom in the country. Then, Rosario Figari Layus (Justus-Liebig-Universität Gießen) and Camila Nobrega Rabello Alves (Freie Universität Berlin) discuss how legal and institutional gaps regarding the protection of academics in Brazil put them at risk. The following two papers focus on academic freedom in the United States. Eve Darian-Smith (University of California, Irvine) provides a valuable landscape of the relation between the increase of attacks against academic freedom in the United States and antidemocratic movements in the country and contextualizes this at the regional and global levels.

Then, Amna Khalid and Jeffrey Aaron Snyder (Carleton College) present how Florida's so-called "Anti-Woke Bill," enacted in 2022, has been used to silence the use of critical schools of thought, particularly critical race theory, in universities. To round out this section, Mayda Hočevár and Nelson Rivas (Universidad de Los Andes-Venezuela) assess how the Chavez regime has dismantled the higher-education system in Venezuela and propose ways to recover universities in a post-Chavismo scenario.

The third and final part of this special edition focuses on the need to address gender-based violence in the university space and to protect educators harassed by state and conservative-oriented groups for their teachings around LGBTI+ rights and gender justice. Lavinia Francesconi (Aix-Marseille Université) analyzes the need for the creation and proper functioning of a university ombudsperson to prevent and address cases of sexual violence and harassment within the university. Finally, María Estela Rivero Fuentes and Tom Hare (Pulte Institute for Global Development, University of Notre Dame) show the challenges that academics in Guatemala, Honduras, and El Salvador face to continue participating in public spheres, the threats they receive, and the safety measures adopted to continue pursuing their academic work.

CAFA would like to thank the editors-in-chief of this special edition, Salvador Herencia-Carrasco (HRREC, University of Ottawa), Rafael Ibarra Garza (Univer-

sidad de Monterrey) and Jesse Levine (SAR). In addition, we would like to thank the colleagues and professors that assisted in the revision and feedback of the papers included in this edition: Rosario Figari Layus (Justus-Liebig-Universität Gießen), Mayda Hočevár (Universidad de Los Andes-Venezuela), Daniel Munier (SAR), Isaac Nahón Serfaty (University of Ottawa), Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian (Universidade Presbiteriana Mackenzie) and Anna Luisa Walter de Santana (Pontificia Universidade Católica do Paraná).

CAFA believes that this and similar publications will strengthen discussions around and efforts to promote academic freedom and university autonomy in the Americas.

COALITION FOR ACADEMIC FREEDOM IN THE AMERICAS  
July 2023





*PRIMERA PARTE*  
LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL  
DERECHO INTERNACIONAL Y  
EL SISTEMA INTERAMERICANO  
DE DERECHOS HUMANOS



# EL DESARROLLO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL E INTERAMERICANO

SALVADOR HERENCIA-CARRASCO Y JESSE LEVINE

## **Resumen**

El desarrollo normativo internacional que ha tenido la libertad académica en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha contribuido a posicionar la universidad como una institución fundamental para el progreso científico y la democracia. Los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptados en diciembre de 2021, llenan un vacío normativo por lo que ahora los diversos actores deben priorizar la implementación de sus disposiciones. En este artículo se analizará el desarrollo normativo de la libertad académica y mostrar, por qué, los Principios Interamericanos son un aporte significativo para la promoción y protección de esta materia.

## **Palabras claves**

Libertad académica, Derechos Humanos, Sistema Interamericano, educación, Principios Interamericanos, autonomía universitaria

## **Abstract**

The international legal development of academic freedom in International Human Rights Law has contributed to position the university as a fundamental institution for scientific progress and democracy. The Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy, adopted in 2021 by the Inter-American Commission on Human Rights fills a normative gap. The challenge for all stakeholders is to prioritize the implementation of its provisions. This article will analyze the normative development of academic freedom and show why the Inter-American Principles are a significant contribution to the promotion and protection of this matter.

## **Keywords**

Academic freedom, Human Rights, Inter-American System, education, Inter-American Principles, university autonomy.

### **Afiliación del autor**

Nombre: Salvador Herencia-Carrasco

Institución: Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos, Universidad de Ottawa

Biografía: Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza de Derechos Humanos y profesor a tiempo-parcial de la Facultad de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa, Canadá. Miembro de la Coalición de las Américas por la Libertad Académica.

Correo electrónico: shere045@uottawa.ca

Nombre: Jesse Levine

Institución: Scholars at Risk

Biografía: Jesse Levine es el responsable principal de incidencia de Scholars at Risk, donde codirige el trabajo de SAR ante las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados y la sociedad civil. Antes de trabajar en Scholars at Risk, Jesse trabajó como abogado litigante en grandes bufetes de Nueva York. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Michigan y abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.

Correo electrónico: jl4289@nyu.edu

## **1. INTRODUCCIÓN**

La adopción de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (los Principios) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2021,<sup>1</sup> marcó un hito para la promoción, protección y garantía de la libertad académica y la autonomía universitaria en las Américas.

La libertad académica está asentada en varias normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, entidades como la UNESCO, el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, más recientemente, la relatoría especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión han mostrado la relevancia de esta libertad, explicando su contenido y alcance. Sin embargo, hasta la adopción de los Principios, ningún sistema regional de derechos humanos había adoptado una declaración única y ampliamente aplicable sobre la libertad académica que reflejara el estado actual de la doctrina.

---

<sup>1</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, CIDH: 2021.

A pesar de este reconocimiento internacional, la comprensión de los múltiples aspectos de la libertad académica ha sido muy escasa a nivel estatal e institucional. Junto a esta falta de comprensión e implementación de normas y políticas, la protección de la libertad académica ha empeorado en los últimos años. De acuerdo con el Índice de Libertad Académica,<sup>2</sup> en la última década esta libertad ha disminuido en 22 países que, en conjunto, albergan a más de la mitad de la población mundial.

Este problema parece estar directamente relacionado con las crecientes tendencias autoritarias que se han observado ampliamente en todo el planeta en los últimos años. De hecho, las universidades parecen ser uno de los principales objetivos de líderes autoritarios, quienes cada vez más recurren a ataques populistas contra la educación superior, a la toma de control de las instituciones por parte de aliados políticos y a la represión de las protestas estudiantiles en los campus, como herramientas al servicio de sus agendas políticas. En las Américas, Brasil, Nicaragua, México y los Estados Unidos serían ejemplos de esta práctica restrictiva.<sup>3</sup>

Los Principios Interamericanos tienen como fin revertir esta tendencia antidemocrática y proteger el papel que juegan las instituciones de educación superior. Los Principios adoptan las normas globales sobre libertad académica para responder a las necesidades de la región. En especial está el deber de los Estados, los actores institucionales y las sociedades de asegurar que académicas, académicos, estudiantes y toda la comunidad universitaria, sean libres de pensar, investigar y compartir ideas. A su vez, los Principios enfatizan que las universidades son espacios libres y autónomos, capaces de fomentar el progreso social y científico y modelar la participación democrática.

La adopción de los Principios Interamericanos posiciona a las Américas como líder mundial en esta importante área en desarrollo de la doctrina de los derechos humanos. Asimismo, proporciona una orientación concreta a los académicos, los actores institucionales y los Estados de las Américas sobre las numerosas especies de amenazas a la libertad académica, y ofrece a los profesionales de todo el hemisferio una poderosa herramienta para responder a los ataques. El propósito de este artículo es hacer un análisis de los principales

<sup>2</sup> University of Gothenburg's V-Dem Institute, Institute of Political Science at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, *Academic Freedom Index-Update 2023*, p. 1. Ver: [https://academic-freedom-index.net/research/Academic\\_Freedom\\_Index\\_Update.pdf](https://academic-freedom-index.net/research/Academic_Freedom_Index_Update.pdf)

<sup>3</sup> Ver: University of Gothenburg's V-Dem Institute, Institute of Political Science at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, *Academic Freedom Index-Update 2023*.

estándares relativos a la protección de la libertad académica para luego analizar algunas de las principales disposiciones de los Principios.

## 2. LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

La libertad académica es un derecho que se encuentra fundamentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de forma independiente e interdependiente al derecho a la libertad de opinión y de expresión<sup>4</sup> de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el derecho a la educación y el derecho a beneficiarse del progreso científico,<sup>5</sup> según lo establecido, respectivamente, en el Art. 13 y el Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Todos los países de las Américas reconocen la libertad de educación y la libertad de expresión en sus Constituciones y sus tribunales nacionales han desarrollado ampliamente el contenido de estos derechos. La protección de estos derechos contribuye a la consolidación de una sociedad democrática,<sup>6</sup> pluralista e incluyente.<sup>7</sup> La protección de la libertad académica como una garantía específica sólo beneficia el conseguimiento de estos fines.

Es en este contexto que las instituciones de educación superior deben mantener su autonomía e independencia. Pero esta autonomía no sólo se aplica a

---

<sup>4</sup> La libertad de opinión y expresión se encuentra en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos del cual Colombia es parte. Entre otros, este se encuentra en el Art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

<sup>5</sup> El derecho a la educación se encuentra en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos del cual Colombia es parte. Entre otros, este se encuentra en el Art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), entre otros.

<sup>6</sup> Ver, entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos, *La colegiación obligatoria de periodistas* (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrafo 70.

<sup>7</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párrafo 116.

las instituciones de gobierno universitario, sino que cubija a toda la comunidad académica, incluyendo el personal estudiantil. Esto implica que las universidades deben ser espacios libres, abiertos y seguros en la cual las ideas pueden ser intercambiadas y debatidas sin miedo a violencia o represalias.

Si bien los estándares internacionalmente reconocidos relativos a la libertad académica protegen la libertad de investigación y de expresión de la academia, el marco de protección no se limita a estos únicos derechos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido que, dentro de la amplia gama de protección a la libertad académica, esta incluye además la facultad de criticar a la institución académica. Además, el Comité enfatiza que el ejercicio de esta libertad se debe realizar sin ninguna forma de discriminación o coacción:

“39. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. *La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio*”.<sup>8</sup>

El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión ha resaltado la importancia de la libertad académica como uno de los elementos fundamentales para asegurar la libertad de opinión y de expresión en una sociedad libre y democrática. En este sentido, se considera que medidas como suprimir temas de investigación considerados controversiales por la universidad o el Estado, prohibir el funcionamiento de organizaciones independientes por ser consideradas políticas o no autorizar la organización de seminarios sobre derechos humanos<sup>9</sup> son acciones que no solo afectan la libertad académica pero que también afectan la libertad de expresión y opinión.

<sup>8</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, *Observación General N° 13: El derecho a la educación (artículo 13)*, 21° periodo de sesiones E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, párrafo 39. Resaltado nuestro.

<sup>9</sup> Ver: Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, *Report of the Special Rapporteur on access to information, criminal libel and defamation, the police and the criminal justice system, and new technologies*, Economic and Social Council, 56° periodo de

Si bien la libertad académica encuentra su fundamentación en los principales tratados internacionales de derechos humanos, ha sido la UNESCO la institución que más ha desarrollado y precisado su contenido. En este sentido, la libertad académica no se limita a la labor de enseñanza y de investigación, sino que esta incluye, entre otras medidas, la protección contra todo tipo de discriminación y la posibilidad de expresarme y de realizar actividades académicas no-violentas sin temor a represalias por parte de la institución.

Por ejemplo, la “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior”, uno de los principales instrumentos para determinar el alcance de la libertad académica de la UNESCO, establece lo siguiente:

“27. Se ha de favorecer el cumplimiento de las normas internacionales mencionadas en beneficio de la enseñanza superior en el plano internacional y dentro de cada país. Con ese fin, se debe respetar rigurosamente el principio de la libertad académica. El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas”.<sup>10</sup>

Adicionalmente, esta recomendación enfatiza la prohibición de discriminación y sin temor a medidas de represión institucionales. En este contexto, la Declaración de la UNESCO guarda relación con la importancia de adoptar medidas especiales de protección en las instituciones de educación superior para asegurar que las académicas y académicos puedan ejercer su labor sin ninguna forma de intimidación o coacción.

“27. (...) Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia. Este principio sólo puede aplicarse de manera efectiva si el entorno en que actúa es propicio, requisito que, a su vez, sólo se puede cumplir si el ambiente es democrático: de ahí que incumba a todos la tarea de construir una sociedad democrática”.<sup>11</sup>

---

sesiones, E/CN.4/2000/63, 18 de enero de 2000, párrafo 37.

<sup>10</sup> UNESCO, *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior*, 29º período de sesiones, 11 de noviembre de 1997, párrafo 27

<sup>11</sup> *Ibid.*



La misma Declaración hace referencia a cómo esta protección guarda relación con el papel que tienen los académicos y académicas para generar un cambio social. Por este motivo, la UNESCO resalta la importancia de contar con un sector académico independiente que, como parte de su responsabilidad social, pueda contribuir al análisis de los asuntos públicos de un país, incluyendo las políticas de enseñanza superior. En este sentido, la UNESCO ha establecido lo siguiente:

26. (...) todo el personal docente de la enseñanza superior debe disfrutar de la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación, así como del derecho a la libertad y seguridad de la persona y la libertad de movimiento. No se le obstaculizará o impedirá en forma alguna el ejercicio de sus derechos civiles como ciudadanos, entre ellos el de contribuir al cambio social expresando libremente su opinión acerca de las políticas públicas y de las que afectan a la enseñanza superior. No deberían ser sancionados por el mero hecho de ejercer tales derechos. El personal docente de la enseñanza superior no debe ser objeto de detención o prisión arbitrarias ni torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En caso de violación grave de sus derechos debe poder apelar a los órganos nacionales, regionales o internacionales competentes, como los organismos de las Naciones Unidas, y las organizaciones que representan al personal docente de la enseñanza superior han de prestarle todo su apoyo en tales ocasiones”.<sup>12</sup>

En el ámbito interamericano, también ha existido una preocupación en torno a la libertad académica, particularmente en su relación con la libertad de expresión. Los informes temáticos de la CIDH,<sup>13</sup> la creación de una relatoría sobre libertad de expresión y una relatoría sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como algunas sentencias de la Corte IDH han contribuido<sup>14</sup> al desarrollo de la materia.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibid, párrafo 26.

<sup>13</sup> Entre otros, ver: CIDH, *Report on Freedom of Expression in the Americas* (Washington: IACHR, 2002); CIDH, *Special Study on the Status of Investigations into the Murder of Journalists during for Reasons that may be Related to their Work in Journalism* (Washington: IACHR, 2005); IACHR, *The Inter-American Legal Framework Regarding the Right to Freedom of Expression* (Washington: IACHR, 2009); CIDH, *Freedom of Expression and Internet* (Washington: IACHR, 2013).

<sup>14</sup> Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 16: Libertad de Pensamiento y Expresión* (San José: Corte IDH, 2017).

<sup>15</sup> Ver: Christian Steiner, Marie-Christine Fuch, Patricia Uribe (eds), *Convención Americana sobre Derechos Humanos: Comentario* (Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2da edición, 2019).

En reportes temáticos recientes, la CIDH ha incluido secciones que describen como los gobiernos de Guatemala<sup>16</sup> y Nicaragua<sup>17</sup> limitan la libertad académica y la libertad de expresión como medios para silenciar a opositores políticos. Por ejemplo, en el reporte sobre Nicaragua, la CIDH establece claramente la relación entre la democracia y la libertad académica:<sup>18</sup>

170. La CIDH recuerda que el derecho a la educación es considerado como el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, sirviendo de catalizador para generar una ciudadanía crítica y participativa así como para influir el propio desarrollo de las personas y las sociedades. En particular, en la enseñanza superior la libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones son pilares fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar presiones o intervención de naturaleza política. La Comisión también resalta que el derecho a la educación permite atenuar el impacto psicosocial en situaciones de emergencia o conflicto, reforzar la capacidad de ayuda a las personas afectadas en el contexto de crisis y ofrecer herramientas para la estabilidad y reconstrucción social.

A su vez, la Corte IDH ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la libertad de expresión. Desde la Opinión Consultiva relativa a la colegiatura obligatoria de periodistas<sup>19</sup> hasta los diversos casos contenciosos relativos al Art. 13 de la CADH,<sup>20</sup> la Corte IDH ha resaltado la importancia que tiene la libertad de expresión para el funcionamiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. Adicionalmente, la Organización de Estados Americanos creó el 2018 un panel especial para analizar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Informe Final de ese panel recoge evidencias de ataques directos a estudiantes universitarios y académicos.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Ver: CIDH, *Situation of Human Rights in Guatemala* (Washington: IACHR, 2017) at paras. 266-278.

<sup>17</sup> CIDH, *Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua* (Washington: CIDH, 2018), paras. 170-171.

<sup>18</sup> *Ibid*, para 170. Citas omitidas.

<sup>19</sup> Ver: IACtHR, *Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism* (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights) (Costa Rica) (1985), Advisory Opinion, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 5.

<sup>20</sup> See, among others: IACtHR, *Case of "The Last Temptation of Christ" (Olmedo-Bustos et al.)* (Chile) (2001), Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 73; *Case of Ivcher Bronstein (Peru)* (2001), Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 74; *Case of Herrera Ulloa (Costa Rica)* (2004), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 107; *Case of Manuel Cepeda Vargas (Colombia)* (2010), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 210; *Case of Granier et al. (Radio Caracas Television) (Venezuela)* (2015), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 293.

<sup>21</sup> Organization of American States, *Report of the General Secretariat of the Organization of American States*

Los elementos anteriormente descritos sobre la libertad académica son aplicables en cualquier contexto, público o privado. En resumen, estos elementos desarrollados por entidades internacionales demuestran lo siguiente: (i) la libertad académica comprende la producción del conocimiento sin la existencia de cualquier medida de coacción o restricción; (ii) las académicas y académicos tienen la facultad de participar en los asuntos de la institución de educación superior; (iii) la prohibición de discriminación se aplica a todo el espacio universitario; y (iv) esta libertad incluye la facultad de contribuir en el desarrollo de las políticas en la institución que laboran.

### 3. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos,<sup>22</sup> los instrumentos de la UNESCO<sup>23</sup> y la doctrina especializada<sup>24</sup> han reconocido los derechos y

---

*and the Panel of Independent International Experts on the Possible Commission of Crimes Against Humanity in Venezuela* (Washington: Organization of American States, 2018) at p. 215,

<sup>22</sup> Entre otros, ver: Art. 13 y Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 18 y Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Art. 2 de su Protocolo Adicional No. 1; el Art. 9 y el Art. 17 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos; Art. IV y XII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, *Observación General N° 13: El derecho a la educación (artículo 13)*.

<sup>23</sup> De especial importancia son: UNESCO, *Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza*, UNESCO, 14 de diciembre de 1960; UNESCO, *Recomendación relativa a la Situación de los Investigadores Científicos*, 18° periodo de sesiones, 23 de noviembre de 1974; y UNESCO, *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior*.

<sup>24</sup> Entre otros, ver (documentos principalmente disponibles en inglés): 1982 *Declaration on Rights and Duties Inherent in Academic Freedom*, adopted by the International Association of University Professors and Lecturers (IAUPL) in Sienna, Italy; la Declaración de Lima sobre libertad académica y autonomía de las instituciones de educación superior de 1988, adoptada por el Servicio Universitario Mundial; the 1988 *Magna Charta Universitatum*, adopted by the Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice Chancellors of the European Universities (CRE); the 1990 *Dar es Salam Declaration on Academic Freedom and Social Responsibility of Academics*, adopted by staff associations of higher education establishments in Tanzania in 1990; the 1990 *Kampala Declaration on Intellectual Freedom and Social Responsibility*, adopted at a symposium held for that purpose by members of the African intellectual community; and the 2004 *Amman Declaration on Academic Freedom and the Independence of the Institutions of Higher Education and Scientific Research*, adopted by the Conference of Academic Freedom in the Arab Universities; Global Coalition to Protect Education from Attack, *Guide to Implementing the Principles of State Responsibility to Protect Higher Education from Attack* (2016); *Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education*, jointly issued by the International Association of

valores directamente relacionados a la libertad académica que son necesarios para el apropiado funcionamiento de las instituciones de educación superior. Estas incluyen la autonomía institucional, el acceso equitativo, la rendición de cuentas y la responsabilidad social.

Por ejemplo, la UNESCO ha tratado su importancia como uno de los pilares de la educación superior, describiéndola de la siguiente forma:

“17. El ejercicio auténtico de la libertad académica y el cumplimiento de las funciones y atribuciones enumeradas más adelante requieren la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía consiste en el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de enseñanza superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan a los sistemas de control público, en especial por lo que se refiere a la financiación estatal, y respeten las libertades académicas y los derechos humanos. No obstante, la índole de la autonomía puede variar en función del tipo de establecimiento de que se trate”.<sup>25</sup>

En esa misma línea, la “Declaración de Lima sobre la libertad académica y la autonomía de las instituciones de educación superior” establece lo siguiente:

(...) la educación deberá ser un instrumento de cambio social positivo. Como tal, debe ser relevante para la situación social, económica, política y cultural de cualquier país, contribuir a la transformación del *statu quo* hacia el pleno cumplimiento de todos los derechos y libertades, y estar sujeto a una evaluación permanente. [Es así como] (...) todos los miembros de la comunidad académica con funciones de investigación tienen el derecho de llevar a cabo investigaciones sin ninguna interferencia, sujeto a los principios y métodos universales de investigación científica. También tienen el derecho de comunicar libremente a otros las conclusiones de sus proyectos y publicarlas sin censura”.<sup>26</sup>

---

Universities and the Magna Charta Observatory (2012); *Hefei Statement on the Ten Characteristics of Contemporary Research Universities*, jointly issued by the Association of American Universities, Group of Eight (Australia), League of European Research Universities and the Chinese 9 Universities, and later joined by the Russell Group, U15 Canada, AEARU (Association of East Asian Research Universities), RU11 Japan, and the Hong Kong 3 (2013).

<sup>25</sup> UNESCO, *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior*, párrafo 17.

<sup>26</sup> Fernando Laksiri, “The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education” *Higher Education Policy* 2, 49-51 (1989).

A pesar de que se requiere de una autonomía universitaria para asegurar un adecuado ejercicio de la libertad académica, dicha autonomía no es ilimitada. Las personas responsables por la administración de los institutos de enseñanza superior deben respetar y garantizar la libertad académica de cada integrante de la comunidad.

En este sentido, la UNESCO ha establecido que “(...) las instituciones de enseñanza superior no deben utilizar la autonomía como pretexto para limitar los derechos del personal docente de la enseñanza superior mencionados en esta Recomendación o en los demás instrumentos internacionales (...)”<sup>27</sup> incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza,<sup>28</sup> entre otros.

Por lo tanto, el principio de autonomía universitaria no faculta a los institutos de enseñanza superior a despedir o adoptar medidas que afecten el vínculo laboral de personal académico como una forma de retaliación para evitar la crítica sobre su lugar de trabajo. Estas medidas son arbitrarias que afectan negativamente el acceso o la permanencia equitativa en las instituciones de educación superior. Además, medidas concretas de retaliación contra una integrante de la planta académica por denunciar políticas, prácticas o condiciones que puedan ser discriminatorias constituyen una limitación injustificada a la libertad de expresión, constituyéndose en una violación a la libertad académica y demás derechos relacionados con el caso de la peticionaria.

### **3.1. Las obligaciones relativas para asegurar un acceso equitativo a las instituciones de educación superior**

Un aspecto adicional para considerar es con respecto al acceso equitativo a instituciones de educación superior y a cargos directivos. Este acceso equitativo

<sup>27</sup> *Ibid*, párrafo 20. El apéndice de la Declaración hace referencia a los principales tratados internacionales de derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas, los instrumentos de la UNESCO relativos a la prohibición de discriminación y la investigación científica y académica, así como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre condiciones y formas de acceso equitativo al empleo

<sup>28</sup> UNESCO, *Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza*, 30<sup>o</sup> plenaria, 14 de diciembre de 1960.

requiere que el acceso y la participación efectiva esté basada en méritos. Por ejemplo, la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza”<sup>29</sup> de la UNESCO establece la obligación de adoptar medidas que prohíban cualquier forma de distinción o preferencia por el sexo, opinión política o cualquier otra índole.<sup>30</sup>

#### ARTÍCULO 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

- a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
- b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
- c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o
- d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.

Sobre esta base, las prácticas y políticas institucionales que arbitrariamente limitan el acceso equitativo o que menoscaban un principio de igual tratamiento en instituciones de educación superior violarían los estándares mencionados. Algunos ejemplos aplicables a este caso sería la falta de una respuesta adecuada a denuncias sobre acoso laboral o violencia sexual en las instituciones de educación superior o la exclusión de académicas o estudiantes de dichas instituciones por motivos de género y no basado en criterios objetivos como el mérito académico o profesional.

Como mínimo, las autoridades institucionales y del Estado deben adoptar todas las medidas razonables para asistir a las víctimas y prevenir que estos casos de acoso laboral o de violencia sexual se repitan. Esto incluye la implementación de investigaciones efectivas, razonables y transparentes, así como asegurarse de que los perpetradores sean investigados y procesados de acuerdo con los están-

---

<sup>29</sup> UNESCO, *Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza*, 14 de diciembre de 1960, 11° periodo de sesiones (entrada en vigor: 22 de mayo de 1962). Cabe destacar que Colombia no ha firmado ni se ha adherido a esta Convención.

<sup>30</sup> *Ibíd.*, Art. 1.1.

dares internacionales aplicables a la materia, particularmente lo establecido en el Art. 8 y el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De igual manera, medidas retaliatorias contra una integrante del personal académico por presentar denuncias o reportar la falta de políticas institucionales para la prevención y sanción de casos de acoso laboral y de violencia sexual en instituciones de educación superior, constituiría una violación a la libertad académica y la libertad de expresión, entre otros derechos.

#### **4. PRINCIPIOS INTERAMERICANOS DE LIBERTAD ACADÉMICA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA**

A pesar del amplio desarrollo sobre el contenido y alcance de la libertad académica, principalmente a cargo de la UNESCO, este derecho no había sido del todo desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante esta situación, la adopción de los Principios Interamericanos llena un vacío normativo aplicable tanto para las Américas como para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si bien no es posible hacer un análisis exhaustivo de todo el contenido de los Principios, este artículo analizará algunos temas de especial relevancia.

##### **4.1. Libertad Académica como pilar de la democracia y del progreso científico**

En primer lugar, se debe resaltar la aproximación holística hecha por los Principios de la libertad académica hacia otros derechos humanos. Anteriores esfuerzos se limitaban a conectar esta libertad hacia su mandato específico, sea educación o libertad de expresión, entre otros derechos. Sin embargo, dado que los Principios fueron elaborados por la CIDH, cuyo mandato incluye la promoción y protección de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, su aproximación fue más global. El alcance y la interdependencia de los diversos aspectos de la libertad académica quedan establecidos en el preámbulo:

“RECONOCIENDO que la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección del derecho a la libertad de

expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales...”<sup>31</sup>

Luego, el preámbulo de los Principios enfatiza en la relación entre la libertad académica, la democracia y el desarrollo de la ciencia:

ENFATIZANDO la función habilitante y social de la libertad académica para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico, el desarrollo humano y de la sociedad, y para la garantía plena del derecho a la educación, y entendiendo que los obstáculos frente a esta aplazan el avance del conocimiento, socavan el debate público y reducen los espacios democráticos;

CONSCIENTES de que la ciencia y el conocimiento es un bien público, social y pilar fundamental de la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, el pluralismo de ideas, el progreso científico, académico y el mejoramiento de la persona humana y de la sociedad, siendo un requisito indispensable para una sociedad libre, abierta, pluralista, justa e igualitaria;<sup>32</sup>

Estas disposiciones resaltan la importancia funcional de la libertad académica. Las universidades son garantes del progreso individual, social y científico y del avance democrático. Este es uno de los pilares de una sociedad libre, al igual que una sociedad civil fuerte, una prensa libre o un poder judicial independiente. Por este motivo es que los ataques a la libertad académica tienen implicaciones que van mucho más allá de las puertas del campus.

Reconociendo esta importancia, los Principios incluyendo elementos relativos al manejo del gobierno universitario, el nombramiento y despido del profesorado y su cuerpo directivo, así como la importancia de garantizar que esos procesos estén dirigidos por miembros de la comunidad de educación superior pertinente. El Principio II, por ejemplo, establece en su parte pertinente:

Contribuye positivamente a la autonomía universitaria que el nombramiento de personas para liderar instituciones públicas de educación superior reconozca méritos académicos, esté libre de influencias partidistas indebidas y tome en consideración

---

<sup>31</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, Preámbulo.

<sup>32</sup> Ibid.



procesos transparentes y que permitan la participación de la comunidad académica concernida.<sup>33</sup>

Asimismo, el Principio IV, relativo a la protección contra la injerencia del Estado en la enseñanza superior, advierte de lo siguiente:

Las interferencias desproporcionadas de los Estados en los currículos y programas académicos a través de, entre otras, la imposición de lineamientos contrarios a las finalidades de la educación como derecho, impactan severamente la libertad académica.<sup>34</sup>

En los últimos años, esta protección de la universidad y su comunidad ha sido afectada por gobiernos que plantean controlar políticamente estos espacios de libre pensamiento y desarrollo de ideas. En América Central universidades han sido cerradas, mientras que gobiernos de Brasil o Venezuela han intentado controlar las instancias de gobierno universitario, minimizar el papel de las asociaciones de estudiantes o controlar la currícula universitaria.<sup>35</sup> Sin embargo, posiblemente el caso más relevante es el caso de México y el intento del gobierno federal de tomar el control del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En esta institución, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, nombró a José Antonio Romero Tellauche como director interino en agosto de 2021 (el nombramiento se hizo permanente en noviembre del mismo año).<sup>36</sup>

Este nombramiento, que eludió el proceso normal de elección, fue visto por profesores y estudiantes como una grave intromisión política en la autonomía universitaria. Tras su nombramiento, se produjeron una serie de acontecimientos preocupantes, como el impago de salarios, la reducción de la matrícula de estudiantes, el despido aparentemente arbitrario de profesores, coordinadora académica del programa de Maestría en Periodismo y Políticas Públicas, y la suspensión arbitraria de ese mismo programa.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Ibid, Principio II.

<sup>34</sup> Ibid, Principio IV.

<sup>35</sup> Para más información, se recomienda revisar los artículos sobre la libertad académica en América Central, Brasil y Venezuela incluidos en esta edición de la revista.

<sup>36</sup> Ver: Scholars at Risk, *Free to Think 2022-Mexico Country Report*. Texto disponible en: <https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2022/>

<sup>37</sup> Ver: Scholars at Risk, *Free to Think 2022-Mexico Country Report*. Texto disponible en: <https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2022/>

En los Estados Unidos, las iniciativas legislativas contra la enseñanza superior en Florida y otros lugares suscitan preocupaciones similares.<sup>38</sup> Por ejemplo, como parte de una campaña de gran alcance dirigida a la educación superior (así como a la educación primaria y secundaria) en todo el estado, el gobernador Ron Desantis nombró a seis nuevos miembros del consejo de administración del New College de Florida a principios de 2023.<sup>39</sup> Esta medida fue adoptada al considerar que esta entidad había sido “completamente capturada por una ideología política que pone los conceptos de moda y relacionados con la verdad por encima del aprendizaje”.<sup>40</sup>

Tras esta nueva composición, el consejo de administración destituyó a la presidenta de la universidad, Patricia Okker, instalando como presidente interino a Richard Corcoran, un político republicano y aliado de Desantis. Desde ese entonces, el gobernador de Florida ha instalado a aliados políticos en otras instituciones, ha trabajado para alterar la titularidad y, a través de la llamada ley Stop WOKE, ha intentado limitar la forma en que se pueden debatir cuestiones como la raza y el género en las aulas universitarias de Florida.<sup>41</sup> Aunque el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito ha prohibido la aplicación de la ley Stop WOKE por constituir una posible violación del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda,<sup>42</sup> los mecanismos jurídicos disponibles para combatir la instalación de los aliados políticos de un dirigente en puestos de dirección universitaria, en un esfuerzo abiertamente político por alterar el carácter de esas universidades, plantean un reto mayor.

Los casos de Estados Unidos y México presentados en esta sección subrayan la importancia de que se cuente con normas y políticas que protejan la libertad académica de influencias o políticas partidistas.

---

<sup>38</sup> Para más información, se recomienda revisar el artículo sobre libertad académica en Estados Unidos, incluido en esta edición de la revista.

<sup>39</sup> Político, “Conservative trustees oust president at Florida’s New College amid leadership overhaul”, 31 de enero de 2023. Ver: <https://www.politico.com/news/2023/01/31/florida-new-college-conservative-trustees-00080541>

<sup>40</sup> Político, “Conservative trustees oust president at Florida’s New College amid leadership overhaul”, 31 de enero de 2023. Ver: <https://www.politico.com/news/2023/01/31/florida-new-college-conservative-trustees-00080541>

<sup>41</sup> Para más información, se recomienda revisar el artículo sobre los ataques a la libertad académica en el estado de Florida, incluido en esta edición de la revista

<sup>42</sup> Legal Defense Fund, “Eleventh Circuit Affirms Decision to Preliminarily Block Unlawful “Stop W.O.K.E.” Censorship Law”, 16 de marzo de 2023. Ver: <https://www.naacpldf.org/press-release/eleventh-circuit-affirms-decision-to-preliminarily-block-unlawful-stop-w-o-ke-censorship-law/>

## 4.2. Movilidad académica

Un aspecto de suma importancia establecido en los Principios es el reconocimiento de la movilidad académica como uno de los pilares para el desarrollo del conocimiento. La academia es, por esencia, un espacio de colaboración e intercambio de ideas. De ahí la necesidad de que los Principios reconozcan la movilidad académica como un freno a gobiernos o regímenes de prohibir la participación, asistencia o cooperación de la comunidad universitaria en espacios propios para el desarrollo de su libertad académica. En este contexto, el Principio XIV establece lo siguiente:

La libertad académica incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin importar las fronteras. Siendo el intercambio académico internacional, incluidas las conferencias, investigaciones, estancias de investigación, intercambios y reuniones académicas, aspectos fundamentales de la vida académica y expresiones necesarias de la libertad académica, los Estados no impedirán arbitrariamente que las personas salgan o entren en sus fronteras con el fin de limitar o detener el intercambio o la circulación transfronteriza de ideas, la recolección de información con fines académicos y promoverán la movilidad y la cooperación académica internacionales.<sup>43</sup>

Esta aproximación coincide con el de otros importantes tratados internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso de los Principios de la CIDH, se debe resaltar como un paso adelante y sin ambigüedades que se establezca la movilidad académica “sin consideración de fronteras”.<sup>44</sup> El intercambio académico internacional es un aspecto indispensable de la vida académica. Si bien los Estados suelen tener el control soberano de sus fronteras, el uso de la soberanía para impedir el intercambio académico (por ejemplo, por parte de un académico que viaja a una conferencia en el extranjero) podría constituir una violación de la libertad académica.

## 4.3. Personas incluidas bajo la libertad académica

Las entidades internacionales han reconocido que la libertad académica no sólo corresponde al profesorado, como inicialmente fue planteado, sino que

<sup>43</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, Principio XIV.

<sup>44</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 19.

ésta abarca también a los estudiantes y otros miembros de la comunidad de educación superior. El principio I sigue esta línea, con el fin de proteger a todo integrante de la comunidad universitaria:

La libertad académica implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos, a formar parte de las comunidades académicas y a realizar labores autónomas e independientes para llevar a cabo actividades de acceso a la educación, docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas de forma libre y sin temor a represalias. (...)

La libertad académica se protege de igual manera dentro y fuera de los centros educativos, así como en cualquier lugar donde se ejerza la docencia y la investigación científica.<sup>45</sup>

En concreto, la libertad académica no es simplemente un derecho que posee un grupo particular de personas en virtud de un título o credenciales —no es un derecho gremial. Más bien, la libertad académica es un derecho humano, conectado con otros derechos humanos, que puede ser ejercido en cualquier lugar, por cualquier persona (en las circunstancias adecuadas), y en el que toda la sociedad tiene un interés.

#### 4.4. La importancia de la implementación

Finalmente, el último principio se centra en el deber de implementación por parte de los Estados y las instituciones de educación superior. Sea mediante leyes, políticas o planes estudiantiles, la libertad académica necesita de medidas concretas que prevengan, protejan y garanticen el ejercicio de esta libertad, así como de la autonomía universitaria. En este sentido, los Principios establecen lo siguiente:

Los Estados y las instituciones de educación superior deben adoptar medidas afirmativas, dentro de sus capacidades, destinadas a la efectiva implementación de los principios mencionados, teniendo también terceros y particulares relacionados con la actividad investigativa y académica el deber de orientar sus acciones y procesos a estos principios.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, Principio I.

<sup>46</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, Principio XVI.

El ataque a los espacios de educación superior y las violaciones de la libertad académica son un problema creciente, el cual va de la mano con el aumento del autoritarismo en todo el mundo. A pesar de ser una de las principales herramientas contra el autoritarismo y un baluarte para la defensa de la democracia, la libertad académica sigue siendo muy poco comprendida. Las violaciones a la libertad académica a menudo no se denuncian como tales; las políticas universitarias con frecuencia no fomentan ni protegen adecuadamente la libertad académica de estudiantes y del profesorado. En los campus de todo el mundo siguen faltando debates detallados sobre la libertad académica.

La inclusión de un deber de aplicación en los Principios Interamericanos es un reconocimiento de que las normas jurídicas por sí solas no solucionarán estos problemas. Esto requiere el compromiso activo de todas las partes interesadas, de modo que los académicos, los estudiantes y otros miembros de las comunidades de educación superior comprendan plenamente sus derechos; los actores institucionales sean conscientes de sus responsabilidades; y los Estados reconozcan y respeten tanto las limitaciones como las obligaciones afirmativas que la libertad académica les impone.

## 5. CONCLUSIONES

En los últimos años, la doctrina jurídica y de derechos humanos en torno a la libertad académica se ha desarrollado a un nivel de amplitud y profundidad sin precedentes. Las principales entidades de derechos humanos, incluyendo Estados y titulares de mandatos del sistema de las Naciones Unidas y de la OEA, han contribuido a desarrollar esta doctrina y, al hacerlo, han manifestado su compromiso con la libertad académica a escala mundial. Al mismo tiempo, las amenazas a la libertad académica y la autonomía universitaria siguen aumentando y, en muchos lugares, se están agravando.

Algunos Estados, tanto en las Américas como en otros continentes, utilizan tácticas nuevas y más sofisticadas para silenciar al profesorado y a estudiantes, con el fin de controlar la educación superior y adecuarla a los intereses del poder político de turno. Está claro que los importantes avances doctrinales de los últimos años son una condición necesaria pero no suficiente para la plena protección de la libertad académica. Los agentes internacionales, los Estados, la comunidad académica, los estudiantes, los administradores y los miembros

de la sociedad en general deben recibir las herramientas necesarias para aplicar el derecho a la libertad académica, de modo que este derecho sea ampliamente comprendido por quienes lo ostentan; las respuestas a las violaciones sean rápidas y directas; y las sociedades en general reconozcan que son partes interesadas. Porque el progreso democrático y el avance científico dependen de universidades sanas y libres para sobrevivir.

## Bibliografía

### *Instrumentos internacionales*

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria*, CIDH: 2021.

UNESCO, *Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza*, UNESCO, 14 de diciembre de 1960.

### *Documentos de Organismos Internacionales*

Inter-American Commission on Human Rights, *Freedom of Expression and Internet* (Washington: IACHR, 2013).

Inter-American Commission on Human Rights, *Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua* (Washington: CIDH, 2018).

Inter-American Commission on Human Rights, *The Inter-American Legal Framework Regarding the Right to Freedom of Expression* (Washington: IACHR, 2009).

Inter-American Commission on Human Rights, *Report on Freedom of Expression in the Americas* (Washington: IACHR, 2002).

Inter-American Commission on Human Rights, *Situation of Human Rights in Guatemala* (Washington: IACHR, 2017).

Inter-American Commission on Human Rights, *Special Study on the Status of Investigations into the Murder of Journalists during for Reasons that may be Related to their Work in Journalism* (Washington: IACHR, 2005).

Organization of American States, *Report of the General Secretariat of the Organization of American States and the Panel of Independent International Experts on the Possible Commission of Crimes Against Humanity in Venezuela* (Washington: Organization of American States, 2018).

Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, *Report of the Special Rapporteur on access to information, criminal libel and defamation, the police and the criminal justice system, and new technologies*, Economic and Social Council, 56° periodo de sesiones, E/CN.4/2000/63, 18 de enero de 2000.

UNESCO, *Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza*, 30° plenaria, 14 de diciembre de 1960

UNESCO, *Recomendación relativa a la Situación de los Investigadores Científicos*, 18° periodo de sesiones, 23 de noviembre de 1974.

UNESCO, *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior*, 29° periodo de sesiones, 11 de noviembre de 1997.

## Doctrina

- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 16: Libertad de Pensamiento y Expresión* (San José: Corte IDH, 2017).
- Fernando Laksiri, “The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education” *Higher Education Policy* 2, 49-51 (1989).
- Legal Defense Fund, “Eleventh Circuit Affirms Decision to Preliminarily Block Unlawful “Stop W.O.K.E”. Censorship Law”, 16 de marzo de 2023. Ver: <https://www.naacpldf.org/press-release/eleventh-circuit-affirms-decision-to-preliminarily-block-unlawful-stop-w-o-k-e-censorship-law/>
- Político, “Conservative trustees oust president at Florida’s New College amid leadership overhaul”, 31 de enero de 2023. Ver: <https://www.politico.com/news/2023/01/31/florida-new-college-conservative-trustees-00080541>
- Christian Steiner, Marie-Christine Fuch, Patricia Uribe (eds), *Convención Americana sobre Derechos Humanos: Comentario* (Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2da edición, 2019).
- Scholars at Risk, *Free to Think 2022-Mexico Country Report*. Texto disponible en: <https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2022/>
- University of Gothenburg’s V-Dem Institute, Institute of Political Science at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, *Academic Freedom Index-Update 2023*. Ver: [https://academic-freedom-index.net/research/Academic\\_Freedom\\_Index\\_Update.pdf](https://academic-freedom-index.net/research/Academic_Freedom_Index_Update.pdf)

## Jurisprudencia

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, *Observación General N° 13: El derecho a la educación (artículo 13)*, 21º periodo de sesiones E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de julio de 2004, Serie C No. 107.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*, Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5.
- Inter-American Court of Human Rights, *Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights) (Costa Rica)* (1985), Advisory Opinion, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 5.
- Inter-American Court of Human Rights, *Case of “The Last Temptation of Christ” (Olmedo-Bustos et al.) (Chile)* (2001), Judgment, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 73.
- Inter-American Court of Human Rights, *Case of Ivcher Bronstein (Peru)* (2001), Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 74.
- Inter-American Court of Human Rights, *Case of Herrera Ulloa (Costa Rica)* (2004), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 107.
- Inter-American Court of Human Rights, *Case of Manuel Cepeda Vargas (Colombia)* (2010), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 210.
- Inter-American Court of Human Rights, *Case of Granier et al. (Radio Caracas Television) (Venezuela)* (2015), Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 293.





# RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA DE LOS PRINCIPIOS INTERAMERICANOS SOBRE LIBERTAD ACADÉMICA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

*(Challenges for the Implementation in Latin America of the Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy)*

DAVID GÓMEZ GAMBOA\*

## **Resumen**

La presente contribución valorará la adopción de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria como un hito para el derecho interamericano y como significativo aporte al derecho internacional de los derechos humanos, identificando como principales retos para su implementación en Latinoamérica: (i) el desconocimiento sobre la libertad académica como derecho humano independiente e interdependiente que se relaciona con otros derechos y libertades fundamentales; así como el desconocimiento de su valor consustancial con la democracia y el desarrollo; (ii) la necesidad de visibilizar como sujetos en situación especial de vulnerabilidad a los universitarios críticos en contextos autoritarios dado que, al producir conocimiento científico crítico o participar en el debate crítico pueden ser objeto de represalias por parte de gobiernos que buscan reducir el espacio cívico; (iii) la falta de reconocimiento normativo expreso de la libertad académica en la región en la gran mayoría de los Estados de la OEA y (iv) las graves violaciones de la libertad académica y la autonomía universitaria en Latinoamérica.

**Palabras clave:** libertad académica, autonomía universitaria, derechos universitarios, derechos humanos, Latinoamérica.

## **Abstract**

This contribution will assess the adoption of the Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy as a milestone for Inter-American law and as a significant contribution to international human rights law, identifying as main challenges for its implementation in Latin America: (i) the lack of knowledge about academic freedom as an independent and interdependent human right that is related to other fundamental rights and freedoms; as well as the ignorance of its consubstantial value with democracy and development; (ii) the need to make critical academics in authoritarian contexts visible as subjects in a special situation of vulnerability, given

that by producing critical scientific knowledge or participating in critical debate they may be subject to reprisals by governments that seek to reduce civic space; (iii) the lack of express regulatory recognition of academic freedom in the region in most OAS member states; and (iv) the serious violations of academic freedom and university autonomy in Latin America.

**Key words:** academic freedom, university autonomy, university rights, human rights, Latin America.

### **Afiliación del autor**

Nombre: David Gómez Gamboa

Institución: Aula Abierta-Universidad del Zulia (Venezuela).

Biografía: Abogado, periodista y doctor en ciencia política, director de la ONG Aula Abierta y profesor de derechos humanos y derecho internacional público en la Universidad del Zulia (Venezuela).

Correo electrónico: dgomezgamboa@gmail.com

## 1. INTRODUCCIÓN

La publicación el 9 diciembre de 2021 de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria<sup>1</sup> por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa un hito para el derecho interamericano y el derecho internacional dado que reconocen la libertad académica como un derecho humano autónomo e interdependiente vinculado a la democracia y al desarrollo, y establecen estándares interamericanos mínimos en la materia.

La historia ha demostrado cómo los regímenes autoritarios intentan eliminar el debate crítico atacando la libertad académica, a las universidades y la comunidad universitaria. A menudo restringen la libertad de investigar, expresarse e informar dentro y fuera de las universidades, limitando así la producción de conocimiento científico y el debate crítico dentro de la sociedad. En consecuencia, la relación entre libertad académica y democracia se hace evidente.

Al analizar la historia de los países latinoamericanos donde la anulación de universidades, así como la detención de profesores y líderes estudiantiles se convirtió en una práctica reiterada para coartar el pensamiento libre y crítico,

---

<sup>1</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, 182º Período Ordinario de Sesiones. Ver: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf)

se reivindica la fuerte relación de la libertad académica con la democracia. Sin embargo, debe destacarse que inclusive en sociedades democráticas también se pueden dar violaciones a este derecho humano.

El derecho humano a la libertad académica encuentra su fundamento en el derecho internacional, pero requiere una protección más amplia, por lo cual la aprobación de los principios interamericanos significó llenar un vacío normativo al compilar sistemáticamente estándares internacionales en la materia a través de una fuente “*soft law*”, pero muy significativa.

Los principios complementan y sistematizan algunas fuentes del derecho internacional en materia de libertad académica en su noción interdependiente con la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, derecho a la educación de calidad, igualdad y no discriminación, entre otros. Los principios se nutren del *corpus iuris* internacional en materia de la libertad de enseñar y aprender sin temor a la persecución reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>2</sup> y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,<sup>3</sup> se nutren de las regulaciones normativas de los artículos 13<sup>4</sup> y 15<sup>5</sup> del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); del artículo 13 tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”,<sup>6</sup> así como de la Recomendación sobre la Condición del Personal Docente de Educación Superior,<sup>7</sup> entre otros instrumentos.

<sup>2</sup> Artículos 19 y 26.

<sup>3</sup> Artículo IV (Derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión).

<sup>4</sup> Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Acuerdan que la educación estará dirigida al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y fortalecerá el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

<sup>5</sup> Artículo 15. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona: a) A participar en la vida cultural; (b) Disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor.

<sup>6</sup> Artículo 13. Derecho a la educación. I. Toda persona tiene derecho a la educación.

<sup>7</sup> En los párrafos 17-21, la recomendación de la UNESCO establece: A. Autonomía institucional. Más adelante en los párrafos 25-30 establece: VI. Derechos y libertades del personal docente de educación superior. A. Derechos y libertades individuales: derechos civiles, libertad académica, derechos de publicación e intercambio internacional de información.

Los principios interamericanos se nutren igualmente de la Observación General Nro. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR), la cual afirma que si bien la libertad académica no se menciona explícitamente en el artículo 13 del PIDESC reconoce que:

“Los miembros de la comunidad académica, individual o colectivamente, son libres de perseguir, desarrollar y transmitir conocimientos e ideas, a través de la investigación, la docencia, el estudio, la discusión, la documentación, la producción, la creación o la escritura. La libertad académica incluye la libertad de las personas de expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabajan, de cumplir sus funciones sin discriminación ni temor a la represión por parte del Estado o de cualquier otro actor, de participar en órganos académicos profesionales o representativos, y de gozar de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos aplicables a otras personas en la misma jurisdicción”.<sup>8</sup>

Asimismo, el Comité afirma que el goce de la libertad académica exige la autonomía de las instituciones de educación superior, lo que implica la existencia del grado de autogobierno necesaria para la efectiva toma de decisiones por parte de las instituciones de educación superior en relación con su labor académica, normas, gestión y actividades conexas.<sup>9</sup>

Tal como lo afirmamos en el acto de presentación oficial de los principios interamericanos realizado el 09 diciembre 2021,<sup>10</sup> los 16 principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria podrían ser agrupados en cuatro ideas principales, a saber:

---

<sup>8</sup> En el párrafo 39 de la Observación General No.13 al CDESC, el Comité estableció: Los miembros de la comunidad académica, individual o colectivamente, son libres de perseguir, desarrollar y transmitir conocimientos e ideas, a través de la investigación, la enseñanza, el estudio, la discusión, la documentación, producción, creación o escritura. La libertad académica incluye la libertad de las personas de expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabajan, de cumplir sus funciones sin discriminación ni temor a la represión por parte del Estado o de cualquier otro actor, de participar en órganos académicos profesionales o representativos, y de gozar de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos aplicables a otras personas en la misma jurisdicción.

<sup>9</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), “Observación General No. 13 sobre el derecho a la educación”, 1999, p. 237-238, párrafo 40.

<sup>10</sup> El acto de lanzamiento de los principios interamericanos contó con la participación de comisionados de la CIDH, relatores espaciales, y de representantes académicos de Aula Abierta, Universidad del Zulia, Universidad de Ottawa, Universidad de Notre-Dame, Scholars at Risk, Instituto Max Planck, entre otros. Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=06s3ri4affA>

- a. La libertad académica es un derecho humano —individual y colectivo—, inherente a la democracia y al desarrollo, que se relaciona con otras libertades fundamentales de manera interdependiente y con fines habilitantes.<sup>11</sup>
- b. La libertad académica protege a los miembros de la comunidad universitaria dentro y fuera de la Universidad, es decir, desde un enfoque funcional protege a profesores, estudiantes, investigadores y también a otros actores de la comunidad universitaria. Además, los líderes de la comunidad académica son particularmente vulnerables en contextos autoritarios, especialmente cuando están involucrados en la discusión de asuntos de interés público.<sup>12</sup>
- c. El principio de autonomía universitaria representa el medio para garantizar la libertad académica —en una relación de medio a fin—. La autonomía universitaria representa un muro de contención que salvaguarda la libertad e independencia bajo las cuales deben desarrollarse las actividades académicas en las universidades.<sup>13</sup>
- d. La libertad académica no es un derecho absoluto. Tiene límites y restricciones según el derecho internacional (fines legítimos, proporcionalidad, necesidad).<sup>14</sup> La universidad debe ser un “espacio inclusivo”, “seguro” y “libre”. Representa la cuna de la educación. En consecuencia, cualquier práctica de incitación al odio, discriminación, violencia sexual o de género, no está protegida por la libertad académica. De ahí la necesidad de producir, por ejemplo, protocolos para la no violencia contra las mujeres o la violencia de género en las instituciones académicas.

<sup>11</sup> Se relacionan con esta idea: Preámbulo, Principio I: “Ámbito de protección de la libertad de cátedra”, Principio X: “Educación en derechos humanos”, Principio XI: “Acceso a la información”, Principio XII: “Internet y otras tecnologías”, Principio XIII: “Deber de garante principal, competencia pluralista y libertad de asociación”, Principio XIV: “Protección de la movilidad y cooperación internacional” y Principio XVI: “Deber de ejecución”.

<sup>12</sup> Se relacionan con esta idea: Preámbulo, Principios IV: “Protección contra la injerencia del Estado”, V: “Protección contra actos de violencia”, VIII: “Prohibición de la censura y excepcionalidad del ejercicio punitivo de la autoridad del Estado”, y IX: “Protección y prevención contra actos u omisiones de los particulares”.

<sup>13</sup> Se relacionan con esta idea: Principios II: “Autonomía de las instituciones académicas”, y Principio VI: “Inviolabilidad del espacio académico”.

<sup>14</sup> Se relacionan con esta idea: Principios III: “No discriminación”, VII: “Restricciones y limitaciones a la libertad académica”, XV: “Diálogo inclusivo en el marco de la educación superior”.

## 2. DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS INTERAMERICANOS SOBRE LIBERTAD ACADÉMICA Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LATINOAMÉRICA

Con relación a los principales retos para implementar los principios interamericanos, es importante analizar los siguientes aspectos:

### 2.1. El desconocimiento de la libertad académica como derecho humano independiente e interdependiente vinculado a la democracia y el desarrollo

El desconocimiento sobre la libertad académica como derecho humano, independiente e interdependiente que se relaciona con otros derechos y libertades fundamentales; y de su valor consustancial con la democracia y el desarrollo, quizá representa el mayor reto para la implementación efectiva de los principios interamericanos, por lo cual es urgente emprender un trabajo sistemático en materia de formación, documentación, incidencia y articulación de actores sociales vinculados a la actividad académica.

Los principios interamericanos destacan en el segundo párrafo del preámbulo lo siguiente:

“la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales, todos estos reconocidos en [...] instrumentos internacionales y constituciones nacionales”.

### 2.2. La invisibilización de los universitarios críticos como sujetos en situación especial de vulnerabilidad en contextos autoritarios

Otro gran reto para la implementación de los principios interamericanos lo representa la necesidad de visibilizar como sujetos en situación de vulnerabilidad especial a los universitarios críticos en contextos autoritarios. Ellos, al

producir conocimiento científico crítico o participar en el debate crítico suelen ser objeto de represalias por parte de gobiernos que buscan reducir el espacio cívico. Como principales referentes latinoamericanos se destacan los casos de: Venezuela durante 2014 y 2017, Nicaragua a partir de 2018, Cuba desde los 60s y México desde el gobierno de López Obrador.

Los universitarios, tanto profesores como estudiantes, al producir conocimiento científico crítico o al participar en el debate crítico dentro de la sociedad, suelen ser objeto de represalias por parte de gobiernos autoritarios que buscan reducir el espacio cívico.

Con relación a Venezuela, Aula Abierta y otras organizaciones han documentado que durante el 2017, 356 universitarios fueron víctimas de ataques en Venezuela, cifra que inclusive es mayor a la registrada por la ONG Espacio Público en relación al número de periodistas que fueron víctimas de ataques en el mismo período (388).<sup>15</sup> En este mismo sentido, la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, también conocida como “Fact-Finding-Mission (FFM)”,<sup>16</sup> en sus tres informes publicados entre 2020 y 2022 da cuenta de situaciones muy graves ocurridas en las cuales los universitarios han sido blancos en un contexto de restricción del espacio cívico en el país.

El informe publicado en septiembre 2022<sup>17</sup> se focalizó en los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos a través de personas vinculadas a los servicios de inteligencia en contextos para reprimir a opositores al Gobierno. Expresamente indicó que estudiantes universitarios y líderes estudiantiles forman parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela. En este informe, la Misión determinó que la situación de los derechos humanos en el país “sigue siendo grave” y que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cometieron posibles crímenes de lesa humanidad, como parte

<sup>15</sup> Ver: <https://espaciopublico.org/wp-content/uploads/2015/05/Situacio%CC%81n-del-derecho-a-la-libertad-de-expresio%CC%81n-e-informacio%CC%81n-en-Venezuela-2017-Espacio-Pu%CC%81blico.pdf>

<sup>16</sup> La Misión (FFM) fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la Resolución 42/25 del 27 de septiembre para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con el fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Ver: <https://elpitazo.net/opinion/mision-de-la-onu-universitarios-blanco-de-ataque-del-gobierno/>

<sup>17</sup> Ver: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022>

de un plan para reprimir a los opositores al Gobierno, entre ellos “personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles”.

Textualmente expresó que: “La Misión investigó casos que involucran a 90 víctimas, en los que el SEBIN arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad”. (Párrafo 57).<sup>18</sup> Asimismo, el informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó que:

“Las órdenes para identificar los objetivos de la investigación provenían directamente del presidente Maduro y, en ocasiones, de Diosdado Cabello, a través del director general del SEBIN. Este, a su vez, daba instrucciones a sus subordinados, en particular a la Dirección de Investigaciones Estratégicas y a la Dirección de Acciones Inmediatas. Los principales objetivos del SEBIN eran personas civiles, opositoras reales o percibidas como tales por el Gobierno y otros individuos críticos de alto perfil. Entre ellos se encontraban políticos de la oposición, periodistas y personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles y de las protestas”. (Párrafo 58)<sup>19</sup>

A este informe del 2022 le precedieron otros dos. En un informe de 2021, el cual se centró sobre el sistema de justicia venezolano, su independencia y su papel en la investigación y persecución de opositores del Gobierno, y su papel en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos (2021).<sup>20</sup> A su vez, en un informe de 2020,<sup>21</sup> sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en el país desde 2014.<sup>22</sup> En ambos informes, Aula Abierta constató que los universitarios fueron las principales víctimas de: a) detenciones arbitrarias en un 47.8% de los casos documentados en el informe del 2020 y 13.5% de los casos documentados en

---

<sup>18</sup> Ver: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A\\_HRC\\_51\\_43\\_Unofficial\\_Spanish\\_Version.docx](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A_HRC_51_43_Unofficial_Spanish_Version.docx)

<sup>19</sup> Ver: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A\\_HRC\\_51\\_43\\_Unofficial\\_Spanish\\_Version.docx](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A_HRC_51_43_Unofficial_Spanish_Version.docx)

<sup>20</sup> Ver: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A\\_HRC.48.69\\_ES.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC.48.69_ES.pdf)

<sup>21</sup> Ver: [https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Conclusiones-FFM-Venezuela-2020-A\\_HRC\\_45-CRP.11\\_SP.2.pdf](https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Conclusiones-FFM-Venezuela-2020-A_HRC_45-CRP.11_SP.2.pdf)

<sup>22</sup> Ver: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/238/94/PDF/G2023894.pdf?OpenElement>



2021; b) ejecuciones extrajudiciales, en un 45% de los casos documentados en 2020 y en un 50% de los documentados en 2021; c) Desapariciones forzadas, en un 25% de casos documentados en 2020; y ratos crueles, inhumanos y degradantes, con un 53% de los casos documentados en 2020.<sup>23</sup>

Con relación a Nicaragua,<sup>24</sup> distintas prácticas contra los universitarios críticos confirman que se trata de un colectivo de sujetos que enfrentan situación de vulnerabilidad especial frente al gobierno de Ortega. Al respecto, llaman la atención las distintas violaciones a la libertad académica, reunión pacífica, persecuciones, detenciones y represalias contra los universitarios nicaragüenses en el contexto pre-electoral (mayo-julio 2021),<sup>25</sup> el asedio al recinto de la Universidad Centroamericana (UCA) en 2021 especialmente,<sup>26</sup> los recortes presupuestarios a las universidades en Nicaragua (caso Universidad Centroamericana –UCA–),<sup>27</sup> la represión, detenciones y asesinatos,<sup>28</sup> la arremetida contra la libertad académica a través de la ilegalización de 12 universidades en 24 horas a principios de febrero 2022,<sup>29</sup> entre otros.<sup>30</sup>

<sup>23</sup> Ver: <https://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2022/06/Universitarios-en-vulnerabilidad-en-contextos-de-restriccion-del-espacio-civico.pdf>

<sup>24</sup> REDESCA manifestó preocupación por las violaciones a la libertad académica en Nicaragua, en: <https://derechosuniversitarios.org/2022/06/08/redesca-manifesto-preocupacion-por-las-violaciones-a-la-libertad-academica-en-nicaragua/>

<sup>25</sup> Ver: <https://derechosuniversitarios.org/2021/09/26/nicaragua-persecuciones-detenciones-y-represalias-contra-universitarios-en-el-contexto-pre-electoral/> // <https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/10/NICARAGUA-VOL-1-INFORME-PRELIMINAR-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-ACAD%C3%89MICA-REUNI%C3%93N-PAC%C3%8DFICA-Y-OTROS-DERECHOS-DE-LOS-UNIVERSARIOS-NICARAG%C3%9CENSES-EN-EL-CONTEXTO-PREELECTORAL.docx.pdf>

<sup>26</sup> Ver: <https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/06/RESUMEN-EJECUTIVO-ASEDIO-AL-RECINTO-DE-LA-UNIVERSIDAD-CENTROAMERICANA-EN-NICARAGUA-EL-26-DE-ABRIL-DEL-2021.docx.pdf>

Con relación a que los estudiantes de la UCA de Nicaragua han sido asediados por la policía y paramilitares en protestas pacíficas, ver: <https://derechosuniversitarios.org/2021/06/23/estudiantes-de-la-uca-de-nicaragua-asediados-por-la-policia-y-paramilitares-en-protestas-pacificas/>

<sup>27</sup> Ver: <https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2022/06/Resumen-ejecutivo-recortes-presupuestarios-nicaragua-202-UCA.pdf>

<sup>28</sup> Aula Abierta, estudiantes y organizaciones denuncian al Estado de Nicaragua frente al Consejo de DDHH de la ONU en <https://derechosuniversitarios.org/2022/09/21/represion-detenciones-y-asesinatos-aula-abierta-estudiantes-y-organizaciones-denuncian-al-estado-de-nicaragua-frente-al-consejo-de-ddhh-de-la-onu/>

<sup>29</sup> Ver: <https://derechosuniversitarios.org/2022/02/04/arremetida-contra-la-libertad-academica-nicaragua-ilegalizo-12-universidades-en-24-horas/>

<sup>30</sup> Las referidas denuncias fueron presentadas por Aula Abierta en representación de movimientos estudiantiles universitarios en el Diálogo Interactivo frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 13 septiembre de 2022. Ver: <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1569844528756015112> - <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1569845488052064259?t=ek3U5HsivuoSd3-zOnVvpw&s=19Este>

Con relación a México, han sido documentadas las denuncias sobre la convocatoria ilegal de autoridades del Conacyt,<sup>31</sup> sobre la ilegalidad de la reforma parcial del Estatuto General del CIDE,<sup>32</sup> sobre las irregularidades en el otorgamiento de becas para cursar licenciaturas en sus Centros Públicos de Investigación a los estudiantes que participan en “conflictos” contra el Conacyt,<sup>33</sup> en general sobre la persecución y censura contra investigadores y académicos desde el 2021.<sup>34</sup>

El caso cubano es particularmente preocupante. La forma reiterativa, general y sistemática de violación de la libertad académica y otras libertades como la de asociación y de pensamiento, permiten concluir que desde el triunfo de la revolución cubana en la década de los 60 se empezó a desarrollar una política de estado que mira a los universitarios críticos como blancos, y que no permite la producción libre del conocimiento científico ni permite la circulación del debate crítico con base en el pensamiento libre.

En los 24 informes producidos por el Observatorio de Libertad Académica en Cuba (OLA)<sup>35</sup> entre el 2021 y agosto 2022 se ha sistematizado el estudio de 83 casos que identifican patrones históricos de violación a la libertad académica y la autonomía universitaria en Cuba en los que los universitarios son víctimas. En el informe 24 del OLA,<sup>36</sup> se resaltan como incidentes con mayor recurrencia en Cuba el acoso/hostigamiento, que implica violaciones a la dignidad e integridad personal y la libertad académica, y el trato desigual no justificado por agentes del Estado u otra persona(s) actuando a título oficial como expresión de vulneraciones a la libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión, y la constante persecución de académicos disidentes del régimen cubano (con 60 incidentes asociados cada uno). Además de la libertad de asociación, se destacan como transgredidos el derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información con 93 incidentes asociados, el derecho a la educación, y el derecho

---

<sup>31</sup> Ver: <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1485660342193725445>/<https://derechosuniversitarios.org/2022/06/06/la-cidh-considera-que-los-31-academicos-del-fccyt-actuaron-con-base-en-la-normativa-vigente/>

<sup>32</sup> Ver: <https://derechosuniversitarios.org/2022/02/28/mexico-rechazan-reforma-parcial-del-estatuto-general-del-cide-por-ser-ilegal/> (2022)

<sup>33</sup> Ver: <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1529474028519448577> (2022)

<sup>34</sup> Ver: <http://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/11/R.E.-PERSECUCI%C3%93N-CONTRA-INVESTIGADORES-Y-ACAD%C3%89MICOS-EN-M%C3%89XICO.docx.pdf>

<sup>35</sup> Ver: <https://www.olacademica.org/informes>

<sup>36</sup> Ver: [https://www.olacademica.org/\\_files/ugd/07be42\\_ceed4e9de14d403c8e201a36527213c5.pdf](https://www.olacademica.org/_files/ugd/07be42_ceed4e9de14d403c8e201a36527213c5.pdf)

a la autonomía universitaria, cada uno con más de 60 registros, lo que los posiciona como los derechos más violados dentro del entorno educativo cubano”.

Asimismo, el Informe 24 del OLA presenta incidentes vinculados a las instituciones de educación superior cubanas, revelando datos relacionados con casos de expulsión, hostigamiento y persecución de docentes y estudiantes, presentando como registro un total de 44 instituciones implicadas en la violación de los derechos humanos dentro de contextos académicos. Destaca tanto establecimientos propiamente educativos (universidades e institutos pedagógicos) como instituciones públicas del Estado tales como el Ministerio de Educación Superior (MES) o el Ministerio del Interior (MININT).

El citado informe 24 registra “un total de 44 instituciones involucradas en los incidentes relacionados con la violación sistemática y generalizada del derecho a la libertad académica y otros derechos humanos. [...] la mayoría se encuentran ubicadas en la provincia de La Habana, con un total de 20 instituciones, entre las que destacan la Universidad de La Habana, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, la Universidad de Camagüey, entre otras”.

### **2.3. La falta de reconocimiento normativo doméstico de la libertad académica en la región**

La falta de reconocimiento normativo de la libertad académica en la región es otro de los retos importantes para la implementación de los principios interamericanos, especialmente ante el no reconocimiento expreso de la libertad académica en la legislación doméstica de la mayoría de los Estados de la OEA, por lo cual urge la incorporación de los estándares interamericanos contenidos en los principios en el derecho interno de los Estados de la OEA.

De los Estados de la OEA, si bien implícitamente varios Estados reconocen la libertad académica, sólo uno la reconoce de forma expresa a nivel constitucional (Ecuador) y sólo siete la reconocen expresamente a nivel legal (Bahamas, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador; México y República Dominicana). Lo anterior significa que más del 95% de los Estados americanos no reconoce la libertad académica a nivel constitucional.

En Ecuador la Constitución garantiza la autonomía universitaria y la libertad académica de forma expresa y la Ley las desarrolla. La Constitución ecuatoriana

del 2008<sup>37</sup> establece en su artículo 355 que “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”, reconociendo que dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones”. La Ley Orgánica de Educación Superior de 2019<sup>38</sup> desarrolla ampliamente la normativa constitucional (artículo 12, 13, 17,18 y 19).

Con relación a la autonomía universitaria, ésta cuenta con un nivel más avanzado de reconocimiento en la Región. En Las Américas, 15 Estados la reconocen a nivel constitucional expresamente y 19 a nivel legal, es decir más del 50% de los Estados no reconoce la autonomía universitaria a nivel constitucional, y casi el 45% no reconoce la autonomía universitaria a nivel legal, lo cual representa un reto importante.

A pesar de lo planteado, puede afirmarse que en las legislaciones domésticas se dan reconocimientos implícitos o tácitos en normas constitucionales o legales, lo cual puede ser muy pertinente para la implementación de los principios interamericanos.

En relación a los referidos reconocimientos normativos implícitos, conforme a la investigación llevada por Aula Abierta en 2021,<sup>39</sup> en Argentina se reconoce tanto constitucional como legalmente de forma expresa la autonomía universitaria y la libertad académica de forma implícita en la Ley. La autonomía universitaria adquiere rango constitucional en el texto de la reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994<sup>40</sup> a través del artículo 75 numeral 19. Asimismo, la Ley Nacional de Educación Superior 24.521<sup>41</sup> (1995) permite el reconocimiento de la libertad académica de forma implícita, según los artículos 3, 4 y 27 y en el artículo 29 la autonomía universitaria.

Asimismo, en Chile, su Constitución no regula la autonomía universitaria, pero si es regulada en su legislación. La Constitución de 1980<sup>42</sup> dispone en su artículo 19.10 que el derecho a la educación tiene como objetivo el pleno

---

<sup>37</sup> Disponible en: <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>

<sup>38</sup> Disponible en: [https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2\\_Reformas/loes.pdf](https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2_Reformas/loes.pdf)

<sup>39</sup> En el marco de los aportes de Aula Abierta como parte de la Red Académica Especializada de la CIDH focalizada en la consulta sobre los principios interamericanos, la investigación sobre la normativa de países latinoamericanos estuvo a cargo de la profesora Innes Farias (LUZ-URU, 2021).

<sup>40</sup> Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/04999/804/norma.htm>

<sup>41</sup> Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/textact.htm>

<sup>42</sup> Disponible en: [https://www.camara.cl/camara/doc/leyes\\_normas/constitucion\\_politica.pdf](https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf)

desarrollo de las personas y establece que le corresponde al Estado fomentarla en todos sus niveles, así como estimular la investigación científica y tecnológica; además en el numeral 11 garantiza la libertad de enseñanza. Asimismo, la Ley N° 21.091 de 2018<sup>43</sup> reconoce directamente el derecho a la libertad académica al tiempo que regula la autonomía universitaria (artículo 2).

En relación a Colombia, tanto a nivel constitucional como legalmente se reconoce de forma expresa la autonomía universitaria y la libertad académica de forma implícita. La Constitución Política de 1991<sup>44</sup> le asigna al Estado la obligación de garantizar una educación libre, con lo cual se reconoce de forma implícita la libertad académica.<sup>45</sup> La Constitución Política (1991) garantiza expresamente la autonomía universitaria (artículo 69).

En Costa Rica se consagra tanto la autonomía universitaria como la libertad académica de forma tácita en la Constitución y establece de forma expresa la autonomía universitaria en la ley, pero no dice nada en cuanto a la libertad académica en la ley. Su Constitución (1949)<sup>46</sup> establece que las universidades son independientes por lo que garantiza la autonomía universitaria de forma expresa y la libertad académica de forma tácita al reconocer la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra (artículos 79, 84, 87).

En relación a Cuba, ni la Constitución ni la ley reconocen la autonomía universitaria, sin embargo, la normativa constitucional permite reconocer la libertad académica aunque con limitaciones. La Constitución promulgada en 2019<sup>47</sup> establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, y en el desarrollo de este marco ideológico reconoce el derecho a la educación y precisa los fundamentos de la política educacional, científica y cultural (artículo 32 y 73). La Ley No. 1307 regula a las universidades.<sup>48</sup>

México reconoce la libertad académica en la Constitución de forma implícita y la autonomía universitaria de forma expresa pero no regula ampliamente la protección de la libertad académica ni constitucional ni legalmente. La

<sup>43</sup> Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991>

<sup>44</sup> Disponible en: <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

<sup>45</sup> Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

<sup>46</sup> Disponible en: <https://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf>

<sup>47</sup> Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf>, análisis del Observatorio de libertad académica, disponible en: <https://www.olacademica.org/items-26/informe-n%C2%B0-15>

<sup>48</sup> Disponible en: <http://juriscuba.com/ley-no-1307/>

Constitución mexicana<sup>49</sup> (1917) no tiene una mención expresa de la libertad académica, sino englobada en un concepto general de educación, volviéndose la libertad académica un concepto asociado a este derecho a la educación universitaria (artículo 3). La Ley General de Educación<sup>50</sup> de 2019 en el Artículo 10 VII menciona la autonomía, pero no la desarrolla.

En Nicaragua, se reconoce de forma expresa la autonomía universitaria en la Constitución y en la ley; y la libertad académica de forma implícita. La Constitución Política<sup>51</sup> (1948), en su artículo 125, establece y garantiza la autonomía financiera, orgánica y administrativa de la educación superior, así como la libertad académica y obliga al Estado a promover la libre creación, investigación y difusión de las ciencias (artículo 125).<sup>52</sup>

En Perú se garantiza la autonomía universitaria en la Constitución y en la ley de forma expresa; mientras que la libertad académica la reconoce de forma implícita. La Constitución Política de Perú<sup>53</sup> de 1993 en su artículo 13 establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. (...) Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Asimismo, la Ley Universitaria 30220<sup>54</sup> establece tanto la autonomía como la libertad de cátedra dentro de los principios que rigen las universidades peruanas (artículo 88 y 123).

Para finalizar, en Venezuela se reconoce la autonomía universitaria de forma expresa tanto en la Constitución como en la ley; mientras que la libertad académica se reconoce de forma implícita en el artículo 102 constitucional. Asimismo, en el artículo 109 constitucional se dispone que el Estado reconocerá la autonomía universitaria. Mientras tanto, la Ley de Universidades<sup>55</sup> de

---

<sup>49</sup> Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf\\_mov/Constitucion\\_Politica.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf)

<sup>50</sup> Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE\\_300919.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf)

<sup>51</sup> Disponible en: <https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf>

<sup>52</sup> Ver artículos 117, 119 y 125 de la Constitución Política de Nicaragua (1948). Ver asimismo artículo 3, 7, 8, 9, 11, 15 y 16 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua. Ver la Ley General de Educación de Nicaragua (2006), en su artículo 3.

<sup>53</sup> Disponible en: <https://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>

<sup>54</sup> Disponible en: [http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley\\_universitaria.pdf](http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria.pdf)

<sup>55</sup> Disponible en: [http://www.ucv.ve/fileadmin/user\\_upload/comision\\_electoral/Normativa\\_legal/index.htm#:~:text=Ley%20de%20Universidades%20%2D%20Publicado%20el%208%20de%20septiembre%20de%201970&text=Art%C3%ADculo%201.,los%20valores%20trascendentales%20del%20hombre.](http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/comision_electoral/Normativa_legal/index.htm#:~:text=Ley%20de%20Universidades%20%2D%20Publicado%20el%208%20de%20septiembre%20de%201970&text=Art%C3%ADculo%201.,los%20valores%20trascendentales%20del%20hombre.)

1970 (preconstitucional), regula la autonomía universitaria y la inviolabilidad del recinto universitario de forma expresa, pero no así expresamente la libertad académica (artículos 6,7 y 9). La Ley Orgánica de Educación<sup>56</sup> en su artículo 36 dispone que “El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con las comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el sub-sistema de educación universitaria se realizarán bajo el principio de la libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República y en la ley”.

#### 2.4. Las graves violaciones de la libertad académica y la autonomía universitaria en Latinoamérica en contravención de los estándares interamericanos

Con relación a indicadores estructurales, existe una legislación regresiva con paralelismos en Venezuela,<sup>57</sup> Cuba,<sup>58</sup> México<sup>59</sup> y Nicaragua.<sup>60</sup> En Colombia,<sup>61</sup> lamentablemente, es notable la debilidad de las disposiciones normativas para garantizar gobiernos universitarios verdaderamente autónomos.

<sup>56</sup> Disponible en: <http://apps.ucab.edu.ve/nap/recursos/LeyOrganicadeEducacion.pdf>

<sup>57</sup> En referencia a Venezuela, se identifica preocupaciones específicas que promueven la imposición de una sola ideología de pensamiento y el desarrollo de un modelo de educación universitaria acorde al modelo socialista,

<sup>58</sup> Ver informes del Observatorio de la Libertad Académica en Cuba en: <https://www.olacademica.org/>

<sup>59</sup> En relación a México, se ha constatado la existencia de propuestas de leyes estatales que afectan la autonomía universitaria. En 2021 se modificó el Código de Conducta del Conacyt con lineamientos que vulneran la libertad académica.

<sup>60</sup> La situación en Nicaragua ha sido escandalosa porque la Asamblea Nacional aprobó la Reforma a la Ley N° 582 de Educación General y la Ley N° 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (marzo 2022): Faculta al Consejo Nacional de Universidades para “intervenir universidades”. Además, la Asamblea Nacional el 2 de febrero de 2022 canceló la personalidad jurídica de 5 universidades, junto con 12 organizaciones académicas, y decidió que sus activos pasarían a ser propiedad del Estado. Lamentablemente, el 3 de febrero se anunció la cancelación de la personalidad jurídica de 7 instituciones universitarias más. (Ver: <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1532538683567521810>)

<sup>61</sup> En Colombia, las normas que rigen la designación de las autoridades universitarias imponen que los Consejos Superiores Universitarios tengan mayoría de representantes vinculados al ejecutivo nacional (Por ejemplo, ver: Caso Universidad Nacional, Ley 30 de 1992, Decreto 1210 de 1993, Acuerdo 011 de 2005 Consejo Superior Universitario, Resolución 278 de 2011).

Además, se destacan otros indicadores como las intervenciones arbitrarias en las funciones de las universidades por parte de órganos del Poder Público,<sup>62</sup> la criminalización de la protesta contra universitarios, especialmente en Venezuela (2014 y 2017), Nicaragua<sup>63</sup> (2018-2022), Honduras (2018), Colombia (2019-2020), Cuba (2021); la asfixia presupuestaria contra las universidades de la región, el adoctrinamiento y las represalias contra diferentes académicos críticos.<sup>64</sup> En el contexto de la Covid-19<sup>65</sup> se dieron múltiples represalias contra la producción científica relacionada con la pandemia.

### 3. CONCLUSIONES

La aprobación de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria representa un paso gigantesco en el derecho interamericano que requiere para su implementación la superación de retos importantes como los enunciados anteriormente.

Los principios interamericanos representan un extraordinario punto de partida para emprender desde la sociedad civil (universidades, ONGs, movimientos universitarios y sociales, empresas), las organizaciones políticas, los Estados y la comunidad internacional, un trabajo articulado enmarcado en la producción de normas jurídicas, políticas públicas y en general buenas prácticas conforme

---

<sup>62</sup> Durante 2021 y 2022 en México se ha desarrollado una práctica de intervención contra el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), debido a las posiciones críticas de sus miembros frente a algunas políticas de Estado.

En Venezuela, Aula Abierta ha contabilizado más de 50 decisiones judiciales contra universidades a partir de 2010. Ver: <http://aulaabiervenezuela.org/wp-content/uploads/2021/12/Violaciones-a-la-libertad-acad%C3%A9mica-la-autonom%C3%ADa-universitaria-y-el-derecho-a-la-educaci%C3%B3n-superior-en-Venezuela-2016-%E2%80%932021.pdf>

<sup>63</sup> Represión, detenciones y asesinatos: Aula Abierta, estudiantes y organizaciones denuncian al Estado de #Nicaragua frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Hilo) (ver: <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1572701169784430592>)

<sup>64</sup> En Cuba, el Observatorio de la Libertad Académica (OLA) ha documentado 76 casos de estudiantes universitarios víctimas de represalias por ser críticos con la revolución (Ver informes OLA Cuba 2021/2022 en: <https://www.olacademica.org>). En Venezuela, el caso del profesor Santiago Guevara ha sido suficientemente documentado (Visita: <http://aulaabiervenezuela.org/index.php/2017/12/30/exclusiva-declaracion-del-abogado-del-profesor-santiago-guevara/>)

<sup>65</sup> Como referencias de esta práctica, se refería a la destitución en la UNAN-Managua del profesor Miguel Orozco y sus compañeros de dirección del CIES, así como las amenazas a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela durante mayo de 2020 por parte de Diosdado Cabello.



a cada uno de los estándares interamericanos de la libertad académica y autonomía universitaria contenidos en los 16 principios.

Es clave para alcanzar una “cultura de respeto a la libertad académica”: a) Impulsar la formación de las generaciones presentes y futuras sobre este derecho humano individual y colectivo consustancial a la democracia y al desarrollo; b) Empezar el monitoreo y documentación responsable de cualquier violación; c) Realizar acciones de incidencia estratégica; y d) Propender hacia la articulación en tejidos humanos sólidos conformados por los distintos actores universitarios (estudiantes, profesores, egresados, sociedad civil en general) actuando en el marco de una causa común en Las Américas.

## Bibliografía

- Aula Abierta. “Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Academia de la Lengua”. <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1532538683567521810> (Consultado el 11-8-2022)
- Aula Abierta. “Arremetida contra la libertad académica: Nicaragua ilegalizó 12 universidades en 24 horas”. <https://derechosuniversitarios.org/2022/02/04/arremetida-contra-la-libertad-academica-nicaragua-ilegalizo-12-universidades-en-24-horas/> (Consultado el 2-9-2022)
- Aula Abierta. “Diálogo interactivo sobre la situación de los DDHH en Nicaragua”. <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1569844528756015112>-<https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1569845488052064259?t=ek3U5HsivuoSd3-zOnVvpw&s=19> Este (Consultado el 15-9-2022)
- Aula Abierta. “Estudiantes de la UCA de Nicaragua asediados por la policía y paramilitares en protestas pacíficas”. <https://derechosuniversitarios.org/2021/06/23/estudiantes-de-la-uca-de-nicaragua-asediados-por-la-policia-y-paramilitares-en-protestas-pacificas/> (Consultado el 1-9-2022)
- Aula Abierta. “Estudiantes y organizaciones denuncian al Estado de Nicaragua frente al Consejo de DDHH de la ONU”. <https://derechosuniversitarios.org/2022/09/21/represion-detenciones-y-asesinatos-aula-abierta-estudiantes-y-organizaciones-denuncian-al-estado-de-nicaragua-frente-al-consejo-de-ddhh-de-la-onu/> (Consultado el 2-9-2022)
- Aula Abierta. “Informe Preliminar: Violaciones a la libertad académica, reunión pacífica y otros derechos de los universitarios nicaraguenses en el contexto preelectoral”. [https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/10/NICARAGUA.-VOL-1.-INFORME-PRELIMINAR\\_-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-ACAD%C3%89MICA-REUNI%C3%93N-PAC%C3%8DFICA-Y-OTROS-DERECOS-DE-LOS-UNIVERSITARIOS-NICARAG%C3%9CENSES-EN-EL-CONTEXTO-PREELECTORAL.docx.pdf](https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/10/NICARAGUA.-VOL-1.-INFORME-PRELIMINAR_-VIOLACIONES-A-LA-LIBERTAD-ACAD%C3%89MICA-REUNI%C3%93N-PAC%C3%8DFICA-Y-OTROS-DERECOS-DE-LOS-UNIVERSITARIOS-NICARAG%C3%9CENSES-EN-EL-CONTEXTO-PREELECTORAL.docx.pdf) (Consultado el 1-9-2022)
- Aula Abierta. “Informe preliminar: Decisiones del Poder Judicial que afectan el gobierno universitario autónomo en Venezuela (agosto-diciembre 2029)”. <https://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-PRELIMINAR-DECISIONES-DEL-PODER->

JUDICIAL-QUE-AFECTAN-EL-GOBIERNO-UNIVERSITARIO-AUTON%3%93MO-EN-VENEZUELA.pdf (Consultado el 11-8-2022)

Aula Abierta. “Los 31 académicos del FCCyT informaron a la CIDH que actuaron con base en la normativa vigente”. <https://derechosuniversitarios.org/2022/06/06/la-cidh-considera-que-los-31-academicos-del-fccyt-actuaron-con-base-en-la-normativa-vigente/> <https://twitter.com/AulaAbiertaLA/status/1485660342193725445> (Consultado el 15-9-2022)

Aula Abierta. “Los universitarios como grupo en situación de vulnerabilidad en contextos de restricción del espacio cívico (febrero 2017-febrero 2022)”. <https://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2022/06/Universitarios-en-vulnerabilidad-en-contextos-de-restriccion-del-espacio-civico.pdf> (Consultado el 1-9-2022)

Aula Abierta. “México: Rechazan reforma parcial del Estatuto General del CIDE por ser ilegal”. <https://derechosuniversitarios.org/2022/02/28/mexico-rechazan-reforma-parcial-del-estatuto-general-del-cide-por-ser-ilegal/> (Consultado el 15-9-2022)

Aula Abierta. “Nicaragua: Persecuciones, detenciones y represalias contra universitarios en el contexto pre electoral”. <https://derechosuniversitarios.org/2021/09/26/nicaragua-persecuciones-detenciones-y-represalias-contra-universitarios-en-el-contexto-pre-electoral/> (Consultado el 1-9-2022)

Aula Abierta. “REDESCA manifestó preocupación por las violaciones a la libertad académica en Nicaragua”. <https://derechosuniversitarios.org/2022/06/08/redesca-manifesto-preocupacion-por-las-violaciones-a-la-libertad-academica-en-nicaragua/> (Consultado el 1-9-2022)

Aula Abierta. “Resumen Ejecutivo: Asedio al recinto de la universidad centroamericana (UCA) en Nicaragua”. [https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/06/RESUMEN-EJECUTIVO\\_ASEPIO-AL-RECINTO-DE-LA-UNIVERSIDAD-CENTROAMERICANA-EN-NICARAGUA-EL-26-DE-ABRIL-DEL-2021.docx.pdf](https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/06/RESUMEN-EJECUTIVO_ASEPIO-AL-RECINTO-DE-LA-UNIVERSIDAD-CENTROAMERICANA-EN-NICARAGUA-EL-26-DE-ABRIL-DEL-2021.docx.pdf) (Consultado el 1-9-2022)

Aula Abierta. “Resumen Ejecutivo: Persecución y censura contra investigadores y académicos en México (agosto-octubre 2021)”. <https://derechosuniversitarios.org/wp-content/uploads/2021/11/R.E.-PERSECUCI%3%93N-CONTRA-INVESTIGADORES-Y-ACAD%3%89MICOS-EN-M%3%89XICO.docx.pdf> (Consultado el 15-9-2022)

Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de Colombia”. 1991. <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf> (Consultado el 11-9-2022)

Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de Costa Rica”. <https://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/constitucion.pdf> (Consultado el 11-9-2022)

Asamblea Constituyente. “Constitución Política de la República de Chile”. 1980. [https://www.camara.cl/camara/doc/leyes\\_normas/constitucion\\_politica.pdf](https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf) (Consultado el 15-9-2022)

Asamblea Nacional. “Constitución Política de la República de Nicaragua”. <https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf> (Consultado el 11-9-2022)

Asamblea Constituyente de Ecuador. “Constitución Política de la República del Ecuador”. 1998. <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf> (Consultado el 15-9-2022)

Asamblea Nacional del Ecuador. “Ley orgánica de Educación Superior”. 2018. [https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2\\_Reformas/loes.pdf](https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2_Reformas/loes.pdf) (Consultado el 15-9-2022)

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. “Ley Orgánica de Educación”. 2009. <http://apps.ucab.edu.ve/nap/recursos/LeyOrganicadeEducacion.pdf> (Consultado el 11-8-2022)

- Cámara de Diputados. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf\\_mov/Constitucion\\_Politica.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf) (Consultado el 11-9-2022)
- Congreso Constituyente. “Constitución Política del Perú” <https://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf> (Consultado el 11-9-2022)
- Congreso Nacional chileno. “Ley Núm. 21.091”. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991> (Consultado el 15-9-2022)
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria”. 2021. [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf) (Consultado el 1-8-2022)
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. “Observación General Nro. 13”. <https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-13-de-recho-educacion-articulo-13#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20de%20respetar%20exige,educaci%C3%B3n%20sea%20obstaculizado%20por%20terceros> (Consultado el 20-8-2022)
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. 2020. [https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Conclusiones-FFM-Venezuela-2020-A\\_HRC\\_45\\_CRP.11\\_SP-2.pdf](https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Conclusiones-FFM-Venezuela-2020-A_HRC_45_CRP.11_SP-2.pdf) (Consultado el 1-9-2022)
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. 2021. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69\\_ES.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69_ES.pdf) (Consultado el 1-9-2022)
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. 2022. <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022> [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A\\_HRC\\_51\\_43\\_Unofficial\\_Spanish\\_Version.docx](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/2022-09-20/A_HRC_51_43_Unofficial_Spanish_Version.docx) (Consultado el 1-10-2022)
- El Pitazo. “Misión de la ONU: universitarios, blanco de ataque del Gobierno venezolano”. <https://elpitazo.net/opinion/mision-de-la-onu-universitarios-blanco-de-ataque-del-gobierno/> (Consultado el 1-9-2022)
- Espacio Público. “Situación general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela (enero-diciembre 2017)”. <https://espaciopublico.org/wp-content/uploads/2015/05/Situacion%CC%81n-del-derecho-a-la-libertad-de-expresio%CC%81n-e-informacio%CC%81n-en-Venezuela-2017-Espacio-Pu%CC%81blico.pdf> (Consultado el 1-9-2022)
- Juris Cuba. “Ley No. 1307”. <http://juriscuba.com/ley-no-1307/> (Consultado el 11-9-2022)
- Keough School of Global Affairs. “The Inter-American Human Rights System: Launch of Principles on Academic Freedom”. <https://www.youtube.com/watch?v=06s3ri4affA> (Consultado el 1-9-2022)
- Latin American Council of Social Sciences. “Constitución de la República de Cuba”. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf> (Consultado el 11-9-2022)
- Organización de Estados Americanos. “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. 1948. <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp> (Consultado el 28-8-2022)

- Organización de Estados Americanos. “Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 1969. [https://www.oas.org/dil/esp/1969\\_Convenci%C3%B3n\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.pdf](https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf) (Consultado el 25-8-2022)
- Organización de Estados Americanos. “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 1988. <https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf> (Consultado el 25-8-2022)
- Observatorio de Libertad Académica. “Informes de trabajo”.  
Ver: <https://www.olacademica.org/informes> (Consultado el 15-9-2022)
- Observatorio de Libertad Académica. “Retórica ideológica en función del sometimiento de la cultura por medio de un sistema rígido de educación (agosto 2022)”. [https://www.olacademica.org/\\_files/ugd/07be42\\_ceed4e9de14d403c8e201a36527213c5.pdf](https://www.olacademica.org/_files/ugd/07be42_ceed4e9de14d403c8e201a36527213c5.pdf) (Consultado el 15-9-2022)
- Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 1948. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Consultado el 20-8-2022)
- Organización de las Naciones Unidas. “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 1966 <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights> (Consultado el 20-8-2022)
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior”. 1997. <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel> (Consultado el 20-8-2022)
- Palacio Federal Legislativo. “Ley de Universidades”. 1970. [http://www.ucv.ve/fileadmin/user\\_upload/comision\\_electoral/Normativa\\_legal/index.htm#:~:text=Ley%20de%20Universidades%20%2D%20Publicado%20el%208%20de%20septiembre%20de%201970&text=Art%C3%ADculo%201.,los%20valores%20trascendentales%20del%20hom](http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/comision_electoral/Normativa_legal/index.htm#:~:text=Ley%20de%20Universidades%20%2D%20Publicado%20el%208%20de%20septiembre%20de%201970&text=Art%C3%ADculo%201.,los%20valores%20trascendentales%20del%20hom)bre (Consultado el 11-8-2022)
- Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. “Ley de Educación Superior”. 1995. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm> (Consultado el 15-9-2022)

*SEGUNDA PARTE*  
**ESTUDIOS DE CASOS SOBRE ATAQUES  
A LA LIBERTAD ACADÉMICA EN  
PAÍSES DE LAS AMÉRICAS**



# LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: ¿JAQUE MATE A LA LIBERTAD ACADÉMICA?

## *Gender policies at the University of Buenos Aires: A checkmate to academic freedom?*

LILIANA M. RONCONI<sup>1</sup>

*“Las universidades servirán probablemente mejor a la sociedad si no adoptan los valores cuantificados del mercado y en cambio preservan un espacio donde los valores no cuantificables de la integridad y la excelencia intelectual y donde los sólidos valores de la no represión y la no discriminación puedan florecer”*  
Amy Gutmann (2001: 227)

### **Resumen**

En este trabajo se analizan las implicancias que las políticas de género podrían tener en la libertad académica. En otras palabras, se pretende determinar el impacto que tiene en la libertad académica asumir un compromiso robusto en materia de género en las universidades. Para esto se abordarán en especial dos problemáticas que actualmente se encuentran en debate en la Universidad de Buenos Aires: por un lado, las capacitaciones obligatorias en temas de género y violencia contra las mujeres destinadas a estudiantes, al personal directivo, docente y no docente de la universidad en el marco de la Ley Micaela (Ley Nro. 27499). Por otro lado, se buscará indagar sobre la compatibilidad de la libertad académica y los concursos docentes, en especial cuando estos se vinculan a vacantes reservadas, por ejemplo, sólo para mujeres. Mediante este análisis se pretende mostrar que un compromiso robusto con la igualdad de género requiere redefinir los alcances e implicancias de la libertad académica.

**Palabras clave:** Libertad académica, género, igualdad, acciones positivas, Argentina

### **Summary**

This paper analyzes the implications that gender policies could have on academic freedom. It aims to determine the impact on academic freedom of a robust commitment to gender in universities. For this purpose, two issues that are currently under debate at the University of Buenos Aires will be addressed: on the one hand, the mandatory training on gender issues and violence against women for students, management, teaching, and non-teaching staff of the university within the framework

of the Micaela Law (Law No. 27499). On the other hand, we will seek to investigate the compatibility of academic freedom and teaching competitions, especially when these are linked to vacancies reserved, for example, only for women. The purpose of this analysis is to show that a strong commitment to gender equality requires redefining the scope and implications of academic freedom.

**Keywords:** Academic freedom, gender, equality, affirmative actions, Argentina.

### **Afiliación de la autora**

Nombre: Liliana M. Ronconi

Institución: Académica de la Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás, Chile.

Biografía: Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Abogada y Profesora en Ciencias Jurídicas, también por la UBA. Se desempeñó como Profesora Adjunta interina de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo fue investigadora Asistente del CONICET. Fue directora de proyectos de investigación DECYT en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro *Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento*, Universidad del Externado de Colombia, 2018.

Correo electrónico: lronconi@santotomas.cl

Agradecimientos: Agradezco a Andrea Schuster y a los/as evaluadores/as del trabajo por los valiosos comentarios. Asimismo a los/as participantes de la Primera Conferencia sobre Libertad Académica en las Américas llevada a cabo en Noviembre de 2022 en Monterrey, México por el importante espacio de intercambio realizado.

## **1. INTRODUCCIÓN**

Si bien ya en el año 1958 Isaiah Berlin hablaba de “Dos conceptos de libertad”,<sup>2</sup> las libertades en el Constitucionalismo latinoamericano han sido entendidas, en general, como “cartas de triunfo” frente a posibles intromisiones o limitaciones por parte del Estado. Un claro ejemplo sobre este punto lo constituyen los debates vinculados a posibles límites a la libertad de expresión, la cual en muchos casos es entendida como un “super derecho” respecto del cual no pueden existir limitaciones posibles.<sup>3</sup> Un camino similar ha seguido, aun con mucho menos debate, la libertad académica, entendida como un freno al poder del Estado o de terceros.

---

<sup>2</sup> Isaiah Berlin, “Dos conceptos de libertad” en *Cuatro ensayos sobre la libertad*, Julio Bayón trad., (Alianza ed., 1988), 187-243. Se refería al concepto de “libertad negativa” y al de “libertad positiva” implicando el primero un “no hacer del Estado”, una obligación de no interferencia y el segundo, la “obligación de intervenir” para garantizar ciertas condiciones básicas para el ejercicio de derechos.

<sup>3</sup> Sobre el debate v. Owen Fiss, *The irony of free speech* (Harvard University Press ed, 1996).



En esta línea, en el presente trabajo buscará indagar sobre las implicancias que las políticas de género implementadas en instituciones académicas y/o universidades podrían tener en la libertad académica. En otras palabras, se pretende determinar el impacto que tiene en la libertad académica asumir un compromiso robusto en materia de género en las universidades. Para esto se abordarán dos problemáticas que principalmente desde el año 2018<sup>4</sup> se encuentran en debate en la Universidad de Buenos Aires (en adelante, UBA), una de las principales universidades públicas nacionales de la República Argentina,<sup>5</sup> y se buscará indagar cómo estos planteos pueden trasladarse al ámbito de las universidades privadas. En este sentido, las políticas de género han sido resistidas alegando que implican un ataque a la libertad académica (entendido como un derecho casi absoluto), en tanto exigen, por ejemplo, capacitaciones obligatorias en género, la inclusión de “temas de género” en la curricula, acciones positivas que implican plazas reservadas para mujeres, entre otras. Sin embargo, en este trabajo se buscará sustentar la tesis que indica que un compromiso robusto con la igualdad de género requiere reinterpretar los alcances e implicancias de la libertad académica.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se realizarán unas breves consideraciones sobre el sistema universitario argentino y la

<sup>4</sup> Para el tema que aquí presento entiendo que el año 2018 se constituyó en un punto de quiebre por el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina que implicó una fuerte movilización legal (Bergallo, P. “Será ley?: Abogacía de causa y cambio legal”, Mimeo), social desde distintos sectores, incluyendo una importante participación de estudiantes universitarias y mujeres jóvenes (Mónica Tarducci, “Escenas claves de la lucha por el derecho al aborto en Argentina”, Salud colectiva, Vol. 14 no.3, 2018; Marina Acosta, “Activismo feminista en *instagram*. El caso de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en Argentina”, Perspect. común. vol.13 no 1, 2020; Magdalena López y Jorgelina Loza, “Articulaciones, representaciones y estrategias de la movilización contra la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina (2018-2020)”, Población & Sociedad 2021, Vol. 28 (1): 131-161, 2021, entre otras). A este evento le precedieron otros relevantes en el ámbito universitario, como el Movimiento Ni Una Menos, que fue contemporáneo con el aumento de la visibilización de situaciones de violencia desde el MeToo y el YoTeCreoHermana (Jaramillo, I./ Buchely, L. *Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana*, Cali, Universidad ICESI ed, 2020).

<sup>5</sup> La UBA se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una universidad pública y gratuita, autónoma y autogobernada. Cuenta con una gran diversidad de carreras, que se encuentran divididas en 13 Facultades. Tan solo la Facultad de Derecho cuenta con cerca de 26.000 estudiantes activos (conf. Datos correspondientes al año 2018. No se encontró información pública de años más recientes. Ver <http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/informe-de-gestion-2018.pdf>; última revisión 22/09/2022). A su vez, sólo la Facultad de Derecho cuenta con más de 3500 profesores y auxiliares docentes regulares. Beatriz Kohén, Sonia Ariza Navarrete y María de los Ángeles Ramallo “Las mujeres docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires” en *Academia Revista de Enseñanza del Derecho*, Nro. 33 (2019) 103.

libertad académica. Luego, se hará referencia a los compromisos asumidos por el Estado Argentino de “eliminar las discriminaciones de género”.<sup>6</sup> Con esta base, se analizarán dos cuestiones tratando de dejar planteada la problemática también en el ámbito universitario de gestión privada. La primera cuestión por abordar se relaciona con las capacitaciones obligatorias en temas de género y violencia contra las mujeres destinadas a estudiantes, al personal directivo, docente y no docente de la universidad en el marco de la Ley Micaela (Ley Nro. 27499 de 2019).

En este sentido, han existido planteos administrativos y judiciales cuestionando dicha obligatoriedad desde el argumento de la libertad académica. Por otro lado, se buscará indagar sobre la compatibilidad de la libertad académica y los concursos docentes, en especial cuando estos se vinculan a vacantes reservadas, por ejemplo, sólo para mujeres. Por último, se establecerán algunas conclusiones sosteniendo que estas medidas no implican un ataque a la libertad académica, sino que se trata de acciones que responden a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en términos de garantizar igualdad para mujeres y diversidades.

## 2. BREVE CONSIDERACIONES SOBRE LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO ARGENTINO

En Argentina, la libertad académica surge como un fuerte reclamo estudiantil en el Movimiento Reformista (1918) que dio lugar a la reforma universitaria,<sup>7</sup> imponiendo básicamente los principios de autonomía, co-gobierno y libertad académica en las universidades del país y que luego se extendió a la región.

Siguiendo lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la libertad académica garantiza que:

---

<sup>6</sup> Entre otros, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación General N°19: la violencia de género contra la mujer*, A/46/38, 1992 y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación general N°35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general N°19*, CEDAW/C/GC/35, 2017.

<sup>7</sup> La Reforma Universitaria de 1918 fue una protesta estudiantil que buscaba democratizar la universidad y garantizar mayor carácter científico. Se llevó a cabo en la Ciudad de Córdoba (Argentina) entre marzo y octubre de 1918, y durante la cual se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos.

“(…) los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio”.<sup>8</sup>

Con este informe, el Comité procura garantizar que “el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia”.<sup>9</sup> Al igual que la libertad de expresión es posible sostener que la libertad académica tiene una doble cara: individual del profesor/ profesora y otra institucional, que implica la autonomía de cada establecimiento universitario de determinar sus bases académicas. Además, tiene un aspecto social, que básicamente implica que se garanticen una variedad de opiniones, circulación de diversos conocimientos en la sociedad. Así, se garantiza la libertad académica y la autonomía universitaria como forma de garantizar la deliberación democrática; como un ejercicio de práctica democrática.<sup>10</sup>

Debe tenerse presente que en la estructura y objetivos democratizadores que los reformistas promovieron en el sistema universitario argentino, no estuvo presente la igualdad de género, e incluso históricamente se ha negado el rol que las mujeres desarrollaron en el movimiento.<sup>11</sup> Hoy en día es posible sostener que los pilares reformistas se han mantenido en las universidades, sin embargo, en términos de género no se “ha logrado trascender los límites de maneras creativas y osadas para ampliar la participación y democratizar la construcción y el fundamento de la autoridad”.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “El Derecho a la Educación (Artículo 13 del Pacto)”, Observación general N° 13, E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, párrafo 39.

<sup>9</sup> Unesco, *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior* (1997)

<sup>10</sup> Roberto Gargarella “La concepción constitucional de la libertad de expresión”, en *Revista Argentina de Teoría Jurídica*, 14 (1) (2013) 82-101.

<sup>11</sup> Al respecto, ver Laura Pautassi y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria* (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020).

<sup>12</sup> Graciela Morgade “La Universidad en clave de género y las deudas de la Reforma Universitaria” en Laura Pautassi y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria*

Si bien las mujeres han ingresado al sistema universitario en forma masiva como asimismo existen en las diversas universidades estudios de género (cursos de grado, posgrado, extensión universitaria), la construcción del poder en las universidades sigue siendo patriarcal dejando de lado a mujeres y diversidades en diversos aspectos (enseñanza, docencia, investigación, cargos de dirección, entre otros).<sup>13</sup> En este sentido, por ejemplo, en el año 2021 existían en Argentina 133 instituciones universitarias, cerca de la mitad de gestión pública y la otra mitad de gestión privada, siendo estas últimas mucho más pequeñas en su tamaño, con algo más de 200 mil docentes en su totalidad. Lamentablemente no se encuentra la información discriminada por sexo o género en el escalafón docente. Sin embargo, es posible identificar la situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres cuando analizamos los cargos de autoridades superiores, representando estas el 43%; ello sin considerar la segregación vertical, ya que las mujeres están ubicadas en mayor proporción en los cargos de menor jerarquía (por ejemplo, secretarías de las universidades).<sup>14</sup> De 70 universidades e institutos universitarios nacionales del país, tan sólo 13 tienen a una rectora mujer.<sup>15</sup>

La pregunta que sigue entonces es si esta construcción patriarcal del conocimiento que existe en las universidades debe ser desarticulada por parte del Estado. En lo que sigue analizaré este punto.

---

(Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020) 24.

<sup>13</sup> En especial sobre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, v. Kohen, B., Ramallo, A., Ariza Navarrete, S., op. cit.; Liliana Ronconi y María de los Ángeles Ramallo (coords.) *La enseñanza del derecho con perspectiva de género. Herramientas para su profundización*, Buenos Aires: Secretaría de Investigación-Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020; María Verónica Piccone [et al.] *Innovación en las prácticas de la enseñanza y la investigación en Ciencias Jurídicas. Desafíos para transversalizar la perspectiva de género(s) y consolidar el derecho antidiscriminatorio*, Córdoba: Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, 2022.

<sup>14</sup> Conf. [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis\\_2020-2021\\_sistema\\_universitario\\_argentino.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2020-2021_sistema_universitario_argentino.pdf)

<sup>15</sup> Conforme <https://www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/>

### 3. LA OBLIGACIÓN DE ELIMINAR LAS DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN EL MARCO CONSTITUCIONAL/ CONVENCIONAL ARGENTINO<sup>16</sup>

El ideal igualitario de la Constitución Nacional argentina se vio fuertemente influido con la reforma constitucional del año 1994 y, en especial, con la jerarquía otorgada a ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22).<sup>17</sup> Este ideal igualitario busca avanzar del concepto de igualdad como no discriminación hacia un concepto robusto de igualdad: la igualdad como no sometimiento,<sup>18</sup> imponiendo obligaciones generales a los Estados. Entre ellas aparecen obligaciones de hacer, que implican que los Estados deben realizar acciones para garantizar la igualdad real en especial respecto de ciertos grupos que son identificados como grupos desaventajados (art. 75 inc. 23). Entre esas acciones se encuentran la de garantizar la efectiva participación de grupos históricamente excluidos en los espacios de toma de decisiones, por ejemplo, mediante el establecimiento de acciones positivas.

Esta más novedosa concepción de igualdad implica mirar las estructuras sociales y las posiciones que los distintos grupos asumen allí, y exige al Estado garantizar a los grupos históricamente marginados el pleno goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Para esto, el Estado y sus agentes deben regular, actuar, intervenir. Existen entonces respecto de estos grupos obligaciones de hacer a fin de erradicar las situaciones de desigualdad. En especial, se hará referencia aquí a la situación de las mujeres.

El Estado argentino se ha comprometido a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Pese a que las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral, solo un número muy reducido de ellas consigue llegar a los puestos jerárquicos tanto en el ámbito público como en el privado.<sup>19</sup> Esto

<sup>16</sup> Parte de los argumentos aquí presentados fueron publicados en Liliana Ronconi y Andrea Schuster “El derecho a la libertad de expresión de las mujeres en espacios universitarios. El caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires” en *Revista de Derecho* Vol. XXXIV (2), (Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2021), 159-180.

<sup>17</sup> Conformando el *bloque de constitucionalidad federal*. V. Bidart Campos, German *El derecho de la constitución y su fuerza normativa* (Buenos Aires, Editorial Ediar, 1995)

<sup>18</sup> Ver Laura Clérico y Martín Aldao “Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”, en *Revista Estudios Constitucionales*, 9 (1) (Talca, 2011) 141-179 y Liliana Ronconi *Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento*. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018).

<sup>19</sup> Esto se puede verificar en el ámbito del Poder Judicial, como asimismo en el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero también en las empresas privadas.

también se da en el marco educativo, en especial en el ámbito universitario. Esta desigualdad puede ser el fundamento de las violencias que a diario afecta a mujeres y diversidades. En este sentido, diversos estudios muestran que la violencia en las instituciones educativas afecta en forma desproporcionada a mujeres y diversidades.<sup>20</sup>

Ahora bien, en muchos casos, y en especial en los espacios universitarios, la desigualdad se presenta como situaciones “micro”. Esto es, no se trata de exclusiones burdas que pudieran causar reacciones concretas, sino que, por el contrario, se trata de exclusiones pequeñas, ínfimas, pero constantes, permanentes. En este punto, es necesario analizar la situación en su contexto. No alcanza con mirar una situación en particular, sino de mirar distintas acciones similares que contribuyen a identificar patrones de exclusión. Entiéndase por *micro desigualdades* aquellas situaciones de exclusión que en forma aislada se tornan casi irrelevantes o no posible de ser catalogadas como situaciones de “exclusión” clásica.

Esto es muy claro por ejemplo en lo que se refiere al plantel docente o de profesores/as de la universidad. Tomando el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es posible sostener que existen mujeres con cargos de profesoras, esto es no existe una discriminación en términos macro. Sin embargo, existe una discriminación horizontal y vertical, que requiere ser vista en forma más específica.<sup>21</sup> Por ejemplo, no hay mujeres profesoras o hay muy pocas en ciertas áreas del derecho (filosofía, derecho penal, entre otras) como asimismo no las hay cuando subimos en el escalafón docente.<sup>22</sup> Las micro y macro desigualdades se refieren al grado de acercamiento que tenemos con el fenómeno de la desigualdad. Si vemos la fotografía completa es posible sostener que hay mujeres en la universidad. Sin embargo, cuando empezamos a hacer “zoom” la aparente igualdad empieza a resquebrajarse.

---

<sup>20</sup> Carolina Garcés Estrada, Antonia Santos Pérez, y Loreto Castillo Collado “Universidad y Violencia de Género: Experiencia en Estudiantes Universitarios de Trabajo Social en la Región de Tarapacá” en *Revista Latinoamericana de educación inclusiva*, vol.14, n.2, (2020) 59-77.

<sup>21</sup> Lamentablemente el último Censo de la UBA es del año 2004. Ver: [https://www.uba.ar/institucional/censos/Docente2004/censo\\_docente.pdf](https://www.uba.ar/institucional/censos/Docente2004/censo_docente.pdf). Allí se muestra que las mujeres representan cerca del 37% del cuerpo docente, dando cuenta de una menor participación de mujeres en la categoría de “Profesor”. Además de la segregación vertical, es importante dar cuenta también de la segregación horizontal. Ver Beatriz Kohen, Sonia Ariza Navarrete y María de los Ángeles Ramallo “Las mujeres docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires” en *Academia Revista de Enseñanza del Derecho*, Nro. 33 (2019), 99-130.

<sup>22</sup> Idem.

Además, es necesario tener en cuenta que los procesos de desigualdad en el nivel micro funcionan junto con aquellos en el nivel macro para crear patrones de desigualdad mutuamente sostenibles en la sociedad que hacen que tales patrones sean tan difíciles de cambiar.<sup>23</sup> El estatus subordinado de las mujeres a nivel macro da forma a las relaciones cotidianas en el nivel micro y esto genera la forma en que se distribuye el poder en las instituciones sociales.

Sin embargo, estas situaciones son también estructurales pues son padecidas en general por casi todas las mujeres en los distintos roles que ocupan. De esta manera, existen condiciones estructurales que excluye a las mujeres (y otros grupos) de la participación efectiva en el debate público y académico.<sup>24</sup>

Por eso, se debe cambiar el enfoque. Es necesario mirar, comprender y reaccionar ante la “atmósfera de exclusión”, presente en diversos espacios, pero en forma invisible.<sup>25</sup> Esta atmósfera de exclusión implica que las voces de las mujeres no sean escuchadas en el ámbito académico, que la perspectiva de género sea considerada algo específico de la que hablan solo mujeres y diversidades pero que no forma parte del núcleo central del debate de las ciencias. De nuevo, se trata de micro desigualdades que actúan en forma estructural. Por esto, resultará difícil encontrar un único sujeto (mujer) afectado, sino que estos actos tienen un impacto indirecto sobre ese grupo.<sup>26</sup>

Asimismo, a veces tampoco se puede identificar siquiera un sujeto determinado que materialice la opresión, sino que se realiza “por contexto”: estas desigualdades resultan incluso de personas bien intencionadas y comprometidas con contrarrestar la desigualdad de género. De esta forma, es necesario identificar la insuficiencia de entender a las violaciones de derechos como cuestiones

---

<sup>23</sup> Cecilia Ridgeway “Why Status Matters for Inequality” en *American Sociological Review*, 79(1) (2014) 1-16.

<sup>24</sup> Además, es importante señalar que la falta de mujeres en estos espacios de participación también impacta en los temas de la agenda pública. Por ejemplo, difícilmente pueda pensarse en la instalación del debate sobre interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera habido iniciativa de mujeres. Sobre la importancia de la expresión de las mujeres en el debate sobre aborto ver: Paola Bergallo “Será ley!: Abogacía de causa y cambio legal” (mimeo).

<sup>25</sup> Liliana Ronconi “La violencia de género en las universidades. Análisis de las respuestas institucionales en la Facultad de Derecho de la UBA ¿Hacia un cambio de mirada?”, en Isabel Jaramillo/ Lina Buchely *Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana*, (Cali, Universidad ICESI ed., 2020)

<sup>26</sup> Liliana Ronconi, *Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento*. (Bogotá: Universidad Externa de Colombia, 2018).

individuales, sino que es necesario pensarlas y reconfigurarlas en el contexto en el que se dan. En este caso, en un contexto de desigualdades estructurales (micro y macro).

Ante esta situación, algunas universidades han intentado avanzar para garantizar mejores condiciones a las mujeres y diversidades dentro de los espacios universitarios. En particular, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires sancionó en el 2015 el “Protocolo de Acción Institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o de discriminación de género u orientación sexual” en el ámbito de la UBA,<sup>27</sup> quedando su aplicación en el ámbito de cada unidad académica. Además, en el año 2019, declaró obligatorias las capacitaciones en género y violencia contra las mujeres en virtud de la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”.<sup>28</sup> Ese mismo año, la UBA estableció la obligatoriedad de la paridad de género en la conformación de las listas de candidatas y candidatos a representantes por los claustros de profesores/as, graduados/as y estudiantes en los Consejos Directivos de cada unidad académica.<sup>29</sup>

### 3.1. El caso de las capacitaciones obligatorias en género

Como sostuvimos, la UBA adhirió a la Ley Micaela, siendo obligatorio en cada unidad académica capacitar en género y violencia de género. Más allá de las demoras en la efectiva implementación de las capacitaciones y de las críticas que a las mismas se han realizado, éstas han ido avanzando bajo distintas modalidades. En general, las capacitaciones se han planteado como una serie de encuentros obligatorios donde se trabajan temas específicos como conceptualización de violencia, diversidad e identidad de género, entre otros. El objetivo de estas capacitaciones es de prevención en el marco de las obligaciones que tienen los Estados.

---

<sup>27</sup> Resolución (CS) 4043/2015, disponible en [https://www.uba.ar/archivos\\_uba/2015-12-09\\_4043.pdf](https://www.uba.ar/archivos_uba/2015-12-09_4043.pdf) (última revisión 22/09/2022).

<sup>28</sup> La ley dispone la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en los 3 poderes del Estado Nacional Disponible en <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto> (última revisión 22/09/2022). Esta ley fue adherida por más del 80% de las universidades nacionales (RUGE, 2018) <https://ruge.cin.edu.ar/attachments/article/54/Cuadernillo%20Ley%20Micaela%20con%20parrafo%20Spotlight.pdf>

<sup>29</sup> Resolución (CS) 2099/2019, disponible en <https://www.uba.ar/noticiasuba/PARIDAD-RESCS-2019-2099-UBA-REC.pdf> (última revisión 22/09/2022).



Sin embargo, la obligatoriedad de estas capacitaciones ha sido cuestionada por profesores y docentes. En este sentido, se alega que estas capacitaciones contienen un contenido ideológico que es contrario a la libertad académica (específicamente, a la libertad de cátedra), en tanto implica obligar a una persona a formarse en temas de género. Si la libertad académica es entendida en términos absolutos (donde no puede haber intromisión estatal o de terceros) claramente aquí se está frente planteo plausible. Sin embargo, la libertad de cátedra no garantiza que cada uno diga lo que quiera, sino que existen ciertos contenidos que pueden ser obligatorios a fin de garantizar mejores condiciones a ciertos grupos.

En este sentido, lo que se busca con estas capacitaciones es dar a conocer conceptos básicos relativos a la violencia de género, a los espacios de denuncias, entre otros. No se trata de ideología sino de contenidos mínimos para garantizar una vida libre de violencias hacia ciertos grupos (mujeres, diversidades). Buscan tener un efecto preventivo que no debe soslayarse, en tanto pretenden erradicar las situaciones de abuso, violencia y discriminación. En este sentido, es importante destacar que la educación (a través de distintos formatos, capacitaciones, cursos, talleres) es cada vez más incorporada como una herramienta de prevención de violaciones de derechos.<sup>30</sup>

Otro debate es necesario. Si afirmamos la necesidad de la educación en género y violencia de género a la comunidad académica de universidades públicas, ¿Es posible exigir las capacitaciones<sup>31</sup> establecidas en la Ley Micaela en instituciones educativas privadas que tienen un “ideario manifiesto?”<sup>32</sup> Es necesario sostener que el rol de la educación, más allá del ideario de cada institución, es central. Aquí se puede hacer un paralelismo con la educación básica. Lo que se busca garantizar con el derecho a la educación, tanto desde el derecho internacional de los derechos humanos como, asimismo, desde diversas teorías sobre educación, es que todos los niños y niñas aprendan a convivir en democracia, garantizar

<sup>30</sup> Arlette Reyes Benz, *Human Rights Education as a guarantee of non-recurrence in the case law of the Inter-American Court of Human Rights*. Master's Thesis, (Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theology at Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg, 2020)

<sup>31</sup> Santiago Alfonso “Libertad de expresión, libertad de cátedra y derecho al ideario institucional” en *Forum*, No 10 (2020) 139-158.

<sup>32</sup> Este es el argumento que han dado muchas instituciones educativas para negar por ejemplo la Educación Sexual Integral. Al respecto, v. Jéssica Báez y Catalina González del Cerro “Políticas de Educación Sexual: tendencias y desafíos en el contexto latinoamericano” en *Revista del IICE/38* (2015) 7-24.

el respecto a los derechos humanos y al pluralismo ideológico y la diversidad y principalmente la autonomía personal.

De esta manera, el ideario institucional no puede nunca en ningún caso ir en contra de ese objetivo. Tampoco el ideario institucional puede ir en contra de las obligaciones asumidas por los Estados. El ideario de una institución universitaria privada no puede nunca negar o desconocer ciertos derechos, por ejemplo, los derechos a la igualdad y la prohibición de cualquier forma de discriminación. Así, se debe entender que las capacitaciones en temas de género podrían ser obligatorias para las universidades, tanto públicas como privadas.<sup>33</sup>

### 3.2. Concursos de plaza académica exclusivos para mujeres

La situación de las mujeres dentro de la universidad es una cuestión a la que debemos darle especial importancia si se busca cumplir con el compromiso igualitario robusto asumido. La información disponible sobre los distintos cargos que ocupan las mujeres en las universidades da cuenta de que no se trata de situaciones concretas de discriminación sino de una discriminación estructural.

Ante este panorama, y en forma muy reciente la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aprobó un llamado a concurso para la designación de “1 Profesora Adjunta de dedicación exclusiva en el área de Matemáticas” teniendo en consideración que menos del 24% del claustro docente del departamento de Matemáticas son mujeres.<sup>34</sup> El concurso debe aún ser aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Sin embargo, ante esta convocatoria, no demoraron en llegar las críticas vinculadas principalmente a que atentan contra el sistema de meritocracia para el ingreso a un cargo de profesor/a como asimismo contra el art. 16 de la Constitución Nacional —igualdad ante la ley—. En este caso surgen aquí diversas cuestiones para analizar desde la libertad académica.

En primer lugar, si es posible que en el marco de las universidades públicas se tomen este tipo de medidas teniendo en cuenta la disparidad estructural en

---

<sup>33</sup> Debe quedar en claro que estas capacitaciones no implican la inclusión de temas de género en la currícula universitaria, ni la obligatoriedad de los docentes de incorporarla a sus cursos.

<sup>34</sup> En las universidades públicas se accede al cargo de profesor/a por concurso público de oposición y antecedentes. En el mismo son evaluados por ejemplo las publicaciones, la participación en proyectos de investigación, en Congresos, entre otros.

los cargos docentes respecto de las mujeres. Y aquí la respuesta es relativamente sencilla. La libertad académica entendida como libertad negativa en términos de Isaiah Berlín no es neutral, tiene un impacto desproporcionado respecto de ciertos grupos, en especial mujeres y diversidades. Esta medida implica la adopción de una acción positiva<sup>35</sup> a fin de garantizar una mayor participación de mujeres en la academia, buscando erradicar situaciones de desigualdad. De esta manera, es posible sostener que este tipo de medidas no implica discriminación alguna prohibida por el ordenamiento jurídico, sino que, al contrario, el trato diferenciado a favor de las mujeres tiene como objetivo corregir una desigualdad histórica en la que se encuentran en el ámbito universitario/ docente.

En el concurso mencionado la acción positiva está planteada como una “acción rígida” (solo mujeres se pueden postular). Sin embargo, es posible pensar en si el mandato de igualdad se vería cumplido, por ejemplo, garantizando un mejor puntaje en los concursos por maternidad, tareas de cuidado para mujeres, entre otras. En este sentido, se ha planteado que el problema es la “cuota rígida” pero no la posibilidad de considerar especialmente la situación de maternidad, tareas de cuidado ante la falta de cumplimiento de ciertos objetivos como las publicaciones.

Sobre este punto, es necesario sostener que esta “especial consideración” puede ser insuficiente. En este sentido, se conoce que la evaluación del mérito no es neutral y aun con esta consideración en los concursos docentes los varones podrían estar incluso mejor posicionados. Basta dar cuenta por ejemplo de la situación de las mujeres durante la pandemia y la asunción casi en su totalidad de las tareas de cuidado. El impacto de la “no productividad” académica no puede

<sup>35</sup> Las *acciones positivas* son aquellas que reconocen la situación de desigualdad o subordinación de determinado grupo estableciendo un trato preferente dirigido a estos grupos y/o situaciones de personas a fin de lograr la igualdad real. En general, implican que el acceso a ciertos bienes o recursos estarán garantizados para ciertos grupos identificados como desaventajados, en condiciones diferentes al resto de quienes pretenden obtener esos bienes y/o recursos. Así, una acción de este tipo ha sido la implementación de leyes de cupo para las mujeres en los cargos políticos. Lo que se busca es garantizar la existencia de mujeres en los cargos electivos y, mediante un cupo, se garantiza ese mínimo. En este marco, es dable destacar lo expresado por el Comité de la CEDAW en su Recomendación General nro. 25 al considerar que “El término “medidas” abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas. La elección de una “medida” en particular dependerá del contexto en que se aplique el párrafo 1 del artículo 4 y del objetivo concreto que se trate de lograr” (párrafo 22).

medirse solo por las publicaciones. Las mujeres dejaron, para asumir tareas de cuidado, de participar en debates, interrumpieron investigaciones, entre otras labores profesionales. Además, asumir estas tareas implica un esfuerzo físico y mental del que no es posible recuperarse “cuando la pandemia termina”. Su impacto seguirá en el cuerpo por varios años. Lo mismo sucede con el parto, por ejemplo. Su impacto no puede medirse solo por los tiempos de las licencias por maternidad, sino que tiene también otras implicancias.

Por ejemplo, conforme lo señala Morgade,<sup>36</sup> “hay una política de las citas (“yo te cito, tu me citas”), una comunidad de invitación científica (“yo te invito, tu me invitas”) que responde de alguna manera a la idea de “fraternidad”. Esa fraternidad es una forma de construcción de poder académico, de validación y de legitimación que termina siendo científica y terminan siendo los artículos que después hacen que las revistas tengan el impacto que tienen. El análisis no impugna de partida la “calidad” de las producciones. La invitación es a pensar críticamente en las redes de poder que sustentan esa circulación”. Esa fraternidad se vio fuertemente interrumpida para las mujeres en la pandemia, durante los tiempos de nacimiento de los hijos, la primera infancia, entre otros.

Otra cuestión que resulta, tal vez, más difícil tiene que ver con la posibilidad de establecer normas a fin de que las acciones positivas a favor de las mujeres o diversidades sean exigidas también en el ámbito universitario privado. En este sentido, es posible por ejemplo que en aras de garantizar mejores condiciones de participación de mujeres en el ámbito universitario se pueda establecer por ley la obligatoriedad de cupos reservados para mujeres ¿atenta esto contra la autonomía universitaria? ¿Cuál es el impacto en la libertad académica? En este sentido, es claro el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cuando establece lo siguiente:

“(…) el hecho de que las medidas especiales de carácter temporal también pueden basarse en decretos, directivas sobre políticas o directrices administrativas formulados y aprobados por órganos ejecutivos nacionales, regionales o locales aplicables al empleo en el sector público y la educación. Esas medidas especiales de carácter

---

<sup>36</sup> Graciela Morgade “La Universidad en clave de género y las deudas de la Reforma Universitaria” en Laura Pautassi y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria* (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020) 28.

temporal podrán incluir la administración pública, la actividad política, la educación privada y el empleo”.<sup>37</sup>

Así, como sostiene Morgade:

“(…) no se sale de estas estructuras solamente por el paso del tiempo, sino que requiere acciones concretas y transversales construyendo políticas de género. La legislación argentina sostiene como propuesta que las instituciones deberán establecer acciones positivas en dirección a disminuir la injusticia de género para con las mujeres. Necesitamos construir herramientas del mundo académico para tener cupos en las actividades, en los paneles, en las publicaciones, en la conformación de los órganos de gobierno colegiados. La participación más amplia también irá gestando una masa crítica de mujeres que puedan acceder a los cargos de conducción máxima de las universidades, por ejemplo, los rectorados”.<sup>38</sup>

En este sentido, corresponde además afirmar que la situación de desigualdad y opresión que viven las mujeres en las universidades ya es una situación de vulneración estructural del derecho a la libertad académica. De esta manera, en la medida en la que la atmósfera de exclusión impida la participación igualitaria de las mujeres en los cursos o en actividades académicas, o restringe su posibilidad de ascender y acceder a cargos docentes, o vivan situaciones de violencia, ya está limitándose la libertad académica de las mujeres. Así que estamos aquí tanto ante un problema de igualdad y libertad académica, pero también es un problema de qué libertades se garantizan y hasta donde.

#### 4. CONCLUSIONES

Tanto las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela como los concursos con vacantes reservadas provienen de una obligación de igualdad que ciertamente a veces puede limitar la libertad. Pero esto lo hacemos en muchos casos,

---

<sup>37</sup> Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal”, 30º periodo de sesiones, 2004, párrafo 32.

<sup>38</sup> Graciela Morgade “La Universidad en clave de género y las deudas de la Reforma Universitaria” en Laura Pautassi y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria* (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020) 29.

porque son principios que ponderamos. En este sentido, si se restringe la posibilidad de elegir a nuestros representantes estableciendo sistemas de cuotas o paridad ¿por qué no podemos “afectar” ligeramente, y sin desnaturalizar, el derecho a la libertad académica, por razones de igualdad?

La libertad académica no debe ser entendida como una carta de triunfo. Como todos los derechos puede ser limitada en aras de otro principio. En este sentido, los Estados asumieron la obligación de eliminar condiciones de discriminación estructural en el ámbito académico por lo que deben establecer, entre otras, medidas que permitan y fomenten el acceso equitativo al mismo, especialmente a través de la adopción de medidas en favor de colectivos o personas históricamente excluidas o con mayor riesgo de ser discriminadas.

Además de esto, los Estados están en la obligación de establecer medidas afirmativas que garanticen un desarrollo profesional equitativo y sin discriminación, especialmente a través de la reducción de brechas de remuneración, oportunidades, becas, como medidas de estabilidad laboral y acceso para dichas personas o grupos. En particular, deben adoptarse medidas encaminadas a la erradicación de obstáculos enfrentados por las mujeres en la academia en comparación con las de sus colegas hombres en razón de prejuicios, costumbres o prácticas basadas en estereotipos de género, raza u otros motivos de discriminación.<sup>39</sup>

Los principios que guían la vida universitaria ya no pueden seguir siendo pensados como en 1918 en la Reforma Universitaria, sino que deben asumir un compromiso robusto con la protección de los derechos humanos y la igualdad. No alcanza ya con formar los/as mejores profesionales, sino que el mandato exige hoy que esos/as profesionales puedan mejorar la sociedad en que vivimos, puedan desarrollar el mandato transformador que el compromiso con los derechos humanos exige.

## Bibliografía

Acosta, Marina “Activismo feminista en *instagram*. El caso de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en Argentina”, *Perspect. común*. vol.13 no 1, 2020; Alfonso, Santiago “Libertad de expresión, libertad de cátedra y derecho al ideario institucional” en *Forum*, No 10 (2020)139-158.

---

<sup>39</sup> CIDH, Relatoría DESCA y RELE. Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria disponibles en [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios\\_libertad\\_academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios_libertad_academica.pdf) (fecha de consulta 22/09/2022)

- Báez, Jéssica y González del Cerro, Catalina Políticas de Educación Sexual: tendencias y desafíos en el contexto latinoamericano. *Revista del IICE/38* (2015).
- Bergallo, Paola “Será ley?: Abogacía de causa y cambio legal” (mimeo).
- Berlin, Isaiah “Dos conceptos de libertad”, en: *Cuatro ensayos sobre la libertad*, Julio Bayón trad., (Alianza ed., 1988) 187-243.
- Bidart Campos, Germán *El derecho de la constitución y su fuerza normativa* (Buenos Aires, Editorial Ediar, 1995).
- Clérico, Laura/Aldao, Martín “Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”, en *Revista Estudios Constitucionales*, 9 (1), (Talca, 2011) 141-179.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación General N°19: la violencia de género contra la mujer*, A/46/38 (1992).
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación general N°35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general N°19*, CEDAW/C/GC/35 (2017)
- Fiss, Owen, *The irony of free speech*, (Harvard University Press ed., 1996).
- Garcés Estrada, Carolina; Santos Pérez, Antonia & Castillo Collado, Loreto “Universidad y Violencia de Género: Experiencia en Estudiantes Universitarios de Trabajo Social en la Región de Tarapacá” en *Revista Latinoamericana de educación inclusiva*, vol.14, n.2 (2020) 59-77.
- Gargarella, Roberto “La concepción constitucional de la libertad de expresión” en *Revista Argentina de Teoría Jurídica*, 14 (1) (2013) 82-101.
- Gutmann, Amy *La educación democrática. Una teoría política de la educación*. (Barcelona: Paidós, 2001)
- Jaramillo, I./Buchely, L. *Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana*, Cali, Universidad ICESI ed, 2020
- Kohen, Beatriz, Sonia Ariza Navarrete y María de los Ángeles Ramallo “Las mujeres docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires” en *Academia Revista de Enseñanza del Derecho*, nro. 33 (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2019) 99-130. Disponible en [http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev\\_academia/revistas/33/las-mujeres-docentes-de-la-fd-uba.pdf](http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/33/las-mujeres-docentes-de-la-fd-uba.pdf)
- López Magdalena y Jorgelina Loza, “Articulaciones, representaciones y estrategias de la movilización contra la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina (2018-2020)”, *Población & Sociedad* 2021, Vol. 28 (1): 131-161, 2021
- Morgade, Graciela “La Universidad en clave de género y las deudas de la Reforma Universitaria” en Pautassi, Laura y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria*. (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020).
- Pautassi, Laura y Lorena Balardini *La universidad en clave de género. A 100 años de la reforma universitaria*. (Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020).
- Piccone, Maria Verónica [et al.] *Innovación en las prácticas de la enseñanza y la investigación en Ciencias Jurídicas. Desafíos para transversalizar la perspectiva de género(s) y consolidar el derecho antidiscriminatorio* (Córdoba: Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, 2022).

- Reyes Benz, Arlette *Human Rights Education as a guarantee of non-recurrence in the case law of the Inter-American Court of Human Rights*. Master's Thesis, (Faculty of Humanities, Social Sciences, and Theology at Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg, 2020)
- Ridgeway, Cecilia "Why Status Matters for Inequality" en *American Sociological Review*, 79(1) (2014) 1-16.
- Ronconi, Liliana "La violencia de género en las universidades. Análisis de las respuestas institucionales en la Facultad de Derecho de la UBA ¿Hacia un cambio de mirada?", en Jaramillo, I./Buchely, L. *Perspectivas de género en la educación superior: una mirada latinoamericana*, (Cali, Universidad ICESI ed, 2020)
- Ronconi, Liliana *Derecho a la educación e igualdad como no sometimiento*. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018).
- Ronconi, Liliana y Andrea Schuster "El derecho a la libertad de expresión de las mujeres en espacios universitarios. El caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires" en *Revista de Derecho* Vol. XXXIV (2) (Valdivia, Universidad Austral de Chile, 2021) 159-180.
- Ronconi, Liliana y María de los Ángeles Ramallo (coords.) *La enseñanza del derecho con perspectiva de género. Herramientas para su profundización*. (Buenos Aires: Secretaría de Investigación-Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2020) Disponible en <http://www.derecho.uba.ar/investigacion/pdf/ensenanza-con-perspectiva-de-genero.pdf>
- Tarducci, Mónica "Escenas claves de la lucha por el derecho al aborto en Argentina", *Salud colectiva*, Vol.14 no.3, 2018;
- Unesco *Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior*, 1997 disponible en <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel>



# MARCO NORMATIVO BRASILEIRO SOBRE A LIBERDADE ACADÊMICA FRENTE ÀS DISPOSIÇÕES DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS

## *(Brazilian Regulatory Framework on Academic Freedom vis-à-vis the provisions of the Inter- American Human Rights System)*

ÉRIKA TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ Y DANIELLE ANNE PAMPLONA

### **Resumo:**

São muitos os casos na região latino-americana que indicam que há um divórcio entre a proteção e o respeito à liberdade de expressão dos indivíduos e a mesma proteção e respeito em relação aos membros da academia. O Brasil não é diferente; são vários os exemplos. O texto utiliza como parâmetros a Convenção Americana, o Protocolo de San Salvador e os Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária estabelecidos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e sua Relatoria DESCA para avaliar a existência e a suficiência de marcos normativos brasileiros para proteção da faceta da liberdade acadêmica que se refere à liberdade de cátedra.

**Palavras-chave:** liberdade acadêmica; liberdade de cátedra; Princípios Interamericanos; Brasil.

**Abstract:** There are many cases in the Latin American region that indicate that there is a divorce between the protection and respect for the freedom of expression of individuals and the same protection and respect in relation to members of the academy. Brazil is no different, there are several examples. The text uses as parameters the American Convention, the Protocol of San Salvador and the Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy established by the Inter-American Commission on Human Rights and its Rapporteur DESCA, to assess the existence and sufficiency of Brazilian normative frameworks for the protection of the facet of academic freedom that refers to freedom of professorship.

**Keywords:** academic freedom; freedom to lecture; Inter-American Principles; Brazil.

### **Resumen**

Hay muchos casos en la región latinoamericana que indican que existe un divorcio entre la protección y el respeto a la libertad de expresión de los individuos y la misma

protección y respeto en relación a los miembros de la academia. Brasil no es diferente, hay varios ejemplos. El texto utiliza como parámetros la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relator DESCA, para evaluar la existencia y suficiencia de los marcos normativos brasileños para la protección de la faceta de la libertad académica que se refiere a la libertad de cátedra.

**Palabras clave:** Libertad Académica, libertad de cátedra, Principios Interamericanos, Brasil.

#### **Afiliação da autora**

Nome: Érika Teixeira dos Santos Braz

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUCPR

Biografia: Mestranda pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUC-PR; Membro da Clínica de Direitos Humanos da PUCPR; Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá-UEM;

E-mail: erikatsbraz@gmail.com

#### **Afiliação da autora**

Nome: Danielle Anne Pamplona

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUCPR

Biografia: Professora Titular do Programa de Pós-Graduação e da Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUCPR; Pós-Doutora pela American University (Washington, DC); Visiting Researcher no Bonavero Institute of Human Rights (Oxford) e no Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional; Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da PUCPR; Co-Presidente da Global Business and Human Rights Scholars Association.

E-mail: danielle.pamplona@pucpr.br

## 1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho debateremos a adequação dos marcos normativos brasileiros sobre proteção da liberdade acadêmica aos marcos normativos forjados pelo sistema interamericano de direitos humanos. A questão é relevante diante de inúmeros casos de interpelação judicial de professores por suas manifestações, de interferência em temas de pesquisa e de manifestações de representantes do poder contra a produção científica em universidades.

O Brasil conta com alguns marcos normativos que se aplicam à liberdade de expressão em geral, mas também à liberdade acadêmica especificamente. A análise da adequação destes textos será feita em relação à linguagem utilizada

na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo de San Salvador e dos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária. A hipótese é de que há adequação; todavia, é no momento de aplicação de marcos normativos a determinadas condutas de acadêmicos e instituições que ocorrem as falhas no sistema.

A liberdade acadêmica envolve diferentes temas, como a autonomia universitária e seus meandros burocráticos, financeiros (como seu financiamento) e administrativos. Sob o ponto de vista dos que frequentam instituições de ensino, a liberdade acadêmica envolve o direito de aprender, de se informar, de debater o conteúdo. E esse direito pode ser violado quando há receio de discussões sobre igualdade de raça e gênero, por exemplo, no ambiente acadêmico. Apesar destas possibilidades, este texto, pela limitação de espaço, faz um recorte e expressa preocupações que se voltam com mais especificidade, à liberdade afeta aos profissionais da educação.

O presente texto parte de pesquisa que busca identificar algumas situações em que houve algum grau de ofensa à liberdade acadêmica para indagar, a partir de três hipóteses, qual seria a razão para a violação do direito: a ausência, a insuficiência ou a derrogação de marcos normativos. Se o problema não for de ausência de marcos normativos, busca-se identificar se há insuficiência ou derrogação de marcos que poderiam implicar na proteção da liberdade acadêmica. A definição da insuficiência de tais marcos foi feita com base na investigação de seu conteúdo para avaliar se atendem as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Protocolo de San Salvador, e dos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária

## 2. O DECAIMENTO DA LIBERDADE ACADÊMICA NO BRASIL

Atualmente o Brasil se afasta paulatinamente de bons índices de liberdade de expressão e acadêmica. Em seu Informe Anual,<sup>1</sup> em 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos manifesta sua preocupação com as restrições à liberdade de expressão e de cátedra vividas por professores de todos os níveis

<sup>1</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Situación de Derechos Humanos en Brasil*. 2021. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf>. Acesso em 09 de out de 2022. 177-178

de ensino, diante de ameaças de denúncias em função do conteúdo das aulas. O relatório menciona projetos de lei que pretendem criar o “Programa Escola sem Partido”, que institucionaliza a violação da liberdade de expressão dos professores, ao estabelecer restrições de conteúdo baseadas em preferências políticas. Para além do mencionado relatório, o país foi objeto de Comunicado conjunto<sup>2</sup> da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão (RELE) e da Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA) manifestando preocupação sobre medidas penais movidas pelo Estado contra professor universitário que manifestou sua opinião sobre a conjuntura política e sobre autoridades específicas em jornal de circulação nacional e em seu perfil do Twitter.<sup>3</sup>

Neste caso, o professor da Universidade de São Paulo (USP) e colunista da Folha de São Paulo, Conrado Hubner Mendes, foi réu de uma demanda penal interposta pelo Procurador Geral da República, que o denunciava por calúnia, injúria e difamação, sob o argumento de que teria ofendido sua honra ao criticar sua atuação profissional. A conduta do professor também foi desafiada diante do Código de Ética da USP, gerando enorme reação de professores de várias instituições em defesa do respeito a liberdade e a autonomia acadêmica, científica e intelectual. As relatorias autoras do Comunicado chamam o estado brasileiro a respeitar o direito à liberdade de expressão e a liberdade acadêmica, ressaltando que a liberdade acadêmica é um elemento fundamental para a democracia, e as universidades são centros de pensamento crítico e de intercâmbio de ideias.

Outro caso brasileiro de violação da liberdade acadêmica ocorreu na Universidade Federal de Pelotas, em que, em 2021, professores passaram a ser investigados criminalmente em razão de críticas feitas ao presidente Bolsonaro durante uma transmissão on-line.<sup>4</sup> As críticas feitas pelos professores eram

---

<sup>2</sup> Relatoria Especial para la Libertad de Expresión. *Comunicado de prensa R139/21*. 28.05.2021. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?IID=2&artID=1201>. Acesso em 09 de out 2022.

<sup>3</sup> Conrado Hübner Mendes. Aras é a antessala de Bolsonaro no TPI: Tribunal Penal Internacional tem no procurador-geral a omissão de que precisa. *Folha de S. Paulo*, 26 de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2021/01/aras-e-a-antessala-de-bolsonaro-no-tribunal-penal-internacional.shtml>. Acesso em: 17 out. 2022.

<sup>4</sup> Scholars at Risk (SAR), *Free to Think 2021*. 2021. Disponível em <https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2021/12/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2021.pdf>. Acesso em 28 de outubro de 2022. p. 54.

em relação à interferência do presidente no processo de eleição para reitor da universidade, eis que o presidente da República preteriu o nome mais votado e nomeou a candidata concorrente. Os professores assinaram termos de ajuste de conduta, se comprometendo a não promover expressões de despreço ao presidente em eventos da universidade.

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados se manifestou sobre esse caso,<sup>5</sup> solicitando que o Ministro da Educação revogasse o processo administrativo disciplinar instaurado contra os professores, bem como o termo de ajuste de conduta assinado pelos professores, considerando que essas medidas são restrições incompatíveis com a liberdade de cátedra.

A organização *Scholars at Risk* em 2018<sup>6</sup> aponta o caso de uma pesquisadora nas áreas de bioética, direitos humanos, feminismo e saúde na Universidade Nacional de Brasília (UNB). Em 2017, devido a suas manifestações sobre direito ao aborto para o Supremo Tribunal Federal, a professora passou a sofrer retaliações de diversas formas, como comentários na internet, intimidações físicas, ligações e até ameaças a seus familiares, alunos e colegas. A professora então passou a fazer parte de um programa governamental que ajuda a proteger defensores de direitos humanos, e para sua segurança deixou o Brasil.

Em 2020, o Observatório do Conhecimento, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) e o Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) apresentaram a primeira fase de resultados da pesquisa “A liberdade acadêmica está em risco no Brasil?”. Dos 1.116 cientistas que participaram da pesquisa, 58% afirmaram que conhecem experiências de pessoas que já sofreram limitações ou interferências indevidas em suas pesquisas ou aulas; e 27% dos respondentes já limitaram aspectos da própria pesquisa com medo de alguma consequência negativa.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Fernando Bola. *Comissão pede cancelamento do termo de ajuste de conduta assinado por professores da UFPel*, 2021. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/presidencia-da-cdhm-pede-ao-ministro-da-educacao-o-cancelamento-do-termo-de-ajuste-de-conduta-assinado-por-professores-da-ufpel>. Acesso em 28 de outubro de 2022.

<sup>6</sup> *Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project (AFMP)*, 2018. Disponível em: <https://www.scholarsatrisk.org/report/2018-09-01-universidade-de-brasilia/>. Acesso em 22 de outubro de 2022.

<sup>7</sup> Observatório do Conhecimento, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) e Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade-SBPC. 2022. *Pesquisa nacional: A liberdade acadêmica está em risco no Brasil? Rio de janeiro: Observatório do conhecimento*. Disponível em: <https://www.adufrij.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/21-destaques/4457-estudo-revela-que-liberdade-academica-esta>

Assim, como explicar os fatos denunciados pelas relatorias do sistema interamericano diante dos marcos normativos existentes no país? É preciso colocar em perspectiva que as ameaças que podem vir do sistema judiciário não se concretizaram, eis que houve, tão somente, as denúncias e distribuição de ações. Em outras palavras, não houve condenação de acadêmicos que pudessem alcançar casos de restrição à sua liberdade acadêmica. Isso não significa dizer que o país vai bem em relação à liberdade acadêmica, muito pelo contrário; também não significa dizer que a ausência de processos ou condenações judiciais evite a violação aos direitos destas pessoas. É somente um recorte para tratar das ameaças contra professores que se concretizaram em medidas administrativas ou judiciais.

Diferente, portanto, são os casos em que as ameaças e mesmos restrições à liberdade acadêmica se resumem a condutas do poder executivo, seja por manifestações orais, seja pela adoção de portarias e regulamentos que incidem sobre a liberdade de cátedra e de professores de proferir opiniões, de ensinar, de informar. Nestes casos, a questão é mais complexa e transborda a discussão sobre liberdade acadêmica para se inserir no próprio decaimento democrático que se percebe no país. A guinada do país para a extrema-direita, em 2019, refletiu na sensação de perigo denunciada por acadêmicos no país. O Índice de Liberdade Acadêmica também reflete as consequências da escolha política, colocando o Brasil entre os quatro países (junto com Hong Kong, Índia e Turquia) com o mais radical declínio na liberdade acadêmica entre 2011 e 2021.<sup>8</sup>

### 3. MARCOS NORMATIVOS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS APLICÁVEIS

O objetivo desta seção é fazer referência aos princípios dos instrumentos internacionais aplicáveis à proteção da liberdade acadêmica, com referência especial aos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica. Também serão traçados paralelos com a estrutura constitucional e legal existente no Brasil.

---

em-risco. Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>8</sup> Scholars at Risk (SAR). *Brazil: Decline in Academic Freedom Requires UN's Attention*. 2022. Disponível em: <https://www.scholarsatrisk.org/2022/04/brazil-decline-in-academic-freedom-requires-uns-attention/>. Acesso em: 17 out 2022.

### 3.1. Marcos normativos no Sistema Interamericano

O artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos<sup>9</sup> estabelece que a liberdade de pensamento e de expressão envolve buscar, receber, e difundir informações e ideias e que seu exercício não está sujeito a censuras prévias. É certo que sobre essa liberdade, assim como em outras, incidem condicionantes, como responsabilidades ulteriores em casos específicos (quando se diz respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas); e restrições, como a proibição de toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Esta proteção é ampla, aplicável a todos os indivíduos.

É no Protocolo de San Salvador que encontramos dispositivos que se relacionam ao ato de ensinar. O art. 13 determina que toda pessoa tem direito à educação que deve ser provida tendo como premissa o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade; o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz.<sup>10</sup> Além disso, estabelece que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista; conseguir uma subsistência digna; favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos; e promover as atividades em prol da manutenção da paz. Ainda que não enfrente a questão da liberdade acadêmica, um pequeno exercício de interpretação pode levar a conclusões importantes.

A previsão de direitos deve ser acompanhada das condições para que possam ser implementados. Estabelecer que as pessoas têm direito a uma educação capacitante, nos termos acima mencionados, carece da possibilidade de as partes livremente se informarem e debaterem ideias, conteúdo inscrito na liberdade de expressão. Por outro lado, ela não seria suficiente para a capacitação que

<sup>9</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. 1969. Disponível em: [https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao\\_americana.htm](https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm). Acesso em 09 de outubro de 2022.

<sup>10</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San Salvador"*. Disponível em: [http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo\\_de\\_san\\_salvador.htm](http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo_de_san_salvador.htm). Acesso em 09 de out 2022.

favoreça tolerância e amizade entre grupos com características diversas, é preciso, para tanto, que o educador seja capaz de discutir ideias, de enfrentar diferentes teses, inclusive para desconstituí-las. Em outras palavras, e da essência da educação capacitadora a existência de liberdade acadêmica. O Protocolo fomenta essa conclusão, ao estabelecer, no art. 14.3, o respeito indispensável à pesquisa científica e a atividade criadora.

Sem dúvidas, o documento que melhor espelha as preocupações relacionadas à liberdade acadêmica é o chamado Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária<sup>11</sup> (Princípios), adotados em 2021 pela Relatoria Especial sobre os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais-REDESCA da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São quinze princípios que têm como premissas, entre outras, o reconhecimento de que a liberdade acadêmica é um direito humano habilitante para o exercício de vários outros direitos, como a liberdade de expressão, de reunião, de associação, de educação, entre outros; para realização da democracia; e que a ciência e o conhecimento são bens públicos, sociais e constituem pilares fundamentais da democracia.

Os Princípios adotam o conceito de que a liberdade acadêmica implica no direito de todas as pessoas de buscar, gerar e transmitir conhecimentos, a formar parte de comunidades acadêmicas e a realizar tarefas autônomas e independentes para garantir o acesso à educação, docência, aprendizagem, ensino, pesquisa, descobrimento, transformação, debate, busca, difusão de informação e ideias de forma livre e sem receio de represálias.<sup>12</sup> Há muito mais no conteúdo da liberdade acadêmica e a descrição dos Princípios é relevante para não isolar qualquer manifestação que mereça proteção especial por conta dos métodos, fontes e práticas empregadas no processo de comunicação.

Os Princípios reforçam a conhecida obrigação dos estados de proteção de direitos humanos, para especificá-la em relação à liberdade acadêmica. Nesse sentido, esclarecem que o Estado não deve, por seus altos funcionários, adotar discurso negativo e estigmatizante sobre instituições de educação superior, sobre a comunidade acadêmica ou seus integrantes, especificamente; não deve

---

<sup>11</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Princípios Interamericanos Sobre Libertad Académica Y Autonomía Universitaria*. 2021. Disponível em: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf). Acesso em 09 de out 2022.

<sup>12</sup> Princípio 1.



pressionar para a adoção ou abandono de conteúdos curriculares específicos; não deve fechar ou deixar de acreditar instituições ou afins onde se desenvolvem atividades acadêmicas, tomando por base critério de divergência de visão ideológica, econômica ou axiológica do governo.<sup>13</sup>

Por fim, em explanação não exaustiva, os Princípios estabelecem a proibição de censura prévia, como restrições de acesso à bibliotecas ou bases de dados; ou restrições para pesquisa, discussão e publicação de determinados temas. Ainda nesta seara, o Estado deve ter cuidado especial ao promover medidas administrativas ou disciplinares em face de instituições acadêmicas ou acadêmicos, como observar a transparência, o devido processo, as garantias judiciais e de não discriminação; e apoiar-se em normas que cumpram os requisitos de legalidade, finalidade legítima, idoneidade, necessidade e proporcionalidade para uma sociedade democrática. O conteúdo dos Princípios consegue alcançar as dificuldades de concretização da liberdade acadêmica, na prática, trazendo não somente os dispositivos que devem ser observados pelos Estados, como também exemplos do que não é conduta aceitável.

Com base nesses documentos, é possível afirmar que há, no sistema interamericano de proteção de direitos, marcos normativos capazes de dar o norte para os Estados em matéria de proteção e respeito à liberdade acadêmica.

### 3.2. Marcos normativos brasileiros

O Brasil conta com alguns marcos normativos que se aplicam à liberdade de expressão em geral, mas também à liberdade acadêmica especificamente. A hipótese é de que o Brasil possui leis de qualidade que protegem a liberdade de cátedra, não há ausência, insuficiência ou derrogação de leis. O problema está na forma de aplicação dessas leis.

A liberdade acadêmica envolve diferentes temas, como a autonomia universitária e seus meandros burocráticos, financeiros (como seu financiamento) e administrativos. A liberdade de expressão é um direito fundamental positivado pela Constituição Federal de 1988 no art. 5º, IX que estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, indepen-

<sup>13</sup> Princípio 4.

dentemente de censura ou licença.<sup>14</sup> A liberdade acadêmica mereceu dispositivo específico,<sup>15</sup> no capítulo que fala sobre educação, onde dispõe a Constituição que são princípios do ensino, no país, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Este cuidado específico não deve ser visto com estranheza, eis que outros direitos relacionados à liberdade de expressão mereceram o mesmo tratamento, como é feito por exemplo com a liberdade religiosa e a de imprensa nos artigos 5º, VI e 220, respectivamente da Constituição Federal.<sup>16</sup>

O Brasil dispõe de legislação específica que organiza o sistema educacional no país, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional.<sup>17</sup> Ela não dispõe, expressamente, sobre a liberdade acadêmica, mas repete o texto constitucional ao estabelecer que o ensino no país deve ser informado pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

Assim, os marcos normativos brasileiros, sem dúvida, estabelecem a liberdade acadêmica. Não o fazem, no entanto, na mesma extensão e com o mesmo cuidado dos Princípios elaborados no âmbito da comissão interamericana. Ainda assim, da linguagem utilizada, é possível concluir que o Estado não deve, por exemplo, adotar discursos negativos ou estigmatizantes sobre instituições de ensino ou sobre os acadêmicos; é possível ainda concluir que o Estado há de adotar especial cautela quando pretender aplicar sanções às instituições ou acadêmicos.

#### 4. ANÁLISE DOS MARCOS NORMATIVOS SOBRE LIBERDADE ACADÊMICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A proposta do texto é analisar se os dispositivos encontrados no sistema interamericano estão previstos na legislação doméstica. Se estão, a indagação seguinte servirá para compreender se satisfazem o quanto os marcos do sistema

---

<sup>14</sup> Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>15</sup> Artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>16</sup> Artigos 5º, IV e 220 da Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>17</sup> Brasil. “*Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*”. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

interamericano estabelecem. Além disso, a ausência da regulamentação doméstica também será avaliada distintamente da prévia existência de regulamentação e posterior derrogação. Justifica-se esta opção pelo contexto de decaimento democrático no país. Assim, a identificação de prévia existência de regulamentação que protegia a liberdade acadêmica e a avaliação do momento de sua derrogação pode reforçar a característica do decaimento democrático.

#### 4.1. Da ausência de regulamentação

O primeiro critério a ser analisado é a ausência ou não de leis brasileiras que tratem da liberdade acadêmica nos moldes feitos pelo sistema interamericano, se constatada a existência dessas leis, será analisada a suficiência delas e as derrogações existentes.

Nota-se inicialmente que a liberdade de expressão é um direito fundamental positivado pela Constituição Federal de 1988 no art. 5º, IX que estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.<sup>18</sup> A liberdade acadêmica mereceu dispositivo específico,<sup>19</sup> no capítulo que fala sobre educação, onde dispõe a Constituição que são princípios do ensino, no país, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Este cuidado específico não deve ser visto com estranheza, eis que outros direitos relacionados à liberdade de expressão mereceram o mesmo tratamento, como é feito por exemplo com a liberdade religiosa e a de imprensa nos artigos 5º, VI e 220, respectivamente da Constituição Federal.<sup>20</sup>

Ademais, o Brasil dispõe de legislação específica que organiza o sistema educacional no país, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional.<sup>21</sup> Ela não dispõe, expressamente, sobre a liberdade acadêmica, mas repete o texto constitucional ao estabelecer que o ensino no país deve ser informado pela

<sup>18</sup> Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>19</sup> Artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>20</sup> Artigos 5º, IV e 220 da Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

<sup>21</sup> Brasil. *Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, há regulamentação doméstica sobre o tema.

## 4.2. Insuficiência da regulamentação existente

Existindo regulamentação, o passo seguinte é a avaliação de seu conteúdo. Para a análise da insuficiência ou suficiência das normativas brasileiras, é necessário um parâmetro, para que seja feita a comparação. O sistema interamericano possui três principais documentos que mencionam a liberdade de cátedra, sendo eles: a Convenção Americana,<sup>22</sup> o Protocolo de San Salvador,<sup>23</sup> e os Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária.<sup>24</sup>

| Leis nacionais  | Convenção Americana  | Protocolo de San Salvador   | Princípios   |
|---|--|---|--|
| Art. 5º, IX: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; | Art. 13.1: Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza [...] | 14.3: Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora. | 1.: La libertad académica implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos [...]. |

Da tabela acima, nota-se que o art. IX da Constituição Federal, que prevê a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, pode ser comparado

<sup>22</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. 1969. Disponível em: [https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao\\_americana.htm](https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm). Acesso em 09 de out 2022.

<sup>23</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San Salvador"*. Disponível em: [http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo\\_de\\_san\\_salvador.htm](http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo_de_san_salvador.htm). Acesso em 09 de out 2022

<sup>24</sup> Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Princípios Interamericanos Sobre Libertad Académica Y Autonomía Universitaria*. 2021. Disponível em: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf). Acesso em 09 de out 2022

artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao art. 14.3 do Protocolo de San Salvador, e ao primeiro dos Princípios, no trecho em que trata do direito das pessoas de buscar, gerar e transmitir conhecimentos. Apesar de o texto da Constituição não esclarecer que a liberdade de expressão que menciona compreende a liberdade de difundir informações e ideias, ao mencionar que é livre a expressão da atividade científica, independentemente de censura ou licença, o texto está, a nosso ver, indubitavelmente protegendo o direito do acadêmico em difundir suas ideias.

| <b>Leis nacionais</b>   | <b>Convenção Americana</b>   | <b>Protocolo de San Salvador</b>   | <b>Princípios</b>   |
|---|--|--|---|
| Art. 206, II, CF:<br>O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; | Art. 13.1: Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza [...] | 14.3.: Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora. | 1. [...]La comunidad académica es un espacio para la reflexión y la deliberación informada sobre aspectos que conciernen a la sociedad [...]. |

A segunda tabela trata no art. 206 da Constituição Federal, que se encontra no capítulo III da mesma: “Da educação, da cultura e do desporto”. Com relação à previsão do art. 206, II da CF, essa trata de um dos princípios do ensino no país, sendo ele a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Essa previsão legislativa brasileira também encontra equivalência no art. 14.3 do Protocolo de San Salvador, no art. 13.1 da Convenção Americana, mais especificamente no trecho em que trata da liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza e no primeiro dos Princípios, no trecho em que trata da possibilidade de reflexão e deliberação dentro da comunidade acadêmica.

Ademais, o Brasil dispõe de legislação específica que organiza o sistema educacional no país, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional.<sup>25</sup> Ela não dispõe, expressamente, sobre a liberdade acadêmica, mas repete o texto

<sup>25</sup> Brasil. *Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/civil\\_03/leis/19394.htm](http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/19394.htm). Acesso em 09 de out de 2022.

constitucional ao estabelecer que o ensino no país deve ser informado pela liberdade de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, como se vê a seguir:

| <b>Leis Nacionais</b>  | <b>Convenção Americana</b>   | <b>Protocolo de San Salvador</b>   | <b>Princípios</b>   |
|--|--|--|---|
| Lei 9.394/1996:<br>Art. 3º.: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:<br>[...]<br>II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; | Art. 13.1: Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza [...] | 14.3.: Os Estados Partes neste Protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora. | 1.: La comunidad académica es un espacio para la reflexión y la deliberación informada sobre aspectos que conciernen a la sociedad, |

Nota-se que tal artigo é igual ao art. 206, II da CF, ou seja, em seu conteúdo também se compara aos mesmos dispositivos do sistema interamericano, sendo eles o art. 13.1 da Convenção Americana, o art. 14.3 do Protocolo de San Salvador e o primeiro dos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária.

Da análise conjunta dos documentos, nota-se que a legislação brasileira, no quesito de proteção da liberdade acadêmica, é suficiente quando comparada à Convenção Americana e ao Protocolo de San Salvador, e insuficiente quando comparada aos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária. Os Princípios vão mais longe do que os outros textos analisados ao estabelecer que a comunidade acadêmica é um espaço para reflexão e deliberação informada sobre os assuntos de interesse da sociedade. Ao estabelecer essa característica da comunidade acadêmica, os Princípios dão enorme contribuição para a avaliação das expressões de acadêmicos em relação à sua legalidade.

Estes resultados são encontrados quando se avalia se o texto dos marcos brasileiros está em concordância com os marcos interamericanos. Assim, não há, nestes tópicos, insuficiência de legislação doméstica. Todavia, a pesquisa demonstrou que os Princípios, como deveria mesmo acontecer, espelham uma quantidade maior de características e de nortes para o tema. Por isso, a pesquisa ainda avaliou a existência e suficiência dos marcos domésticos frente aos Princípios. São quinze princípios que têm como premissas, entre outras, o reconhecimento de que a liberdade acadêmica é um direito humano habilitante para o exercício de vários outros direitos, como a

liberdade de expressão, de reunião, de associação, de educação, entre outros; para realização da democracia; e que a ciência e o conhecimento são bens públicos, sociais e constituem pilares fundamentais da democracia.

O Princípio I trata do âmbito de proteção da liberdade acadêmica e, como visto anteriormente, pode ser comparado aos arts. 5º, IX, 206, II da CF e ao art. 3º da Lei 9.394/1996; ele fala sobre o conceito de que a liberdade acadêmica implica no direito de todas as pessoas de buscar, gerar e transmitir conhecimentos, a formar parte de comunidades acadêmicas e a realizar tarefas autônomas e independentes para garantir o acesso à educação, docência, aprendizagem, ensino, pesquisa, descobrimento, transformação, debate, busca, difusão de informação e ideias de forma livre e sem receio de represálias. Há muito mais no conteúdo da liberdade acadêmica e a descrição dos Princípios é relevante para não isolar qualquer manifestação que mereça proteção especial por conta dos métodos, fontes e práticas empregadas no processo de comunicação.

O Princípio II visa proteger a autonomia das instituições acadêmicas, quanto à esse assunto, o art. 207 da Constituição Federal brasileira determina que as universidades tem autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Já o princípio III, da não discriminação, tem sua equivalência novamente na Constituição Federal brasileira, em seu art. 5º, que determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Entretanto, com relação ao princípio IV, que determina a proteção da liberdade acadêmica frente às interferências do Estado, não existe previsão em lei brasileira que apresente algo equivalente. Assim, cria-se uma lacuna na legislação brasileira, que acaba dando ensejo a interferências desproporcionais dos Estados nos currículos e programas acadêmicos, bem como em sua autonomia administrativa. Isso tem mais relevância diante de discursos negativos e estigmatizadores por parte de membros do executivo contra os membros das instituições de ensino superior, da comunidade acadêmica ou de pessoas que a integram, sem possibilidade de proteção das pessoas contra esse discurso, tendo em vista a falta de previsão em lei.

Com relação ao Princípio V, de proteção dos acadêmicos frente a atos de violência, o direito brasileiro possui os dispositivos do direito penal<sup>26</sup> designa-

<sup>26</sup> Brasil. *Código Penal*. 1940. Disponível em [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del-2848compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del-2848compilado.htm). Acesso em 22 de fev de 2023.

dos para tal fim, mas sem uma previsão específica sobre a liberdade acadêmica. Ademais, com relação ao Princípio VI, que determina a inviolabilidade do espaço acadêmico, pode-se inferir certa equivalência do art. 207, da CF, que determina a autonomia didática, científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. Já os Princípios VIII e IX, que proíbem a censura e determinam a excepcionalidade do exercício punitivo estatal, bem como determinam a proteção da liberdade contra ações de particulares encontram equivalência no art. 5º, IX, que determina que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

O Princípio X, por sua vez, por ser mais específico, tratando da educação em direitos humanos, encontra também previsões específicas na legislação brasileira, sendo elas: a Resolução do Ministério da Educação que determina Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos,<sup>27</sup> de 2012, e o Projeto de Lei 1655/22,<sup>28</sup> que também visa determinar Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH). Por fim, o acesso à informação está previsto no Princípio XI, podendo ser encontrado na legislação brasileira no âmbito da Lei de Acesso à Informação.<sup>29</sup>

Com base nesses documentos, é possível afirmar que há completa ausência de uma lei brasileira que tenha previsão equivalente ao Princípio IV, e quanto a todos os outros princípios existem previsões que podem ser comparadas, mas não contém disposições tão específicas quanto os Princípios.

### 4.3. Derrogação da proteção da liberdade acadêmica

O último critério a ser analisado é a derrogação de disposições de proteção da liberdade acadêmica em âmbito nacional, e, com relação a isso, existem duas ocorrências. Primeiramente, cabe mencionar a Medida Provisória nº 914

---

<sup>27</sup> Ministério da Educação. *Resolução CNE/CP nº 1*. 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/17810-2012-sp-1258713622#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CNE%2FCP%20n%C2%BA%201,Nacionais%20para%20a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental>. Acesso em 22 de fev de 2023.

<sup>28</sup> Câmara dos Deputados. *PL 1655/22*. 2022. Disponível em <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2328532>. Acesso em 22 de fev de 2023

<sup>29</sup> Brasil. *Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011*. 2011. Disponível em [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm) Acesso em 22 de fev. de 2023.



de 2019,<sup>30</sup> que tinha como objetivo dispor sobre o processo de escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II.

Já a Medida Provisória nº 979 de 2020<sup>31</sup> permitiu a mudança no processo de designação de dirigentes temporários para as instituições federais de ensino durante o período da pandemia da covid-19, autorizando que o Ministro da Educação designasse reitor e vice-reitor “pro-tempore” para as universidades federais e reitor “pro-tempore” para os institutos federais e o Colégio Pedro II. Ou seja, existe derrogação de regras de proteção da liberdade acadêmica no Brasil, sendo exemplo disso essas Medidas Provisórias que visam intervir na liberdade administrativa das instituições mencionadas.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil conta com marcos normativos que são capazes de indicar quais as condutas que devem ser adotadas pelo país para garantir a proteção e o respeito à liberdade acadêmica. Assim, foram mencionados o texto constitucional e leis infraconstitucionais passíveis de aplicação para nortear a elaboração de leis e de políticas públicas; para indicar a melhor conduta das autoridades nos diferentes poderes; para subsidiar decisões políticas e judiciais.

É notória, no entanto, a lacuna existente nos marcos normativos nacionais quando se observam os Princípios de Liberdade Acadêmica propostos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os Princípios por sua vocação, são muito mais abrangentes —por expressamente se manifestar sobre diferentes matizes da liberdade acadêmica—, ao mesmo tempo em que demonstram maior profundidade de exposição.

O texto dos Princípios enfrenta temas que levam, atualmente, ao decaimento do país em índice de liberdade acadêmica. Por exemplo, expressamente prevê a proibição da censura e a excepcionalidade do uso do aparelho punitivo estatal. Estas disposições seriam suficientes para evitar o andamento de denúncias contra professores que divergem da condução política do país, como ocorreu nos

<sup>30</sup> Congresso Nacional. *Medida Provisória nº 914*. 2019. Disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140379>. Acesso em 22 de fev de 2023.

<sup>31</sup> Congresso Nacional. *Medida Provisória nº 979*. 2020. Disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142445>. Acesso em 22 de fev de 2023.

exemplos citados nesse trabalho, ou seja, se fossem efetivados por lei brasileira, os docentes estariam protegidos da censura e de punições independentemente das inclinações ideológicas de presidentes, governadores ou prefeitos.

Outro claro exemplo está na disposição dos Princípios que estabelece como interferência indevida as manifestações negativas e estigmatizantes sobre professores e instituições de ensino. Esse dispositivo não possui norma que se iguale no ordenamento jurídico brasileiro e, se aplicado, seria suficiente para evitar manifestações intempestivas sobre sistema de ensino, pessoas e instituições no país, melhorando assim a opinião pública e a valorização do ensino pela sociedade.

Como outros direitos fundamentais, é possível que a observância da liberdade acadêmica ou a reparação de sua inobservância precise ser assegurada pelo poder judiciário. A insuficiência da legislação brasileira pode ser suprida com maior utilização das normativas do Sistema Interamericano, bem como dos Princípios Interamericanos sobre Liberdade Acadêmica e Autonomia Universitária, tendo em vista que a Constituição Federal não exclui outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que o Brasil faça parte, de acordo com o art. 5º, LXXIX, §2º da CF. Os Princípios, por fim, podem informar a interpretação e atribuição de significado aos marcos normativos domésticos já existentes.

## Bibliografia

- Brasil. *Código Penal*. 1940. Disponível em [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del2848compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm). Acesso em 22 de fev de 2023.
- *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em 09 de out de 2022.
  - *Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm). Acesso em 09 de out de 2022.
  - *Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011*. 2011. Disponível em [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm) Acesso em 22 de fev. de 2023.
- Bola, Fernando. *Comissão pede cancelamento do termo de ajuste de conduta assinado por professores da UFPEL*. 2021. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/presidencia-da-cdhm-pede-ao-ministro-da-educacao-o-cancelamento-do-termo-de-ajuste-de-conduta-assinado-por-professores-da-ufpel>. Acesso em 28 de outubro de 2022.
- Câmara dos Deputados. *PL 1655/22*. 2022. Disponível em <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2328532>. Acesso em 22 de fev de 2023.

- Comissão Interamericana de Direitos Humanos. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. 1969. Disponível em: [https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao\\_americana.htm](https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm). Acesso em 09 de out 2022.
- *Princípios Interamericanos Sobre Libertad Académica Y Autonomía Universitaria*. 2021. Disponível em: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf). Acesso em 09 de out 2022.
  - *Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San Salvador"*. Disponível em: [http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo\\_de\\_san\\_salvador.htm](http://www.cidh.org/basicos/portugues/e.protocolo_de_san_salvador.htm). Acesso em 09 de out 2022.
  - *Situación de Derechos Humanos en Brasil*. 2021. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf>. Acesso em 09 de out de 2022.
- Congresso Nacional. *Medida Provisória nº 914*. 2019. Disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/140379>. Acesso em 22 de fev de 2023.
- *Medida Provisória nº 979*. 2020. Disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142445>. Acesso em 22 de fev de 2023.
- Mendes, Conrado Hübner. Aras é a antessala de Bolsonaro no TPI: Tribunal Penal Internacional tem no procurador-geral a omissão de que precisa. *Folha de S. Paulo*, 26 de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2021/01/aras-e-a-antessala-de-bolsonaro-no-tribunal-penal-internacional.shtml>. Acesso em: 17 out. 2022.
- Ministério da Educação. *Resolução CNE/CP nº 1*. 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/17810-2012-sp-1258713622#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CNE%2FCP%20n%C2%BA%201,Nacionais%20para%20a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental>. Acesso em 22 de fev de 2023
- Observatório do Conhecimento, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT) e Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade-SBPC. *Pesquisa nacional: A liberdade acadêmica está em risco no Brasil?* 2022. Rio de Janeiro: Observatório do conhecimento. Disponível em: <https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/21-destaques/4457-estudo-revela-que-liberdade-academica-esta-em-risco>. Acesso em 09 de out de 2022.
- Relatoria Especial para la Libertad de Expresión. *Comunicado de prensa R139/21*. 2021. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?IID=2&artID=1201>. Acesso em 09 de out 2022.
- Sarlet, Ingo Wolfgang, e Amanda Costa Thomé Travincas. 2016. O Direito Fundamental à liberdade acadêmica-Notas em torno de seu âmbito de proteção a ação e a elocução extramuros. *Espaço Jurídico Journal of Law [EJLL]* 17 (2):529-46. <https://doi.org/10.18593/ejll.v17i2.10328>
- Scholars at Risk (SAR). *Brazil: Decline in Academic Freedom Requires UN's Attention*. April 20, 2022. Disponível em: <https://www.scholarsatrisk.org/2022/04/brazil-decline-in-academic-freedom-requires-uns-attention/>. Acesso em: 17 out 2022.
- *Free to Think*. 2021. Disponível em <https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2021/12/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2021.pdf>. Acesso em 28 de outubro de 2022.
  - *Academic Freedom Monitoring Project (AFMP)*. 2018. Disponível em: <https://www.scholarsatrisk.org/report/2018-09-01-universidade-de-brasilia/>. Acesso em 22 de outubro de 2022.



# THE IMPACT OF INSTITUTIONAL GAPS ON AT-RISK SCHOLARS IN BRAZIL: TOWARD A COMPREHENSIVE, INTERSECTIONAL, AND CONTEXT-BASED FRAMEWORK

## *El impacto de los vacíos institucionales en académicas/xs y académicos en riesgo en Brasil: hacia un marco integral, interseccional y contextual*

ROSARIO FIGARI LAYUS AND CAMILA NOBREGA RABELLO ALVES

### **Summary**

In recent years, Brazil has found itself among a growing number of countries exhibiting deteriorating conditions for academic freedom (Observatório do Conhecimento, LAUT and SBPC, 2022; Scholars at Risk-SAR 2019, 2020, 2021; GPPI 2020). Scholars and civil society organizations have reported serious threats to academic freedom and violent attacks on the higher education and research community, including scholars, students, and staff over the past few years. Educational institutions are also directly targeted. Although the current president, Luiz Inácio Lula da Silva, has made commitments towards the democratization of the education system in the country, studies in the area show that structural changes in the sector will take time. In addition, previous research shows there is still a lack of information that could provide a better picture of the main targeted groups. What makes this situation more critical is that governmental bodies and academic institutions are usually unresponsive to threats and attacks faced by scholars. The article gives an overview of the situation of academic freedom in the country, especially through the end of 2022, under the previous government of Jair Bolsonaro. The study is situated in an intersectional and multidimensional perspective, crucial to evaluating how deficient institutional responses have differential impacts on different social groups, affecting some more severely than others and reproducing pre-existing logics of inequality and embedded power structures. The article also analyzes how the lack of appropriate responses from academic institutions can worsen the precarity of scholars facing serious risks.

**Keywords:** Brazil, scholars at risk, intersectionality, academic institutions, inequalities

### **Resumen**

En los últimos años Brasil ha sido uno de los países que atraviesan graves ataques y condicionamientos sociales y políticos para el ejercicio de la libertad académica. La comunidad académica, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han

denunciado las hostilidades que afectan tanto a la libertad académica como tal, así como a quienes forman parte de la comunidad de enseñanza superior e investigación. Dichos hostigamientos afectan a personas y, en muchos casos, a las mismas instituciones. Aunque el actual gobierno se ha comprometido a democratizar el sistema educativo del país, este cambio estructural requiere de tiempo. Sumado a esto, se destaca la ausencia de datos e investigaciones cuantitativas y cualitativas para mostrar los impactos diferenciales de dichos ataques como sobre quiénes son los grupos más afectados por estas dinámicas de hostigamiento. Una de las problemáticas claves en este contexto es el rol de organismos gubernamentales y de muchas instituciones académicas para dar respuestas eficaces y apropiadas ante estas situaciones. Con base en investigaciones y trabajo de campo realizado durante 2021 y 2022 en distintas ciudades de Brasil, el artículo ofrece un panorama de la situación de libertad académica en el país, focalizándose en el gobierno Bolsonaro, que culminó el 2022. El estudio, interseccional y multidimensional, evalúa cómo las respuestas institucionales deficientes tienen impactos diferenciales en los distintos grupos sociales reproduciendo lógicas preexistentes de desigualdad y estructuras de poder arraigadas. El artículo muestra cómo la falta de apoyo, prevención y solidaridad por parte de las instituciones académicas no solo son funcionales a dinámicas de desigualdad, sino que también pueden agravar el nivel el riesgo de quienes, en muchos casos, ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad y precariedad.

**Palabras clave:** Brasil, academia en riesgo, interseccionalidad, instituciones académicas, desigualdades.

#### **Author affiliation**

Name: Rosario Figari Layus

Institution: Justus Liebig University Giessen, Germany

Bio: Rosario Figari Layús is post-doctoral researcher and lecturer at the Chair of Peace Studies at the Justus Liebig University of Giessen in Germany. Rosario holds a PhD in Political Science from the Phillips University of Marburg. Previously she earned a master's degree in social sciences from Humboldt University of Berlin and a degree in sociology from the University of Buenos Aires. Her areas of work and research focus on human rights protection, human rights defenders, and protection programs, political and gender-based violence, transitional justice and peace and conflict studies.

E-mail: rosario.figari-layus@recht.uni-giessen.de

#### **Author affiliation**

Name: Camila Nobrega Rabello Alves

Institution: Otto Suhr Institute for Political Science, Free University of Berlin

Bio: A journalist and researcher specialized in gender issues and socio-environmental conflicts; she co-coordinates the research group "How to move beyond climate change narratives" at the Free University of Berlin, where she is also a lecturer and a Ph.D. Candidate. Alumni fellow at Scholars at Risk.

E-mail: Camila Nobrega: camilaalves@zedat.fu-berlin.de

## 1. INTRODUCTION

In recent years, Brazil has found itself among a growing number of countries exhibiting deteriorating conditions for academic freedom (Observatório do Conhecimento, LAUT and SBPC, 2022; Scholars at Risk-SAR 2019, 2020, 2021; GPPI 2020). “SOS Brazil: science under attack” was the headline used by the prestigious magazine *The Lancet* in 2021 to account for the growing hostilities against the scientific and academic community in Brazil. Under that title, epidemiologist Pedro Hallal, former dean of the Federal University of Pelotas, published an open letter denouncing the systematic official harassment and persecution of those academics who, through their research, question public policies harmful to the country.

In his letter, Hallal, who was also a target of harassment because of his findings regarding Covid 19, denounces the dramatic attacks against science in Brazil since the beginning of Bolsonaro’s presidency in 2019, with budget cuts and negationist discourses (Hallal 2021: 372). Hallal emphasizes that the government’s assaults have led Brazil to being second in the world in number of deaths from Covid-19. Since then, recent studies have shown a further decline of academic freedom.

Scholars and civil society organizations have reported increasing threats to academic freedom and violent attacks on the higher education and research community, including scholars, students, staff, and institutions over the past few years (Observatório do Conhecimento, LAUT and SBPC, 2022; Scholars at Risk-SAR 2019, 2020, 2021; GPPI 2020). However, the situation remains on the margins of public debate and neglected by official data.

Since January 2023, President-elect Luiz Inácio Lula da Silva has made commitments to the democratization of the education system in the country, but studies in the area show that structural changes in the sector take time. Moreover, appropriate data and other forms of dialogues are fundamental to guide and support the development of public policies and promote broader public debates. Indeed, in many countries, governmental bodies and academic institutions are usually unresponsive to threats and attacks faced by scholars. In order to address the research and policy gap this article sheds light on the fragile context of academic freedom in Brazil as well as on the most common university responses—and their outcomes—to dealing with their own scholars facing risk.

Our research was guided by some key questions: What are the main changes evident regarding the deterioration of academic freedom in Brazil? How is this deterioration of academic freedom perceived and experienced by researchers, professors, and other members of the academic community? How effective was the support provided to people in situations of risk, threat, or other forms of disruption to their work? Are there differences in the way people are affected? With the aim of answering these questions, this research situates the current Brazilian context in a broader international scope of academic freedom. As a second step, the study aims to unpack existing layers of power relations in the case of Brazil, while also maintaining the goal to contribute to a comprehensive, intersectional, and context-based perspective on academic freedom.

Over recent years, repressive practices such as the use of governmental powers to erode university autonomy, the judicial persecution of scholars who publicly express critical points of view, as well as growing threats and online harassment, are increasingly affecting the safety of higher education and research communities in Brazil. According to the Academic Freedom Index, Brazil shows a serious decline in the levels of academic freedom in the country from 2011 until 2021 (FAU and V-DEM 2022: 4). According to a survey conducted in 2022 with higher education faculty, researchers, and graduate students to evaluate harassment and threats, 58% of the respondents reported knowing people who have experienced undue limitations to, or interference with, their research or classes. Additionally, between 35% and 42% of the respondents affirmed they were forced to restrict or modify aspects of their own research and the content of their classes for fear of retaliation (Observatório do Conhecimento, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo LAUT et al. 2022: 2). Furthermore, 43% of respondents rated their institutions' procedures for dealing with reports of threats to academic freedom as poor or very poor (Ibid.: 5,7).

In their analysis of the increasing offline and online violence against scholars, some studies have noted that an anti-science perspective has been stimulated as part of the neoliberal project of the 21st century (Santini and Barros, 2022: 4; Latour, 2020). They recognize it as part of an attempt to reduce spaces for critical thinking and stop processes of democratization. In fact, as discussed below, starting in the 2000s, some progressive governments promoted a process of inclusion of marginalized groups by improving access to higher education and research. These groups have now also become a target of attacks and restrictions on academic freedom. For this reason, an intersectional approach is crucial to



evaluate the limits to academic freedom not only in scope, but in terms of the subjects and social groups affected.

Academic freedom has become one of the main targets of the ongoing hostilities, together with the independence of the judiciary, the freedom of the media, and the space for civil society organizations. However, in the Brazilian case, the situation has not gained much visibility yet. People working in academia are not usually perceived as a group at risk, as other civil society actors such as journalists, trade unionists, or human rights and environmental defenders clearly are.

This article contends that the responses from academic institutions show serious gaps that worsen the precarity of scholars facing serious risks. In turn, an intersectional perspective allows us to see how these deficient institutional responses have differential impacts on different social groups, affecting some more severely than others and reproducing pre-existing logics of inequality. Several studies and scholars have stressed how social stratification and divisions of class, race, gender, ethnicity, citizenship, sexuality and other kinds of marginalization are reflected in the access, position, and treatment of marginalized groups and individuals in the higher education system (Hill Collins and Bilge, 2016: 12) and how, in many cases, university dynamics contribute to reproducing those inequalities over time (Bourdieu and Passeron, 1990). This perspective is key in the analysis presented here.

This research used a qualitative hybrid methodology, based on data collection of secondary sources (scholarly literature on academic freedom, press articles, and NGO reports) as well as on digital and face-to-face fieldwork. From October 2021 until April 2022, 22 in-depth interviews were conducted with relevant actors and experts from different cities in Brazil such as Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, São Paulo Pelotas, Belém, and Santarém. Interviewees included university authorities, researchers, and lecturers at risk and in exile; experts involved in academic freedom initiatives; scholars at various career stages who have experienced censorship, disruption, or other attacks as a consequence of their work; and students. The methodology was informed by feminist approaches that allow the identification of layers of power and privilege not previously evident, pointing to additional ethical questions that usually are unveiled in this process (Ackerly and True, 2010).

Divided into four sections, this article will first draw on the multiple dimensions of attacks on academic freedom and scholars over the past decade, espe-

cially in the past four years in Brazil. The second section analyzes the national and international legal framework for the protection and support of academic freedom as well as states' obligations in this regard. The third section engages in an analysis of the results of the interviews conducted. It sheds light on the ambiguous role of universities and academic institutions when dealing with practices of harassment, violence or public statements, and authorities' accusations against their staff. In doing so, the section also provides some conclusions on the multidimensional consequences that these kinds of institutional gaps can have on those affected, who risk making their situation more vulnerable, and as well as how those gaps reproduce structural inequalities, especially in cases of scholars who belong to marginalized groups.

## 2. THE INTERSECTIONAL FRAGILITY OF ACADEMIC FREEDOM IN BRAZIL HISTORICALLY AND NOW: CONTINUITIES AND RUPTURES

The case of Brazil is a very particular one since, while it formally corresponds to a democracy, over recent years it featured strong authoritarian tendencies and diverse forms of oppression and intimidation. Many of these tendencies have been identified as part of the former far-right government of Jair Bolsonaro. They were evidenced by, for example, the presence of the largest number of military personnel in the Ministry of Education and in other ministries since the military dictatorship. Since 2019, Brazil has witnessed a rise in the number of killings and criminalization of political, human rights, and environmental activists (Global Witness 2021: 12) as well as an increase in the level of judicial and online harassment against researchers, students, and scholars who produce and disseminate critical knowledge in different disciplines.

Along with Bolsonaro's praise for the dictatorial regime of 1964-1985 (Phillips, 2019), his government has often undermined the relevance of freedom of expression and attacked the role of the media and academia, sometimes by institutional means, but mostly by amplifying depreciative discourse (GPPI 2020, SAR 2020, 2021). The 2018 presidential elections were a drastic turning point for academic freedom and for the country's higher education community. Some scholars and students were threatened and harassed, while others faced violent attacks. Bolsonaro and his administration have sought to exert control over higher education and research institutions through budget cuts as well as

emergency decrees aimed at giving himself and his minister of education greater power in the rector appointment process and in altering federal universities' own system of rector elections (SAR 2021: 18).

The deployment and use of accusations constitute a rhetorical strategy of governmental authorities to delegitimize and stigmatize researchers' work, especially when that work questions, either directly or indirectly, the policies and official positions of the former president Bolsonaro. These attacks encompass Covid-related research as well as other topics such as environmental issues that contradict official policy.

In many cases, a clear link can be identified between the types and causes of activism that come under more frequent attack and the topics of research and teaching. In fact, at least 27 activists were killed in Brazil in 2021 (Front Line Defenders 2021: 5). Most of the activists killed and threatened are those linked to the defense of human rights, environmental, land, and indigenous peoples' rights, and nearly always in the context of megaprojects, the extractive industry, and big business as well as the defense of women's and LGBTQI+'s rights (Front Line Defenders 2021).

These thematic axes are also often the target of attacks on academic freedom and scholars. Many of those academics who teach, research, and/or express themselves critically and publicly on issues related to gender-based violence, LGBTQI+ rights, environmental and judicial policies, and even health policies in the context of the pandemic, are at risk of becoming the target of various forms of attacks, such as aggressions on social networks, judicial harassment, public criticism and persecution by the government, and even assaults on physical integrity, just to mention a few (SAR 2020, 2021).

In this context, the lack of information on academic freedom from a gender and intersectional perspective is also striking. When it comes to the deployment of aggressions against scholars and academic freedom, it is crucial to include an intersectional analysis in order to understand attacks on specific marginalized groups, so that those cases are not taken as random or individualized (Hill Collins 2017; Hill Collins and Bilge 2016). Thus, it is necessary to examine interlinked oppressions and their impacts on people facing their gendered, racialized and classist forms. In addition, Mwenza Blell et al. (2022: 2) offer an intersectional approach that also addresses interlinked scenarios of precarity, neoliberalization, internationalization, digitalization, and various forms of

increased surveillance, censorship, and self-censorship, as well as cultures of silencing, to show that women and people of color are affected by the attacks on academic freedom in specific ways. Informed by these perspectives, Brazil is an important field for further investigation and examination of the process of deterioration of academic freedom in marginalized groups in society such as women of color, Indigenous women, and LGBTQI+ people. An intersectional perspective also helps to shape protection measures to guarantee academic freedom.

Against this background, the self-exile of researchers and university professors has become one of the main consequences of the above-mentioned hostile context for academia, as well as the consequences of their exile, either imposed or self-imposed. According to the data of the organization Scholars at Risk, it has received, since its foundation in 1999 until 2022, 52 requests for support from Brazilian professors. Of those requests, 48 were received after the beginning of the latest presidential campaign, and mainly after the election of the former president Jair Bolsonaro.

One example that provoked a public debate in the country was the case of anthropology Professor Débora Diniz, whose work focuses on reproductive health and the right to abortion (Bähre and Diniz, 2020). In 2018, some days before Diniz would participate as an expert witness in a hearing that addressed the decriminalization of abortion in the first 12 weeks of pregnancy at the Brazilian Supreme Court, she had to be placed under police protection as a result of threats against her life and intensive online harassment. Subsequently, the Brazilian police discovered plans of attacks against her by a right-wing extremist group (Idem), resulting in her going into exile. Diniz's case became well known at an international level and among cases of misogynist narrative practices of intimidation that intend to silence or force dissenting voices into exile (Kaul, 2021).

Despite alarming reports of harassment, threats, and other pressures suffered by Diniz and other scholars, data on the number of exiled researchers are still incipient. This was evidenced in the results of the interviews of the present research. In fact, several of the scholars interviewed for this research were abroad, since they had to leave the country due to hostilities against them, a situation described by them as one of "self-exile," although they do not have official refugee status at the country of arrival. In turn, while some in extreme situations of harassment have left the country, this is not possible for everyone. Many

researchers who would like to move away (even within Brazil itself) cannot do so since they lack the necessary financial, logistical, or social resources and, as shown in section 4, they do not have support from the institutions in which they work to help them relocate to other universities –elsewhere in Brazil or abroad– until the hostile situation subsides.

### 3. ACADEMIC FREEDOM, LEGAL FRAMEWORKS, AND INSTITUTIONAL OBLIGATIONS

Restrictions and attacks on critical scholars are not totally new in Brazil, however. The 21-year-long military dictatorship (1964-1985) was marked by censorship and repression against critical scholars, student movements and trade unions (among other critical groups) in a systematic way (GPPI 2020: 6). Since the government of Michel Temer (2016-2018), the socio-political conditions for academic freedom become very complex and challenging and further deteriorated under the Bolsonaro administration.

Paradoxically, the concept of academic freedom is not well known or used in the Latin American context. Hence, the implications of the restrictions on academic freedom are also frequently ignored. The concept was officially coined in the 1997 UNESCO Statement on Academic Freedom as “the right [of scholars and professors], without constriction by prescribed doctrine, to freedom, of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies” (UNESCO Statement 1997, Art. 27).

Thus, academic freedom refers to the right of universities and individual scholars to conduct research, teach, disseminate the findings of their work, and participate in public debates and express their opinions, even on matters that may be politically sensitive, without being targeted for suppression. Academic freedom enables scholars and professors not only to produce new knowledge and base the university curricula and their teaching on the most up-to-date scientific findings but also to participate in public debates, thereby improving the democratic competence of societies at large.

Academic freedom is protected by national legislation and international human rights law. The exercise of academic freedom is closely linked to the enjoyment of civil rights as citizens “including the right [of scholars and professors] to contribute to social change through freely expressing their opinion of state policies and of policies affecting higher education. They should not suffer any penalties simply because of the exercise of such rights” (UNESCO Statement 1997, Art. 26). Some recent changes in international conventions also expand the notion of academic freedom, such as General Comment No. 25 issued by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) in April 2020. General Comment No. 25 builds on Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which covers various aspects of the right to science, highlighting the role of freedom as crucial for academic research (Kinzelbach et al. 2020: 2).

In December 2021, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)—along with its Special Rapporteur for Freedom of Expression and its Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights—issued a Declaration of Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy. The declaration marks an advance toward the improvement of protection and safeguard mechanisms for academic freedom in the Americas. In its Declaration, the IACHR expressed its concern about allegations made in various countries in the Americas regarding repression against student groups and student unions; the harassment, attacks, and budget cuts affecting academic institutions; and other forms of retaliation against members of academic communities based on arbitrary or discriminatory measures. One of the most important points highlighted by the Declaration is the duty of the state to prevent and investigate these acts, punish the perpetrators, and ensure adequate protection and reparation measures to the victims (e.g., principles 5, 6, 9, 16). In turn, the declaration highlights that the responsibility for developing prevention and protection measures not only lies within states, but universities and academic institutions should also take affirmative action to ensure the exercise of academic freedom. However, as shown below, this is not the case so far in Brazil.

Brazil is bound not only by international legal instruments that establish the state’s duty to provide protection for academic freedom and to guarantee a safe and supportive environment for the work of the higher education and research community, but also by national legislation. Brazil’s Constitution contains ex-

press protections for academic freedom, noting that “teaching shall be provided on the basis of...” the “freedom to learn, teach, research and express thoughts, art and knowledge” (Article 206.2) and institutional autonomy (Articles 206 and 207). Similarly, the Law No. 9396 of 1996, known also as Basic Guidelines for Nacional Education, proclaims that education in the country shall be based on “the freedom to learn, teach, research and disseminate culture, thought, art and knowledge” (Article 3.2). Furthermore, Brazil is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which provides for the right to freedom of opinion and expression (Article 19), and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), which provides for the right to education (Article 13) and calls on state parties to “respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity” (Article 15(3)).

Additionally, the right to access information should guarantee that Brazilian citizens can follow the implementation of public policies related to the above-described rights. The transparency of information from governmental bodies would then have a key role in the development of mechanisms for ensuring academic freedom. The Brazilian Law No 12527, known as the “Right to Information Law,” entered into force in 2011 and requires public institutions to respond to requests for information within 20 days, with a maximum extension of up to 10 days. This law is one of the main mechanisms in the country that implements the right to access information, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights. Indeed, according to the Universal Declaration, access to information is considered an integral part of the right to freedom of expression, as recognized by Article 19, defined as the freedom “to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.<sup>1</sup> Since 2018, however, as described above, several government actions have significantly curtailed access to information of data that should be public according to the Constitution.

In sum, despite existing obligations under human rights law to protect academic freedom and scholars at risk, state bodies, universities, and academic institutions in Brazil do not seem to be taking the necessary measures to address the current situation of widespread harassment and protect scholars, as discussed in the next section.

---

<sup>1</sup> For more information see <https://www.unesco.org/en/communication-information/right-information/access-information-laws>. Last accessed on 10.01.2023

## 4. THE AMBIGUOUS ROLE OF BRAZILIAN ACADEMIC INSTITUTIONS

The data collected during this research shows that the role of academic institutions in Brazil—both universities and research institutes—is often ambiguous and contradictory. On the one hand, academic institutions, especially public ones, are undoubtedly victims of various types of attacks, whether implemented through political interventions on their autonomy, budget cuts, or police raids on university campuses. On the other hand, in most cases in which members of their educational community—that is, professors, researchers and students—are subjected to harassment or aggressions, institutional responses tend to be “lukewarm” or null and can even result in the revictimization of those affected.

While they are bound to issue proactive measures to support those attacked, academic institutions do so only reluctantly and in a vague manner, if they do anything at all. As explained below, this lack of an (appropriate) institutional response, which amounts to very limited action by academic institutions in some cases and a total lack of action in others, results in three main types of consequences for the scientific and educational community in Brazil: 1) the revictimization of those who have been a target of harassment or aggressions, 2) improvisation as an institutional practice due to the lack of protocols and adequate prevention, support, and protection measures, and 3) the individualization of their own safety.

### 4.1. The revictimization and unequal exposure of those at risk

The various attacks on researchers, professors, and students, and with them, on academic freedom in Brazil, are aggravated in most cases by a lack of adequate action by the academic institutions to which they belong, as well as a lack of protocols to follow. Most of those interviewed expressed their great disappointment at the treatment by and reactions of their institutions and the authorities to the attacks suffered. When asked how they defined these reactions, the interviewees mentioned indifference or no reaction at all, minimal symbolic support with some internal communication in the university or of a public nature, responsibility and/or questioning of the person suffering the hostilities (in some cases administrative procedures were even opened to investigate the



victim and the content of her/his classes and/or research), and the granting of temporary leaves, which, in many cases, was unsolicited.

The interviewees reported isolated cases of support from departments of the educational institutions, but even in those cases such support did not include the authorities. This leads to a situation where the desired result is reversed, to the effect that harassment escalates from individuals to entire research groups, including researchers in more vulnerable situations. These incidents occurred in cases in which research coordinators were targeted and started searching for help from higher levels of representation inside the universities. Even if they were provided with support for those specific cases, hostilities would go on by targeting other researchers, including junior researchers and even graduate students, who are in less protected positions in academic hierarchies. Along these lines, some witnesses point out that people coming from marginalized groups are more targeted inside research groups, which again highlights the presence of different layers of oppression operating in an intersectional manner.

In most cases, communication of support was the only action taken, which is symbolic and without any subsequent concrete measures. Without intending to diminish the value of such supportive reactions, e.g., public pronouncements rejecting the threats and aggressions, which are indisputably necessary, they should be considered as the minimum standard to adopt. This happens especially in view of the existence of national and international legal frameworks presented above, as well as the scenario of inequalities and vulnerabilities identified in the country. In most of the cases, institutional support excluded other types of assistance/aid, whether legal, financial, or psychological. These reactions (or inactions) on the part of academic institutions only aggravate the impacts of the aggressions suffered and revictimize those who suffered them. Another consequence is then the reinforcement of previously existing oppressive power structures.

Sabine Rupp (2003), who analyzes the damage caused by the actions of institutions in their response to various cases of violence, defines *secondary traumatization* as damage that occurred, not at the hands of the immediate perpetrator of violence, but indirectly through the behavior or actions of the occupational groups involved, persons in contact with the victims, or state institutions and agencies—in this context, the academic institution or university.

When institutions neglect attacks on scholars, students, and academic freedom at large, this not only sends a negative message to the academic and scientific community that they are unprotected and “on their own,” but it also entails that the victims of attacks become victims for a second time: the first time as victims of the aggression or harassment, the second time as victims of the institutional system that is incapable of action. This is particularly difficult for victimized scholars and one of the main reasons why many of them remain silent for years. In cases in which the academic institution opened internal procedures to investigate the causes of the attacks by investigating the work of the victim, they ended up generating conditions prone to stigmatize the victim. The victims’ effort to overcome the fear of reporting these kinds of incidents in their institutions or even in court goes unrewarded. In other words, the lack of adequate institutional responses might lead to secondary *traumatization* of the victims.

#### **4.2. Improvisation as an institutional practice: the lack of prevention and protection protocols**

Along with reactions of indifference to situations of harassment, most of the interviewees stressed that even in those cases in which the institution showed a certain willingness to support them, it was characterized by total improvisation. Although as previously described (see section II), attacks on academic freedom and scholars in Brazil have increased in recent years, universities react to each case as if it were “the first time”. Among the at-risk scholars interviewed, those who suffered threats and judicial harassment reported that their institutions did not know what to do and that they even asked those affected what to do. Although it is crucial to consider and include the perspectives of those at risk in evaluating support measures, institutions should not transfer their responsibility for providing an array of possible options/actions to the victims, who in many cases do not necessarily have the experience or knowledge about possible resources and are in a situation of emotional distress due to the attacks.

The reasons for the lack of roadmaps or protocols are manifold and interrelated. The first of them is the invisibility, minimization, or normalization of the severity of the situation of vulnerability experienced by those who have been victims of harassment and intimidation. While attitudes of denial do not recognize any situations of restriction or risk to scholars, attitudes of minimization

and normalization tend to recognize their existence while underestimating their seriousness. During the interviews, some justifications and conflicts about the acknowledgment of the problem emerged, with expressions like: “it’s a minor problem,” “not as serious as the one suffered by activists who are on the front line,” “it’s normal to be attacked if one works on certain issues,” “it’s normal if scholars expose themselves and publicly criticize the government,” etc. Those expressions were repeatedly part of the feedback some of the interviewees received when exchanging their experiences with colleagues or looking for support. This minimization or normalization of aggression and harassment is usually a common phenomenon in contexts in which violence is experienced as a daily reality.

As previously mentioned, Brazil is among the countries with the highest rates of attacks on human rights defenders and activists and, like many countries in the region, it suffers from chronic and structural violence (Pearce 2006; Galtung 1969), including high numbers of homicides, kidnappings, robberies, threats, discrimination, and corruption and high rates of social inequality and exclusion. Violence is thus part of the daily life of many sectors of the population, which leads to its normalization: resignation to learning to live with it and in many cases to building real or emotional walls of insensitivity to the suffering of others. In a context of overexposure to violence, the notion of “serious risk” is often linked to extreme damage to physical integrity, thus rendering invisible the multiple physical, emotional, mental, professional, and social impacts on the lives of those who have become targets of judicial and online harassment and public accusations by the authorities. The invisibility and normalization of restrictive and intimidating practices is a worrying issue in the case of individual scholars, but it becomes even more serious when those who normalize violence are the academic and state institutions whose duty is to address the problem. The normalization of attacks by academic institutions and authorities usually results not only in a failure to recognize the seriousness of the problem but also in a lack of solidarity and empathy with the victims and in the non-implementation of protection and support measures.

Another of the most frequent arguments advanced to justify the inaction and the absence of protocols for these cases is the lack of budget, as was particularly highlighted in interviews with university authorities. While it is true that the education system in Brazil has major budget problems, which was aggravated by cuts and threats of more cuts by the Bolsonaro government in recent years,

the budget is not just a financial issue. The allocation of economic resources (including personnel, offices, logistical aspects, material resources, etc.) is linked to the political will of the institution, which is in turn derived from the relevance assigned to the problem in question.

### 4.3. The individualization of security

The lack of appropriate institutional support for threatened scholars leads not only to their revictimization but also an excessive overload, as they suddenly find themselves dealing with the different impacts of the aggressions in their lives. This involves a displacement of the responsibility of the state and academic institutions toward the victims, who usually need legal advice and representation, psychological and medical support for themselves and their families, and financial assistance, among other things.

As a result of legal accusations or constant harassment in social networks and in public, many of the scholars interviewed stated that they had to pay the costs for legal advice and representation, as well as for professional psychological support for themselves and their families. In several cases, due to the fear that the threats would intensify, several interviewees stated that they had to take various security measures in their homes, such as installing security cameras. All this resulted in an emotional and financial overload for which they had no institutional support. In fact, some interviewees commented that when they urged their institutions to assist them in dealing with these expenses, most of the institutions declined to do so, implying that it was a “personal” issue and denying that the situation of vulnerability was the result of the victim’s research or teaching activity. In referring to this situation, one of the interviewees said, “they left me alone”.

In this sense, criteria of class, race, gender, and ethnicity also play a key role and highlight layers of challenges in dealing with the scenario of attacks. In an interview, an Indigenous student at a university in the Brazilian Amazon said: “for us, the difficulties add up. Not only is there no protection in the case of attacks, but scholarships for Indigenous peoples and Black people suffered different financial cuts in the past years. In other words, our permanence in the Brazilian university has suffered several attacks”. Institutional omissions/inactions are not only limited to lack of financial assistance but also extend to

much empathic, logistical, and operational type of aid. For example, if it cannot grant support itself, the institution could provide some accompaniment by giving information and contacts in national or international organizations or contacting people who can provide that information. In most cases in which the interviewees received some support, it came from university unions, which in some cases provided free legal advice.

Most researchers, however, report a sense of isolation when trying to find out how to deal with forms of online and offline harassment and searching for protection measures. “I’ve suffered many virtual attacks and I had to deal with them alone, closing my social media accounts and stopping my publications about my research results,” said an interviewed scholar. Women researchers and LGBTQI+ people report specifically forms of attacks that are more personal and relate directly to gender and sexual orientation. “Some attacks are on my body, threatening me of, for example, sexual violence,” said another female researcher. Both point out that these situations do not occur with their cisgender male colleagues in similar circumstances.

As mentioned above, some scholars have been forced to leave the country to avoid harassment and, in those cases, funding and professional networks play an essential role. However, Brazilian universities do not seem to be prepared for these cases either. There are no inter-university cooperation programs between Brazilian or Latin American Universities (or with other regions) to enable those who have suffered threats to relocate for a certain period to other academic institutions so that they can go on with their academic work and have financial and logistical support.

Brazilian universities have been unable to provide support for scholars to continue with their personal and professional life under safe conditions. Several interviewees stated that they had to look for options on their own by using their personal contacts in other countries or building new ones, which in many cases was extremely difficult. Even when the scholar at risk gets some scholarship or financial aid to be received by an institution abroad, this initial support in the host country is precarious and usually lasts for a short period of time, ranging from 3 months to 2 years at best, without many more sustainable possibilities—especially because of the way many of these university systems in the global north work, with a series of temporary contracts. In turn, the fact that scholars have spent a couple of years abroad does not mean that the security situation in the country of origin has improved, so the person cannot return when the support

program ends. As a result of such difficulties, many scholars in exile have been unable to continue with their academic work or are now unemployed. This has undoubtedly aggravated their situation of vulnerability and stress.

Once more, the absence of institutional intervention leads to the intensification of the already existing differences of class, gender, ethnicity, and other inter-sectional discriminations in the impact of violence and the strategies that each scholar can implement to address them. In these cases, it is noticeable that those researchers from renowned universities—especially those located in the South and Southeast of the country—with a knowledge of foreign languages and more university degrees and international contacts, have much more social capital to secure protection and care measures than those who work in universities or institutions in other regions, for example, in the Amazon region. As result, academics who work on more local issues and belong to historically marginalized groups in Brazil have fewer possibilities of support. This factor also calls into question the perspective from which academics at risk are provided with protection. Interviewees identify what some have called “an elitist” character in some protection measures, as they do not consider the different contexts and livelihoods. In another interview with a professor from a university in the Amazon region, the concept of protection was described as the result of an apparently “neutral point of view, which carries the perspective of white men from urban areas”.

In this sense, many of the scholars at risk interviewed who live in rural environments pointed to the lack of support options for them to continue to work and live in their territories or in the same region, rather than being relocated. “My life is connected to the territory where I live, we need a kind of support that understands that” said one interviewee, an Indigenous graduate student.

## 5. FINAL CONSIDERATIONS

Finally, it is crucial to stress that restrictions and attacks on research and higher education harm not only the individuals directly targeted or the institutions where they teach, research and study, but also entire societies. They shrink everyone’s space to think, question, and share ideas freely and safely, impairing public discourse and damaging social, political, cultural and economic development. The state has a key role in safeguarding the values and practices of academic freedom in its multiple dimensions. There are valuable documents and reports from va-

rious organizations with recommendations for states to protect academic freedom in Brazil (see e.g., SAR 2021, GPPI 2020), as well as academic studies that have highlighted recently the relevance of the theme in the country.

This study also points out the importance of generating disaggregated data analysis with a focus on different social groups. For this, further research with an intersectional approach in its methodological and theoretical analysis is required to identify not only the different impacts of attacks but also how the lack of adequate institutional support impacts different and unequal population groups. The findings of this research emphasize that there are many coexisting realities in Brazilian universities and that issues of race, gender, sexual orientation, class, ethnicity, among others, can have a significant impact on guarantees of academic freedom or increasing the risks to and restrictions on the same.

The treatment of these situations as isolated cases hinders their identification as a recurring symptom of the state of various institutions in the country. We therefore need a combination of all these different perspectives to enable a broadening and strengthening of the connections between all these documented cases.

## Bibliography

- Ackerly, B., and True, J. (2010): *Doing Feminist Research in Political and Social Science*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bähre, E; Diniz, D. (2020). "Women's Rights and Misogyny in Brazil: An Interview with Debora Diniz". *Anthropology Today* 36 (2): 17-20.
- Blell, M., et al. (2022): A one-sided view of the world': Women of colour at the intersections of academic freedom. *The International Journal of Human Rights*. Vol. 26, (10): 1822-1841. <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2041601>
- Borgh, C, and Terwindt.C. (2012): Shrinking operational space of NGOs –a framework of analysis. *Development in practice* 22 (8): 1065-1081.
- Bourdieu, P., and Passeron, J. C. (1990): *Reproduction in Education, Society and culture*. Sage Publications
- Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo-USP (2018): Relatório Final. São Paulo. (Relatório da Comissão Verdade da Universidade de São Paulo (USP); V. 1. CNV-Comissão Nacional da Verdade (2017): Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Available at: [cnv.memoriasreveladas.gov.br](http://cnv.memoriasreveladas.gov.br) (Accessed 15 January 2023).
- FAU and V-DEM (2022): Academic Freedom Index 2022. Available at: [www.pol.phil.fau.de/files/2022/03/afi-update-2022.pdf](http://www.pol.phil.fau.de/files/2022/03/afi-update-2022.pdf) (Accessed 15 January 2023).
- Front Line Defenders (2021): Global Analysis 2021. Available at: [www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0](http://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0) (Accessed 15 February 2023).

- GPPI-Global Public Policy Institute (2020): Academic Freedom in Brazil. A Case Study on Recent Developments. Available at: [www.gppi.net/media/GPPi\\_LAUT\\_2020\\_Academic\\_Freedom\\_in\\_Brazil.pdf](http://www.gppi.net/media/GPPi_LAUT_2020_Academic_Freedom_in_Brazil.pdf) (Accessed 15 February 2023).
- Global Witness (2021): Las Line of Defense. Available at: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/> (Accessed 15 January 2023).
- Hallel, P. (2021): "SOS Brazil: democracy under attack". *Lancet* 30;397(10272):373-37
- Hill Collins, P. (2017): On violence, intersectionality and transversal politics. *Ethnic and Racial Studies* 40 (9): 1460-73.
- Hill Collins, P. and Bilge, S. (2016): *Intersectionality*. Cambridge. Polity Press.
- Kaul, N. (2021) The Misogyny of Authoritarians in Contemporary Democracies, *International Studies Review*, Volume 23, Issue 4, Pages 1619-1645
- Kinzelbach, K., Ilyas S., Janika Spannagel, and Robert Quinn (2020): *Free Universities. Putting the Academic Freedom Index into Action*. Global Public Policy Institute Report.
- Latour, B. (2020): Onde aterrar?: como se orientar politicamente no antropoceno. Bazar do Tempo Produções e Empreendimentos Culturais LTDA.
- Observatório do Conhecimento, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (LAUT), Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade (SBPC) SBPC (2022): Pesquisa Nacional: A liberdade acadêmica está em risco no Brasil?(Relatório). Rio de Janeiro, Observatório do Conhecimento. Available at: <https://www.apufsc.org.br/wpcontent/uploads/2022/08/relatorio-liberdade-academica.pdf>. (Accessed 15 January 2023).
- Rupp, S. (2003): Sekundäre Traumatisierung durch Behördenprozesse. In *Fachtagung: Nachhalter Opferchutz durch interdisziplinäre Zusammenarbeit*: 30-52.
- Santini, R. M., and Barros, C. E. (2022): Negacionismo climático E desinformação Online: Uma revisão De Escopo. *Liinc Em Revista* 18 (1): e5948.
- SAR-Scholars at Risk (2021): *Free to Think 2021*. Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. Available at: [www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2021/12/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2021.pdf](http://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2021/12/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2021.pdf) (Accessed 15 January 2023).
- SAR-Scholars at Risk (2020): *Free to Think 2020*. Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. Available at: [www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2020/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2020.pdf](http://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2020/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2020.pdf) (Accessed 15 January 2023).
- SAR-Scholars at Risk (2019): *Free to Think 2019*. Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. Available at: [www.scholarsatrisk.org/wpcontent/uploads/2019/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2019.pdf](http://www.scholarsatrisk.org/wpcontent/uploads/2019/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2019.pdf) (Accessed 15 January 2023).
- SAR-Scholars at Risk (2018): *Free to Think 2018*. Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project. Available at: [www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2019/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2019.pdf](http://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2019/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-2019.pdf) (Accessed 1. January 2023).
- United Nations General Assembly (2020): *Report of the Special Rapporteur on the Promotion And Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. Available at: [N2019786.pdf](https://www.unhcr.org/refugees/pdf/N2019786.pdf) (Accessed 15 January 2023).

### **Legislation**

Decree No. 9690

Law No. 12527

UNESCO Statement 1997, Art. 27

LEI N° 9.394, 20 December 1996. Available at: [Documento1 \(mec.gov.br\)](http://documentos1.mec.gov.br) (Accessed 15 January 2023)



# UNITED STATES ACADEMIC FREEDOM IN REGIONAL AND GLOBAL CONTEXTS

## *La libertad académica en Estados Unidos en comparativa con contextos regionales y mundiales*

EVE DARIAN-SMITH

*University of California, Irvine*

*United States*

### **Abstract**

Attacks on academic freedom in the United States are rapidly escalating. However, analyses of the problem are framed by a national context and the particularities of its laws and politics. This essay seeks to situate what is going on in the United States within the wider regional context of the Americas. It links the global lean toward antidemocracy with the global attack on academic freedom. It argues that what is going on in the United States is not unique, and that the turn toward authoritarian governance under the former Trump administration shares similarities with governance in countries such as Brazil, Mexico, Nicaragua, and Venezuela. The essay briefly discusses the reduction of academic freedom from a collective societal right to an individual right of free speech. The overall objective is to highlight how American scholars and professionals can learn from societies facing similar strategies of intellectual oppression and censorship. It concludes by underscoring the value of the *Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy* for rethinking and reframing the challenges to academic freedom in the United States and other purported liberal democracies in the global north.

**Keywords:** antidemocracy, censorship, public protest, individual and collective rights

### **Resumen**

Los ataques a la libertad académica en los Estados Unidos están aumentando rápidamente. Sin embargo, los análisis de este fenómeno se enmarcan en un contexto nacional y en las particularidades de sus leyes y políticas. Este ensayo pretende situar lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el contexto regional más amplio de las Américas, al vincular la tendencia mundial hacia la antidemocracia con el ataque mundial a la libertad académica. Se sostiene que lo que está sucediendo en Estados Unidos no es único, y que el giro hacia la gobernanza autoritaria bajo la anterior administración Trump comparte similitudes con la gobernanza en países como Brasil, México, Nicaragua y Venezuela. El ensayo analiza brevemente la reducción de la libertad académica de un derecho colectivo de la sociedad a un derecho individual de libertad de expresión. El objetivo es destacar cómo los académicos y profesionales

estadounidenses pueden aprender de sociedades que se enfrentan a estrategias similares de opresión y censura intelectual. Concluye subrayando el valor de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria para repensar y replantear los desafíos a la libertad académica en Estados Unidos y otras supuestas democracias liberales del norte global.

**Palabras clave:** antidemocracia, censura, protesta pública, derechos individuales y colectivos

### **Author affiliation**

Name: Eve Darian-Smith

Institution: University of California, Irvine (United States)

Bio: Eve Darian-Smith is Professor and Chair of Global Studies & International Studies at the University of California, Irvine. She is an interdisciplinary scholar trained in law, history and anthropology and is interested in issues of postcolonialism, human rights, legal pluralism, and democracy. She is an award-winning author and teacher and has published widely including *The Global Turn: Theories, Research Designs and Methods for Global Studies* (2017) and *Global Burning: Rising Antidemocracy and the Climate Crisis* (2022) which won the Betty and Alfred McClung Lee Book Award from the Association of Humanist Sociology.

E-mail: edarian@uci.edu

## 1. INTRODUCTION<sup>1</sup>

Today in the United States, higher education is beset by bitter partisan politics. Attacking teachers, disinviting guest speakers, policing the curriculum, and denying tenure to outspoken faculty have become commonplace across the country, particularly since 2016. On the political left, these events are understood as part of a backlash against “woke” liberal scholars, supposedly intent on indoctrinating younger generations with progressive thoughts. On the far right, universities are seen as challenging the status quo, questioning foundational myths of American exceptionalism, and threatening a romanticized white national identity. Whatever the political side of the debate one takes, one consequence of the former Trump administration is that universities have once again become intense battlegrounds over the concept of academic freedom, and by extension, the right to free speech.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> This essay draws from my forthcoming book titled *Policing the Mind: Higher Education and Academic Freedom Under Attack* (Johns Hopkins University Press).

<sup>2</sup> In the United States there were key moments throughout the twentieth century when academic freedom, and attacks on education at all levels, became particularly evident: 1910s with the threat of

In response to this escalating conflict there has been an outpouring of scholarship on the value of academic freedom, its relationship to the constitutional protection of free speech, and its central role in upholding democratic principles (Chemerinsky and Gillman 2018; Whittington 2018; Wallach 2019; Reichman 2021). Unfortunately, these scholarly commentaries can be hard to follow by students and faculty as well as the wider public. Moreover, the nationalist lens on this issue, framed by partisan politics and constitutional discourse, ignores a broader global conflict over higher education.

This essay proposes a different approach by situating what is going on in the United States within regional and global contexts. Its overall argument is twofold. First, I argue that what is happening in the United States is deeply interconnected with what is happening in other countries also experiencing the rise of far-right politicians and political strategies associated with authoritarianism. These strategies are often shared by antidemocratic leaders, and strive to control what is taught in universities, push repressive ideological perspectives, and curb student and faculty protest against those in power. Second, I argue that in recognizing the United States as part of a global attack on higher education, scholars may be able to learn from other countries responding to similar attacks and rethink how academic freedom is discussed and legally protected. Specifically, I ask how does the *Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy* shift current discussions about academic freedom in the United States? Moreover, given the outsize dominance of US higher education around the world, how may these conversations within America also impact thinking about academic freedom in far-right regimes in Europe and other countries of the global north?

In what follows, I discuss the concept of academic freedom in the post-WWII era and its conceptualization as a global common good. I then look to the United States and explore how this concept has become increasingly narrow in conception and practice since the mid-twentieth century. I discuss attacks on higher education in the United States, focusing on Florida and the aggressive activities of Governor DeSantis as representative of an oppressive wave to curtail university scholarship and teaching. I ask how, and in what ways, does the *Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy* differ from

---

communism; 1950s and McCarthyism; 1960s in relation to the civil rights movement; and again, in the 1980s with the attack on public education under neoliberalism.

how academic freedom is currently talked about in the United States? How can these regional principles shift the conversation to better protect and promote academic freedom from widespread attacks by the far-right?

My concluding argument—and the overarching point of the essay—is that academic freedom and the promotion of critical scholarship manifests materially in people’s abilities to ask probing questions, learn from alternative worldviews, voice their opinions in the public arena, and if necessary, protest growing authoritarian conditions. Without the protections of academic freedom, students, faculty and university administrators are increasingly vulnerable to oversight, censorship and political interference in what they say and do. Given the worldwide lean toward antidemocracy, I argue that the global attack on academic freedom joins climate degradation, mass migration, pandemics, and structural racism as one of the most pressing challenges of our times.

## 2. DEFINING ACADEMIC FREEDOM

As Henry Reichman argues in his book *Understanding Academic Freedom* (2021), the meaning of academic freedom is complicated in practice and often depends on specific institutional and legal circumstances. However, in theory academic freedom is a simple idea. It is not reducible to a civil right like the freedom of expression, which in the United States is protected under the constitution. Rather, academic freedom is more encompassing in that it belongs to the whole academic profession to pursue inquiry and teach freely —“it functions ultimately as the collective freedom of the scholarly community to govern itself in the interest of serving the common good in a democratic society” (Reichman 2021:4).

Importantly, a holistic concept of academic freedom protects scholars and universities from political intervention and censure by state and religious authorities. In other words, academic freedom is not just about the individual rights of scholars or students, but also necessarily includes the autonomy of the university to provide the intellectual space in which academic freedom can be practiced. As the political philosopher Judith Butler writes, “Academic freedom is both a right and an obligation. It allows faculty to pursue lines of research and modes of thought without interference from government or other external authorities”. She goes on, it also obliges scholars to secure “the task of the university to preserve and support critical thought, even when it is not in line with official views of the

state or other external institutions” (Butler 2017:857). In turn, notes David Kaye, former UN Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, “states are under a positive obligation to create a general enabling environment for seeking, receiving and imparting information and ideas. Institutional protection and autonomy are a part of that enabling environment” (Kaye 2020:6).

The notion of a collective academic freedom (to include scholarly freedom to inquire, teach and publish and institutional autonomy to protect that freedom) was endorsed by the American Association of University Professors in 1940 and is reflected in its first principle on academic freedom that reads: “Teachers are entitled to *full freedom* in research and in the publication of the result” (AAUP 1940). As argued by Eva Cherniavsky, professor of American Studies, the AAUP’s statement drew its inspiration from the nineteenth century education reforms established in Berlin which drew on Wilhelm von Humboldt’s twin concepts of *Lehrfreiheit* (freedom to teach) and *Lernfreiheit* (freedom to learn) under the rubric of *Akademische Freiheit* (academic freedom) (Cherniavsky 2021). The Humboldtian ideal was embraced in the United States by educators including the philosopher Charles Sanders Peirce who praised the German system for advancing knowledge (rather than simply being a training institution) in a lecture he gave at Harvard in 1898.

### 3. ACADEMIC FREEDOM IN GLOBAL HISTORICAL CONTEXT

As a holistic concept, academic freedom includes individual rights as well as institutional and state protections of those rights. In the modern era, academic freedom became a hallmark of liberal democratic ideology and was widely considered essential in promoting and maintaining inclusive and equitable democratic societies.<sup>3</sup> In Germany in the 1930s under Hitler, scientific research that was not in line with the National Socialist Party was outlawed and scholars were persecuted under the fascist regime. The UK Council for At-Risk Academics was established in 1933 to offer safety to hundreds of German scholars fleeing their homelands. This organization and others such as the International Institute for Education (established in 1919) helped promote the value of

<sup>3</sup> Notes David Kaye, “without academic freedom, all societies lose one of the essential elements of democratic self-governance: the capacity for self-reflection, for knowledge generation, and for a constant search for improvements of people’s lives and social conditions” (Kaye 2020:21).

democracy through the defending of academic freedom and the free exchange of ideas (Samuels 2019; Newman 2020).

By the mid-twentieth century, after two devastating world wars, defending academic freedom from possible future attacks by oppressive governmental interference took on great urgency. Linking academic freedom to the idea of global democracy, strategies were designed to sustain scholarly independence despite the persecution of scholars within any one country. In the wake of WWII, and amidst decolonial independence movements in Africa and Latin America, academic freedom was granted recognition and protection under international law.<sup>4</sup> At a UNESCO conference convened in 1950, titled “Universities of the World”, guiding principles were established for the public university: it must enable knowledge to be pursued openly, it must tolerate divergent opinions and resist state interference, and it must promote the “principles of freedom and justice, of human dignity and solidarity, and to develop mutually material and moral aid on an international level”. In other words, universities were understood to have a global role in supporting each other across national borders in defense of scholars’ academic freedom to promote democracy, justice and freedom for all.

The idea of universities around the world working together in defense of global democratic principles is arguably absent in the contemporary public imagination. Today, there has been a dramatic rise in antidemocratic regimes around the world. In many cases, core principles of democracy, such as free and fair elections, uncensored media, and an independent judiciary, are under attack (V-Dem 2022; Naim 2022). And with the global rise of radical far-right leaders, universities and higher education in general have become sites of political and social conflict. Funding for public education has become increasingly restricted and censorship and persecution of scholars escalated. We see this in wealthy industrialized countries such as the United States, Britain, and Australia, as well as in Brazil and across the Americas, Middle East, South Asia, Europe, and Africa. According to the most recent *Academic Freedom Index*, “37% of the world’s population now live in countries with recent drops in academic freedom: almost two in five people globally” (*Academic Freedom Index* 2022:3).

Today’s far-right political landscape is dominated by ultra-nationalist sentiment expressed through political campaigns such as “Make America Great

---

<sup>4</sup> United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948 Article 26) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966 Article 13).

Again”, “Make Brazil Great Again”, and “Make Poland Great Again”. These slogans evoke an essentialized and homogenous citizenry and are antithetical to diverse and inclusive societies. These slogans also reflect escalating national competition among countries, undermining efforts to think in terms of global cooperation and collaboration. This situation is compounded by the growing socioeconomic inequalities between the global north and global south where societies are disproportionately impacted by the climate emergency and COVID-19 pandemic, and related poverty, famine, and public health crises. The Russian invasion of Ukraine has furthered global political and economic instability and resurrected Cold War rhetoric and the threat of nuclearization. In the contemporary context, earlier international strategies that emerged in the immediate post-WWII period to promote global cooperation, democracy and academic freedom seem not only quaint and naïve, but irrelevant.

In sum, over the past seventy years there has been a dramatic transition in social attitudes at national and international levels regarding academic freedom. Academic freedom has gone from being a global common good worthy of protections in international law, to academic freedom being considered irrelevant, problematic, and even a national threat in a growing number of countries. How did this transition occur and what can we learn from the past in thinking about how to confront attacks on public education today? How can we revive the value of academic freedom and shift political conversations and public imaginations to recognize independent and critical thinking as central to representative, inclusive, and socially just societies?

#### **4. HIGHER EDUCATION AS A NATIONAL COMMODITY IN THE UNITED STATES**

As discussed above, in the immediate post WWII era there emerged international concerns to protect scholars and promote academic freedom around the world. But within the United States, there was a countervailing movement to promote domestic scholars and universities as sites of national prestige and highlight American knowledge on an international stage. This ambition reflected the country’s postwar economic boom which lay in stark contrast to many European countries recovering from two devastating world wars, and many colonial societies preoccupied with establishing national independence. During the war years, and particularly in the years immediately following, the

United States ramped up its industrial capacities and became a major player in the global political economy. Higher education was considered vital to this developing domestic trajectory of economic growth and political power.

However, higher education was also seen as vital to expanding United States power beyond its borders that that reflected Cold War politics and imperial expansion into Latin America, Africa and the Middle East. This helps explain why the Ford Foundation, Rockefeller Foundation, and Carnegie Corporation of New York collectively sponsored international studies and area studies as a matter of public policy. It also points to the Higher Education Act of 1965 which provided federal support to a wide range of academic units including African Studies, Asian Studies, and European Studies (Darian-Smith and McCarty 2017:17; Kamola 2019). This new knowledge production about foreign countries and regions of the world was regarded as vitally important to usurping rising anticolonial movements, as well as further overseas resource extraction, industrial capacities, and export markets.

United States expansionist aspirations with respect to higher education saw the development of two complementary strategies on the domestic front –mass education and elite education. In terms of mass education, the GI Bill passed in Congress in 1944, providing tuition and living expenses to millions of war veterans returning from fighting in Europe (Altschuler and Blumin 2009; Thelin 2019:262-271). The GI Bill helped make higher education available to many previously denied such opportunities. This effort to creating a more equitable society was echoed in the report “Higher Education for American Democracy”, issued by the President’s Commission on Higher Education in 1947.<sup>5</sup> The GI Bill also spurred an extraordinary growth in universities and colleges to accommodate veterans and their families moving westward to take advantage of cheap housing and embrace the mythical American dream (Adams 2000; Hutcheson and Kidder 2011). The University of California system that rapidly expanded in

---

<sup>5</sup> Initially, the higher education industry and its focus on providing for veterans favored men who far outnumbered women serving in WWII. However, the expansion of universities and state and community colleges throughout the 1960s and 1970s did open opportunities to women and more diverse students from a range of ethnic and socioeconomic backgrounds (Hutcheson, Gasman and Sanders-McMurry 2011). That being said, expansion of higher education in the United States was deeply entangled with settler colonialism, land-grabbing and dispossession. The enduring legacies of inequality and racism that were foundation to land-grant universities continue to impact campuses to this day (Fanshel 2021; Mettler 2014).



the late 1950s exemplified this booming higher education industry and demand from rapid population growth.<sup>6</sup>

The second strategy was to make elite American universities internationally competitive in the applied sciences such as chemistry, biology and physics, often linked to advances in military defense. This involved developing federally funded granting agencies such as the Department of Defense (est. 1947) and National Science Foundation (est. 1950) that would contract grants to elite universities who had the faculty expertise and resources capable of “Big Science”. As the historian of education John Thelin notes, the wartime Manhattan Project at the University of Chicago was a good model for this kind of state/university scientific enterprise (Thelin 2019:259, 272). While some elite universities flourished under the new system such as Stanford, Caltech and MIT, other universities had to make radical adjustments such as Harvard and Yale (Lowen 1997). These latter institutions had to come to terms with the realization that to maintain academic leadership they would have to increasingly rely upon federal funding for large-scale applied research projects.

Valuing faculty expertise—particularly scientific expertise—not as a collective societal good but as a measure of national power and university prestige forever altered the landscapes of higher education in the United States. The objectives behind the pursuit of learning and the advancement of knowledge were now more clearly articulated in terms of national defense and economic power. Moreover, the role of the federal government in shaping what, why and how learning occurred in the classroom became less ambiguous. Stating this differently, embedded relations between the higher education community and the federal government were less deniable. In material terms, it meant that “an external federal agency had the power to alter campus governance and institutional mission, including essential tenants of academic freedom” (Thelin 2019:274).

---

<sup>6</sup> According to Peter Drucker the trigger for what we now call the knowledge economy was “the American G.I. Bill of Rights after World War II, which gave every returning American soldier the money to attend a university—something that would have made absolutely no sense only thirty years earlier, at the end of World War I. The G.I. Bill of Rights—and the enthusiastic response to it on the part of America’s veterans—signaled the shift to the knowledge society. Future historians may well consider it the most important event of the 20th century” (Drucker 1993:).

## 5. ACADEMIC FREEDOM/INDIVIDUAL FREEDOM

In 1951, William Buckley, a student at Yale, wrote a highly controversial essay titled *God and Man at Yale: The Superstitions of Academic Freedom* where he denounced what he claimed was anti-capitalist and anti-Christian “collectivist” thinking being taught there (Buckley 1951). The book was well received by the rising conservative movement that Buckley would go on to help establish. But the book also received criticism. Wrote McGeorge Bundy, a leading Harvard scholar at the time, “The book winds up with a violent attack on the whole concept of academic freedom. It is in keeping with the rest of the volume that Mr. Buckley does not seem to know what academic freedom is” (Bundy 1951).<sup>7</sup>

Buckley’s dismissal of academic freedom and his overall anti-intellectual conservative position resonated with Cold War geopolitical tensions. Within higher education there had long been suspicion of any faculty member with communist affiliations, but during the mid to late 1940s fears escalated that communism was being taught in classrooms and universities were becoming breeding grounds of indoctrination (Schrecker 1980). Senator Joseph McCarthy’s House Un-American Activities Committee was established in 1945 and was emblematic of a campaign against “disloyalty” that included investigating journalists, Hollywood figures, unionists, as well as scholars deemed to have connections with the Communist Party.

McCarthyism spearheaded a much wider set of repressive measures implemented by local university presidents and administrators, trustee boards, city boards, and state legislators (Schrecker 1986). There was widespread consensus that Communist teachers were disqualified intellectually and professionally. Many academics thought that when their colleagues were investigated and chose not to answer by using their constitutional Fifth Amendment rights—as did many in the entertainment business—they were bringing shame on their universities and threatened federal funding (Schrecker 1980:320). Overall, both public and private universities were quick to fire or not rehire any professor associated with communism. It is estimated that about 600 educators at all levels lost their jobs. But the chilling effect on intellectual thinking through

---

<sup>7</sup> Note that a few years later Bundy in 1954, when Dean of Harvard’s Faculty of Arts and Sciences, he succumbed to the pressures of McCarthyism and didn’t reappoint Professor Sigmund Diamond because he refused to give names to the FBI (Schrecker 1980:313).

self-censorship was widespread and “[t]hough not quantifiable, this may have been the greatest tragedy of McCarthyism’s effect on academia” (Aby 2009:122).

Throughout the 1940s and 1950s, the widespread failure by faculty to protect their university’s institutional autonomy permanently redefined the concept of academic freedom. It went from being a global societal good defended by universities around the world, to being a singular right claimed by a faculty member to think and speak as an individual. Academic freedom today—at least in the United States and other countries in the global north—is typically discussed in terms of an individual’s right and is distinct from a university’s obligation to protect institutional autonomy. But as Eva Cherniavsky has powerfully argued, this approach is “a profound misinterpretation of what academic *freedom* most fundamentally represents. Academic freedom is not about the freedom of individual academics to say whatever they want—rather it defines the *collective freedom of the faculty* to set the norms of academic debate, free from interference by administrators, governing boards, or the state” (Cherniavsky 2021:9).

## 6. TODAY’S ATTACKS ON HIGHER EDUCATION

With the global trend toward antidemocracy, it is not surprising that free speech has been aggressively promoted and defended by far-right politicians and political movements around the world. Free speech has become highly politicized to “sweep away the guarantees of academic freedom”, and dismiss “the thoughtful, critical articulation of ideas, the demonstration of proof based on rigorous examination of evidence, the distinction between true and false, between careful and sloppy work, the exercise of reasoned judgement” (Scott 2017:4). Given the legal immunity granted free speech language, Eva Cherniavsky notes that it is hardly surprising that free speech is wielded by the far right “with such ferocity (and success) to undermine the authority of the professoriate” (Cherniavsky 2021:8).

In the United States, free speech now means “freedom in the absence of any restraint. From this perspective, the bad boys can say anything they want, however vile and hateful” (Scott 2017:5). This is how Pennsylvania State University got itself into the predicament of letting Gavin McInnes, founder of the white supremacist Proud Boys, give a public talk on campus in October 2022. University administrators condemned the racist and misogynist views of the

speaker, however, also said that the campus was required to host the Proud Boys on grounds of free speech. At the last minute, the event was cancelled due to threats of violence as Proud Boy supporters pepper-sprayed student protestors and members of the media. The conservative student group that organized the event, Uncensored America, said it was sad about the cancellation, stating somewhat disingenuously, “We wanted people from all different political viewpoints to have a fun, entertaining, and peaceful evening” (Chappell 2022).

In the world of fake news and aggressive disinformation campaigns on social media, free speech operates as a legal protection, granting immunity to all manner of falsehoods and distortions. It enables the denial of scientific expertise around crises such as pandemics and climate change, and it undermines critical thinking in classrooms examining false narratives of stolen elections, racial discrimination, electoral gerrymandering and so on. Across the United States there has been a dramatic groundswell of legislation and regulatory control aimed at limiting academic freedom and the ability of faculty to teach their own materials.

Republican lawmakers, governors, and many trustee boards stacked with political appointees have aggressively wielded a range of legislation attacking tenure, imposing political loyalty oaths, cutting university ties to accrediting organizations, defunding university projects, seeking control over faculty hiring and firing, and preventing faculty from teaching certain materials. Florida under Republican Governor Ron DeSantis has become the epicenter and model for how to implement “educational gag orders”. His removing curricular content relating to race, history, and LGBTQ+ issues is emblematic of the far-right’s oppressive strategies. According to a report by the free expression group PEN America titled *America’s Censored Classrooms*, 36 states introduced 137 gag order measures in 2022, all but one filed by Republican legislators (Johnson 2022).

Today in the United States, understanding academic freedom as free speech—or more accurately replacing academic freedom with free speech—has become the common-sense approach in higher education (Cherniavsky 2021; Scott 2017). The focus on individual agency, as against structural issues of power, class and systemic racism, has been for decades promoted by neoliberal logics of market fundamentalism and individual self-responsibility.<sup>8</sup> Since the 1970s,

---

<sup>8</sup> Neoliberal ideology highlights “particular themes in public attitudes (desert, obligation and choice) and downplays others (solidarity and community)” (Taylor-Gooby and Leruth 2018:X).

neoliberalism has promoted the corporatization of university administration, reduced faculty governance, and drastically reduced the number of tenured professors (Giroux 2018; Hall 2016; Bottrell and Manathunga 2019). This has created an environment of insecurity and risk-adverse faculty and lecturers who are unable or unwilling to protest. Within this market-driven context, “a marketplace of ideas” supposedly thrives. This in turn has enabled a false equivalency between speech that may be based on lies and speech based on the academic community’s collectively determined standards, methods, and evidence.

## 7. INTERNATIONAL LEGAL PROTECTIONS OF ACADEMIC FREEDOM

Given that academic freedom may be conceptualized and practiced differently in different countries, there has been an effort to protect it under international law. Unfortunately, these legal protections are not that clear, quite apart from the challenges involved in implementing them. According to the former UN Special Rapporteur David Kaye, academic freedom depends upon a range of political, economic social and cultural rights, including the right to education, science culture, association, conscience belief, due process, and freedom of opinion and expression (Kaye 2020). These rights are enshrined in several international human rights covenants and treaties. For instance, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) states academic freedom is the liberty “to pursue, develop and transmit knowledge and ideas, through research, teaching, study, discussion, documentation, production, creation or writing”. It includes:

“(…) the liberty of individuals to express freely opinions about the institution or system in which they work, to fulfil their functions without discrimination or fear of repression by the State or any other actor, to participate in professional or representative academic bodies, and to enjoy all the internationally recognized human rights (...). (CESCR 1999, No 13 Para 39)

While the CESCR recognizes the need for institutional autonomy, the terminology is rather vague with respect to self-governance which:

“(…) must be consistent with systems of public accountability, especially in respect of funding provided by the State. Given the substantial public investments made in higher education, an appropriate balance has to be struck between institutional autonomy and accountability. While there is no single model, institutional arran-

gements should be fair, just and equitable, and as transparent and participatory as possible”. (CESCR 1999 Para 40)

However, just how an “appropriate balance” is struck is not clear and leaves it primarily up to university administrators to determine. And this is where the biggest problem arises —university leaders are often vulnerable to political pressures from state governors and legislators who may threaten to withhold revenues streams vital for the functioning of their campus. We saw this relationship of dependency between state funding and universities emerge in the 1950s in the United States, and today it is structurally embedded in the very existence of any college or university campus. For example, it has enabled Florida Governor DeSantis to remove the President of New College, appoint a cohort of extreme-right trustees, hire new faculty, and remake the college according to his conservative values and dictates. Beyond the United States, this relationship of dependency may be even more extreme, with some governments such as in Mexico and Brazil imprisoning faculty and students, and other governments such as that under President Daniel Ortega in Nicaragua deeming universities “illegal” and shutting them down completely.

## 8. ACADEMIC FREEDOM IN REGIONAL CONTEXT –THE AMERICAS

The future of academic freedom in the United States is bleak. It joins a growing number of countries across the Americas that have been repressing faculty and student research and teaching over the past two decades. To build cooperation between countries by providing a consistent set of guidelines that institutionalizes academic freedom at a regional level, the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) adopted the *Inter-American Principles on Academic Freedom and University Autonomy* in 2021. This document builds upon the earlier *Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education* that was adopted by the general assembly of the World University Service in Peru in 1988 (Lima 1988). The *Lima Declaration* was one of the first international documents to explicitly define academic freedom as a human right predicated on the autonomy of institutions of higher education.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Concurrent to the *Lima Declaration*, in 1988 university leaders from across Europe met at the Univer-

In their preambles, both the *Inter-American Principles* and the *Lima Declaration* explicitly outline the need to define a concept of academic freedom and push back against rising attacks on teachers, students, and researchers. However, the *Inter-American Principles* goes one step further. Reflecting upon the urgent regional and global threats to education today, it explicitly states that academic freedom plays an essential role in “the fight against authoritarianism in the Americas” (*Inter-American Principles* 2021:2). It then goes on in **Principle 1** to give the fullest definition of academic freedom yet articulated in an international organization. Principle 1 recognizes academic freedom as:

“(…) the right of every individual to seek, generate, and transmit knowledge, to form part of academic communities, and to conduct independent work to carry out scholarly activities of teaching, learning, training, investigation, discovery, transformation, debate, research, dissemination of information and ideas, and access to quality education freely and without fear of reprisals”.

In addition, **Principle 1** underscores the collective dimension of academic freedom as:

“(…) consisting of the right of society and its members to receive the information, knowledge, and opinions produced in the context of academic activity and to obtain access to the benefits and products of research and innovation”.

The *Inter-American Principles* is an innovative document setting up a new and encompassing framework that values academic freedom as a collective societal enterprise critical to pushing back against antidemocratic governmental interference. It reflects wider political pushback across Latin America against decades of authoritarian governance in numerous countries. The *Inter-American Principles* is indicative of a new wave of regional democratic aspiration that sees public education and academic freedom as central to building and maintaining more inclusive and equitable societies. The document carefully spells out what is necessary for true social equality, embedding the protection of academic freedom into social, political and technological practices, including the need for affirmative action in **Principle XVI**.

---

sity of Bologna to celebrate its 900<sup>th</sup> anniversary. There they signed the *Magna Carta Universitatum*, a document that contains principles of academic freedom and university autonomy and intended to guide future best practices regarding higher educational practices at the transnational level.

Revealingly, the *Inter-American Principles* also anticipates a range of actions by antidemocratic leaders and expressly sets out to prevent various tactics for stifling academic freedom in times of political crisis. In **Principle VI**, for instance, there is explicit reference to states not being able to invoke “exceptional circumstances as a means of suppressing or denying, denaturalizing, or depriving of real content academic freedom, university autonomy, or, in general, the rights guaranteed by the American Convention on Human Rights”. In **Principle VIII**, it takes aim against states using discretionary powers to impose any “limitations or fostering taboos with respect to any field of knowledge...”. And in **Principle XII**, it lays out that states cannot deny access to the Internet and social media, and that states “must establish measures that work toward guaranteeing universal Internet access, the elimination of the digital divide, and the use of such technologies by the academic community”.

The *Inter-American Principles* echoes earlier transnational efforts expressed in the 1918 *Córdoba Liminar Manfiesto*, the 1920 manifesto of the Argentine University Federation, and the 1921 *International Student Congress on University Reform*, Mexico City (see Van Aken 1971). And it refers to contemporary transnational human rights documents such as the UN *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007), as well as other regional efforts such as the *Abidjan Principles*, which declares that states have an obligation to provide public education and regulate private organizations involved in education (adopted in 2019, in Côte d’Ivoire, after three years of consultation and drafting among participants from around the world).

Something particular to the *Inter-American Principles* is a recognition that the pursuit of knowledge involves global academic exchange and must not be constrained within national contexts. In **Principle XIV**, the protection of scholars to travel internationally is addressed, as well as the “freedom to seek, receive, and disseminate information and ideas of all kinds, regardless of borders”. Presenting the production of knowledge as a global enterprise echoes sentiment expressed earlier in the immediate wake of WWII at the “Universities of the World” UNESCO conference in 1950, with international leaders trying to prevent the global rise of fascism from ever happening again.



## 9. CONCLUDING COMMENTS

The *Inter-American Principles* is an extremely innovative document in the history of academic freedom governance and protections. It presents an encompassing array of practices that speak to a clear understanding of the concept of academic freedom to include both individual and collective rights. And it explicitly seeks to protect academic freedom beyond the countries and institutions of the global north in an effort to create a document of global appeal, relevance and application.

On reflection, it is the sentiment that knowledge production is “borderless” and produced in conversation with scholars and students from around the world that is perhaps the most exciting and important element in the *Inter-American Principles*. This sentiment underscores the need of plural worldviews and epistemological approaches in the creation of new ideas. It seeks to transcend dominant ways of thinking in the United States (and other countries in the global north) that strive to commercialize and control higher education for national power and international prestige. In this way it presents a vision of academic freedom not driven by neoliberal logics and ultranationalist competitive concerns. It reminds us of the urgent need to think critically about the global economic and political conditions, informing local attacks on academic freedom if we are to collaboratively push back against rising authoritarianism.

Perhaps most significantly, if taken seriously, the *Inter-American Principles* offers a way to reframe public conversation in the United States that moves beyond legal oppression due to reducing—in practice—the concept of collective academic freedom to an individual right of free speech. This reductionist approach is aggressively promoted by the far-right precisely because it curtails critical inquiry that questions the rapidly diminishing rights of ordinary citizens to protest their antidemocratic state leaders.

### Bibliography

- AAUP (1940) “1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure”. American Association of University Professors. <https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure>
- Aby, Stephen A. (2009) “Discretion Over Valor: The AAUP During the McCarthy Years”. *American Educational History Journal*. Vol.36(1):121-132.
- Adams, Jennifer Ann (2000) “The G.I. Bill and the Changing Place of U.S. Higher Education after World War II”. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the

- Study of Higher Education (25th, Sacramento, CA, November 16-19, 2000). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED449721.pdf>
- Altschuler, Glenn and Stuart Blumin (2009) *The GI Bill: The New Deal for Veterans*. Oxford: Oxford University Press.
- Bottrell, Dorothy and Catherine Manathunga (eds) (2019) *Resisting Neoliberalism in Higher Education Volume I: Seeing Through the Cracks*. London: Palgrave Macmillan.
- Buckley, William F. (1951) *God and Man at Yale: The Superstitions of Academic Freedom*. Chicago: Regnery.
- Bundy, McGeorge (1951) "The Attack on Yale". *The Atlantic*. November 1951 Issue. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1951/11/the-attack-on-yale/306724/>
- Butler, Judith (2017) "Academic Freedom and the Critical Task of the University". *Globalizations* Vol. 14(6):857-861
- CESCR (1999) General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), Adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights at the Twenty-first Session, E/C.12/1999/10, 8 December 1999, para. 17.
- Chappell, Bill (2022) "Penn State cancels Proud Boys founder's speech, citing the threat of violence". *NPR* October 25, 2022. <https://www.npr.org/2022/10/25/1131300978/penn-state-cancels-proud-boys-speech-protests>
- Chemerinsky, Erwin and Howard Gillman (2018) *Free Speech on Campus*. New Haven: Yale University Press.
- Cherniavsky, Eva (2021) "Against the Common Sense: Academic Freedom as a Collective Right". *Journal of Academic Freedom*. Vol. 12.
- Daniels, Ronald J. (with Grant Shreve and Philip Spector) (2021) *What Universities Owe Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Darian-Smith, Eve (2019) "Globalizing Education in Times of Hyper-Nationalism, Rising Authoritarianism, and Shrinking Worldviews". *New Global Studies*. Vol. 14(1):47-68.
- Drucker, Peter F. (1993) *The Post-Capitalist Society*. New York: HarperBusiness.
- Fanshel, Rosalie Z. (2021) "The Land in Land-grant: Unearthing Indigenous Dispossession in the Founding of the University of California". *UC Berkeley: Center for Research on Native American Issues*. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/7kx7k25f>
- Giroux, Henry A. (2018) *Terror of Neoliberalism: Authoritarianism and the Eclipse of Democracy*. New York and London: Routledge.
- Hall, Gary (2016) *The Uberfication of the University*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hutcheson, Philo A. and Ralph D. Kidder (2011) "In the National Interest: The College and University in the United States in the Post-World War II Era". In Smart, J., Paulsen, M. (eds) *Higher Education: Handbook of Theory and Research*. Vol 26. Springer, Dordrecht. Pp.221-264.
- Hutcheson, Philo A., Marybeth Gasman and Kijua Sanders-McMurtry (2011) "Race and Equality in the Academy: Rethinking Higher Education Actors and the Struggle for Equality in the Post-World War II Period". *The Journal of Higher Education* Vol.82(2):121-153.
- Johnson, Jake (2022) "Chilling": GOP has introduced 136 "educational gag order" bills in 37 states just this year". *Salon*, August 17, 2022. [https://www.salon.com/2022/08/17/chilling-has-introduced-136-educational-gag-order-bills-in-37-states-just-this-year\\_partner/](https://www.salon.com/2022/08/17/chilling-has-introduced-136-educational-gag-order-bills-in-37-states-just-this-year_partner/)
- Kamola, Isaac A. (2019) *Making the World Global: US universities and the production of the global imaginary*. Durham, NC: Duke University Press.

- Kaye, David (2020) *United Nations Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*. <https://digitallibrary.un.org/record/3833657?ln=en>
- Lima (1988) *Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education*. World University Service. <https://www.wusgermany.de/sites/wusgermany.de/files/userfiles/WUS-Internationales/wus-lima-englisch.pdf>
- Lowen, Rebecca S. (1997) *Creating the Cold War University: The Transformation of Stanford*. Berkeley: University of California Press.
- Mettler, Suzanne (2014) *Degrees of Inequality: How the Politics of Higher Education Sabotaged the American Dream*. New York: Basic Books.
- Mignolo, Walter D. (2018) "Eurocentrism and Coloniality: The Question of the Totality of Knowledge", in *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*. Edited by Walter D. Mignolo and Catherine E. Walsh. Durham and London: Duke University Press. Pp. 211-226.
- Naidoo, Rajani (2007) "Higher Education as a Global Commodity: The Perils and Promises for Developing Countries". Report. *Observatory on Borderless Higher Education*, 2007. file:///C:/Users/edarian/Downloads/Higher\_education\_as\_a\_global\_commodity\_T.pdf
- Naim, Moisés. 2022. *The Revenge of Power: How autocrats are reinventing politics for the 21st century*. New York: St. Martin's Press.
- Newman, Jane O. (2020) "Scholar Rescue: The Past of the Future". In *Refugee Routes*. Vanessa Agnew, Kader Konuk, and Jane O. Newman, Eds. Bielefeld: Transcript Verlag, Pp. 285-97.
- Reichman, Henry (2021) *Understanding Academic Freedom*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Samuels, Sarah (2019) "'An Outstanding and Unusual Contribution': The Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars". *Penn History Review* Vol. 24(2): 71-99.
- Santos, Boaventura de Sousa (2020) "Decolonizing the University", in *Epistemologies of the South*, edited by Boaventura de Sousa Santos and Maria Puala Meneses, New York and Milton Park: Routledge. Pp.219-239.
- Schrecker, Ellen (1980) "Academic Freedom and the Cold War". *The Antioch Review* Vol.38(3):313-327.
- Schrecker, Ellen W. (1986) *No Ivory Tower: McCarthyism and the Universities*. New York: Oxford University Press.
- Scott, Joan (2017) "On Free Speech and Academic Freedom". *Journal of Academic Freedom*. Vol. 8.
- Scott, Joan Wallach (2019) *Knowledge, Power, and Academic Freedom*. New York: Columbia University Press.
- Taylor-Gooby, Peter and Benjamin Leruth (2018) "Individualism and Neo-Liberalism". In *Attitudes, Aspirations and Welfare: Social Policy Directions in Uncertain Times*. Edited by Peter Taylor-Gooby and Benjamin Leruth. Plagrave Macmillan. Chapter 2.
- Thelin, John R. (2019, 3<sup>rd</sup> edition). *A History of American Higher Education*. Baltimore: Johns Hopkins University.
- Van Aken, Mark J. (1971) "University Reform Before Córdoba". *Hispanic American Historical Review* Vol.51(3): 447-462.
- V-Dem (2022) *Democracy Report 2022*. <https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- Whittington, Keith E. (2018) *Speak Freely: Why Universities Must Defend Free Speech*. New Jersey: Princeton University Press.



# THE WAR AGAINST “WOKE INDOCTRINATION”: HOW ANTI-CRITICAL RACE THEORY BILLS THREATEN ACADEMIC FREEDOM IN THE UNITED STATES

*La guerra contra el “adoctrinamiento woke”: Cómo  
los proyectos de ley contra estudios raciales críticos  
amenazan la libertad académica en Estados Unidos*

AMNA KHALID AND JEFFREY AARON SNYDER  
*Carleton College*

## **Summary**

This paper examines how anti-critical race theory legislation threatens academic freedom in the United States. Khalid and Snyder provide a brief overview of the basic principles of academic freedom in the United States, as codified by the American Association of University Professors. The authors place the anti-CRT movement in the context of political polarization and “culture wars” debates about race, racism and United States history. They demonstrate that Trump’s 2020 “Combating Race and Sex Stereotypes” Executive Order provided a template for the “divisive concepts” legislation targeting higher education. Using Florida’s “Stop WOKE Act” (House Bill 7, passed in April 2022) as a case study, Khalid and Snyder illustrate the problems with anti-CRT legislation. They argue that the “Stop WOKE Act” and similar laws strike at the heart of academic freedom, as they dramatically curtail the freedom of faculty members to teach their areas of expertise. The authors discuss a lawsuit that has been filed against the “Stop WOKE Act” by the Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE). This paper is informed by interviews the authors conducted with FIRE attorney Adam Steinbaugh as well as with the lawsuit’s co-plaintiffs, University of South Florida (USF) Professor of Latin American History Adriana Novoa and USF student Sam Rechek, President of the USF student group, the First Amendment Forum.

**Keywords:** academic freedom, critical race theory, Stop WOKE Act, divisive concepts, culture wars

## **Resumen**

Este artículo examina cómo la legislación contra la teoría crítica de la raza amenaza la libertad académica en Estados Unidos. Los autores ofrecen un breve resumen de los principios básicos de la libertad académica en Estados Unidos, codificados por la

Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios. Los autores sitúan el movimiento anti-estudios críticos raciales (anti-CRT) en el contexto de la polarización política y los debates de las “guerras culturales” sobre la raza, el racismo y la historia de Estados Unidos. Demuestran que la Orden Ejecutiva de Trump de 2020 “Combatir los estereotipos raciales y sexuales” proporcionó una plantilla para la legislación de “conceptos que dividen a la sociedad” dirigida a la educación superior. Utilizando la “Stop WOKE Act” de Florida (House Bill 7, aprobado en abril de 2022) como estudio de caso, los autores ilustran los problemas de la legislación anti-CRT. Argumentan que la “Stop WOKE Act” y leyes similares atacan el corazón de la libertad académica, ya que restringen drásticamente la libertad de los miembros del profesorado para enseñar sus áreas de especialización. Los autores analizan una demanda presentada contra la “Stop WOKE Act” por la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE). Este artículo se basa en las entrevistas que los autores mantuvieron con el abogado de FIRE Adam Steinbaugh, así como con los coautores de la demanda, la profesora de Historia Latinoamericana de la Universidad del Sur de Florida (USF) Adriana Novoa y el estudiante de la USF Sam Rechek, presidente del grupo de estudiantes de la USF, del Foro de la Primera Enmienda.

**Palabras clave:** libertad académica, teoría crítica de la raza, Ley Stop WOKE, conceptos divisivos, guerras culturales

#### **Author affiliation**

Name: Amna Khalid

Institution: Carleton College

Bio: Amna Khalid is Associate Professor in the Department of History at Carleton College. She specializes in modern South Asian history and the history of medicine. Khalid is the author of multiple book chapters on the history of public health in nineteenth-century India, with an emphasis on the connections between Hindu pilgrimages and the spread of epidemics. Growing up under a series of military dictatorships, Amna has a strong interest in issues relating to censorship and free expression. She speaks frequently on academic freedom, free speech and campus politics at colleges and universities as well as at professional conferences.

E-mail: amkhalid@carleton.edu

#### **Author affiliation**

Name: Jeffrey Aaron Snyder

Institution: Carleton College

Bio: Jeffrey Aaron Snyder is Associate Professor in the department of Educational Studies at Carleton College. Snyder’s work explores the connections between the history of education and broader trends in American cultural and intellectual history, examining questions about race, national identity and the purpose of public education in a diverse, democratic society. Snyder has a keen interest in issues of academic freedom and free expression, especially as they relate to liberal arts education. He is the author of the book *Making Black History: The Color Line, Culture and Race in the Age of Jim Crow* (University of Georgia Press, 2018).

E-mail: jsnyder@carleton.edu

## 1. INTRODUCTION

Since January 2021, sixteen states have passed laws that curtail what public school educators can teach about race, gender and sexuality.<sup>1</sup> Republican governors and state legislators in “red” states have vigorously promoted these laws, which fall under the general umbrella of anti-critical race theory (CRT) legislation. This paper will discuss how anti-CRT laws are threatening academic freedom in the United States. We will begin with a brief outline of the fundamental principles of academic freedom in the United States. Next, we will describe how contemporary “culture wars” in the United States provide the essential context for understanding the anti-CRT movement. Finally, we will turn our attention to a particular case study, that of Florida’s “Stop WOKE Act”.

The American Association of University Professors (AAUP) produced the two landmark works pertaining to academic freedom in the United States.<sup>2</sup> The first is the 1915 AAUP Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure. This document articulated the following principle as fundamental to academic freedom: Professors should be able to carry out their work—research and teaching—free of political interference.

This interference could take different forms, including: (i) the “vested interests” of trustees; (ii) the “political considerations” of legislators, in the case of public institutions, and (iii) the “unconsidered impulses of popular feeling”. Any view that departed from “conventional standards” was “likely to be regarded with suspicion” by one or more of these constituencies. The university, the 1915 AAUP Declaration asserted, should be an “inviolable refuge” from the “tyranny of the ruler” and the “tyranny of public opinion”.<sup>3</sup>

The second landmark AAUP publication is the 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure. Here, the AAUP outlined the three pillars

<sup>1</sup> Jeffrey Sachs, Jeremy C. Young and Jonathan Friedman, “From Classroom Censorship to Curricular Control,” May 1, 2023, <https://pen.org/from-classroom-censorship-to-curricular-control/>.

<sup>2</sup> See 1915 Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure, <https://www.aaup.org/NR/rdonlyres/A6520A9D-0A9A-47B3-B550-C006B5B224E7/0/1915Declaration.pdf>; and 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, <https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure>.

<sup>3</sup> 1915 Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure, 297.

of academic freedom as follows: (i) freedom of inquiry and research; (ii) freedom of teaching, and (iii) freedom of extramural utterance and action. With respect to the first two pillars, the central rationale for academic freedom has always been that free expression facilitates the discovery of truth or knowledge; and that the production and dissemination of knowledge is beneficial to individuals and society.

The final pillar, referring to “extramural speech and action,” asserts that college and university teachers are not just educational professionals; they are also citizens. “When they speak or write as citizens,” the 1940 Statement stated, “they should be free from institutional censorship or discipline”.<sup>4</sup> At most higher education institutions in the United States, academic freedom is guaranteed (or at least promised) to faculty members when they sign a contract. Contracts in turn often refer to the faculty handbook where an institution’s commitment to academic freedom is delineated.<sup>5</sup>

## 2. ANTI-CRT LEGISLATION AND ACADEMIC FREEDOM

Anti-CRT legislation needs to be understood in the broader context of political polarization in the United States –and as part of a rolling conservative backlash to a public education system that supposedly undermines “traditional” values and beliefs.<sup>6</sup> The idea that public schools are indoctrinating children with dangerous anti-American propaganda is at the core of the anti-CRT movement.

---

<sup>4</sup> 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, 14.

<sup>5</sup> The following are helpful guides to academic freedom in the United States: Henry Reichman, *Understanding Academic Freedom* (Johns Hopkins, 2021) and Joan Wallach Scott, *Knowledge, Power and Academic Freedom* (Columbia, 2019).

<sup>6</sup> See Jeremy C. Young and Jonathan Friedman, “America’s Censored Classrooms,” PEN America, August 17, 2022, <https://pen.org/report/americas-censored-classrooms/>. See also Mica Pollock and John Rogers, “The Conflict Campaign: Exploring Local Experiences of the Campaign to Ban ‘Critical Race Theory’ in Public K-12 Education in the U.S., 2020-2021,” UCLA Institute for Democracy, Education and Access, January 2022, <https://idea.gseis.ucla.edu/publications/the-conflict-campaign/>.



In different times and places, parents and citizens of all backgrounds and political orientations have accused public schools of indoctrinating their children.<sup>7</sup> In the past century, however, white religious conservatives have been the loudest, most well-organized contingent. You can track this conservative culture wars movement from opposition to the teaching of evolution in the 1920s and campaigns against “Un-American” textbooks in the 1950s to crusades against sex education in the 1970s and today’s anti-CRT campaigns.<sup>8</sup>

The definition of critical race theory is contested. Technically, it is a body of scholarship, originating with legal scholars such as Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw and Mari Matsuda. As Victor Ray, author of the recent book *On Critical Race Theory* puts it: “Critical race theory developed, in part, to explain why the monumental legal victories of the civil rights movement—for instance, the *Brown v. Board of Education* decision outlawing state-sponsored school segregation—didn’t always lead to lasting improvements in the lives of people of color”. The foundational concepts of critical race theory, according to Ray, include “race is a social construction, racism is primarily structural [and] social life is made up of intersecting identities”.<sup>9</sup>

At the same time that critical race theory refers to a rich body of social science scholarship, in the popular imagination (especially on the right side of the political spectrum), critical race theory has turned into a catch-all term for a range of “ideas, practices, and materials related to advancing diversity, equity or inclusion”.<sup>10</sup> This could include everything from the *New York Times*’ 1619 Project to discussions of implicit bias, white privilege and “intersectionality”. Much of the controversy surrounding “critical race theory” in classrooms pertains to the question of whether racism is a feature or a bug of the American experiment.

<sup>7</sup> See Jeffrey Aaron Snyder, “Education and Indoctrination,” *The Point*, September 1, 2022, <https://thepointmag.com/politics/education-and-indoctrination/>.

<sup>8</sup> See Adam Laats, *The Other School Reformers: Conservative Activism in American Education* (Harvard, 2015), Natalia Mehlman-Petrezela, *Classroom Wars: Language, Sex, and the Making of Modern Political Culture* (Oxford, 2015) and Jonathan Zimmerman, *Culture Wars in the Public Schools* (Chicago, 2022).

<sup>9</sup> Victor Ray, *On Critical Race Theory: Why It Matters & Why You Should Care* (Random House, 2022), xix-xx, xxiii. On the foundational ideas of critical race theory, see also Richard Delgado and Jean Stefancic, *Critical Race Theory: An Introduction* (NYU, 2017).

<sup>10</sup> “Educational Gag Orders: Legislative Restrictions on the Freedom to Read, Learn, and Teach,” PEN America, November 2021, [https://pen.org/wp-content/uploads/2022/02/PEN\\_EducationalGagOrders\\_01-18-22-compressed.pdf](https://pen.org/wp-content/uploads/2022/02/PEN_EducationalGagOrders_01-18-22-compressed.pdf), 4.

The template for most of the anti-CRT legislation comes from Executive Order 13950, issued by the Trump administration in September 2020.<sup>11</sup> The “Executive Order on Combating Race and Sex Stereotypes” asserted that a “malign ideology” was taking hold in the United States, one “rooted in the pernicious and false belief that America is an irredeemably racist and sexist country; that some people, simply on account of their race or sex, are oppressors; and that racial and sexual identities are more important than our common status as human beings and Americans”.<sup>12</sup> The Executive Order prohibited the inclusion of nine so-called “divisive concepts” in any federal employee training programs.

Here are three of the concepts deemed out-of-bounds:

- “an individual, by virtue of his or her race or sex, is inherently racist, sexist, or oppressive, whether consciously or unconsciously”
- “an individual should be discriminated against or receive adverse treatment solely or partly because of his or her race or sex”
- “any individual should feel discomfort, guilt, anguish, or any other form of psychological distress on account of his or her race or sex”

With support from conservative think tanks such as the Heritage Foundation, the Manhattan Institute and the Goldwater Institute, conservative activist Christopher Rufo has led the charge to translate the “divisive concepts” framework of Trump’s Executive Order into anti-CRT legislation at the state level.<sup>13</sup> These efforts have concentrated on “red” states—that is, states where voters predominantly vote for the Republican party. Efforts to pass anti-CRT legislation have been most successful in the “red” states where Republicans control both chambers of the state legislature.<sup>14</sup>

While most anti-CRT bills have focused on public education at the K-12 level, seven states, including Idaho, Oklahoma and Florida, have passed laws

---

<sup>11</sup> Executive Order 13950, Combating Race and Sex Stereotypes, September 22, 2020, Federal Register 85 (no.188). This Executive Order was rescinded after President Biden took office.

<sup>12</sup> Executive Order 13950, 60683.

<sup>13</sup> See Benjamin Wallace-Wells, “How a Conservative Activist Invented the Conflict Over Critical Race Theory,” *New Yorker*, June 18, 2021.

<sup>14</sup> As of May 2022, Republicans controlled both chambers of the state legislature in 30 states. See Louis Jacobson, “The Battle for State Legislatures,” May 19, 2022, <https://centerforpolitics.org/crystalball/articles/the-battle-for-the-state-legislatures/>.

focusing on higher education. This wave of anti-CRT laws vests state legislatures with extraordinary power to regulate curricula at public colleges and universities. Professors who run afoul of the rules and regulations could lose their jobs, while their institutions face the prospect of losing state funds. Free expression advocacy organization PEN America has aptly characterized these bills as “educational gag orders” that “restrict teaching about topics such as race, gender, American history and LGBTQ+ identities”.<sup>15</sup> They pose a direct threat to core academic freedom principles related to teaching, including the autonomy of faculty with regard to course content and pedagogical choices.

According to Foundation for Individual Rights and Expression attorney Adam Steinbaugh, “divisive concepts” bills are unprecedented in United States history. While there have been prior attempts to ban particular speakers and organizations from campus (notably Communist or Socialist individuals and organizations during the Cold War), the attempt to prohibit the expression of particular *ideas* is unique. “It is something that censors have never tried before,” Steinbaugh said:

And it’s something that deserves to be fought. That’s true whether it is a red state imposing a list of forbidden ideas or a blue state imposing a list of forbidden ideas. No state can do this.<sup>16</sup>

### 3. THE STOP WOKE ACT AND ACADEMIC FREEDOM

Now, we will turn our attention to Florida, looking at the “Stop WOKE Act” as an anti-CRT legislation case study. Florida Governor Ron DeSantis signed House Bill 7 into law on April 22, 2022 with the stated aim to stand up against “woke indoctrination” and critical race theory in the workplace and schools.<sup>17</sup>

The exact wording of the legislation is key to understanding the scope of its impact on academic freedom and the quality of education more generally. Modeled closely on the aforementioned Executive Order 13950, the law stipulates that professors cannot “espouse, promote, advance, inculcate or compel

<sup>15</sup> “America’s Censored Classrooms.”

<sup>16</sup> Adam Steinbaugh interview conducted by authors, October 17, 2022.

<sup>17</sup> Governor Ron DeSantis Signs Legislation to Protect Floridians from Discrimination and Woke Indoctrination, April 22, 2022, <https://www.flgov.com/2022/04/22/governor-ron-desantis-signs-legislation-to-protect-floridians-from-discrimination-and-woke-indoctrination/>.

individuals to believe” eight concepts that “constitute discrimination based on race, color, sex, or national origin”.

Among other prohibitions, the law says professors cannot advance the following concepts: that members of one group (based on race, color, national origin or sex) are morally superior to members of another group; that a person by virtue of their racial, gender and national identity is consciously or unconsciously racist, sexist, or oppressive; and that an individual based on their group identity bears responsibility for, or should be discriminated against, because of past actions of other members of the same group.<sup>18</sup>

In the event that an instructor violates the law, they could lose their job. In addition, if the university does not subject the faculty member to “appropriate” punishment, the institution could face the loss of millions of dollars in annual state funding.<sup>19</sup> Indeed, this is the situation at the University of South Florida (USF), which stands to lose \$73 million in annual funds if professors are found to have violated this law.<sup>20</sup>

In September 2022, Adriana Novoa, Professor of Latin American history at USF, and the First Amendment Forum, a USF student group, filed a lawsuit challenging the “Stop WOKE Act” with the help of the Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE).<sup>21</sup> As part of our research documenting how this kind of legislation threatens the academic freedom of professors at public universities, we spoke with the two co-plaintiffs, Professor Novoa, and student Sam Rechek, president of the First Amendment Forum. We also spoke with FIRE attorney Adam Steinbaugh.

We asked Novoa why she chose to become a plaintiff in the case. For Novoa, this law fundamentally impacts the content of her courses. In her course in the history of sport, for instance, she will no longer be able to include readings on

---

<sup>18</sup> Florida House of Representatives, HB7, <https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/7/BillText/er/PDF,3-5>.

<sup>19</sup> Florida Board of Governors, Notice of Proposed New Regulation, July 1, 2022, <https://www.flbog.edu/wp-content/uploads/2022/07/10.005NoticeofNewProposedRegulationJune2022.pdf>

<sup>20</sup> “LAWSUIT: FIRE challenges Stop WOKE Act’s limits on how Florida professors can teach about race, sex,” September 7, 2022, <https://www.thefire.org/news/lawsuit-fire-challenges-stop-woke-acts-limits-how-florida-professors-can-teach-about-race-sex>.

<sup>21</sup> The Foundation for Individual Rights and Expression is an organization that “defends and promotes the value of free speech for all Americans in our courtrooms, on our campuses and in our culture,” <https://www.thefire.org/about-us/mission>.

Jackie Robinson and segregation in professional baseball because the materials “advance” arguments about white privilege. While anti-CRT bills focus on United States history, this kind of legislation impacts the teaching of history more broadly as well.

Consider the “Stop WOKE Act’s” stipulation that no person “by virtue of her race, color, sex, or national origins...feel guilt, anguish, of other forms of psychological distress” because of acts committed by other members of their group.<sup>22</sup> Novoa said she will have to drop texts about colonialism, Indigenous Peoples and violent revolutions in Latin America because teaching these topics would entail promoting arguments about collective guilt based on shared identity characteristics. In her course on Latin American political history, discussions about the United States’ role in quashing the Cuban revolution, for example, may make American students experience some kind of “psychological distress”. Would that mean the Cuban revolution could no longer be on the syllabus? “The problem,” Novoa said, “is that you need to deny reality to teach according to this law”.<sup>23</sup>

Novoa’s predicament showcases how these bills will have an especially pernicious effect on the teaching of history. As historians, we would like to take this opportunity to underscore that anti-CRT laws pose particular problems for student engagement with primary sources. For instance, any serious study of the history of slavery will require students to read primary sources that will espouse the idea that one group of people is inherently superior to another. By the letter of the “Stop WOKE Act,” texts and speeches by Thomas Jefferson and Abraham Lincoln, where they assert that Black people are inferior to white people, would have no place in a United States history classroom.<sup>24</sup>

The “Stop WOKE Act” includes a caveat stipulating that the law should not be construed as prohibiting discussion of the eight “divisive concepts,” provided “instruction is given in an objective manner without endorsement of the concepts”.<sup>25</sup> This reveals the degree to which those who wrote this law

<sup>22</sup> HB7, 4.

<sup>23</sup> Adriana Novoa interview conducted by authors, October 17, 2022.

<sup>24</sup> See, for example, Thomas Jefferson, “Notes on the State of Virginia” (1785), <https://docsouth.unc.edu/southlit/jefferson/jefferson.html>, p.153; and Abraham Lincoln Fourth Debate with Stephen A. Douglas (1858), <https://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/lincoln3/1:20.1?rgn=div2;view=fulltext>, 146.

<sup>25</sup> HB7, 5.

are ignorant of how teaching actually works. Teaching in the humanities and social sciences in particular cannot be reduced to presenting information in an “objective manner”. As Adam Steinbaugh put it:

Faculty members need to be able to engage in devil’s advocacy and be able to take a position. Sometimes the best way to engage with an idea is to have someone say ‘here’s what I believe’ or ‘isn’t this the right approach?’ And maybe they [students] come away thinking that the professor really does endorse this concept. Maybe the professor really doesn’t endorse it at all, but just wants to be able to raise it to provoke conversation.<sup>26</sup>

Perhaps the most perverse dimension of this legislation is how it seeks to frame the speech of professors in public universities as government speech, which is subject to regulation or censure when government employees contradict the state’s official positions. Historically, faculty speech at public universities has not been seen as government speech. As Steinbaugh explained:

When the state hires faculty members to speak in a university, it’s not hiring them to speak from a government script or convey a particular message. It’s hiring them because they can speak from authority. When faculty members speak on matters of public interest, which could include academic affairs or political affairs, their speech is protected against government retaliation, even though they are paid by the government [because] universities occupy a unique role in our constitutional constellation. Academic freedom depends on their ability to speak without government constraint.<sup>27</sup>

The “Stop WOKE Act” is already having chilling effects. Andrew Gothard, President of the United Faculty of Florida union, told us that he has heard from dozens of faculty members who reported making significant changes to their classes and teaching to comply with HB7.<sup>28</sup> From tweaking syllabus content and changing course titles to dropping courses altogether, professors are avoiding topics related to race, racism, and inequality.

For the fall 2022 semester, University of Central Florida Sociology professor Jonathan Cox canceled two classes that included readings challenging the assertion that the US is a colorblind society. “It didn’t seem like it was worth the risk,” said Cox who is a tenure track assistant professor. “Somebody who’s not even in the class could come after me. Somebody sees the course catalog,

---

<sup>26</sup> Steinbaugh interview.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Andrew Gothard interview conducted by authors, February 22, 2023.

complains to a legislator. Next thing I know, I’m out of a job”. Cox’s department chair said it’s an absolute tragedy that classes like this get canceled. For the fall 2022 semester, the University of Central Florida Sociology department offered 39 courses. None of them focused primarily on race.<sup>29</sup>

Although the “Stop WOKE Act” only applies to professors’ speech, it appears to be having a spillover effect on campus conversations more broadly. As Sam Reчек, a student at USF and a co-plaintiff in the case shared with us:

Students are exposed to classrooms where discussions are modified or changed or curriculums are changed based on the “Stop WOKE Act”. Students are also reading the news and they understand its provisions and what its effect has been on campus. So when students experience that pall of orthodoxy in a classroom, they can also take that pall of orthodoxy into their discussions [outside the classroom]. The pall of orthodoxy crosses the lines of the classroom door.<sup>30</sup>

#### 4. CONCLUSIONS

As we write, the “Stop WOKE Act” is under a temporary injunction for violating the First Amendment rights of students and faculty.<sup>31</sup> The state of Florida appealed the decision and the case now rests with the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit, which is expected to make a ruling within the next six months.<sup>32</sup> While the future of the “Stop WOKE Act” remains uncertain, it is essential to place this legislation in the context of a broader package of laws and initiatives targeting public higher education in Florida. The sunshine state already has HB233 on the books, which, among other provisions, allows students to make secret classroom recordings to use as evidence if they think their professors are ideologically biased. There is also pending legislation that would empower institutions’ presidents and boards of trustees to “take ownership of hiring and retention decisions, without interference from unions and faculty committees”.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Daniel Golden, “It’s Making Us More Ignorant,” *The Atlantic*, January 3, 2023.

<sup>30</sup> Sam Reчек interview conducted by authors, October 17, 2022.

<sup>31</sup> Divya Kumar, “Judge Stops Enforcement of Stop WOKE Act at Florida Colleges, Universities,” *Tampa Bay Times*, November 17, 2022, <https://www.tampabay.com/news/education/2022/11/17/judge-stops-enforcement-stop-woke-act-florida-colleges-universities/>.

<sup>32</sup> News Service of Florida, “Plaintiffs urge federal appeals court to uphold injunction on Florida’s ‘Stop Woke Act,’” June 21, 2023, <https://www.wuft.org/news/2023/06/21/plaintiffs-urge-federal-appeals-court-to-uphold-injunction-on-floridas-stop-woke-act/>.

<sup>33</sup> Amna Khalid and Jeffrey Aaron Snyder, “Dark Times for Academic Freedom in the Sunshine State,” *Persuasion*, February 10, 2023, <https://www.persuasion.community/p/dark-times-for-academic-freedom-in>.

What we are witnessing in Florida is an unprecedented assault on faculty expertise, faculty autonomy and faculty governance. What's more, DeSantis and Rufo want Florida to be a model for other states when it comes to fighting "woke indoctrination" on college campuses. This should worry anyone who cares about academic freedom and the basic integrity of public higher education.<sup>34</sup>

## Bibliography

- American Association of University Professors. Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure (1915), <https://www.aaup.org/NR/rdonlyres/A6520A9D-0A9A-47B3-B550-C006B5B224E7/0/1915Declaration.pdf>
- Declaration of Principles on Academic Freedom and Academic Tenure (1940), <https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure>.
- Delgado, Richard and Jean Stefancic. *Critical Race Theory: An Introduction*. New York: NYU Press, 2017.
- Executive Order 13950, Combating Race and Sex Stereotypes. September 22, 2020. Federal Register 85 (no.188).
- Florida House of Representatives. HB7, <https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/7/BillText/er/PDF>.
- Golden, Daniel. "It's Making Us More Ignorant." *The Atlantic*, January 3, 2023.
- Governor Ron DeSantis Signs Legislation to Protect Floridians from Discrimination and Woke Indoctrination. April 22, 2022, <https://www.flgov.com/2022/04/22/governor-ron-desantis-signs-legislation-to-protect-floridians-from-discrimination-and-woke-indoctrination/>.
- Jacobson, Louis. "The Battle for State Legislatures". May 19, 2022, <https://centerforpolitics.org/crystalball/articles/the-battle-for-the-state-legislatures/>.
- Khalid, Amna and Jeffrey Aaron Snyder. "Dark Times for Academic Freedom in the Sunshine State". *Persuasion*, February 10, 2023, <https://www.persuasion.community/p/dark-times-for-academic-freedom-in>.
- "Conservative Attacks on Higher Ed Are Attacks on Democracy". *Chronicle Review*, April 13, 2023.
- Kumar, Divya. "Judge Stops Enforcement of Stop WOKE Act at Florida Colleges, Universities". *Tampa Bay Times*, November 17, 2022.
- Laats, Adam. *The Other School Reformers: Conservative Activism in American Education*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
- Lawsuit: FIRE challenges Stop WOKE Act's limits on how Florida professors can teach about race, sex". September 7, 2022, <https://www.thefire.org/news/lawsuit-fire-challenges-stop-woke-acts-limits-how-florida-professors-can-teach-about-race-sex>.
- Mehlman-Petrezela, Natalia. *Classroom Wars: Language, Sex, and the Making of Modern Political Culture*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

---

<sup>34</sup> Amna Khalid and Jeffrey Aaron Snyder, "Conservative Attacks on Higher Ed Are Attacks on Democracy," *Chronicle Review*, April 13, 2023.



- PEN America. “Educational Gag Orders: Legislative Restrictions on the Freedom to Read, Learn, and Teach”. November 2021, [https://pen.org/wp-content/uploads/2022/02/PEN\\_EducationalGagOrders\\_01-18-22-compressed.pdf](https://pen.org/wp-content/uploads/2022/02/PEN_EducationalGagOrders_01-18-22-compressed.pdf).
- Index of Educational Gag Orders, [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tj5WQVBmB6SQg-zP\\_M8uZsQQGH09TxmBY73v23zpyr0/edit#gid=1505554870](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tj5WQVBmB6SQg-zP_M8uZsQQGH09TxmBY73v23zpyr0/edit#gid=1505554870).
- Pollock, Mica and John Rogers, “The Conflict Campaign: Exploring Local Experiences of the Campaign to Ban ‘Critical Race Theory’ in Public K-12 Education in the U.S., 2020-2021”. UCLA Institute for Democracy, Education and Access. January 2022, <https://idea.gseis.ucla.edu/publications/the-conflict-campaign/>.
- Ray, Victor. *On Critical Race Theory: Why It Matters & Why You Should Care*. New York: Random House, 2022.
- Reichman, Henry. *Understanding Academic Freedom*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 2021.
- Scott, Joan Wallach. *Knowledge, Power and Academic Freedom*. New York: Columbia University Press, 2019.
- Snyder, Jeffrey Aaron. “Education and Indoctrination”. *The Point*, September 1, 2022, <https://thepointmag.com/politics/education-and-indoctrination/>.
- Wallace-Wells, Benjamin. “How a Conservative Activist Invented the Conflict Over Critical Race Theory”. *New Yorker*, June 18, 2021.
- Young, Jeremy C. and Jonathan Friedman, “America’s Censored Classrooms,” PEN America. August 17, 2022, <https://pen.org/report/americas-censored-classrooms/>.
- Zimmerman, Jonathan. *Culture Wars in the Public Schools*. Chicago: University of Chicago Press, 2022.



# AUGE Y DECLIVE DE LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA. ¿CÓMO DEBERÍA MODELARSE UN SISTEMA UNIVERSITARIO POST-CHAVISTA?

*Rise and decline of universities in Venezuela: How should a post-chavista university system be modeled?*

MAYDA HOČEVAR Y NELSON RIVAS

## **Resumen**

El artículo expone la situación de las universidades en Venezuela en los periodos democrático y chavista, mostrando cómo durante este último se socava profundamente la libertad académica y la autonomía universitaria, creándose una institucionalidad universitaria paralela que va a estar sometida a la ideología gubernamental mientras se asfixia presupuestariamente a las universidades autónomas y se les imponen normas para restringir sus libertades esenciales. En una segunda parte se abordan los elementos para modelar la universidad post-chavista destacándose la importancia de la incidencia internacional y la respuesta de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en el ámbito de la libertad académica, sus fundamentos y alcance.

**Palabras claves:** Venezuela, revolución bolivariana, sistema paralelo universitario, universidad bolivariana, Principios Interamericanos de Libertad Académica

## **Abstract**

The article exposes the situation of universities in Venezuela during the democratic and chavista periods, showing how during the latter academic freedom and university autonomy were deeply undermined, creating a parallel university institutionality that will be subjected to government ideology while autonomous universities are suffocated in terms of budget and rules are imposed to restrict their essential freedoms. In the second part, the elements for modeling the post-chavista university are addressed, highlighting the importance of international advocacy and the response of international systems for the protection of human rights in the field of academic freedom, its foundations and scope.

**Key words:** Venezuela, Bolivarian revolution, parallel university system, Bolivarian university, Inter-American Principles of Academic Freedom.

### **Afiliación de los autores**

#### **Mayda Hočevar**

Institución: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Venezuela.

Biografía: Abogada por la Universidad de Los Andes, Venezuela y Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y directora fundadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, organización que desde 2014 documenta la situación de la libertad académica en Venezuela. Entre sus publicaciones se cuentan “Threats to Academic Freedom in Venezuela: Legislative Impositions and Patterns of Discrimination Towards University Teachers and Students”. *Interdisciplinary Political Studies*, vol 3 N. 1 (2017) y Libertad Académica y Derechos Humanos en Cuadernos de Derechos Humanos (2021).

Correo electrónico: mayda.hocevar@gmail.com

#### **Nelson Rivas**

Institución: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Venezuela.

Biografía: Politólogo y Magister Scientiae en economía por la Universidad de Los Andes, Venezuela. Investigador en ciencias sociales y coordinador de investigación, del programa de pasantías y voluntariado del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Alumni del Programa de Líderes en Derechos Humanos a través de las Américas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Co-autor de artículos científicos e informes de investigación en derechos humanos. Consultor y conferencista sobre diversos temas de derechos humanos. Activista y voluntario en Amnistía Internacional Venezuela.

Correo electrónico: njrs218@gmail.com

## **1. INTRODUCCIÓN**

Durante el periodo democrático (1958-1998) en Venezuela se consolidaron universidades autónomas, de calidad y con productividad científica.<sup>1</sup> Si bien hubo ataques a su autonomía, nunca fueron generalizados y sistemáticos como durante los gobiernos de Chávez y Maduro, ni estuvieron destinados a suplantarse el modelo tradicional de universidad autónoma por un ‘nuevo’ modelo de universidades subordinadas al Ejecutivo Nacional y proyectadas para reproducir su ideología política.

---

<sup>1</sup> Véase Díaz Seijas, Pedro. “Tres lustros de la Educación en Venezuela (1974-1989)”, en *Venezuela Contemporánea*. Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, 1989, p. 625 y ss.

Es fundamental que la universidad post-chavista no solo supere el modelo que se le ha impuesto durante dos décadas de gobiernos ‘revolucionarios’, como una camisa de fuerza para asfixiarlas, sino que evite incurrir en los errores que arrastran del pasado democrático. Esta transición va de la mano con la transición democrática, pero requiere desde ya de la participación activa de las propias universidades.

## 2. LAS UNIVERSIDADES EN VENEZUELA DURANTE EL PERIODO DEMOCRÁTICO (1958-1998)

La caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, marca el inicio del período democrático en Venezuela que supuso no solo un pacto de gobernabilidad entre partidos políticos, sino también el auge de las universidades públicas y autónomas que se expandirían y diversificarían consolidando una comunidad científica nacional para la generación de conocimiento y tecnología.

Con la promulgación en 1958 de una ley de universidades se reconoce plenamente la autonomía tanto académica como administrativa, económica y financiera, la cual contemplaba la inviolabilidad del recinto universitario. Se reconocen y emergen diversas organizaciones gremiales representativas de la comunidad universitaria y se prevén políticas sociales de bienestar estudiantil tales como comedores, becas, residencias, transporte y servicios médicos gratuitos.<sup>2</sup>

Si bien se debe reconocer el fortalecimiento sostenido y acelerado de las instituciones universitarias durante el periodo democrático, apoyado por la renta petrolera —fundación de nuevas universidades, aumento de la matrícula estudiantil, creación de laboratorios, incremento de actividades de extensión, políticas de apoyo a la formación profesoral y a la generación de relevo—, en diferentes momentos y bajo distintos mandatos presidenciales de la era democrática fue violentada la autonomía y allanados algunos recintos universitarios.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Rondón M., Roberto. “Antecedentes y hechos en torno a la ley de Universidades de 1958”. *Educere*, 2019: 367-377.

<sup>3</sup> Cabe señalar que los ataques a la autonomía universitaria durante este periodo, aunque injustificables, estuvieron dirigidos a contener particularmente el avance de movimientos de la izquierda guerrillera dentro de las universidades. Véase López, Roberto y Hernández, Carmen. “Movimientos estudiantiles y crisis del sistema político en Venezuela: 1987-1988”. *Espacio abierto* v.10, N° 4 (2001): 631-666.

Al respecto, destacan las injerencias y presiones durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt entre los años 1959-1964; el allanamiento, en 1966, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), por orden del presidente Raúl Leoni; y el cierre en 1970 por orden del presidente Rafael Caldera, de la UCV.<sup>4</sup> En 1987 protestas estudiantiles en distintas regiones del país fueron calificadas por el presidente Jaime Lusinchi como una conspiración contra el Estado y fueron reprimidas con saldos de muertos y heridos.<sup>5</sup>

El periodo democrático supuso pues el auge de universidades autónomas de calidad, si bien no estuvo desprovisto de injerencias y ataques a la autonomía y libertad académica. Sostenemos, sin embargo, que estas injerencias fueron circunstanciales y que no se caracterizaron por querer sustituir un sistema de educación superior para imponer otro totalmente diferente y marcadamente subordinado al proyecto político gubernamental, como ocurrirá con la llegada del régimen de Hugo Chávez, continuado por su sucesor Nicolás Maduro.<sup>6</sup>

### 3. LAS UNIVERSIDADES DEL PERÍODO CHAVISTA (1999-2022)

Como señalamos, este período se va a caracterizar por proponer e implementar la sustitución del modelo de universidad autónoma prevaleciente durante los años democráticos, por otro modelo, el modelo denominado “universidad bolivariana”, asunto que, de hecho, puede considerarse uno de los objetivos fundamentales de la revolución chavista.<sup>7</sup> El sistema de universidades que va a implementar el

---

<sup>4</sup> Para una relación detallada de estos hechos véase Leonardo Carvajal, “Autonomía universitaria y libertad de cátedra versus control político, en la historia venezolana” en Carvajal et al, *Universidad, política y democracia. Escritos polémicos*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011.

<sup>5</sup> López, Roberto y Hernández, Carmen. “Movimientos estudiantiles y crisis del sistema político en Venezuela: 1987-1988” op.cit.

<sup>6</sup> Cabe agregar que el chavismo intentó acceder a los máximos puestos de dirección universitaria y estudiantil, en el marco de diferentes procesos electorales, siendo derrotados reiteradamente. Es decir, por vía electoral, el chavismo nunca pudo llegar al poder en las universidades venezolanas, por lo que recurrió a la vía de la fuerza.

<sup>7</sup> En 2003, a tres años de su arribo al poder, el presidente Hugo Chávez dicta el Decreto 2601 para la transformación de la educación universitaria denominada Misión Sucre. En sucesivos decretos y proyectos de gobierno se reafirmará este propósito de transformación universitaria como uno de los elementos fundamentales de la revolución bolivariana. Véase “Misión Sucre creada hace 14 años para la transformación universitaria” (08/09/2017), en: <http://www.misionsucre.gov.ve/#noticia&n=381300d769c5dd80fa461810e34bc645>

presidente Hugo Chávez poco después de su arribo al poder va a ser un modelo no autonómico, enfrentado al modelo existente que constituía un obstáculo para la construcción del nuevo país imaginado por la revolución bolivariana.<sup>8</sup>

El proceso de implantación del modelo de universidades no autónomas y subordinadas al Poder Ejecutivo se inicia en el año 2003 con la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela mediante un decreto presidencial.<sup>9</sup> A partir de allí se va a desarrollar un sistema universitario paralelo de muy discutible calidad académica y, sobre todo, basado en la ideología política del gobierno.<sup>10</sup> Este proceso se afianza mediante la creación, en 2008, de los Programas Nacionales de Formación (PNF), un mecanismo de formación universitaria basado en lineamientos dictados por el Ministerio de Educación Superior.<sup>11</sup>

La creación de nuevas universidades supuso también la absorción o intervención de universidades ya existentes, como las experimentales<sup>12</sup> y los institutos tecnológicos, llegándose a convertir a 27 de ellos en “universidades bolivarianas”.<sup>13</sup> Sólo entre 2019 y 2022 se crearon tres nuevas universidades y se ha intervenido un instituto tecnológico.<sup>14</sup> Actualmente alrededor del 90%

<sup>8</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “Plan de la patria 2019-2025: consolidación del sistema universitario paralelo en Venezuela” (2021), p. 8-9. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/Plan-patria-2019-2025-sistema-universidades-paralelas-venezuela-Def.pdf>

<sup>9</sup> Ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2004. Gaceta Oficial extraordinaria número 5678, del 16/12/2003 (Ministerio de Educación Superior, 16 de diciembre de 2003).

<sup>10</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “El sistema paralelo universitario en Venezuela, 2003-2019”. 2020, p. 3-11. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/02/Informe-El-sistema-paralelo-universitario-en-Venezuela.-2003-2019-Descargar-1.pdf>

<sup>11</sup> Ello se hace con el objetivo de fortalecer el proceso de la revolución bolivariana e implementar los supuestos del “socialismo del siglo XXI” en el sistema de educación superior. Consúltense los Programas Nacionales de Formación en la Resolución N° 2.963 del Ministerio de Educación Superior, disponible en: Resolución 2963. Gaceta Oficial N° 38.930, de fecha 14/05/2008 (Ministerio de Educación Superior, Caracas 13 de mayo de 2008), páginas 7 y 8. *Gaceta Oficial*: <http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/mayo/140508/140508-38930-7.html>

<sup>12</sup> Universidades creadas con potestades para ensayar nuevas orientaciones y estructuras en Educación Superior, sujetas a evaluación periódica y que alcanzarían su plena autonomía dependiendo de su desempeño y calidad académica, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Universidades de 1970.

<sup>13</sup> Alborno, O. *Mitos, tabúes y realidades de las universidades*. Editado por Universidad Central de Venezuela. Unesco: Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2018. p. 88.

<sup>14</sup> Véase: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes “Universidades paralelas en Venezuela un mal que persiste.” Observatorio de Derechos Humanos ULA. 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Universidades-paralelas-un-mal-que-persiste-Venezuela-2022.pdf> (último acceso: 15 de noviembre de 2022). Para ver las universidades creadas desde el año 2003 consúltense: “El sistema paralelo universitario en Venezuela (2003-2019)”. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 30 de abril de 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/>

de las universidades en Venezuela carecen de autonomía, formando parte de este nuevo modelo universitario.<sup>15</sup>

### 3.1. Sometimiento de la Universidad a la ideología gubernamental

El proceso de construcción de un sistema paralelo universitario en Venezuela no representa otra cosa que el sometimiento de la Universidad al gobierno, a fin de convertirla en una institución dócil con una planta profesoral, así como sus estudiantes, sometidos a censura y temerosos de elevar su voz crítica.<sup>16</sup>

Este proceso de sometimiento se va a ‘legalizar’ a través de sucesivos Planes Socialistas de la Nación o *Planes de la Patria*,<sup>17</sup> con fuerza y jerarquía de leyes orgánicas, aunque contrarios a los artículos 6, 7 y 109 de la Constitución Nacional.<sup>18</sup> El Primer Plan Socialista de la Nación o Plan de la Patria (2007-2012), contemplaba ya la transformación de la educación superior para la construcción de una sociedad socialista.<sup>19</sup> El Segundo Plan (2013-2019) va a vincular directamente las universidades con la profundización y radicalización de la revolución bolivariana,<sup>20</sup> mientras que el Tercer Plan (2019-2025), vigente actualmente,

---

[index.php/2019/04/30/informe-el-sistema-paralelo-universitario-en-venezuela-2003-2019/](http://index.php/2019/04/30/informe-el-sistema-paralelo-universitario-en-venezuela-2003-2019/) p. 6-8.

<sup>15</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “El sistema paralelo universitario en Venezuela (2003-2019)”. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 30 de abril de 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/04/30/informe-el-sistema-paralelo-universitario-en-venezuela-2003-2019/> (último acceso: 15 de julio de 2022).

<sup>16</sup> Debido a que su objetivo es el adoctrinamiento ideológico, las prácticas de discriminación y censura hacia quienes expresan un pensamiento crítico son comunes. Un caso emblemático es el de Rafael Avendaño, estudiante de Medicina en la Universidad Bolivariana en el estado Mérida, quien fue expulsado por cambiar el canal oficial de TV en un consultorio de prácticas. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultar informe: “El sistema paralelo universitario en Venezuela (2003-2019)”. Op. cit. p. 12

<sup>17</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “Plan de la patria 2019-2025: Consolidación del sistema universitario paralelo en Venezuela.” Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 06 de marzo de 2021. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universitario-paralelo-venezuela/> (último acceso: 22 de septiembre de 2022).

<sup>18</sup> Estos planes representan una legislación paralela contraria a la Constitución Nacional y al Estado de Derecho, ya que suponen reformar totalmente el modelo de país, incluido el modelo educativo.

<sup>19</sup> Véase: “LOCTI-Proyecto Nacional Simón Bolívar”. Agencia de Noticias LUZ. mayo de 2011. [http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo\\_2011/descargas\\_locti/proyecto\\_nacional\\_simon\\_bolivar.pdf](http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf) (último acceso: 08 de septiembre de 2022).

<sup>20</sup> En su artículo 1.5.1 establece que la investigación científica debe estar al servicio de la construcción del modelo productivo socialista y del fortalecimiento de la ética socialista. Véase: Ministerio del



prescribe además la incorporación de actores sociales para la transformación universitaria, en los espacios de consulta y decisión.<sup>21</sup>

La transformación universitaria proyectada en estos planes supone la negación misma de la esencia universitaria, que tiene que ser libre, plural, participativa y crítica. El modelo paralelo de universidades se inserta dentro de una estructura estatal no democrática que precisamente por ello impone una determinada concepción política y una determinada concepción de la verdad que excluye la discusión o propagación de cualquier otra opción.

Los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria (PILAAU) han señalado que garantizar la libertad académica supone garantizar el pluralismo ideológico y la diversidad de perspectivas, condición que a su vez permite el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio del pensamiento crítico. La imposición de estos planes, que subordinan la educación a una ideología política, contraviene estos principios y constituye además una inaceptable e injustificada injerencia estatal.<sup>22</sup>

El proyecto de transformación universitaria plasmado en estos planes de la patria explica no solamente la creación del sistema paralelo universitario que hemos descrito, sino también, como correlato, otra serie de ataques al sistema de educación superior, tales como la implantación de nueva legislación violatoria de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales,<sup>23</sup> para suprimir la autonomía y libertad académica y politizar la labor científica, la criminalización de profesores y estudiantes por motivos políticos y la asfixia presupuestaria como mecanismo de control y castigo.<sup>24</sup>

---

Poder Popular para la Planificación. “Ley del plan de la patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 Extraordinario.” Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 4 de diciembre de 2019. [http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/ley\\_plan\\_patria.pdf](http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/ley_plan_patria.pdf) (último acceso: 15 de noviembre de 2022).

<sup>21</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “Plan de la patria 2019-2025: Consolidación del sistema universitario paralelo en Venezuela”, op.cit.

<sup>22</sup> Véanse el preámbulo y principios IV y XIII de los Principios Interamericanos de Libertad Académica en: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios\\_libertad\\_academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios_libertad_academica.pdf).

<sup>23</sup> Principalmente en la Ley Orgánica de Educación y la nueva reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

<sup>24</sup> Para ampliar estos temas véase Scholars at Risk. “Free to Think Report 2022.” December 2022. Section: Venezuela. <https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2022/> (accessed December 15, 2022).

#### 4. ALGUNOS ELEMENTOS PARA MODELAR LA UNIVERSIDAD POST-CHAVISTA

Desafortunadamente, el proyecto de transformación universitaria implementado por el actual gobierno, que suma ya dos décadas, ha provocado en la práctica un cierre técnico de las universidades autónomas, que ven sus infraestructuras físicas y tecnológicas deterioradas y obsoletas,<sup>25</sup> su personal más cualificado forzado a emigrar, su investigación científica en declive, mientras se destinan recursos para alimentar un sistema paralelo de dudosa calidad.<sup>26</sup>

No se vislumbra en el horizonte cercano un cambio de régimen en el país para retomar la senda democrática.

Sin embargo, es fundamental hacer frente a la crisis de educación superior en Venezuela y las universidades pueden jugar un papel fundamental en ello, como veremos. Una universidad post-chavista no sólo debe rectificar los errores del chavismo —el proyecto de destrucción de la autonomía universitaria y los sistemáticos ataques a la libertad académica— ya señalados, sino también evitar reproducir los errores que se arrastran del periodo democrático, como masificación sin calidad, burocratización y politización, ausencia de una diversificación financiera e inadecuación para contribuir eficientemente al desarrollo del país.<sup>27</sup>

Por ello consideramos fundamental que en Venezuela se implementen efectivamente no sólo los *Principios interamericanos de libertad académica*, sino también las recomendaciones específicas que los órganos internacionales de protección de derechos humanos han emitido en relación con la situación de la educación superior en el país. En su informe sobre Venezuela del año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la existencia de universidades paralelas subordinadas al Poder Ejecutivo, en las que

---

<sup>25</sup> Sobre la obsolescencia de equipos y plataformas tecnológicas véase: Belandria, Margarita. “Venezuela y su Estado de Derecho”. *Dikaiosyne* N° 22. Universidad de los Andes. Junio de 2009, p. 25. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/29412/articulo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>26</sup> Todos estos hechos aparecen documentados en los reportes mensuales sobre la *Situación de las universidades en Venezuela* producidos por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/reportes-mensuales-situacion-de-las-universidades-en-venezuela/>

<sup>27</sup> Para un desarrollo de estos problemas véase: Uslar Pietri, 1990; Albornoz, 2018; Mayz Vallenilla, 1984.

son expulsados estudiantes por el simple hecho de expresarse, y urge al Estado a abstenerse de aplicar represalias motivadas en razones políticas.

En ese informe la Comisión señaló que, aunque la autonomía universitaria no es mencionada de manera expresa en la Declaración Americana, la misma es un requisito imprescindible para la libertad académica, la cual es a su vez necesaria para disfrutar plenamente del derecho a la educación reconocido en el artículo XII de la Declaración Americana. Por ello la Comisión exhortó al Estado a revisar y modificar los actos que pudieran mermar la autonomía de las universidades.<sup>28</sup>

De la misma manera los reportes del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recogen las preocupaciones por la intervención de las universidades y otros institutos de educación superior en Venezuela, así como las prácticas de adoctrinamiento. Por ello han recomendado al Estado venezolano transformar sin demoras el sistema paralelo no autónomo de universidades de manera que puedan alcanzar su plena independencia y libertad académica.<sup>29</sup>

Por su parte, un informe especial dedicado a la libertad académica del año 2020 titulado *Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión* publicado por la relatoría del mismo nombre de Naciones Unidas ha señalado que en Venezuela el adoctrinamiento ideológico ha llegado hasta la creación de universidades como entidades con fines de control social y ha recomendado revisar las leyes y políticas nacionales para garantizar la protección de la libertad académica.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe país: Situación de derechos humanos en Venezuela.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2017. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf> (último acceso: 08 de agosto de 2022), p. 244-245.

<sup>29</sup> Véase la matriz de recomendaciones en “Examen Periódico Universal-Venezuela”, *Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos*. 25 de enero de 2022. <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index> (último acceso: 18 de septiembre de 2022). Véase también: Working Group on the Universal Periodic Review. “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Bolivarian Republic of Venezuela 2017”. United Nations, General Assembly. February 27, 2017. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/47/PDF/G1644147.pdf?OpenElement> (accessed September 24, 2022). p. 10.

<sup>30</sup> Véase el Informe sobre Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye. Naciones Unidas, Asamblea General. 28 de julio de 2020. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/197/89/PDF/N2019789.pdf?OpenElement>.

Es importante subrayar que estas recomendaciones de los Estados y puntualizaciones de los órganos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han sido producto de la visibilización, documentación e incidencia que han realizado, además de las ONG, las propias universidades a través de sus observatorios y centros de derechos humanos. El primer informe sobre restricciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela ante el Examen Periódico Universal lo presentaron las universidades, a través de sus centros de derechos humanos en el año 2016,<sup>31</sup> logrando la primera recomendación directamente sobre libertad académica, por parte de un Estado —República de Eslovenia—.<sup>32</sup>

Posteriormente, en 2017, la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos elaboraría el primer informe general sobre violaciones a la libertad académica en Venezuela, con el título *El pensamiento bajo amenaza: situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela*, poniendo así el foco en la situación de las universidades y llamando la atención de los órganos internacionales de derechos humanos.<sup>33</sup>

Además de rectificar y corregir las políticas del actual gobierno, es necesario atajar o corregir errores que arrastran las universidades desde el periodo democrático. Entre los que se incluyen la alta burocratización y la injerencia de los partidos políticos, especialmente en los movimientos estudiantiles,<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> “Restricciones y represalias contra la autonomía y la libertad académica en el sistema de educación superior de Venezuela” elaborado en marzo del 2016 por: el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2016/08/EPUVenezuela-RestriccionesLibertadAcadeemica.pdf>

<sup>32</sup> Véase el informe del grupo de trabajo para el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela (diciembre 2016) p. 13. Recomendación 133.27 Working Group on the Universal Periodic Review. “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Bolivarian Republic of Venezuela 2017”. United Nations, General Assembly. February 27, 2017. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/47/PDF/G1644147.pdf?OpenElement> (accessed September 24, 2022). p. 10.

<sup>33</sup> Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de derechos humanos. “El pensamiento bajo amenaza: situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela” (2017), p. 69 ss. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/07/Informe-LA-y-AU-FIN.pdf>. Posteriormente, la organización Aula Abierta en alianza con centros y observatorios universitarios de derechos humanos continuaría documentando y denunciando las violaciones a la libertad académica en Venezuela, véase su página web: <https://aulaabiertavenezuela.org/>

<sup>34</sup> López, Roberto y Hernández, Carmen. “Movimientos estudiantiles y crisis del sistema político en Venezuela: 1987-1988”, op.cit.

así como la aplicación de políticas demagógicas que van en detrimento de la calidad educativa. En ese sentido, es fundamental que la garantía de acceso de todas las personas a la educación no implique el descenso de la calidad educativa mediante la aplicación de políticas demagógicas dirigidas a eliminar las exigencias académicas para el ingreso y permanencia en la Universidad, como ha ocurrido en Venezuela.<sup>35</sup>

Cabe recordar que, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Observación General 13 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las pruebas de selección y de aptitud para el ingreso a carreras universitarias no suponen discriminación. En un sentido similar lo señalan los Principios Interamericanos de Libertad Académica (PILA) al considerar que los “exámenes estatales y otras formas de concesión de licencias cumplen una función crucial para garantizar la calidad de las instituciones de educación superior”.<sup>36</sup>

Otro problema que arrastran nuestras universidades es el de su dependencia financiera del Estado, de manera que la libertad académica se ve impactada negativamente cuando las tensiones políticas enfrentan a la universidad y el gobierno. O cuando arriban al poder gobiernos no democráticos, que ven en la universidad autónoma un enemigo potencial al que deben silenciar, y lo hacen no sólo persiguiendo a sus profesores y estudiantes, sino también asfixiándolas presupuestariamente, como ha venido ocurriendo en Venezuela por lo menos desde el 2008.<sup>37</sup> Ahora bien, aunque es necesario y deseable que las universidades tengan diversificación de fuentes financieras y puedan generar recursos

---

<sup>35</sup> Desde el 2008 el Gobierno de Venezuela eliminó la prueba de aptitud académica que se aplicaba a los estudiantes para el ingreso a la Universidad, no solo violando la autonomía de las instituciones de educación superior, sino socavando la calidad educativa. Véase: Luis, E. Cortázar, J. y Fuenmayor, L. “La admisión universitaria en Venezuela hasta 2007. Comparación del proceso nacional CNU-OPSU con los mecanismos universitarios de ingreso, en especial el de la UCV”. *Revista venezolana de análisis de coyuntura* XXIV (2018): 155-178. El informe 2020 de la Relatoría de libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas también ha denunciado como una injerencia del Estado la gestión de las políticas de admisión, que suele aplicarse como restricciones sin fines lícitos afectando la autonomía institucional.

<sup>36</sup> PILA. Principio VIII. Op. Cit.

<sup>37</sup> Hasta el 2007 las universidades recibieron el presupuesto ajustado a la ley, pero el monto de ese año fue reconducido durante los años sucesivos hasta la actualidad, que ya ha perdido el 99% de su valor. Véanse los reportes mensuales sobre la *Situación de las universidades en Venezuela* producidos por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/reportes-mensuales-situacion-de-las-universidades-en-venezuela/>

propios para reducir su dependencia del Estado,<sup>38</sup> ello no significa que el Estado pueda liberarse de su obligación de financiamiento de la educación superior. En el caso de Venezuela la Constitución Nacional vigente, además de instituir la autonomía académica, administrativa y financiera en el artículo 109, establece en el artículo 110 la obligación del Estado de proveer los recursos suficientes para la constitución de su patrimonio.

También es fundamental tener en cuenta que el presupuesto público debe observar la proporcionalidad necesaria para que todas las instituciones de educación superior puedan desarrollar sus actividades con igual autonomía y que las medidas presupuestarias aplicadas a las instituciones académicas con el fin de castigarlas impactan negativamente en la libertad académica.<sup>39</sup>

Entre las consecuencias de aplicar la asfixia presupuestaria a las universidades venezolanas están la migración forzada de profesores, estudiantes y personal técnico-administrativo, así como el deterioro de la infraestructura física y tecnológica, con un impacto negativo en la investigación y producción de conocimiento.<sup>40</sup> Por ello una universidad post-chavista debe contar con un presupuesto adecuado, pero también incentivar la diversificación de fondos. Los salarios de los profesores deben internacionalizarse y ajustarse en función de la productividad académica para garantizar el relevo y detener la fuga de cerebros.<sup>41</sup> Pero que mientras ello no ocurra, los profesores universitarios vene-

---

<sup>38</sup> Seoane, Javier. "Hacia una universidad venezolana posrentista". *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* XXIII, N.º 1 (2017): 51-68. Un proyecto emanado de la Universidad de Los Andes que data del 2016 ha propuesto la creación de un 'fondo de financiamiento destinado a complementar los presupuestos aprobados por el Estado a las instituciones educativas, a fin de asegurar el funcionamiento de sus actividades académicas'. Este fondo se alimentaría de recursos públicos, privados, de obtención propia y de donaciones y contribuciones hechas por personas naturales y jurídicas. Véase para ello Mendoza Angulo, José. "Autonomía y democracia en la Universidad del siglo XXI". Universidad Católica Andrés Bello. 7 de junio de 2011. [http://w2.ucab.edu.ve/tl\\_files/Home-Images/noticias/Jose%20Mendoza%20Angulo%20\(1\).pdf](http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Home-Images/noticias/Jose%20Mendoza%20Angulo%20(1).pdf) (último acceso: 22 de septiembre de 2022).

<sup>39</sup> PILA. Principios II y IV. Op. Cit.

<sup>40</sup> Véase: Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. "El declive de la investigación científica en Venezuela. COVID-19 y emergencia humanitaria". 15 de septiembre de 2020. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/09/15/declive-investigacion-cientifica-venezuela-covid-19-emergencia-humanitaria/> (último acceso: 2022 de julio de 2022). Para Orlando Alborno es preocupante el aislamiento de nuestras universidades respecto a los centros de producción de conocimiento mundial, así como su escaso impacto en la comunidad científica. Vázquez, M. y González O., Luis J. "Reseña libro Academic Populism de Orlando Alborno". *Espacio Abierto* 16, n.º 1 (2007): 165-169.

<sup>41</sup> Seoane, Javier, op. cit.

zolanos que se vean forzados a migrar puedan contar con una garantía de asilo como lo prescriben los PILA.<sup>42</sup>

También es fundamental que una universidad de la era post-chavista pueda contar con apoyo internacional a la luz de la Observación General N° 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1.b, 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que señala el compromiso de los Estados desarrollados para contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo, adoptando para ello medidas como la asignación de asistencia y financiación para tales fines.<sup>43</sup>

Hay que subrayar así mismo que el impacto negativo en la producción científica, como consecuencia de la migración de personal cualificado, representa también un impacto negativo para el desarrollo del país, no solo desde un punto de vista económico, sino también político, especialmente con respecto a sus garantías democráticas.<sup>44</sup> Venezuela ha descendido significativamente sus índices de productividad y *rankings*.<sup>45</sup>

Su gran número de universidades paralelas no produce investigación.<sup>46</sup> Por otra parte, la universidad autónoma solo puede desarrollarse en democracia, y la democracia se fortalece cuando cuenta con instituciones de educación superior libres y de calidad. Solo instituciones con libertad académica pueden garantizar la formación de personas críticas y deliberativas capaces de participar en los debates políticos y en las decisiones sociales que marcarán su destino. En efecto como señala el Informe del Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones

<sup>42</sup> PILA. Principio XIV. Op. Cit.

<sup>43</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Ginebra: Consejo Económico y Social-Naciones Unidas, 2020.

<sup>44</sup> Véase la dimensión colectiva de la Libertad Académica como se describe en los PILA, Principio N° I “...la libertad académica tiene una dimensión colectiva, consistente en el derecho de la sociedad y sus integrantes a recibir informaciones, conocimientos y opiniones producidas en el marco de la actividad académica y de obtener acceso a los beneficios y productos de la investigación, innovación y progreso científico” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021).

<sup>45</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “El declive de la investigación científica en Venezuela. COVID-19 y emergencia humanitaria”. Op. Cit.

<sup>46</sup> Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “El sistema paralelo universitario en Venezuela, 2003-2019”. 2020, p. 3-11. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/02/Informe-El-sistema-paralelo-universitario-en-Venezuela.-2003-2019-Descargar-1.pdf>

Unidas, “sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales”.<sup>47</sup>

Por ello, la necesaria universidad de la era post-chavista exige un entorno democrático al que las propias universidades están llamadas desde ya a contribuir para alcanzarlo, sin soslayar los retos más importantes que enfrentamos como la crisis ecológica, la amenaza nuclear o el desafío que presentan las nuevas tecnologías para las libertades.

## 5. CONCLUSIONES

El arribo al poder del régimen autocrático en Venezuela supuso el declive de sus universidades, como consecuencia de las violaciones sistemáticas de la libertad académica que trajo aparejadas. La recuperación de nuestras universidades por tanto va de la mano con el restablecimiento del orden democrático y el Estado de Derecho lo que permitiría el cese del control gubernamental sobre el sistema de educación superior en general, de manera que las instituciones de educación superior puedan rescatar su autonomía y potestades inherentes, pues la progresiva instauración de una legislación inconstitucional en los últimos veinte años y la asfixia presupuestaria impuesta desde el 2008, han impedido incluso que estas instituciones puedan desarrollar otros mecanismos para su autofinanciamiento.

La reconstrucción del sistema de educación superior debe asimismo basarse no solo en los PILAAU, sino también, en las recomendaciones y señalamientos hechos por los mecanismos de derechos humanos de los sistemas interamericano y universal.

Ahora bien, en el proceso de reconstrucción de las universidades venezolanas, las propias universidades están llamadas a tener un papel activo, como de hecho lo han venido haciendo, junto con las organizaciones de la sociedad civil, elevando la voz de alerta nacional e internacionalmente, acompañando a su personal académico cuando es perseguido y creando un registro de cara a próximos procesos de justicia transicional.

---

<sup>47</sup> Véase el Informe sobre Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Op. Cit.



## Bibliografía

- Albornoz, O. *Mitos, tabúes y realidades de las universidades*. Editado por Universidad Central de Venezuela. Unesco: Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2018.
- Alfonso, José Gregorio. “El tricentenario de la indoblegable UCV”. *Provea*. 27 de diciembre de 2021. <https://provea.org/opinion/el-tricentenario-de-la-indoblegable-ucv/> (último acceso: 12 de septiembre de 2022).
- Belandria, Margarita. “Venezuela y su Estado de Derecho”. *Dikaiosyne*, n° 22 (junio 2009): 25.
- Coalición de Cátedras y Centros de Derechos Humanos. “El pensamiento bajo amenaza. Situación de la libertad académica y autonomía universitaria en Venezuela”. octubre de 2017. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/07/Informe-LA-y-AU-FIN.pdf> (último acceso: 10 de agosto de 2022).
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe país: Situación de derechos humanos en Venezuela”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. 31 de diciembre de 2017. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf> (último acceso: 08 de agosto de 2022).
- “Principios Latinoamericanos de Libertad Académica”. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Editado por REDESCA y RELE. 2021. [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios\\_libertad\\_academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios_libertad_academica.pdf) (último acceso: 15 de 12 de 2022).
- Comité de derechos económicos, sociales y culturales-Naciones Unidas. *Observación General N° 13 El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto)*. Ginebra: Consejo Económico y Social-Naciones Unidas, 1999.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *Observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. Ginebra: Consejo Económico y Social-Naciones Unidas, 2020.
- “Examen Periódico Universal-Venezuela (República Bolivariana de)”. *Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos*. 25 de enero de 2022. <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/upr/ve-index> (último acceso: 18 de septiembre de 2022).
- Leonardo, Carvajal. “Autonomía universitaria y libertad de cátedra versus control político en la historia venezolana”. En *Universidad, política y democracia. Escritos polémicos.*, de Carvajal et al. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2011.
- Ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2004*. Gaceta oficial extraordinaria número 5678, del 16/12/2003 (Ministerio para la Educación Superior, 16 de diciembre de 2003).
- Ley de universidades*. Gaceta Oficial No. 1429, Extraordinario (8 de septiembre de 1970).
- Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 Extraordinario de fecha 15 de agosto de 2009 (Asamblea Nacional, 2009).
- “LOCTI-Proyecto Nacional Simón Bolívar”. *Agencia de Noticias LUZ*. mayo de 2011. [http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo\\_2011/descargas\\_locti/proyecto\\_nacional\\_simon\\_bolivar.pdf](http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/images/stories/noticias2/mayo_2011/descargas_locti/proyecto_nacional_simon_bolivar.pdf) (último acceso: 08 de septiembre de 2022).
- López, Roberto y Hernández, Carmen. “Movimientos estudiantiles y crisis del sistema político en Venezuela: 1987-1988”. *Espacio abierto* 10, n° 4 (2001): 631-666.
- Luis, E. Cortazar, J. y Fuenmayor, L. “La admisión universitaria en Venezuela hasta 2007. Comparación del proceso nacional CNU-OPSU con los mecanismos universitarios de ingreso, en especial el de la UCV”. *Revista venezolana de análisis de coyuntura* XXIV (2018): 155-178.

- Mayz Vallenilla, Ernesto. *El Ocaso de la Universidades*. Caracas: Monte Avila Editores, 1984.
- Mendoza Angulo, José. “Autonomía y democracia en la Universidad del siglo XXI”. *Universidad Católica Andrés Bello*. 7 de junio de 2011. [http://w2.ucab.edu.ve/tl\\_files/Home-Images/noticias/Jose%20Mendoza%20Angulo%20\(1\).pdf](http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Home-Images/noticias/Jose%20Mendoza%20Angulo%20(1).pdf) (último acceso: 22 de septiembre de 2022).
- Ministerio del Poder Popular para la Planificación. “Ley del plan de la patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 Extraordinario”. *Ministerio del Poder Popular para la Planificación*. 4 de diciembre de 2019. [http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/ley\\_plan\\_patria.pdf](http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/ley_plan_patria.pdf) (último acceso: 15 de noviembre de 2022).
- Misión Sucre. *Misión Sucre creada hace 14 años para la transformación universitaria*. 09 de agosto de 2017. <http://www.misionsucre.gov.ve/#noticia&n=381300d769c5dd80fa461810e34bc645> (último acceso: 28 de enero de 2023).
- Moreno, Armando. “Sesenta años del Decreto Ley de Universidades (1958). Autonomía universitaria plena: origen, desarrollo, transformación y transfiguración (1958-2018)”. *EDUCERE*, 2019: 75.
- Naciones Unidas, Asamblea General. “Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”. 28 de junio de 2020. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/197/89/PDF/N2019789.pdf?OpenElement> (último acceso: 10 de diciembre de 2022).
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “El sistema paralelo universitario en Venezuela (2003-2019)”. *Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes*. 30 de abril de 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/04/30/informe-el-sistema-paralelo-universitario-en-venezuela-2003-2019/> (último acceso: 15 de julio de 2022).
- “Plan de la patria 2019-2025: Consolidación del sistema universitario paralelo en Venezuela”. *Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes*. 06 de marzo de 2021. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/03/06/informe-plan-de-la-patria-2019-2025-consolidacion-del-sistema-universitario-paralelo-venezuela/> (último acceso: 22 de septiembre de 2022).
  - “Situación de las universidades en Venezuela, Reporte mensual”. 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/index.php/informes-2/> (último acceso: 2022 de diciembre de 2022).
  - “Universidades paralelas en Venezuela un mal que persiste”. *Observatorio de Derechos Humanos ULA*. 2022. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Universidades-paralelas-un-mal-que-persiste-Venezuela-2022.pdf> (último acceso: 15 de noviembre de 2022).
- Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. “Contribuciones al Examen Periódico Universal ONU sobre Venezuela 2016 Restricciones y represalias contra la autonomía y la libertad académica en el sistema de educación superior”. *Observatorio de Derechos Humanos ULA*. marzo de 2016. <https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2016/08/EPUVenezuelaRestriccionesLibertadAcademica.pdf> (último acceso: 10 de agosto de 2022).
- Pedro, Díaz Seijas. “Tres lustros de la Educación en Venezuela (1974-1989)”. En *Venezuela Contemporánea*, 625 y ss. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza, 1989.
- Resolución 2963. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930, de fecha 14/05/2008 (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Caracas 13 de mayo de 2008).

- Rondón M., Roberto. "Antecedentes y hechos en torno a la ley de Universidades de 1958". *Educere*, 2019: 367-377.
- Scholars At Risk. "Free to Think Report 2022". december 2022. <https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2022/> (accessed December 15, 2022).
- Seoane, Javier. "Hacia una universidad venezolana posrentista". *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* XXIII, n° 1 (2017): 51-68.
- Uslar Pietri, Arturo. *La universidad y el país, Cuarenta ensayos*. Caracas: Monte Ávila, 1990.
- Vázquez, M. y González O., Luis J. "Reseña libro Academic Populism de Orlando Alborno". *Espacio Abierto* 16, n° 1 (2007): 165-169.
- Working Group on the Universal Periodic Review. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Bolivarian Republic of Venezuela 2017". *United Nations, General Assembly*. febrero 27, 2017. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/47/PDF/G1644147.pdf?OpenElement> (accessed septiembre 24, 2022).



*TERCERA PARTE*  
**VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO  
Y PERSECUCIÓN DE PROFESORAS,  
PROFESORES Y ACTIVISTAS**



# HANDLE WITH CARE: LINKS BETWEEN GENDER-BASED VIOLENCE AND HARASSMENT ON CAMPUS, ACADEMIC FREEDOM, AND THE ROLE OF THE UNIVERSITY OMBUDSPERSON

## *Maneje con cuidado: Vínculos entre la violencia de género y el acoso en el campus, la libertad académica y el papel de la Defensoría Universitaria*

LAVINIA FRANCESCONI

### **Summary**

This paper unpacks some of the challenges related to gender-based violence and harassment (GBVH) on campus, namely, the difficulties in framing harassment and/or violent conduct, as well as the general lack of a safe and effective institution where victims can seek support. First, a victim-centered definition of GBVH will be advanced according to International Labour Organization (ILO) standards. Through a legal doctrinal analysis of relevant international human rights law (IHRL) texts on the topic, this article will also describe why GBVH is connected to academic freedom and, therefore, violates the same. Second, this article will examine the general mandate of the University Ombudsperson and its potential role in addressing GBVH. This article will also look at the main features of higher education institutions that could be appropriate to deal with certain types of violations at the individual level and how they could tackle this phenomenon more broadly at the institutional level.

**Keywords:** gender-based violence, harassment, academic freedom, Ombudsperson, International Labour Organization

### **Resumen**

En este artículo se exponen algunos de los retos relacionados con la violencia de género y el acoso (VG) en el campus, a saber, las dificultades para encuadrar el acoso y/o las conductas violentas, así como la falta general de una institución segura y eficaz a la que puedan recurrir las víctimas. En primer lugar, se avanzará en una definición de la violencia de género que tenga en cuenta a las víctimas, de acuerdo con las normas de la OIT. A través de un análisis jurídico doctrinal de los textos pertinentes del DIDH sobre el tema, también se describirá por qué la violencia de género está relacionada con la libertad académica y, por tanto, la vulnera. En segundo lugar, sobre la base de una revisión bibliográfica, se examinará el mandato general del Defensor Universitario, y cómo se ha ocupado de la violencia de género. Se mostrarán cuáles son las principales

características de las instituciones que podrían ser apropiadas para tratar cierto tipo de violaciones —individualmente—, y cómo podría abordarse este fenómeno de forma amplia a nivel institucional.

**Palabras clave:** Violencia de género, acoso, libertad académica, Defensor del Pueblo, Organización Internacional del Trabajo

### **Author affiliation**

Name: Lavinia Francesconi

Institution: Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC), Institut d'études humanitaires internationales (Aix-Marseille Université-Faculté de Droit et de Science Politique)

Bio: PhD candidate at Centre d'Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC), Aix-Marseille Université-Faculté de Droit et de Science Politique. LL.M. in Public International Law, Faculty of Law, Leiden University. Law Degree (*cum laude*), Faculty of Law, University of Bologna. Legal Advisor at Institut d'études humanitaires internationales, Aix-Marseille Université-Faculté de Droit et de Science Politique.

E-mail: francesconi.lavinia@gmail.com

## 1. INTRODUCTION

Gender-based violence and harassment (GBVH) is not an endemic phenomenon, as the transnational feminist movement has shown over the decades. Its exposure has trespassed universities' walls in Latin American, where, in 2018, protests started spreading in reaction to this phenomenon and in solidarity with victims of these abuses. Besides the clear need for a cultural change, there are two main challenges related to GBVH on campuses:<sup>1</sup> unclear framing of what constitutes harassment and/or violent conduct and the absence of a safe and effective institution to which victims can turn.<sup>2</sup>

With a specific focus on the Americas, this piece will tackle the following issues. First, a victim-centered definition of GBVH will be advanced according to International Labour Organization (ILO) standards. Accordingly, through a legal doctrinal analysis of relevant international human rights law

---

<sup>1</sup> For a review of qualitative and quantitative studies of gender violence on campuses, see: Huerta Mata RM, "Miradas Lascivas, Violencia Contra Las Estudiantes Universitarias" (2020) 32 región y sociedad e1285.

<sup>2</sup> See: SAR uOttawa, "Report threats to academic freedom in the americas" (Human Rights Research and Education Centre (HRREC) University of Ottawa, 2020).



(IHRL) texts on the topic, this article will describe why GBVH is connected to academic freedom and, therefore, violates it. Second, based on a literature review, this article will examine the general mandate of the University Ombudsperson (UniOmbuds) and how this actor has addressed GBVH. Finally, this article will present the UniOmbuds' main features that could be appropriate for responding to various types of individual violations and how this mechanism could take on this phenomenon more broadly at the institutional level.

## 2. DEFINING GBVH AND ITS RELATIONSHIP WITH ACADEMIC FREEDOM

The types of conduct that fall under the scope of GBVH might be unclear, but the ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)<sup>3</sup> provides some helpful guidelines. Despite its still low rate of ratification,<sup>4</sup> the Convention is detailed and comprehensive regarding the scope of application of GBVH, and it is praised for its integral approach and the incorporation of the disproportionate impact doctrine.<sup>5</sup> Article 1(a) of the convention defines “violence and harassment” as “a range of unacceptable behaviors and practices, or threats”. These behaviors are qualified as unacceptable whenever they “result in physical, psychological, sexual or economic harm”.<sup>6</sup> The latter also includes “‘gender-based violence and harassment’ [i.e.] violence and harassment directed at persons because of their sex or gender or affecting persons of a particular sex or gender disproportionately”. The definition also comprises “sexual harassment”,

<sup>3</sup> Entered into force the 25<sup>th</sup> of June of 2021.

<sup>4</sup> The Convention has been ratified by 20 countries, among them 8 countries from the Americas (see: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300\\_INSTRUMENT\\_ID:3999810](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:3999810)).

<sup>5</sup> Lobato, Julieta. “El Convenio 190 y La Recomendación 206 de La OIT. Un Avance Decisivo Hacia El Fortalecimiento de La Protección de Derechos Fundamentales En El Trabajo” *Revista de Derecho Laboral Actualidad*, January 1, 2019, p. 3.

<sup>6</sup> “Economic harm could consist of loss of income or property damages, but also restrictions in accessing financial resources, education or the labour market, including restricting a person’s ability to remain in or advance in the labour market” (International Labour Office. “Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206.” Geneva: ILO, 2021, p. 8).

which was addressed previously by the ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).<sup>7</sup>

This broadening of the scope of GBVH is particularly important, considering that GBVH often manifests in less acute conduct,<sup>8</sup> which nevertheless creates a hostile environment. This definition of GBVH can be considered “victim-centered,” first, as it refers to conduct affecting any “persons because of their sex or gender,”<sup>9</sup> therefore including discrimination based on gender expression and sexual orientation;<sup>10</sup> and second, as it focuses on the unacceptable nature of the conduct,<sup>11</sup> disregarding any reference to the perpetrator’s position in the work environment or his or her intent.<sup>12</sup>

GBVH on campus takes place in a context that can be classified both as a working environment and as an educational one. This entails that there are different, interacting legal frameworks, such as labor law, administrative law, and, when a certain threshold is reached, criminal law. From a subjective point of view, although the ILO convention was designed for workplaces, it applies not only in vertical (employer-employee) and horizontal (peers) relationship, but also to third parties, “such as clients, patients, passengers or customers” and, arguably, students.<sup>13</sup> This broad scope of application resonates with academic

<sup>7</sup> The Convention’s definition included two elements: “(1) (quid pro quo) Any physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature and other conduct based on sex affecting the dignity of women and men, which is unwelcome, unreasonable, and offensive to the recipient; and a person’s rejection of, or submission to, such conduct is used explicitly or implicitly as a basis for a decision which affects that person’s job; or (2) (hostile work environment) Conduct that creates an intimidating, hostile or humiliating working environment for the recipient,” see: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-gender/documents/briefingnote/wcms\\_738115.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-gender/documents/briefingnote/wcms_738115.pdf)

<sup>8</sup> See: Schultz, Vicky, “Reconceptualizar el acoso sexual, de nuevo,” in Alterio, Ana Micaela, and Alejandra Martínez Verástegui. *Feminismos y Derecho. Un Diálogo Interdisciplinario En Torno a Los Debates Contemporáneos*. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 2020.

<sup>9</sup> International Labour Office. “Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206.” Geneva: ILO, 2021, p. 12.

<sup>10</sup> See e.g., Almodóvar Iñesta, María. “Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas.” *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50, p. 25.

<sup>11</sup> Cfr. Although this might leave a broader space for justifications based on different cultural contexts (Lobato, Julieta. “El Convenio 190 y La Recomendación 206 de La OIT. Un Avance Decisivo Hacia El Fortalecimiento de La Protección de Derechos Fundamentales En El Trabajo” *Revista de Derecho Laboral Actualidad*, January 1, 2019, p. 6).

<sup>12</sup> International Labour Office. “Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206” Geneva: ILO, 2021, p. 10.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

freedom, as it concerns scholars, students, and all members of the higher education community.<sup>14</sup>

Academic freedom is another legal concept that is concerned by GBVH. Academic freedom is rooted in different rights under IHRL, such as “the rights to freedom of opinion and expression and the right to education,”<sup>15</sup> as well as the right to the benefits of scientific research and freedom to research,<sup>16</sup> and it contains “elements of freedom of association, freedom of movement, and other rights”.<sup>17</sup> Thus, academic freedom covers individual activities such as teaching, discussion, research, publishing, and disseminating of findings, as well as freedom from censorship; from an institutional point of view, it preserves institutional autonomy, i.e., “that degree of self-governance necessary for effective decision making by institutions of higher education regarding their academic work, standards, management and related activities consistent with systems of public accountability, especially in respect of funding provided by the state, and respect for academic freedom and human rights”.<sup>18</sup>

Under this framework, it can be argued that student victims of GBVH may claim violations of their right to education (with respect to non-discrimination and equal treatment),<sup>19</sup> especially if the particular GBVH conduct disrupts their course attendance or even prevents them from pursuing their degree programs. On the other hand, teachers and academic staff might see other rights compromised, such as their freedom to express themselves without being

<sup>14</sup> UNGA, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, UN Doc. A/75/261, 28 July 2020, para. 8

<sup>15</sup> Robert Quinn and Jesse Levine. “Intellectual-HRDs and Claims for Academic Freedom under Human Rights Law.” *The International Journal of Human Rights* 18, no. 7-8 (November 17, 2014): 898-920, p. 903.

<sup>16</sup> Katrin Kinzelbach, Ilyas Saliba & Janika Spannagel (2022) Global data on the freedom indispensable for scientific research: towards a reconciliation of academic reputation and academic freedom, *The International Journal of Human Rights*, 26:10, 1723-1740, DOI: 10.1080/13642987.2021.1998000, p. 1724.

<sup>17</sup> Scholars at Risk (SAR), “Report to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Protection of Academic Freedom under International Human Rights Law.” Scholars at Risk (SAR), 2020. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Scholars\\_at\\_Risk\\_submission.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Scholars_at_Risk_submission.pdf), para. 4.

<sup>18</sup> UNESCO, Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, adopted by the General Conference at its twenty-ninth session, Paris, 21 October-12 November 1997, 11 November 1997, para. 17.

<sup>19</sup> Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment N° 13: The Right to Education (Article 13), 8 December 1999, para. 6(b).

censored, freedom to conduct research, or freedom to access their institution. Nevertheless, for each member of the academic community, GBVH falls under the prohibition of non-discriminatory treatment in the sphere related to academic freedom, according to the IACHR's Principles on Academic Freedom.<sup>20</sup> As such, the IACHR has also suggested that specific protocols and measures shall be taken to prevent, investigate and punish any violation<sup>21</sup> towards any person related to the academic environment.<sup>22</sup> Regarding complaint mechanisms, these should be easily accessible, safe, fair, and effective. Indeed, the Inter-American Court of Human Rights has stressed the importance of establishing accessible mechanisms and protocols to denounce, investigate and sanction gender and sexual violence against students.<sup>23</sup> Another complex issue that authorities must consider duly when handling GBVH complaints is the burden of proof, whether reverse<sup>24</sup> or dynamic.<sup>25</sup>

Yet, even if formal mechanisms are in place, victims might be reluctant to engage in a formal process and report a violation out of fear of reprisal, retaliation, and double victimization,<sup>26</sup> but also out of a general distrust in the effectiveness of

<sup>20</sup> Principle, III, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios Interamericanos Sobre Libertad Académica Y Autonomía Universitaria. 2021. Available at: [https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios\\_Libertad\\_Academica.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Academica.pdf).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Principle IX.

<sup>22</sup> See as a good practice in this sense: University of Hidalgo, where even persons external to the community might report an incident, (Rodríguez Gaona, Roberto. "El Defensor Universitario. Algunas Reflexiones En Torno al Papel Del Ombudsman Organizacional," *Nuestros Derechos y Valores En La Universidad*, 11-32. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009, p. 24). Generally, in Spain the LOI as an administrative legislation should apply to the entire academic community, although practice varies widely among Uni protocols, some of them just protect Uni staff as a labor protection, others are broader and protect all types of situations, such as harassment from student, teachers, and administrative staff, towards any other person part of these groups (*Ibid.*, p. 30).

<sup>23</sup> N.B.: It should be noticed that the case deal with the violation occurred in school, not in higher education. *Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador* (Corte Interamericana de Derechos Humanos August 14, 2020).

<sup>24</sup> Beyond the general lack of incident reports, it is commonly recognized that the burden of proof is a major challenge in GBVH cases (See: [https://www.stopvaw.org/barriers\\_to\\_effective\\_enforcement\\_of\\_sexual\\_harassment\\_law.html](https://www.stopvaw.org/barriers_to_effective_enforcement_of_sexual_harassment_law.html); International Labour Office. "Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206." Geneva: ILO, 2021, recommendation 16.E.

<sup>25</sup> Lobato, Julieta. "El Convenio 190 y La Recomendación 206 de La OIT. Un Avance Decisivo Hacia El Fortalecimiento de La Protección de Derechos Fundamentales En El Trabajo." *Revista de Derecho Laboral Actualidad*, January 1, 2019, pp. 16 ss.

<sup>26</sup> Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Why Sexual Harassment Programs Backfire." *Harvard Business Review* 98, no. 3 (2020): 44-52, p. 49.

the procedure or the actual delivery of remedies.<sup>27</sup> Criminal law tends to outlaw more severe GBVH conduct, neglecting other, less acute forms of GBVH; it also focuses more on sanctioning perpetrators rather than remedying victims.<sup>28</sup> At the same time, trainings, close surveillance, and complaints have not proven to solve this issue either.<sup>29</sup> Furthermore, sexism and other types of abusive practices are more prevalent than sexual harassment;<sup>30</sup> alternative approaches should be sought to handle them. As such, it is proposed here to explore if UniOmbuds and some of the informal procedures connected to this mechanism might be preferable to address GBVH within higher education. The UniOmbuds might also be strategic in ensuring the collective dimension of academic freedom, i.e., institutional autonomy,<sup>31</sup> which includes “the adoption and enforcement of policies [regarding] transparency, non-discrimination, gender equality”.<sup>32</sup>

### 3. BRIEF EXCURSUS ON THE ROLE OF THE UNIOMBUDS AND HOW IT HANDLES GENERAL AND GBVH COMPLAINTS

The modern Ombudsperson institution as we know it (“Defensor(a) del Pueblo,” in Spanish) has roots in northern European countries, particularly in Sweden.<sup>33</sup> Ombudspersons can take three forms: the civil rights ombudsperson, i.e., the classical ombudsperson that deals with the proper administration of a government; the “advocate” ombudsperson, which represents a certain group of citizens (e.g., patients and consumers); and the organizational ombudsperson.<sup>34</sup>

<sup>27</sup> Pappas, Brian. “Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct” *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), pp. 98-99; International Labour Office. “Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206.” Geneva: ILO, 202, p. 67.

<sup>28</sup> Pappas, Brian. “Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct” *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), p. 23.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 51. With regard to workplace environments, the author argues that what is needed is departing from the hierarchical model and to abolish sexual segregation and inequality at work.

<sup>30</sup> Schultz, Vicky, “Reconceptualizar el acoso sexual, de nuevo,” in Alterio, Ana Micaela, and Alejandra Martínez Verástegui. *Feminismos y Derecho. Un Diálogo Interdisciplinario En Torno a Los Debates Contemporáneos*. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 2020, p. 20.

<sup>31</sup> UNGA, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, UN Doc. A/75/261, 28 July 2020.

<sup>32</sup> *Ibidem*, see also paragraph 22 (k), 1997 recommendation, UNESCO.

<sup>33</sup> Smith, Ryan. “A Brief History of the Student Ombudsman: The Early Evolution of the Role in US Higher Education.” *Journal of the International Ombudsman Association* 1 (2020), p. 3.

<sup>34</sup> Gmurzyńska, Ewa. “Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of

Although the organizational model was inspired by the classical one, it differs from it since the ombudsperson is not appointed by one of the government's branches, but rather by the highest organ of the organization itself. A neutral person is appointed or elected to deal with conflicts raised by people, informally or formally within it, with the basic requirements of independence and impartiality.<sup>35</sup> The UniOmbuds is organizational, since it provides a space for students, professors, and administrative staff to handle disputes. The UniOmbuds may be external to the higher education institution, i.e., a public and centralized organ that receives complaints, or internal to the institution, acting according to a statutory basis or to internal regulations.<sup>36</sup>

In general, to maintain its neutrality and independence from higher education authorities, UniOmbuds do not use adjudicatory tools to solve conflicts.<sup>37</sup> Rather, soft tools are preferred to resolve disputes among students, professors, and authorities. These include conciliation, mediation, shuttle diplomacy, counseling and listening.<sup>38</sup> These soft tools can lead to resolutions that parties can agree upon through dialogue, rather than resolutions imposed by judicial or administrative processes that tend to work more slowly.<sup>39</sup>

When a complaint is filed, the UniOmbuds can carry out a meditation process if the parties agree and if the victim requests this. The UniOmbuds' recommendations' efficacy is due to the impartiality, confidentiality, and informality of its procedures<sup>40</sup> and can become binding when the authorities en-

---

Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods." *Studia Iuridica Lublinsia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149, p. 162.

<sup>35</sup> Rodríguez Gaona, Roberto. "El Defensor Universitario. Algunas Reflexiones En Torno al Papel Del Ombudsman Organizacional," *Nuestros Derechos y Valores En La Universidad*, 11-32. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009, pp. 20-21. On the election of the Ombuds, see also General Assembly Resolution 63/169 and UN General Assembly Resolution 65/207.

<sup>36</sup> Behrens, Rob. "Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study." *European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE)*, 2017, p. 180

<sup>37</sup> Gmurzyńska, Ewa. "Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods." *Studia Iuridica Lublinsia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149, p. 166.

<sup>38</sup> Behrens, Rob. "Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study" *European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE)*, 2017. On the consultive and quasi-judicial function of the Ombuds, see also: UNGA, Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), Res. 48/134, 20 December 1993

<sup>39</sup> Aguirre Oraa, José María. "El Defensor Universitario. Entre La Ética y La Política" *Revista RUEDA* 2 (2017), p. 82.

<sup>40</sup> Rodríguez Gaona, Roberto. "El Defensor Universitario. Algunas Reflexiones En Torno al Papel Del Ombudsman Organizacional," *Nuestros Derechos y Valores En La Universidad*, 11-32. México:

dorse them.<sup>41</sup> The UniOmbuds can also send recommendations to the relevant authorities, even *ex officio*, if it receives information about the violation of the community member's rights.<sup>42</sup> However, the conciliatory process might not be suitable for disputes where a values conflict is at stake; adjudicatory methods might be more appropriate.<sup>43</sup> Some UniOmbuds might use these procedures and make binding decisions, but this is mostly the case of centralized university UniOmbuds<sup>44</sup> or UniOmbuds appointed by the parliament<sup>45</sup> or government bodies. Some other UniOmbuds, as in Spain and in the Netherlands, "use adjudicatory procedures in facts' examination, handle complaints and make decisions,"<sup>46</sup> but with caution and only when informal procedures have failed.

In some European higher education institutions and in the United States, there is a specific office responsible for dealing with reports of sexual violence and harassment on campus.<sup>47</sup> When that is not the case, UniOmbuds have described addressing discriminatory practices as one of the most challenging tasks to tackle in their mandate.<sup>48</sup>

In Latin America, there are some relevant examples that show how UniOmbuds have handled GBVH, both in positive and negative terms. According to a report from the Pontifical Catholic University of Peru, just 1% of the interviewed

---

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009, p. 21.

<sup>41</sup> Frausto, Dante. "The Dynamic and Inclusive Role of the Ombudsman in Consolidating Respect for Human Rights and the New Paradigms of a Culture of Peace" *Derechos Fundamentales a Debate/ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco*, 2021, p. 65.

<sup>42</sup> Faraldo Cabana, Cristina. "Protocolos de Actuación Contra El Acoso Laboral En La Universidad: Especial Referencia a La Universidad Da Coruña." *Cuaderno Del Instituto Vasco de Criminología EGUZKILORE* 28 (2014), pp. 13-14.

<sup>43</sup> Gmurzyńska, Ewa. "Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods." *Studia Iuridica Lublinsia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149, p. 184.

<sup>44</sup> Where national ombuds deal with all university disputes, e.g., Austria and Lithuania (*ibid.*, p. 169).

<sup>45</sup> E.g., Australia, Ireland, Scotland, *ibid.*, p. 167.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Behrens, Rob. "Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study." European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE), 2017, p. 37. In the United States, these persons are usually Title IX Coordinators, but the UniOmbuds play an important role in "defuse situations before they become larger problems by helping individuals think through options, clarify goals, and improve communication" Pappas, Brian. "Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct" *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), p. 112.

<sup>48</sup> Behrens, Rob. "Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study." European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE), 2017, p. 36.

persons referred to the UniOmbuds before 2020.<sup>49</sup> Indeed, in this University, the work of the UniOmbuds has negatively interfered with the operations of the Comisión contra el Hostigamiento Sexual (Commission Against Sexual Harassment), which was created in 2016. Consequently, the UniOmbuds has been accused of acting in favor of perpetrators and dismissing victims' allegations.<sup>50</sup> This case study underlines the importance of ensuring UniOmbuds' impartiality,<sup>51</sup> and of the use of surveys to assess how GBVH is addressed on campus.<sup>52</sup> On the other hand, in the University of Cordoba (Argentina), the UniOmbuds is one of the members of a commission that monitors and implements the "Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC" ("Action plan and toolkit to prevent, address, and sanction gender-based violence within the Universitario de Córdoba"). This is a good example of how UniOmbuds can take on an advisory role in GBVH, as the Commission receives queries, takes complaints related to gender violence, provides emotional support and accompaniment, and maintains an informed record.<sup>53</sup> A different type of approach seems to be undertaken in some Mexican universities.<sup>54</sup> A review of existing formal protocols

<sup>49</sup> Salazar Lostaunau, Ximena, and Claudia Medina López, "Diagnóstico Sobre La Violencia de Género En La PUCP" Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020, p. 66.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>51</sup> Another similar issue concerns non-disclosure agreements that are imposed on students (Gmurzyńska, Ewa. "Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods." *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149, p. 185; Blell, Mwenza, Shan-Jan Sarah Liu, and Audrey Verma. "A One-Sided View of the World': Women of Colour at the Intersections of Academic Freedom". *The International Journal of Human Rights*, March 7, 2022, 1-20).

<sup>52</sup> See: Almodóvar Iñesta, María. "Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas." *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50, p. 21; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Policy and Global Affairs; Committee on Women in Science, Engineering, and Medicine; Committee on the Impacts of Sexual Harassment in Academia; Benya FF, Widnall SE, Johnson PA, editors. *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. Washington (DC): National Academies Press (US); 2018 Jun 12. 5, Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment.

<sup>53</sup> Saletti-Cuesta, Lorena, Soledad Quadri, María Laura Cordero, Romina Scocozza, and Paula Bertarelli. "Desafíos Para Abordar Las Situaciones de Violencia de Género En El Ámbito Universitario de Córdoba (Argentina)" *Revista RUEDA* 3-4 (2019), p. 127. The Commission can also take preventive measures, such as the suspension of a member from the university and ask advice from the Directory and the Ombuds itself for legal procedures.

<sup>54</sup> Varela Guinot, Helena. "Las Universidades Frente a La Violencia de Género. El Alcance Limitado de Los Mecanismos Formales" *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 65, no. 238 (December 11, 2019).



in place to address GBVH on Mexican public university campuses revealed that these are often entrusted to the UniOmbuds.<sup>55</sup> Still the research uncovered the existence of issues related to the lack of responses to complaints and of specific and specialized offices.<sup>56</sup>

#### 4. SOME CONSIDERATIONS FOR THE ROLE OF THE UNIOMBUDS IN ADDRESSING GBVH

Although case studies show different approaches implemented by UniOmbuds to address GBVH, this article argues that, given its attributes, the institution is capable of responding to less severe GBVH claims. These attributes include maintaining the confidentiality of requests received through the informal process<sup>57</sup> before an eventual mediation. If the victim can maintain anonymity, they may be encouraged to report cases of GBVH. Still, anonymity does not imply that the victim should not receive all supportive measures and counsels,<sup>58</sup> or that confidentiality should become an obstacle to compulsory investigations.<sup>59</sup>

This kind of process is approachable and easily accessible, where victims can share confidentially with the UniOmbuds information about a case as well as receive advice regarding counseling options and other adjudicatory venues as well as other matters.<sup>60</sup> The UniOmbuds can train victims to confront the aggressor about the incident, and it may also act on behalf of the victim in order to maintain their anonymity.<sup>61</sup>

<sup>55</sup> Ibid., pp. 60-61.

<sup>56</sup> Ibid., pp. 65-66.

<sup>57</sup> Confidentiality is a crucial aspect of GBVH and should be guaranteed through all procedures, through measures such as “la asignación de códigos numéricos identificativos de las partes, custodia de toda la documentación por un único órgano, consulta de actas in situ o la firma de cláusulas de confidencialidad para cada uno de los sujetos que intervenga en el procedimiento.” (Almodóvar Iñesta, María. “Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas.” *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50, p. 48 and 22).

<sup>58</sup> American Bar Association, “Recommendations for Improving Campus Student Conduct Processes for Gender-Based Violence,” 2019, pp. 24-25.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Caroline Adams and Howard Gadlin, “The University Ombuds: A Valuable Resource in Addressing Campus Sexual Assaults,” *Dispute Resolution Magazine*, 21, no. 4 (2015), p. 6.

<sup>61</sup> Pappas, Brian. “Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct” *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), p. 119.

If the victim and other parties consent, mediation can also be initiated. Mediation is a voluntary process that presupposes that the victim renounces their anonymity. There are no juridical consequences, per se, at the outcome of the procedure, but the recommendations' implementation can be monitored afterwards.<sup>62</sup> As noticed in the previous section, non-litigious venues like mediation<sup>63</sup> can be more effective<sup>64</sup> and even preferable for some victims. Moreover "time-consuming structures of the university's formal resolution process may result in no apparent discipline of alleged perpetrators or meaningful closure for survivors".<sup>65</sup>

Unlike the adversarial and deterrence models, which do not reduce retaliation and require constant surveillance of potential rule-breakers,<sup>66</sup> these conciliatory procedures promote dialogue and consensual solutions.<sup>67</sup> Certainly, depending on the circumstances and the gravity of the alleged conduct, other options should be considered, such as expulsion and criminal charges, mediation, or anonymous reports. This does not imply that these processes are mutually exclusive. Informal resolution is possible when there is no sexual harassment, and thus some intervention prevents an escalation of the situation. Still, if this informal venue fails, and the victim require so, a more formal procedure within the University should be considered.<sup>68</sup>

<sup>62</sup> Almodóvar Iñesta, María. "Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas." *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50, p. 34. See also OIT Sample Sexual Harassment Policy on informal procedures.

<sup>63</sup> "Conciliation and mediation include the consideration of the position of "the other side" and the reaching of an agreement. This process empowers people who may otherwise feel rather uninvolved in the Ombudsman's investigation. The fact that the outcome has been commonly agreed on has a significant peace-making effect," International Ombudsman Institute, ed. *Australasia and Pacific Ombudsman Institutions*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.

<sup>64</sup> See: Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Why Sexual Harassment Programs Backfire." *Harvard Business Review* 98, no. 3 (2020): 44-52. As a preemptive disclaimer, it should be noted that the study was carried out in working environment in the United States.

<sup>65</sup> Pappas, Brian, Jennifer Reynolds, and A R T Hinshaw, "Designing Informal Mechanisms for Claims of Campus Sexual Misconduct" *OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION* 36, no. 5 (2021), p. 738.

<sup>66</sup> Pappas, Brian. "Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct" *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), p. 95.

<sup>67</sup> Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Making Discrimination and Harassment Complaint Systems Better." In *What Works: Evidence-Based Ideas to Increase Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace*, edited by Center for Employment Equity, 2020, pp. 24-29.

<sup>68</sup> Almodóvar Iñesta, María. "Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas." *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50, p. 34

Another important aspect of the UniOmbuds is its neutrality, a critical precondition of its ability to function properly. This neutrality enables the UniOmbuds to conduct a general audit and cooperate with other authorities when the GBVH incident(s) concerns the campus community as a whole, to promote University's best interest<sup>69</sup> and therefore academic freedom. Although the UniOmbuds lacks formal authority, this office may gain the trust of all campus community members, further enabling UniOmbuds to inform and influence the formal authorities on issues regarding GBVH.<sup>70</sup> The UniOmbuds could be conferred other tasks to promote changes within the university that realize its mission and values and also advance policies for the promotion and defense of gender equality.<sup>71</sup> As a neutral and independent actor, the UniOmbuds could also be entrusted with monitoring the university's general quality standards<sup>72</sup> and the "compliance with academic ethics provisions and procedures".<sup>73</sup> Arguably, the latter would be consistent with the institutional aspect of academic freedom related to the consistency "with systems of public accountability [...] and respect for academic freedom and human rights".<sup>74</sup> Taking the above into consideration, it has already been advanced that higher education institutions might also envision a policy that integrates GBVH issues into research integrity standards and in codes of ethics.<sup>75</sup>

<sup>69</sup> As indicated by an Ombuds in a study in the United States: "With the visitor's information, the Ombuds may be able to instigate a "generic approach," like a routine safety audit and follow-up training and catch the problem. Another option includes helping the visitor prepare for the conversations and aiding them in learning the skills necessary for acting effectively" (Pappas, Brian. "Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct" *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016), p. 119).

<sup>70</sup> Adams, Caroline, and Howard Gadlin. "The University Ombuds: A Valuable Resource in Addressing Campus Sexual Assaults" *Dispute Resolution Magazine*, 21, no. 4 (2015), p. 9.

<sup>71</sup> Rodríguez Gaona, Roberto. "El Defensor Universitario. Algunas Reflexiones En Torno al Papel Del Ombudsman Organizacional," *Nuestros Derechos y Valores En La Universidad*, 11-32. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009, p. 24.

<sup>72</sup> See, e.g., in Spain, DA 14<sup>a</sup> de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), explicitly establishing that the Ombud should act "por la mejora de la calidad universitaria en todos los ámbitos."

<sup>73</sup> Behrens, Rob. "Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study." *European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE)*, 2017, p. 173.

<sup>74</sup> UNESCO, Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, adopted by the General Conference at its twenty-ninth session, Paris, 21 October-12 November 1997, 11 November 1997, para. 17.

<sup>75</sup> National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Policy and Global Affairs; Committee on Women in Science, Engineering, and Medicine; Committee on the Impacts of Sexual Harassment in Academia; Benya FF, Widnall SE, Johnson PA, editors. *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. Washington

If the UniOmbud handles GBVH reports and complaints, it could actively monitor this aspect of the university's research integrity, as it has a grasp of the magnitude of the numbers and general problematics.<sup>76</sup> As such, the UniOmbuds could publish their findings in an annual report, to be evaluated with respect to the university's research integrity policy. Another path that could also be considered is to broaden the institutional data in the assessments of universities' academic freedom, including the report on GBVH elaborated by the UniOmbuds.<sup>77</sup> In this way, academic freedom would be enhanced not only at the individual level (i.e., towards students, professors and university staff), but also at a collective level (i.e., enhancing universities' institutional autonomy while promoting accountability and reducing GBVH).<sup>78</sup> Eventually, such initiatives could be formally addressed and discussed in networks such as the Red de Defensores Universitarios,<sup>79</sup> which has proved to be an promising forum for standardizing universities' practices.<sup>80</sup>

## 5. CONCLUSIONS

Beyond the need to install appropriate protocols (principle IX, IACHR's Principles on Academic Freedom), this article considers strategies to overcome some impasses common to GBVH on campuses. It also noted that GBVH should be defined through a holistic legal standard, such as that in the ILO convention, which encompasses not only sexual harassment, but also any type of prohibited behavior based on gender and sex, as well as vertical, horizontal,

---

(DC): National Academies Press (US); 2018 Jun 12. 5, Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment.

<sup>76</sup> Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Why Sexual Harassment Programs Backfire." *Harvard Business Review* 98, no. 3 (2020): 44-52, p. 50.

<sup>77</sup> See: <https://academic-freedom-index.net>

<sup>78</sup> For more information on this topic, please see the article by David Gómez Gamboa, "Retos para la Implementación en América Latina de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria," which is included in the present edition of this journal.

<sup>79</sup> Ramos Quiroz, Francisco "La defensa de los derechos humanos en sede universitaria en México: avances en la materia a 32 años de su establecimiento" *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 30, no. 1 (June 4, 2019).

<sup>80</sup> As, e.g., International Ombudsman Institute (IOI), European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE) or International Ombudsman Association (IOA). See also: Gmurzyńska, Ewa. "Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods." *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149, p. 167.

and diagonal power relations. This article has also argued that GBVH should be generally conceived under the prohibition of non-discriminatory treatment in the sphere related to academic freedom (principle III, IACHR's Principles on Academic Freedom).

As victims of GBVH refrain from reporting incidents, fearing reprisals or preferring to disengage from formal procedures, this article studies the possibility of UniOmbuds responding to GBVH claims. If the UniOmbuds' neutrality and confidentiality are respected, then accessibility and efficiencies of its procedures would provide for an appropriate mechanism to respond to GBVH claims that do not require adjudication. To address campus GBVH at its core, it has also been proposed that the UniOmbuds should actively protect and promote academic freedom by accounting for GBVH as part of the university's research integrity score and in assessments of the institution's academic freedom. Thus, if GBVH can be considered a matter of academic freedom as argued in this piece, such initiatives shall be welcomed according to the principle of the duty of implementation elaborated by the IACHR in its Principles on Academic Freedom (principle XVI).

## Bibliography

### Articles

- Adams, Caroline, and Howard Gadlin. "The University Ombuds: A Valuable Resource in Addressing Campus Sexual Assaults". *Dispute Resolution Magazine*, 21, no. 4 (2015)
- Aguirre Oraa, José María. "El Defensor Universitario. Entre La Ética y La Política" *Revista RUEDA 2* (2017)
- Almodóvar Iñesta, María. "Algunas Cuestiones Técnico Jurídicas Sobre Los Protocolos Contra El Acoso Sexual y Por Razón de Sexo En Las Universidades Públicas". *Revista Andaluza de Administración Pública*, no. 99 (September 1, 2017): 15-50
- Blell, Mwenza, Shan-Jan Sarah Liu, and Audrey Verma. "A One-Sided View of the World': Women of Colour at the Intersections of Academic Freedom". *The International Journal of Human Rights*, March 7, 2022, 1-20
- Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Making Discrimination and Harassment Complaint Systems Better". In *What Works: Evidence-Based Ideas to Increase Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace*, edited by Center for Employment Equity, 2020
- Dobbin, Frank, and Alexandra Kalev. "Why Sexual Harassment Programs Backfire". *Harvard Business Review* 98, no. 3 (2020): 44-52
- Faraldo Cabana, Cristina. "Protocolos de Actuación Contra El Acoso Laboral En La Universidad: Especial Referencia a La Universidad Da Coruña". *Cuaderno Del Instituto Vasco de Criminología EGUZKILORE* 28 (2014)

- Frausto, Dante, “The Dynamic and Inclusive Role of the Ombudsman in Consolidating Respect for Human Rights and the New Paradigms of a Culture of Peace” *Derechos Fundamentales a Debate/Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco*, 2021
- Gmurzyńska, Ewa. “Analysis of the Causes of Conflicts at Universities and Alternative Methods of Resolving Them. Part II: Academic Ombudsman and Adjudicative Methods”. *Studia Iuridica Lublinensia* 30, no. 2 (June 30, 2021): 149
- Huerta Mata RM, “Miradas Lascivas, Violencia Contra Las Estudiantes Universitarias” (2020) 32 región y sociedad e1285
- International Ombudsman Institute, ed. Australasia and Pacific Ombudsman Institutions. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013
- Lobato, Julieta. “El Convenio 190 y La Recomendación 206 de La OIT. Un Avance Decisivo Hacia El Fortalecimiento de La Protección de Derechos Fundamentales En El Trabajo”. *Revista de Derecho Laboral Actualidad*, January 1, 2019
- Pappas, Brian, Jennifer Reynolds, and A R T Hinshaw, “Designing Informal Mechanisms for Claims of Campus Sexual Misconduct”. *OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION* 36, no. 5 (2021)
- Pappas, Brian. “Out from the Shadows: Title IX, University Ombuds, and the Reporting of Campus Sexual Misconduct” *Denver Law Review* 94, no. 1 (2016)
- Quinn, Robert, and Jesse Levine. “Intellectual-HRDs and Claims for Academic Freedom under Human Rights Law”. *The International Journal of Human Rights* 18, no. 7-8 (November 17, 2014): 898-920
- Ramos Quiroz, Francisco “La defensa de los derechos humanos en sede universitaria en México: avances en la materia a 32 años de su establecimiento” *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 30, no. 1 (June 4, 2019)
- Rodríguez Gaona, Roberto. “El Defensor Universitario. Algunas Reflexiones En Torno al Papel Del Ombudsman Organizacional,” *Nuestros Derechos y Valores En La Universidad*, 11-32. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009
- Saletti-Cuesta, Lorena, Soledad Quadri, María Laura Cordero, Romina Scocozza, and Paula Bertarelli. “Desafíos Para Abordar Las Situaciones de Violencia de Género En El Ámbito Universitario de Córdoba (Argentina)” *Revista RUEDA* 3-4 (2019)
- Smith, Ryan. “A Brief History of the Student Ombudsman: The Early Evolution of the Role in US Higher Education”. *Journal of the International Ombudsman Association* 1 (2020)
- Varela Guinot, Helena. “Las Universidades Frente a La Violencia de Género. El Alcance Limitado de Los Mecanismos Formales” *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 65, no. 238 (December 11, 2019)

### ***Books and books' chapters***

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Policy and Global Affairs; Committee on Women in Science, Engineering, and Medicine; Committee on the Impacts of Sexual Harassment in Academia; Benya FF, Widnall SE, Johnson PA, editors. *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. Washington (DC): National Academies Press (US); 2018 Jun 12. 5, Legal and Policy Mechanisms for Addressing Sexual Harassment

Schultz, Vicky, “Reconceptualizar el acoso sexual, de nuevo,” in Alterio, Ana Micaela, and Alejandra Martínez Verástegui. *Feminismos y Derecho. Un Diálogo Interdisciplinario En Torno a Los Debates Contemporáneos*. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 2020

### *Reports*

American Bar Association, “Recommendations for Improving Campus Student Conduct Processes for Gender-Based Violence,” 2019

Behrens, Rob, “Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study”. European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE), 2017

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment N° 13: The Right to Education (Article 13), 8 December 1999

International Labour Office. “Violence and Harassment in the World of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206”. Geneva: ILO, 2021

Salazar Lostaunau, Ximena, and Claudia Medina López, “Diagnóstico Sobre La Violencia de Género En La PUCP” Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020

SAR uOttawa, “Report threats to academic freedom in the Americas” (Human Rights Research and Education Centre (HRREC) University of Ottawa, 2020)

Scholars at Risk (SAR), “Report to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Protection of Academic Freedom under International Human Rights Law”. Scholars at Risk (SAR), 2020. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Scholars\\_at\\_Risk\\_submission.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Scholars_at_Risk_submission.pdf)





# LA EXPERIENCIA DE LOS INVESTIGADORES CENTROAMERICANOS EN DERECHOS HUMANOS ANTE EL CIERRE DE LOS ESPACIOS DEMOCRÁTICOS EN LA REGIÓN

MARÍA ESTELA RIVERO FUENTES Y TOM HARE

**Resumen:** Distintos reportes apuntan a que en los últimos cinco años han aumentado los ataques contra los investigadores en temas de derechos humanos en los Países del Norte de Centroamérica, pero los ejercicios de monitoreo a las violaciones a la libertad académica en la región no indicaban, hasta recientemente, que este fuera un problema. Este documento registra los tipos de violaciones a la libertad académica experimentados por un grupo de investigadores centroamericanos en temas de derechos humanos, afiliados a la Alianza para la Investigación Académica en Centroamérica (CARA), y las estrategias que han desarrollado para continuar desarrollando sus tareas de investigación en un contexto de creciente represión.

**Palabras clave:** Libertad académica, Centroamérica, organizaciones sociedad civil, comunidades de práctica

**Abstract:** Reports indicate that attacks against human rights researchers in Countries in Northern Central America have increased in the last five years, but monitoring exercises of academic freedom violations in the region did not, until recently, indicate that this was a problem. This paper documents the types of academic freedom violations experienced by a group of Central American human rights researchers affiliated with the Central American Academic Research Alliance (CARA) and the strategies they have developed to continue their research work in a context of increasing repression.

**Keywords:** Academic freedom, Central America, civil society organizations, communities of practice.

### **Afiliación de la autora**

**Nombre:** María Estela Rivero Fuentes (Estela Rivero)

**Institución:** Instituto Pulte para el Desarrollo Global, Universidad de Notre Dame

**Biografía:** María Estela Rivero Fuentes es Asociada de Investigación Senior y codirectora de la Alianza para la Investigación Académica en Centro América en el Instituto Pulte para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame. Rivero Fuentes tiene un doctorado en Demografía y Políticas Públicas de la Universidad de Princeton y más de 20 años de experiencia realizando investigación en los Países del Norte de Centroamérica y México, principalmente en migración, prevención de la violencia, educación, juventud, y más recientemente en el ecosistema de evidencia en los derechos humanos. Correo electrónico: [mrivero2@nd.edu](mailto:mrivero2@nd.edu)

### **Afiliación del autor**

**Nombre:** Tom Hare

**Institución:** Instituto Pulte para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame.

**Biografía:** Tom Hare es investigador principal y codirector de la Alianza de Investigación de América Central (CARA). La investigación de Hare examina principalmente el Estado de Derecho, la promoción de la democracia y los programas de derechos humanos en América Central. Hare es autor del libro *Zonas Peligrosas* (Fordham University Press) y varios artículos revisados por pares sobre prevención de la violencia. Hare tiene un PhD. en análisis de políticas públicas de la Universidad de Saint Louis, así como una maestría dual en gestión y políticas de desarrollo de la Universidad de Georgetown y la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Correo: [thare@nd.edu](mailto:thare@nd.edu)

## **1. INTRODUCCIÓN**

El propósito de este artículo es compartir la experiencia de violaciones a la libertad académica sufridas por un grupo de investigadores centroamericanos especializados en temas de derechos humanos. A través del recuento de la experiencia de estas personas, vinculadas a la Alianza de Investigación Académica en Centroamérica (CARA, por sus siglas en inglés), compartiremos las lecciones aprendidas para adaptarse a un contexto volátil y que puedan continuar realizando sus labores de investigación de manera segura. Dichas experiencias, recopiladas durante el 2022, pueden servir a otras investigadoras e investigadores que se sienten amenazados, pero no tienen posibilidades de salir rápidamente de sus países o no desean hacerlo.

CARA es una red que agrupa 19 organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y universidades centroamericanas interesados en hacer investigación que sirva para la toma de decisiones y rendición de cuentas en los temas de democracia y gobernanza, derechos humanos, migración, violencia, y desarrollo inclusivo. Los objetivos de CARA (o “la Alianza”) es ser un espacio en el que sus miembros puedan reforzar mutuamente sus capacidades, a través del

intercambio de ideas, aprendizajes y métodos de investigación. CARA también busca facilitar la colaboración entre sus miembros para realizar investigaciones conjuntas y comunicar resultados que puedan apoyar la toma de decisiones y la abogacía basadas en la evidencia.

Este artículo es el resultado de un trabajo de aprendizaje colectivo, en el que participaron todos los miembros de CARA.<sup>1</sup> Ninguno de nosotros es experto en el tema de libertad académica, pero en los últimos tres años hemos documentado un aumento en los testimonios de miembros que han sufrido distintos tipos de agresiones y restricciones a su trabajo de investigación. A raíz de esto, la Alianza ha buscado convertirse en un espacio de apoyo y solidaridad con otros investigadores en riesgo. Con este artículo buscamos también documentar la forma en que estas agresiones se manifiestan y cómo los miembros de la Alianza se han resistido a ellas para seguir adelante.

Para efectos de este artículo, la libertad académica se entiende de manera amplia, tal como se establece en los Principios Interamericanos para la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), como el derecho a nivel individual y “de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos, a formar parte de las comunidades académicas y a realizar labores autónomas e independientes para llevar a cabo actividades de acceso a la educación, docencia, aprendizaje, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas de forma libre y sin temor a represalias”<sup>2</sup> y el derecho de la sociedad a mantenerse informada y tener acceso a la información.

---

<sup>1</sup> Las organizaciones que formaban parte de CARA al momento en que se recolectó información para este estudio eran el Instituto Pulte para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame, quien fungía como Secretaria Técnica, una universidad privada guatemalteca (que se retiró de CARA desde entonces), dos universidades hondureñas (una pública y una privada), dos centros de investigación en universidades privadas de El Salvador, una universidad privada en Nicaragua, dos centros de investigación regionales, y once centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que tienen como cometido traducir y comunicar evidencia científica para la abogacía y toma de decisiones en temas sociales. De estos, uno está en Costa Rica, tres en El Salvador, cuatro en Guatemala, y tres en Honduras. Además de estas organizaciones, pertenecen a CARA tres investigadores independientes (dos en Guatemala y una en El Salvador) que realizan estudios y dan clases en universidades locales. Omitimos el nombre de los miembros de CARA para proteger su confidencialidad y evitar ponerlos en riesgo.

<sup>2</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2021. Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria. OEA. Disponible en línea: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios\\_libertad\\_academica.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/principios_libertad_academica.pdf)

Esta definición abarca las tareas de investigación, comunicación y promoción del uso de resultados científicos fuera de la academia, tanto por personas como organizaciones similares a las que integran CARA. De las organizaciones pertenecientes a la Alianza, siete son universidades. El resto son centros de investigación autónomos y organizaciones de la sociedad civil que, a través de sus estudios —comúnmente financiados por fundaciones u organismos internacionales—, generan conocimiento que sirve para avanzar el saber, para la rendición de cuentas y orientar políticas públicas; publican artículos en revistas científicas, incorporan a estudiantes universitarios como practicantes en sus proyectos y, al menos seis de ellos, dan clases en universidades. Además, realizan tareas de comunicación, educación e incidencia.

## 2. ATAQUES A LA LIBERTAD ACADÉMICA EN EL CONTEXTO CENTROAMERICANO

Las investigadoras e investigadores centroamericanos —incluidos los de la academia y las organizaciones de la sociedad civil— que deciden quedarse en su país se enfrentan a múltiples retos. Estos desafíos son producto de la historia de la región y del papel que la academia y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron durante los conflictos, los procesos de paz y los períodos de postconflicto.

Por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, algunas universidades participaron en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.<sup>3</sup> Sin embargo, su papel fue limitado y restringido, ya que eran percibidas como movimientos sociales que apoyaban a las fuerzas antigubernamentales y sus actividades solían ser reprimidas. Esta percepción influyó además en su participación en el proceso de paz, del que fueron marginadas, especialmente en Nicaragua y El Salvador (Álvarez 2013; Booth y Bayer Richard 1996; y Booth y Bayer Richard 1998). Algunos autores consideran que la participación de la sociedad civil en el proceso de paz de Guatemala fue un éxito, afirmando que fue decisiva para el inicio de las conversaciones de paz y el surgimiento de la propuesta de reforma política, justicia transicional y reconciliación (Wanis-St.

---

<sup>3</sup> Un ejemplo de ello es la aparición del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) en la Universidad Centroamericana de El Salvador en medio del conflicto armado de 1985.

John and Kew 2008), aun cuando no tuvo un papel importante en su fase de implementación (Nilsson 2018).

El período posterior al conflicto abrió la puerta a la aparición de actores de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones que realizan investigaciones independientes y que estaban interesadas en participar en la reconstrucción del país y en la promoción de la democracia (Nilsson 2018). En Guatemala y El Salvador, los grupos de la sociedad civil que habían estado activos durante la guerra civil se organizaron formalmente y obtuvieron un estatus legal, centrandose su trabajo en completar los vacíos de los acuerdos de paz, como la justicia transicional, los derechos humanos y la reconstrucción de las comunidades indígenas (Sprenkles 2005). En Nicaragua, el surgimiento de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales tardó más tiempo y se politizó rápidamente (MacDonald 1997).

Actualmente, el contexto en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y las universidades dentro de la región es mixto. La revista *The Economist* (2022) clasifica a Costa Rica como una democracia plena; a Guatemala, Honduras y El Salvador como regímenes híbridos; y a Nicaragua como un régimen autoritario. Para añadir a los ataques y la sospecha de los gobiernos autoritarios, las organizaciones de la sociedad civil y algunos investigadores de la región también son vistos con desconfianza por los críticos al gobierno, que los acusan de adaptar sus agendas a las prioridades de los donantes, socavando así su propia autonomía, imparcialidad, responsabilidad y legitimidad (Belloni, 2008, p. 200, citado en Nilsson).

### 3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DE ESTE ESTUDIO

Esta investigación está basada en tres fuentes que dan una mirada inicial a las violaciones a la libertad académica que han experimentado las y los investigadores en temas de derechos humanos en Centroamérica. Los participantes en estas actividades provienen de universidades privadas y estatales, así como de organizaciones autónomas dedicadas a la investigación y diseminación del conocimiento en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y Nicaragua. Las fuentes de información usadas para este estudio fueron: un seminario, una encuesta realizada de forma virtual y un taller de trabajo.

Con respecto al seminario, este fue organizado por CARA y se realizó de forma virtual con el Centro para la Asistencia Técnica a la Investigación (Research Technical Assistance Center o RTAC) en abril de 2022, donde investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, de la Universidad Centroamericana en El Salvador y de la Universidad Centroamericana en Nicaragua<sup>4</sup> compartieron sus experiencias y estrategias para seguir haciendo investigación en espacios democráticos cada vez más cerrados.

El propósito del seminario fue aumentar la conciencia pública sobre la situación en Centroamérica y proveer a los investigadores de la región que pudieran encontrarse en condiciones de riesgo por su actividad de investigación, con algunas recomendaciones para hacer frente a estas condiciones basadas en la experiencia de sus pares. Para no poner en riesgo a los ponentes y garantizar un espacio en donde pudieran compartir sus experiencias de forma segura, la transmisión fue en vivo, no se grabó, y no se identificó al ponente de Nicaragua por su nombre. Durante la preparación del seminario, los tres participantes recibieron como cometido describir su experiencia de violaciones a la libertad académica y describir las estrategias que han desarrollado para hacer frente a estas.

En segundo lugar, CARA llevó a cabo una encuesta virtual, dirigida a sus miembros, que tuvo por objetivo recolectar su experiencia haciendo investigación relacionada con temas de derechos humanos y democracia ante el cierre de espacios democráticos. Esta encuesta fue llevada a cabo durante las reuniones mensuales de CARA, explicando que la información proporcionada serviría para escribir un resumen de políticas documentando la experiencia y aprendizajes de los miembros.

La encuesta se realizó a través de Google Forms y se distribuyó a través de la red de correos electrónicos de CARA a 32 individuos en agosto de 2022. La encuesta era anónima, pero los respondientes tenían la opción de proporcionar, de manera voluntaria, su información para poder dar seguimiento. Se obtuvieron ocho respuestas, cinco de ellas de investigadores afiliados a alguna universidad en Nicaragua, El Salvador o Guatemala, una de un investigador

---

<sup>4</sup> Se omite el nombre de los ponentes para mantener su confidencialidad.

en un centro regional autónomo y dos anónimas y sin información de la adscripción.

En este documento se analizan las respuestas a las siguientes tres preguntas abiertas:

- ¿Usted o alguien más en su organización ha sido víctima de acoso en los últimos cinco años por el trabajo de investigación y abogacía que realizan? De ser así, por favor describa su experiencia.
- En los últimos cinco años los gobiernos centroamericanos han aumentado su desconfianza de la producción científica en la región y limitado los recursos (financiamiento, acceso a la información, libertad académica, etc.) necesarios para estas tareas. ¿Usted o alguien de su organización han visto sus tareas de investigación afectadas por esta creciente represión? Por favor explique su experiencia.
- Por favor explique las estrategias a las que han recurrido usted y su organización para continuar con sus labores académicas a pesar de la creciente represión por los gobiernos de la región.

Finalmente, se realizó un taller virtual entre los miembros de CARA, en los cuales se presentaron los resultados de la encuesta en línea y se solicitó compartir experiencias de acoso y estrategias de forma interactiva. El taller tuvo lugar durante la reunión mensual con los miembros de CARA de noviembre de 2022, la cual contó con 15 participantes. Después de presentar los resultados de la encuesta en línea, se solicitó a las personas participantes que complementaran estos resultados con otras experiencias personales y recomendaciones sobre cómo seguir realizando estas investigaciones dentro de un cierre de espacios democráticos. Las respuestas fueron escritas y se pidió que las respondieran en ese momento a través de la aplicación “Poll everywhere”. Esta aplicación permite hacer encuestas rápidas en línea y permite al presentador mostrar las respuestas conforme se van generando. Siete participantes contestaron con experiencias de represión, y cinco compartieron sus recomendaciones.

Toda esta información se trató como información cualitativa. Los resultados de la encuesta y el taller se codificaron de forma manual en Excel y se analizaron en conjunto con las presentaciones del seminario virtual. La información proveniente del seminario y de la encuesta en línea, para aquellos respondientes

que dieron su información de contacto, está ligada a los nombres de quienes la proporcionaron. Sin embargo, durante el análisis se eliminaron los nombres y se despersonalizó la información.

Dado el limitado número de participantes en todas estas actividades, el análisis se centró en encontrar tendencias: identificar los tipos de violaciones más comunes y las estrategias a las que se ha recurrido con mayor frecuencia. En general, se encontró coincidencia entre las experiencias de los participantes y sus recomendaciones, aunque el participante de Nicaragua ha sufrido de mayor acoso y se ha visto en situaciones que pueden considerarse de mayor riesgo.

#### 4. EXPERIENCIA DE ACOSO Y REPRESIÓN HACIA LOS MIEMBROS DE CARA

En esta sección se describen los tipos de ataques a la libertad académica que los miembros de CARA afirman haber experimentado. Con la excepción de dos casos donde desconocemos la identidad y adscripción de los investigadores, la mayoría de estos reportes provienen de profesores e investigadores universitarios. Los más frecuentes de estos son ataques en los medios de comunicación y restricciones políticas para el acceso a recursos necesarios para desarrollar su labor. Algunos miembros han sufrido también de espionaje de sus conversaciones y hospedaje durante sus actividades académicas.

Con respecto a la primera categoría, los ataques en medios de comunicación incluyen, entre otros, el ser víctimas de comunicados públicos por parte de funcionarios gubernamentales, editoriales en periódicos y desplegados en medios sociales que buscan desacreditar su trabajo, cuestionar sus hallazgos y mermar su credibilidad. Siete investigadores, pertenecientes a universidades privadas en El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua y una investigadora asociada a una organización de la sociedad civil que realiza investigación y defensa de los derechos humanos en El Salvador, compartieron haber sufrido este tipo de violaciones. Sus respuestas dejan ver que este tipo de ataques ocurre comúnmente en respuesta a la presentación de reportes o estudios que el gobierno encuentra amenazantes.

Por ejemplo, uno de los investigadores que respondió de manera anónima a la encuesta narró que él/ella había sufrido “acoso y ataque en redes sociales



cuando se realiza presentación de resultados”, mientras que una investigadora salvadoreña, directora de un centro de investigación, detalla que:

“El [nombre del centro de investigación] ha sido blanco de comentarios malintencionados e intentos de desprestigio, desde el discurso gubernamental oficial, tratando de cuestionar que los datos generados por nuestras encuestas y estudios académicos sean fidedignos. A pesar de que por décadas nuestra institución ha recogido y dado a conocer con rigor e integridad las opiniones ciudadanas, hay un intento claro de hacer que la ciudadanía dude de la veracidad de la información recabada, porque la información recogida en las encuestas nacionales de nuestra institución puede generar datos que: 1) muestren que el respaldo a la actual administración no es monolítica, sino que también existen sectores descontentos y 2) muestren que el país no está en condiciones tan óptimas en seguridad y economía, entre otros temas, como lo quiere hacer ver la propaganda oficial”.

Tres investigadores (una mexicana y dos salvadoreñas) indicaron que los esfuerzos por desacreditar a investigadores de la región pueden ser intensivos y hacer uso de *bots* y replicadores en redes sociales para lograr viralidad, además de que en ocasiones rebasan el ámbito académico y buscan desprestigiar también a las personas. La experiencia descrita por la investigadora de una organización de investigación y defensoría de los derechos humanos en El Salvador sirve para ilustrar esto:

“En el caso de [nombre de la organización], debido a su labor de promoción y defensa de derechos humanos ha recibido ataques en Twitter de parte del señor Presidente lo que genera que muchos de sus seguidores inicien ataques también. De hecho, se han hecho publicaciones con fotografías de nuestros voceros atacando ya su vida personal. Esto lleva a una deslegitimar el trabajo de nuestra organización”.

La experiencia de otra investigadora salvadoreña, vinculada a un centro universitario distinto, muestra que los esfuerzos del gobierno para desacreditar y amedrentar a los investigadores pueden llegar incluso a extremos jurídicos que criminalizan a los investigadores. Esta investigadora fue demandada, ante un juzgado, por difamación, para forzarla a retractarse de sus resultados. Afortunadamente, la jueza a cargo del del caso desestimó la demanda.

Siete investigadores describieron violaciones que pueden clasificarse como restricciones políticas a recursos financieros, institucionales y de información. El resultado de éstas es dificultar o impedir la realización de investigaciones en temas que son vistos como delicados y obstaculizar las tareas de diseminación.

El investigador de una universidad nicaragüense relata que el gobierno de Ortega eliminó la institución donde labora del Consejo Nacional de Universidades, lo que implicó un recorte sustantivo de fondos porque la universidad ya no puede acceder a recursos públicos. Una consecuencia de esta disminución presupuestaria fue que él y otros compañeros fueron despedidos de su puesto como profesores y recontratados por proyecto. Ya no enseñan, perdieron la antigüedad que tenían como trabajadores, los beneficios y la seguridad de un puesto estable. El proyecto para el que se les contrató no ha podido arrancar por falta de fondos, por lo que, al momento de su testimonial, ni ellos ni sus asistentes de investigación han recibido salarios en los últimos tres meses:

“Sí, en nuestra universidad, hemos sufrido el recorte total de los fondos del 6%, un derecho constitucional, además hemos sido expulsados como universidad del Consejo Nacional de Universidades, sin ninguna justificación. Esto obligó a la universidad a pedir nuestra renuncia en diciembre, para ser recontratado por servicio profesionales —según disposición de fondos—. Con esto hemos perdido nuestra carrera académica de 12 años, el escalafón académico y las prestaciones que tenemos por derecho con el contrato de tiempo indefinido. Lo que ha restringido nuestros márgenes de realizar nuestra labor investigativa”.

Cuatro investigadores de Guatemala y El Salvador cuentan, como parte de las acciones del gobierno llevadas a cabo expofeso para interrumpir la investigación en temas sociales que pudiera servir para la rendición de cuentas, la desaparición de fuentes de información y la obstaculización del acceso cuando estas existen. Los censos, encuestas y registros administrativos que realiza el gobierno y que son fuente de muchos de los estudios que se hacen en la región son cada vez más escasos, y se ha eliminado el acceso a los microdatos y a las series históricas. Es decir, los gobiernos recolectan menos información de manera sistemática; cuando lo hacen, no la ponen a disponibilidad de la población ajena al sector público, y cuando el acceso a los últimos datos es abierto, no se puede comparar con periodos anteriores porque la data de años pasados ya no está disponible, o se cambió la manera de recolectarla, el nivel de desagregación, o los indicadores generados.

La Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) de El Salvador en junio de 2022 hizo esta situación mucho más apremiante en ese país (Joma 2022). En Guatemala, el presidente Jimmy Morales reconoció en 2018 que la información pública del Poder Ejecutivo no se encontraba en formato de datos públicos y él aprobó, el 26 de noviembre de 2018, en el Diario de Centroa-

mérica del 5 de diciembre de ese año una “Política Oficial de Datos Abiertos 2018-2022” a cargo del Ministerio de Gobernación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Organismo Ejecutivo 2018). Sin embargo, al momento en que este artículo se escribió, El Portal-Datos Abiertos ([datos.gob.gt](http://datos.gob.gt)), sitio donde estos datos deberían estar disponibles, no estaba funcionando. Una de las investigadoras de una universidad salvadoreña que ofreció sus testimoniales para este estudio, explica en detalle las implicaciones del acceso restringido a la información pública para el monitoreo científico de las acciones gubernamentales y la rendición de cuentas, y cómo los recursos de transparencia y el recurrir a las autoridades universitarias se ha vuelto ineficiente en este nuevo contexto:

“Aunque [nombre de la organización] ha continuado funcionando y cumpliendo su misión de generar conocimiento científico a pesar de estar en un entorno adverso, efectivamente el grave detrimento que está experimentando el país en el tema del acceso a la información pública limita la posibilidad de recurrir a las solicitudes de información pública y a la consulta de información oficial con datos estadísticos que son tan necesarios para que en las investigaciones se pueda monitorear la eficacia en el funcionamiento de diversas instituciones (como las que tienen que ver con justicia, seguridad y derechos humanos), y para analizar tendencias en indicadores clave en aspectos poblacionales, en el área de violencia e inseguridad, indicadores económicos y educativos, indicadores de salud y evidencias del manejo transparente (o no) de recursos públicos, entre otros. La publicación de información oficiosa en los portales de transparencia de diversas instituciones de Gobierno se ha visto notablemente reducida en los últimos años, y es cada vez más difícil obtener respuesta a las solicitudes de información que se realizan siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se ha vuelto más difícil acudir al ente rector que era fundamental para el cumplimiento de la LAIP, ya que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha perdido en buena medida su capacidad de actuar de manera independiente. Y es necesario mencionar que la reciente disolución de la Dirección General de Estadística y Censos en el país va a acarrear nuevos vacíos para que las investigaciones puedan acceder a información actualizada y confiable sobre la realidad de los hogares salvadoreños en materia de social, de salud y economía”.

En términos de la limitación a los recursos institucionales, un miembro de CARA reportó que se le negó utilizar los logos de las organizaciones donantes que financiaron sus investigaciones en las publicaciones que se produjeron, y dos más dijeron que se les ha negado el apoyo de la universidad para realizar eventos de diseminación en contextos que se consideran de riesgo. Asimismo, dos investigadores dijeron que las universidades donde trabajan les han cerrado espacios de publicación.

Uno de estos casos es el de un investigador guatemalteco, quien explicó que el rector de la universidad a la que estaba adscrito comenzó a eliminar publicaciones de una revista universitaria después de que ésta fue atacada por hacer públicas investigaciones sobre los casos de corrupción gubernamental. El segundo es el de un investigador hondureño, quien narró que el rector de la universidad pública en la que laboraba declaró en una reunión general que “toda publicación debería de hacerse con su consentimiento”, y que su superiora le había recomendado cambiar de tema de investigación, dado el contexto actual.

Otro aspecto problemático que hemos encontrado es que dos de nuestros miembros en El Salvador y Nicaragua reportan que han encontrado que sus teléfonos del trabajo, teléfonos celulares y teléfonos de su casa están intervenidos, se graban sus conversaciones e incluso se les ha perseguido durante el desarrollo de sus actividades. Esta situación no sólo viola el derecho a la privacidad de las comunicaciones, sino que todo indica a que estas interceptaciones telefónicas fueron realizadas sin mandato judicial previo y sin la debida notificación de una investigación formal a los miembros de la Alianza. La investigadora salvadoreña describe su experiencia de esta manera:

“Sí, en mi caso, ha habido monitoreo de mis comunicaciones y a mi actividad académica, la cual se incrementó desde el período 2011 y ha escalado desde 2019 a intimidación, seguimiento y vigilancia de mis actividades y comunicación por parte de agentes del Estado”.

Como describe la investigadora salvadoreña citada arriba, la vigilancia por parte de agentes del Estado ha llegado a derivar en acoso e intimidación. El investigador nicaragüense narra que ha sido víctima de acciones similares, donde agentes policiales lo han amenazado para detener sus tareas de investigación:

“Si, a partir de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Incluso, desde que he estado investigando la [tema eliminado para evitar la posible identificación del declarante], he sido seguido, requisado por la policía. En 2019 cuando realicé el estudio de [tema eliminado para evitar la posible identificación del declarante], fuimos rodeados por antimotines y unidades élites para intimidarnos en el local donde se realizaba el taller”.

A pesar de todo esto, las investigadoras e investigadores de CARA, aún aquellos que han sido atacados directamente y espiados manifiestan interés y compromiso por seguir haciendo investigación dentro de su respectivo país.

Continuamente oímos que su deber es documentar lo que está ocurriendo y que necesitan estar ahí para hacerlo.

## 5. RECOMENDACIONES PARA PROTEGER Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN ESPACIOS DEMOCRÁTICOS CADA VEZ MÁS CERRADOS EN CENTROAMÉRICA

Las siguientes recomendaciones para continuar realizando investigaciones en espacios cada vez más cerrados en Centroamérica fueron formuladas por investigadores académicos y orientados a la política en la región. El resumen de políticas elaborado por el Instituto Pulte para el Desarrollo Global, fue publicado originalmente a fines de 2022 y presenta una versión accesible para ser compartida con distintas audiencias.

Sobre la base de nuestro estudio, se pueden formular las siguientes recomendaciones para la protección de investigadoras e investigadores en América Central:

- ***Practique el autocuidado.*** Estos son tiempos agotadores y estresantes y se pueden afrontar mejor con una buena salud mental y física. Descanse, haga ejercicio (si es posible), aliméntese lo mejor posible y mantenga su vida social y familiar activa.
- ***Infórmese para protegerse jurídicamente.*** Busque los recursos legales y administrativos disponibles para su (eventual) defensa.<sup>5</sup>
- ***Cree y mantenga redes.*** Busque apoyo para que los demás sepan por lo que está pasando, formule estrategias conjuntas para afrontar la situación, mantenga un registro de su paradero y esté informado de las opciones que tiene a su disposición. Además de sus colegas, las redes de apoyo que puede considerar incluyen organizaciones de derechos humanos, asociaciones profesionales,<sup>6</sup> redes internacionales de apoyo a los académicos

<sup>5</sup> Scholars at risk, Academicxs en riesgo, y la Coalition for Academic Freedom in the Americas son de utilidad para esto.

<sup>6</sup> Por ejemplo, la Latin American Studies Association (LASA) ha expresado interés en apoyar a los investigadores Latinoamericanos que sufren de hostigamiento.

bajo amenaza<sup>7</sup> y universidades internacionales. Sea claro con sus aliados acerca de lo público o privado que quiere ser durante este tiempo.

- ***Establezca protocolos de seguridad.*** Formule, junto con su familia, amigos y compañeros de trabajo, un protocolo para identificar las situaciones en las que usted es particularmente vulnerable o está expuesto (por ejemplo, mientras realiza trabajo de campo, participa en eventos o después de hacer una entrevista). Este protocolo debe incluir, como mínimo, un lugar seguro al que pueda acudir en caso de emergencia; la forma en que su familia, colegas y otros aliados pueden ponerse en contacto con usted; los contactos de emergencia (incluidas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que trabajan en su país); y una forma de acceder a su documentación (certificados de nacimiento, pasaportes, credenciales académicas, etc.). El protocolo debe considerar también la potencial reubicación residencial, para aquellos casos en que sea víctima de acoso y seguimiento constante.
- ***Practique la seguridad digital.*** Observe las mejores prácticas para proteger su información y comunicación digital. Evite usar Whatsapp, Gmail y Outlook, que no tienen información encriptada. Priorice medios de comunicación más seguros como Protonmail y aplicaciones encriptadas como Briar y Signal. Siga las pautas establecidas para mantener su computador seguro (instale cortafuegos, utilice una VPN internacional, actualice su software, proteja sus contraseñas, etc.). Haga copias de sus datos en la nube (entrevistas, bases de datos, etc.), y de ser posible trabaje en un disco externo.<sup>8</sup>
- ***Busque financiamiento a través de la colaboración.*** Además de sus ventajas académicas, la investigación colaborativa e interinstitucional puede ser una estrategia útil para mantenerse a flote económicamente en contextos de espacios cada vez más cerrados. Ante el desmantelamiento de las fuentes de financiamiento oficiales y de la capacidad de las organizaciones internacionales para operar y buscar fondos en algunos países, las colaboraciones (incluyendo la participación en propuestas de investigación

---

<sup>7</sup> Vea Scholars at risk, Academicxs en riesgo, Coalition for Academic Freedom in the Americas, Philipp Schwartz-Initiative, Scholar Rescue Fund IIE-SRF, y Council for at-Risk Academics-CARA).

<sup>8</sup> Microsoft ofrece lineamientos claros y fáciles de seguir para mantener su computadora personal segura.

entre países, proyectos interuniversitarios, etc.) han demostrado ser una forma útil de mantener el trabajo de investigación en Centroamérica. Un investigador nicaragüense vinculado a una universidad privada narra que, ante las leyes del país que impiden que su institución gestione fondos por ser considerada una entidad extranjera, ellos han optado por fortalecer progresivamente sus relaciones de colaboración interuniversitaria para coger fondos a nivel internacional.

- ***Explore metodologías innovativas y el uso de datos alternativos.*** Por ejemplo, ante el acoso policial durante su trabajo de campo, uno de los investigadores nicaragüenses miembros de CARA comenzó a utilizar estrategias de investigación encubiertas y generó espacios virtuales con aplicaciones encriptadas para recabar información de primera mano de su población de interés, sin ponerlos a ellos o ponerse él en riesgo, a través de entrevistas presenciales. Otros investigadores de la región han recurrido, ante la eliminación de fuentes de datos oficiales, a buscar fuentes de información alternativas, y realizar análisis cualitativos más que cuantitativos.
- ***Publique en espacios alternativos.*** Esté abierto a publicar en espacios alternativos y en colaboración con distintas entidades. Una forma de hacer esto es buscar el apoyo de entidades internacionales (como CARA o universidades extranjeras) durante el proceso de investigación y publicación. Además, se recomienda enmarcar los resultados de investigación en un ámbito geográfico más amplio que el país (por ejemplo, regional).
- ***Sea plural.*** A la hora de llevar a cabo la investigación y difundir sus resultados, hay que tener en cuenta diferentes puntos de vista, posturas políticas, estratos socioeconómicos, canales de comunicación y aliados (incluido el sector privado). Algunos miembros de CARA han comprobado que en los espacios cada vez más cerrados la polarización perjudica más de lo que beneficia, por lo que, siempre que sea posible, tratan de participar en espacios que promueven el diálogo. En concreto, los miembros de CARA recomiendan propiciar el diálogo y promover la diversidad en los aportes académicos, las posturas políticas, y sectores sociales y económicos.
- ***Documente los incidentes de violaciones a la libertad académica y participar, hasta donde su seguridad lo permita, en eventos de concientización.*** Como este estudio demuestra, los investigadores en la región

centroamericana están en riesgo de ser víctimas de violaciones a su libertad académica, pero hay bastante desconocimiento al respecto. Contar con pares que estén informados de la situación va a permitir que se identifiquen y monitoreen mejor los incidentes de violaciones, que haya mayor conciencia en la población, y mayor solidaridad con quienes están en riesgo o han sufrido alguna violación. La organización Scholars at Risk tiene recursos disponibles para informar sus tareas de concientización.

- ***Haga abogacía y labor de incidencia en su tema de investigación.*** En la medida en que la seguridad lo permita, siga abogando por el uso de sus resultados de investigación. Los desafíos democráticos no resueltos de la región la hacen vulnerable a los regímenes autocráticos y el papel de las y los investigadores es fundamental para luchar contra ese autoritarismo. Por lo general, los políticos autocráticos tienden a ocultar información y a dismantelar los organismos de recopilación de datos. Las pruebas producidas por las organizaciones de la sociedad civil son una forma imparcial de llenar este vacío y de abogar bajo un paraguas académico, que es un importante contrapeso a los intereses arraigados en la esfera política.

## 6. CONCLUSIONES

Los ataques contra los investigadores y las instituciones de investigación tienen el objetivo de silenciar, controlar y desacreditar la producción de ideas que los gobiernos y otros grupos de interés (como las fuerzas militares) consideran una amenaza (SAR 2020). Su ocurrencia es, en consecuencia, no sólo una violación de los derechos humanos, sino también una amenaza directa para el desarrollo de la sociedad y el adecuado funcionamiento de la democracia (Laakso 2022).

Las actividades intelectuales, de investigación y comunicación de la ciencia que toman lugar en las universidades, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los grupos de reflexión sirven para fomentar el pensamiento crítico, formar nuevos ciudadanos informados, asesorar y supervisar las actividades del gobierno, promover la rendición de cuentas y fomentar la participación democrática.

En el caso de Centroamérica, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil que realizan investigaciones independientes han sido actores im-



portantes en la conformación de la política pública y la rendición de cuentas de los países de la región desde el período de posguerra (Nilsson 2018; Sprenkles 2005), sin embargo, este papel está en riesgo. Dos estudios recientes, uno de Global Development Network en El Salvador (Cuellar-Marchelli et al. 2022) y uno del Instituto Pulte para el Desarrollo Global de la Universidad de Notre Dame en El Salvador, Guatemala y Honduras (Rivero, Hare, Carranza, Escobar y Torres Urizar 2023) muestran que la incidencia en la formulación de políticas públicas e intervenciones sociales de los estudios que se realizan en la región es limitada por la escasa relación que existe entre científicos sociales y tomadores de decisión. Estos dos estudios confirman, además, que una parte importante de la investigación social en estos países ocurre fuera de las universidades, en organizaciones de la sociedad civil, centros autónomos de investigación, y en oficinas técnicas del sector público. Lamentablemente, los resultados de este artículo apuntan a que la desvinculación entre tomadores de decisiones e investigadores y el impacto de la investigación en la formulación de políticas públicas puede seguir disminuyendo si no se detienen las violaciones a la libertad académica. Esto incluye los esfuerzos para criminalizar y desacreditar a los investigadores, el limitarles los recursos para su trabajo, y la persecución y hostigamiento —que están teniendo lugar en la región.

En la política pública existe el dicho de que lo no se cuenta, no cuenta. Una de las primeras acciones que deben tomarse para detener las violaciones a la libertad académica en Centroamérica es evidenciar lo que está ocurriendo en la región. En este artículo mostramos, a través de la experiencia de un grupo pequeño de investigadores en derechos humanos, que este sector ha sido víctima reciente de las violaciones a la libertad académica y las modalidades de las violaciones que han sufrido. Dados estos resultados, es de esperarse que la ocurrencia de violaciones a la libertad académica sea, lamentablemente, extendida también entre otros investigadores. Este es un primer paso que debe servir para hacer notar la urgente necesidad de implementar sistemas de monitoreo sistemáticos, como los desarrollados por Scholars at Risk con su Academic Freedom Monitoring Project (AFMP) en los países centroamericanos.

Actualmente se reconoce que la libertad de expresión en Centroamérica está bajo amenaza y así mismo los riesgos que corren los activistas y periodistas de la región (Gómez 2018; Senante 2022). También hay algunos esfuerzos por visibilizar las violaciones a la libertad de académicos y proteger sus derechos humanos —por ejemplo, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA),

creó una Comisión para la Libertad Académica y los Derechos Humanos.<sup>9</sup> Estas iniciativas son extremadamente importantes. Sin embargo, es imperativo reconocer que, al centrar la atención de la discusión sobre la libertad académica en las instituciones de educación y la protección a la libertad de expresión en periodistas y activistas, los investigadores afiliados a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones autónomas de investigación quedan desprotegidos y fuera del radar de los ejercicios de monitoreo.

Esta omisión puede tener graves consecuencias para este grupo, cuyos riesgos pueden incluso ser mayores por encontrarse en la intersección de la investigación y el activismo. Por lo tanto, es fundamental que cualquier ejercicio de monitoreo a las violaciones de los derechos humanos siga los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021), los que reconocen que se debe proteger la naturaleza polifacética de la actividad académica, y que esta engloba no sólo la generación de conocimiento en la academia, sino también por otros actores y la comunicación y acceso a estos saberes. Además de observar esta definición incluyente de la actividad académica, para que los ejercicios de monitoreo de violaciones a la libertad académica en la región sean efectivos, la recolección de información para alimentar los sistemas de monitoreo debe considerar también organizaciones de la sociedad civil donde se realiza investigación y centros de investigación autónomos.

Parte de las agresiones y represiones sufridas por los miembros de CARA asemejan la llamada microagresión de género: Violencias constantes que merman la participación activa de los investigadores y comunicadores en algunos espacios y su desarrollo profesional. Las actividades de concientización sobre la ocurrencia y riesgo de violaciones a la libertad académica en la región deben llamar la atención tanto sobre los incidentes que ponen en riesgo la integridad física de los investigadores (como el acoso), como sobre estas microagresiones que repercuten en su producción.

Como en otros casos de resistencia a ataques institucionales, la solidaridad es básica para la emergencia de mecanismos de protección a las y los investigadores en riesgo. Sin embargo, es fundamental que la solidaridad no quede en un discurso. Entablar un diálogo con los movimientos de protección a perio-

---

<sup>9</sup> Los lineamientos de esta Comisión se pueden leer en línea: <https://lasaweb.org/en/academic-freedom-human-rights/>

distas y defensores de derechos humanos para aprender de su experiencia y las estrategias a las que han recurrido, así como revisar la forma que tomaron las redes de solidaridad con los académicos latinoamericanos y españoles en exilio durante las décadas de los 70, 80 y 90 puede ser de utilidad en esta tarea.

Finalmente, para que la investigación que se realiza en Centroamérica y en otros lugares tenga un impacto fuera de la academia, es fundamental entender cómo se han reconstituido los ecosistemas de evidencia (es decir, quién hace investigación, quién la comunica, a quién se le comunica, quién la usa y los canales más apropiados para estos procesos) a partir del cierre de espacios democráticos en la región. Los estudios recientes del Instituto Pulte para el Desarrollo Global en El Salvador, Guatemala y Honduras (Rivero, Hare, Carranza, Escobar y Torres Urizar 2023) y de Global Development Network en El Salvador (Cuellar-Marqueli et al. 2022) son un primer paso en esta dirección, pero es importante ampliarlos a otras áreas de estudio y otros países, incluyendo Nicaragua.

## Referencias

- Álvarez, M. A. (2013) "Sociedad Civil y Movimientos Sociales en El Salvador de postguerra". (Sic) HAO, Núm. 32 (Otoño, 2013), 59-71.
- Booth J.A. and P. Bayer Richard(1996) "Repression, Participation and Democratic Norms in Urban Central America" *American Journal of Political Science*, Nov., 1996, Vol. 40, No. 4 (Nov., 1996), pp. 1205-1232
- Booth, J. A., and P. Bayer Richard (1998) "Civil Society and Political Context in Central America". *The American Behavioral Scientist* (Beverly Hills) 42 (1): 33-46.
- Cuellar-Marchelli, H., A. Flores, Gochez G., Hernandez K. (2022) "Doing Research in El Salvador" *Global Development Network Report*. Available online: <https://www.gdn.int/research/education-research/elsalvador>
- The Economist. (2022). A new low for global democracy. February 9, 2022. <https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy>
- Gómez, C.de J. (2018) "Activismo y Periodismo de Alto Riesgo". En *Observatorio de las Democracias*. <https://observatoriodelasdemocracias.com.mx/columnas/f/activismo-y-periodismo-de-alto-riesgo?fbclid=IwAR2YXBQ8sRp8rNUYwzg2BGH3JXKWAB4rArwH-gS5kz2-d5GaIiHAyvIYktM&blogcategory=Informe>
- Joma, S. (2022). "Desaparición de la Digestyc preocupa en sector académico: 'Nos resulta inquietante'". En *Elsalvador.com*. Julio 27 de 2022. Disponible en línea: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/oscar-picardo-investigador-digestyc-bcr-censo/981848/2022/>
- Macdonald, L. 1997. *Supporting Civil Society: the Political Role of Non-Governmental Organizations in Central America*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: New York, N.Y.: Macmillan; St. Martin's Press.
- Nilsson, M. (2018) "Civil society actors in peace negotiations in Central America", *Journal of Civil Society*, 14:2, 135-152

- Organismo Ejecutivo. (2018). “Ministerio de Gobernación Acuérdate aprobar la “Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022”, formulada por el Ministerio de Gobernación conjuntamente con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología”. en Diario de Centro-América. Órgano Oficial de la República de Guatemala, C.A. Miércoles 5 de diciembre de 2018 No. 8. Tomo CCCXI.
- Sprenkles, R. (2005) *The Price of Peace, The Human Rights Movement in Postwar El Salvador*.
- Rivero Fuentes, M.E., T. Hare, Carranza, D., Escobar, L. y Torrez Urizar J. (2023). “Flipping the Script for solidarity and capacity strengthening to confront closing democratic spaces for research in Central America”. Flip the Script Initiative. Pulte Institute for Global Development. University of Notre Dame.
- Senante, A. (2022). “Libertad de prensa. Mapa de las principales amenazas al periodismo en el mundo”. En Blog. Amnistía Internacional. Disponible en línea: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/libertad-de-prensa-principales-amenazas/>
- Wanis-St. A.J. and D. Kew (2008) “Civil Society and Peace Negotiations: Confronting Exclusion” *International Negotiation* 13 (2008) 11-36.



Tirant Online México, la base de datos jurídica de la editorial más prestigiosa.



**[www.tirantonline.com.mx](http://www.tirantonline.com.mx)**

Suscríbete a nuestro servicio de base de datos jurídica y tendrás acceso a todos los documentos de Legislación, Doctrina, Jurisprudencia, Formularios, Esquemas, Consultas o Voces, y a muchas herramientas útiles para el jurista:

- \* Biblioteca Virtual
- \* Tirant Derechos Humanos
- \* Tirant TV
- \* Personalización
- \* Foros y Consultoría
- \* Revistas Jurídicas
- \* Gestión de despachos
- \* Novedades
- \* Tirant Online España
- \* Petición de formularios

 +52 1 55 65502317

 [www.tirantonline.com.mx](http://www.tirantonline.com.mx)

 [atencion.tolmex@tirantonline.com.mx](mailto:atencion.tolmex@tirantonline.com.mx)